

ENCUENTRO CIVIL EUROMED

Sociedad Civil y transiciones en el Norte de África

Egipto · Túnez · Argelia · Marruecos

Ignacio Álvarez Ossorio, Awatef Ketiti,
Érika Cerrolaza y Jesús García-Luengos

Icaria  editorial



Inmersas en procesos complejos de transformación, las sociedades del Norte de África presentan numerosos retos para los diferentes actores llamados a posicionarse, o actuar en estos escenarios. La generación de conocimiento sobre las principales dinámicas de la sociedad civil en estos nuevos escenarios es por lo tanto fundamental y ha sido una prioridad en la agenda de trabajo del Encuentro Civil Euromed.

A este objetivo de análisis, difusión y sensibilización sobre los acontecimientos en curso, responde la publicación que aquí presentamos con el título Sociedad Civil y transiciones en el norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto), que se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad civil en el espacio euro-mediterráneo a través del diagnóstico y el intercambio de experiencias y la formación” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Esta publicación ha sido coordinada por Laurence Thieux, responsable de relaciones exteriores de la Secretaría Técnica del Encuentro Civil Euromed, y editada por su grupo de Investigación y Publicaciones, compuesto por Mohammed Dahiri, Juan Carmelo García, Santiago González, Carlos Lozano y Alejandra Ortega.

ISBN: 978-84-9888-554-5



SOCIEDAD CIVIL Y TRANSICIONES
EN EL NORTE DE ÁFRICA

ECEM nace en el año 2003 como parte del proceso de creación y consolidación de una Plataforma No Gubernamental en el ámbito euro-mediterráneo. ECEM se fue desarrollando en el conjunto del estado español mediante un trabajo en red entre diversas organizaciones que adquirió personalidad jurídica en el año 2008. En la actualidad ECEM se encuentra integrada por varias entidades estando abierta a todos aquellos agentes sociales y civiles que trabajan con una visión global del Mediterráneo.

La acción de ECEM se enmarca dentro de la Plataforma No Gubernamental Euromed que surge como instancia común guiada por los principios de la colaboración y el diálogo fruto de la toma de conciencia por parte de las sociedades civiles del Mediterráneo de la necesidad de promover la cooperación. La Plataforma está formada por una gran variedad de activistas de la sociedad civil euromediterránea que quieren integrar las iniciativas propuestas por la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea.

Objetivos:

- Reforzar la participación de la Sociedad Civil española en las iniciativas civiles y ciudadanas, haciendo aportes específicos al debate sobre la dimensión social, buscando que se involucre en las actividades de la región y que participe en las redes temáticas ya creadas, así como en los instrumentos de inclusión que posibilita el Partenariado, como son los Foros Civiles Euromed.
- Llevar a cabo actividades entre las organizaciones miembros de ECEM así como con otras organizaciones nacionales y extranjeras, especialmente con la Plataforma No Gubernamental Euro-mediterránea de la que ECEM es miembro, con el fin de dar a conocer y sensibilizar a la sociedad española sobre la situación social, económica y cultural del Mediterráneo y sus países, así como sobre el Partenariado Euromediterráneo.
- Incidir sobre los centros de decisión gubernamentales, reclamando la creación de las condiciones necesarias que promuevan en la región sociedades más justas y equitativas, en las que prevalezca la defensa de las libertades y de los derechos humanos.
- Incrementar la cooperación de la Sociedad Civil española con el resto de actores de la Sociedad Civil euromediterránea, especialmente a través de la Plataforma No Gubernamental Euromed, compartiendo el trabajo realizado desde ECEM.

Miembros: ACSUR-Las Segovias, ADDIFFATAYN-Las Dos Orillas, CARTA MEDITERRANEA, CATEDRA UNESCO-Universidad de Córdoba, CENTRE EURO ARAB, CEPES, CERAI, CCOO, CJE, FUNC1, FUNDACIÓN INTERNACIONAL OLOF PALME, IECAH, IEPALA, UGT, UNESCOCAT, USO. Miembros asociados: IEMED

Encuentro Civil Euromed (ECEM)

C/ García Noblejas, 41bis 1ª planta - 28037 Madrid -Tl:+34 91 260 98 39
ecem@euromed.eurosur.org - www.euromed.eurosur.org

ENCUENTRO CIVIL EUROMED (ECEM)
IGNACIO ÁLVAREZ OSSORIO, AWATEF KETITI,
ÉRIKA CERROLAZA Y JESÚS GARCÍA-LUENGOS

SOCIEDAD CIVIL
Y TRANSICIONES
EN EL NORTE DE ÁFRICA

Egipto - Túnez - Argelia - Marruecos

Icaria  Editorial

- © De la obra: Encuentro Civil Euromed (ECEM)
www.euromed.eurosur.org
- © De los textos: Ignacio Álvarez Ossorio, Awatef Ketiti,
Érika Cerrolaza y Jesús García-Luengos
- © De esta edición: Icaria editorial, s.a.
Arc de Sant Cristòfol, 11-23, 08003 Barcelona
www.icariaeditorial.com

Edición y Coordinación: Mohammed Dahiri, Juan Carmelo García, Santiago González, Carlos Lozano, Alejandra Ortega y Laurence Thieux.

Fotografía de la cubierta: Ignacio Álvarez Ossorio

Primera edición: diciembre de 2013.

ISBN: 978-84-9888-554-5

Depósito Legal: B. 25713-2013

ECEM agradece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el apoyo prestado para realización de esta publicación así como a todas las personas e instituciones que han contribuido a su realización.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto (11-CAP2-1547) «*Fortalecimiento de la sociedad civil en el espacio euro-mediterráneo a través del diagnóstico y el intercambio de experiencias y la formación*». Los autores son los únicos responsables de las opiniones expresadas en sus respectivos capítulos. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión de ECEM y AECID, ni de sus editores/coordinadores.

Con la financiación de:



Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Derechos reservados conforme a la Ley.

Impreso y hecho en España - *Printed and made in Spain*

Libro impreso en papel ecológico

ÍNDICE

Prólogo de *Alejandra Ortega Fuentes* 7

- I. La Primavera Árabe en Marruecos. La sociedad civil marroquí, *Jesús García-Luengos* 15
- Introducción 15
 - Contexto histórico 17
 - Contexto actual 22
 - Estructura de la sociedad civil y rasgos generales 42
 - Marco legal de las libertades públicas y aplicación 47
 - El ámbito de los derechos humanos. Organizaciones que promueven reformas democráticas y avances 50
 - Reivindicaciones y dinámicas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 56
 - Relaciones de la sociedad civil con el *majzen*, las instituciones y los partidos políticos 62
 - Fracturas sociales 65
 - Conclusiones 67
 - Bibliografía 70

- II. La sociedad civil argelina y la Primavera Árabe, *Érika Cerrolaza* 71
- Contexto y entorno de la sociedad civil 71
 - Descripción y estructura de la sociedad civil 89
 - Reivindicaciones y movimiento de mujeres 96
 - Estrategias de la sociedad civil 108
 - Referencias bibliográficas 123

- III. La sociedad civil en Túnez después de la caída de Ben Ali, *Awatef Ketiti* 127
- Contexto y entorno de la sociedad civil 128
 - Estructura y dinámica de la sociedad civil 133
 - Reivindicaciones de las OSC 147
 - Las estrategias de las OSC para la incidencia política y la acción 163
 - La sociedad civil en la región de Kaserine 181

Conclusión	185
Referencias bibliográficas	187
IV. La sociedad civil egipcia tras la Primavera Árabe	
<i>Ignacio Álvarez-Ossorio</i>	189
Introducción	189
Cartografía de la sociedad civil egipcia	191
El marco regulatorio egipcio	193
Los movimientos de mujeres	196
Las organizaciones de derechos humanos	200
El movimiento sindical	204
Nuevas modalidades de acción colectiva y movilización social	209
Relaciones de las OSC con las autoridades	212
Diálogo y coordinación entre la sociedad civil	217
Identificación de experiencias relevantes y buenas prácticas	221
La sociedad civil en Alejandría	224
Conclusiones	226
Bibliografía	229
V. Conclusiones: «Sociedad civil y transiciones en el norte de África», <i>Laurence Thieux</i>	233
Contextos políticos y entornos legales	234
Articulación entre diferentes sectores de la sociedad y dinámicas de acción colectiva	235
Brechas ideológicas y estrategias de superación de las divisiones entre OSC seculares y aquellas con referentes religiosos	236
Las organizaciones de mujeres	238
Acción colectiva y movilización social de los jóvenes	240
Relaciones establecidas con los partidos políticos	241
Mecanismos de diálogo con las instituciones: ¿espacios de incidencia o de cooptación?	241
Principales reivindicaciones de la sociedad civil	243
Dinámicas regionales de la sociedad civil	244
Sobre los autores	247
Miembros del grupo de investigación y publicación	249

PRÓLOGO

Alejandra Ortega Fuentes*

En 2013 las organizaciones que componemos la plataforma Encuentro Civil Euromed (ECEM) nos disponemos a presentar públicamente la que es ya la cuarta publicación que editamos desde que, en el año 2010, ECEM publicara *Sociedad Civil y Poder Político*.

A esta primera publicación, siguieron en 2012 dos publicaciones más con el título común *La Sociedad Civil* y «*Las Primaveras Mediterráneas*» (y subtítulos, *Encuentros estatales* y *Encuentros Internacionales*, respectivamente). En la primera de ellas se recogen una serie de seminarios temáticos realizados en el Estado español con el propósito de discutir y buscar conclusiones comunes entre los miembros de ECEM que permitieran una mayor incidencia de nuestra plataforma ante terceros. Así, se recogen nuestras preocupaciones sobre la sociedad civil, la ciudadanía, la juventud y la situación de la mujer en un contexto de cambio en los países del sur del Mediterráneo.

La publicación relativa a los encuentros internacionales recoge el fruto de una serie de acercamientos a las sociedades de los países del sur y este del Mediterráneo, a lo largo del 2011 y 2012 a través de la realización de misiones internacionales. Estas misiones permitieron abrir contactos y obtener testimonios directos de la transformación política y social en curso en ese momento.

Desde aquellas primeras publicaciones (que pueden consultarse en su versión digital en la página web <http://euromed.eurosur.org/>, del Encuentro Civil Euromed) ya intentábamos recoger la propia historia de nuestra plataforma, nuestras reflexiones sobre las so-

*Presidenta del Encuentro Civil Euromed (ECEM).

ciudades de los países del sur del Mediterráneo y el resultado del intercambio con otras organizaciones de similar naturaleza en el entorno regional.

Uno de los intereses comunes de las organizaciones que componemos Encuentro Civil Euromed hasta la actualidad ha sido seguir fomentando el análisis, la información a nuestros miembros asociados y al resto de la sociedad acerca de las distintas realidades con las que hemos compartido muchos espacios de trabajo y de reflexión en estos últimos años con el ánimo también de hacer de esta plataforma un espacio de intercambio de ideas y un lugar de debate para fortalecer nuestra capacidad de hacer nuevas propuestas en consonancia con las circunstancias que se viven en los países del Mediterráneo.

Han pasado relativamente pocos meses desde entonces, pero el panorama político en los países del sur del Mediterráneo se ha transformado desde finales de ese año 2010: las protestas agrietaron en ese momento los cimientos de los regímenes establecidos y pusieron de manifiesto unas dinámicas de movilización social desconocidas, animadas por nuevos actores.

En cierto modo, la mayoría de los actores gubernamentales como también los no gubernamentales en la orilla norte del Mediterráneo se sorprendieron frente a un fenómeno de profundo calado que ponía en evidencia la existencia de un déficit de conocimiento de la diversidad de actores que componen la sociedad de estos países así como la evolución de sus estrategias.

El carácter sincronizado de los movimientos de contestación política que han surgido en diferentes países árabes desde el final de ese 2010 ha ocultado en parte las contradicciones políticas locales y nacionales, y el carácter heterogéneo de estos movimientos.

Los cambios económicos y demográficos producidos en los países de la orilla sur del Mediterráneo, su dispar evolución productiva y de cualificación laboral en un contexto de desarrollo económico tras las independencias escasamente exitoso, con un entramado institucional bastante clientelar y rentista han precipitado la crisis.

A lo largo del 2011, la caída de varios regímenes en los países árabes y las revueltas en otros desembocaron en una nueva etapa de cambio en la región que se está manifestando en toda su complejidad por la diversidad de cada una de las situaciones nacionales así como

por la multitud de actores e intereses que se cruzan, interaccionan y chocan en estas difíciles etapas de transformación.

Una vez más y para reforzar nuestro objetivo de análisis, difusión y sensibilización sobre los acontecimientos en curso, ECEM ha trabajado en la publicación que aquí presentamos con el título *Sociedad civil y transiciones en el norte de África*, en el marco del proyecto «Fortalecimiento de la sociedad civil en el espacio euromediterráneo a través del diagnóstico y el intercambio de experiencias y la formación» financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

En dicho marco de trabajo, los miembros de ECEM proponen la creación de un grupo de trabajo de Investigación y Publicaciones considerando de nuevo que las actividades de investigación y publicación son claves para fortalecer nuestras propias capacidades de comprensión de las complejas dinámicas regionales en curso, para tener un conocimiento más sólido que colabore a definir estrategias de acción y, a un tiempo, transmitir el resultado de esas investigaciones a quienes pudieran estar interesados en el seguimiento de unos procesos en marcha desde sus distintos ámbitos de influencia, responsabilidad y en el desempeño de sus tareas diarias.

La situación actual lo requería. El cambiante contexto en el Mediterráneo hacía necesario seguir haciendo esfuerzos de investigación, publicación y difusión, todo ello marcado por la amplitud del campo de investigación (cuestiones económicas, sociales, culturales y políticas) en el seno de sociedades civiles de los países del sur y este del Mediterráneo en una mutación constante.

El objetivo principal de este grupo de trabajo ha sido iniciar un proceso entre las organizaciones miembros de nuestra plataforma, fomentar la difusión y publicación de aquellos conocimientos que hemos adquirido, nutrir los espacios de reflexión y debate en el seno de ECEM, acompañar el trabajo de sus diferentes miembros de manera transversal, fortalecer otras propuestas de publicación digitales en marcha y, en definitiva, reforzar el conocimiento de las sociedades civiles del Mediterráneo para poder sentar las bases de un diálogo constructivo.

Y así se decidió desde ECEM, a través de su grupo de Investigación y Publicaciones, centrarnos en este período en la elaboración de unos diagnósticos que dibujaran lo que está sucediendo en las sociedades

civiles tras la irrupción en la escena política de muchísimos cambios de muy diferente naturaleza en cuatro países que fueron objeto de un especial interés por parte de los miembros asociados de ECEM.

Estos países eran: Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto, donde todas o casi todas las organizaciones que pertenecemos a la plataforma hemos desarrollado cercanas relaciones con nuestras organizaciones homólogas y hemos mantenido durante años programas bilaterales de cooperación.

La investigación, coordinada por la Secretaría Técnica de ECEM, a través de su responsable de relaciones exteriores, Laurence Thieux, y por el grupo de Investigación y Publicaciones creado a tal efecto, compuesto por Mohammed Dahiri, Juan Carmelo García, Santiago González, Carlos Lozano y Alejandra Ortega Fuentes, miembros de las distintas organizaciones de entre las organizaciones que componen ECEM, han realizado conjuntamente el seguimiento y revisión de los informes y diagnósticos correspondientes a cada país realizados por expertos y expertas y cuyo contenido constituye el cuerpo de la presente publicación.

El objetivo que nos planteábamos desde ECEM con la puesta en marcha de estos diagnósticos era obtener un análisis actualizado de la evolución del papel de la sociedad civil y de sus estrategias en esta nueva etapa de transformación, tanto en los países que han presenciado un cambio profundo con la caída de los dictadores como en los países con una evolución diferente.

Los diagnósticos han intentado identificar las nuevas dinámicas de los movimientos sociales, los espacios de diálogo y coordinación en su caso entre los diferentes sectores de la sociedad civil, las principales aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil en varios ejes (políticos, sociales, económicos, laborales, identitarios, culturales) así como estrategias de superación de las divisiones que fragmentan las sociedades civiles de estos países. Se ha intentado también conseguir un mayor conocimiento de las experiencias de coordinación y trabajos en común de las experiencias de confrontación y enfrentamiento entre los diferentes actores de la sociedad civil.

La publicación trata también de incidir en la descripción de los movimientos de mujeres y sus principales expresiones y en la identificación de las nuevas modalidades de acción colectiva y de movilización social que implican a los jóvenes.

Por otra parte, se ha subrayado el análisis de las relaciones establecidas entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos (existencia de espacios de diálogo, debate e intercambios entre la sociedad civil y los partidos políticos), el análisis de las relaciones establecidas entre las organizaciones de la sociedad civil y los responsables gubernamentales y las instituciones, incidiendo también en el análisis sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil y su implicación en redes y plataformas de carácter regional o internacional.

También se ha procurado centrar los análisis en estudios de terreno para identificar y conocer organizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos de la geografía nacional de cada uno de los países considerados.

Con todos estos elementos, la implicación de un numeroso grupo de organizaciones miembros de ECEM y el trabajo activo en el terreno de los expertos que han elaborado los diagnósticos, obtenemos un resultado que aquí presentamos y que consideramos una herramienta que, al igual que las anteriores publicaciones, pretendemos que sea útil no solo para los miembros de nuestra plataforma, sino para todas aquellas organizaciones y personas que pretendan tener acceso a un mayor número de fuentes de información, documentaciones, referencias bibliográficas, expertos e informadores claves relevante para el objeto de nuestro estudio, grupos focales y líderes de grupos de sociedad civil.

Asegurar los elementos que fortalezcan las transiciones políticas pasa, sin duda, por fortalecer el poder de los movimientos sociales y unificar las fuerzas democráticas de las distintas sociedades civiles para poder realizar alianzas en diferentes niveles.

Para ello, muchas de las organizaciones que comparten un común espacio geográfico con ECEM y comunes intereses valoran como extremadamente importante la correcta difusión de las informaciones, la realización de análisis y la realización de campañas de sensibilización y presión para lograr la construcción de un estado de ciudadanía que garantice el derecho de participación en la vida política, social y económica y también desarrolle un sistema económico sostenible.

La confiscación del derecho al pluralismo político, el derecho a participar en las decisiones políticas, la salvaguarda del derecho

de asociación y de organización, el derecho a la asamblea pacífica, la igualdad de hombres y mujeres a la hora de construir su propia vida siguen siendo grandes retos en la región.

El creciente número de gente viviendo bajo la línea de pobreza, en este contexto, con un incremento de la deuda, hace imposible conseguir los objetivos por los que la juventud se ha visto inmersa en las distintas revoluciones. Todo ello podría dar al traste con las transiciones democráticas, pero aún más, podría terminar colapsando esos países y llevándolos a una situación caótica.

El lenguaje de los valores universales que los cambios en el mundo árabe ha propuesto abre un camino hacia la verdadera paz, la libertad y la justicia social en cada uno de los países en un histórico cambio en la dirección de la lucha por la democracia y una revisión de los derechos de su ciudadanía que termine con históricas situaciones de injusticia y desigualdad.

Para garantizar el éxito de los procesos se tiene que respetar la voluntad popular de libertad, acompañar positivamente esta voluntad de cambio y hacer una gestión concertada y consensuada del proceso porque las amenazas, sin duda, están ahí: aparición de fuerzas políticas e instituciones ocultas y refractarias al cambio, el rechazo al acompañamiento de estas nuevas aspiraciones, la vuelta a fines oscuros y contrarios a esta voluntad popular.

El sentido de la existencia de un espacio común de reflexión como el nuestro es el de llevar a cabo una labor de acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de los países del Mediterráneo que están luchando por el reconocimiento de derechos fundamentales que desemboquen en el nacimiento de sociedades plurales y democráticas.

Nuestra obligación, la de continuar alentando iniciativas, espacios de reflexión, análisis y diagnósticos como el que traemos en esta publicación. Nuestra obligación, la de seguir asegurando la solidaridad transfronteriza, privilegiando los espacios de intercambio para un mejor conocimiento de lo que está sucediendo.

Esperamos que aquellas conclusiones y recomendaciones que aquí se recogen sobre posibles futuros planes de acción de la sociedad civil española y europea interesada en llevar a cabo proyectos en estos diferentes países pueda ser tan útil a las organizaciones y personas que puedan llegar a tener entre sus manos esta publicación

como lo han sido, a lo largo de este proceso de elaboración, a las organizaciones y personas que nos hemos implicado en cada parte del proceso.

Sirva esta publicación como un esfuerzo más en la voluntad común de todas las organizaciones que componemos ECEM de ayudar a una mejor comprensión de los acontecimientos, con nuestro profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones de una y otra orilla del Mediterráneo que han invertido mucho esfuerzo y horas de trabajo en la elaboración de los textos que componen esta publicación.

Así como nuestra gratitud a todas las organizaciones y personas que en tantas ocasiones nos han recibido en sus países y han dedicado su tiempo a entrevistarse con nuestros representantes y especialistas en un ejercicio generoso de hacernos un hueco en un día a día difícil, complejo, inquietante, y dinámico.

Gracias a todos esos hombres y mujeres que nos han explicado qué sucede, por qué, quiénes son, a qué aspiran y cómo quieren hacerlo, podemos estar aquí presentando este libro. Para todos ellos, nuestro agradecimiento y nuestra más profunda admiración por su lucha para asegurar la dignidad de sus pueblos y la transformación profunda de sus sociedades.

En este camino, hemos aprendido y estamos aprendiendo muchas lecciones inolvidables y únicas. Nuestra obligación, sin duda, es no olvidarnos de ninguna de ellas y contribuir a su conocimiento.

I. LA PRIMAVERA ÁRABE EN MARRUECOS. LA SOCIEDAD CIVIL MARROQUÍ

Jesús García-Luengos*

Introducción

Las protestas ciudadanas a principios de 2011 en Túnez y Egipto, que inauguraron la denominada Primavera Árabe, tuvieron muy pronto su reflejo en Marruecos, a través de la movilización social canalizada por el Movimiento 20 de Febrero (en adelante, M20F).¹ Esta iniciativa, activada por un grupo de jóvenes a través de las redes sociales, generó un gran respaldo y adhesión por parte de la población marroquí y de su sociedad civil. Bajo el lema Libertad, Dignidad y Equidad/Justicia Social, las demandas fundamentales de los marroquíes coincidieron con las de sus congéneres tunecinos y egipcios.

Las movilizaciones, pacíficas, se extendieron por todo el territorio. La reclamación de una constitución democrática y un cambio sustancial a nivel institucional pusieron claramente de manifiesto los límites de un sistema basado en la concentración de poderes en la figura del monarca y su entorno; el acaparamiento desmedido de rentas y riqueza por parte de una minoría y las ingentes desigualdades sociales, entre otros aspectos.

Ante la evolución de los acontecimientos en Túnez y Egipto —con el derrocamiento expeditivo del presidente tunecino Ben Ali y, posteriormente, de su homólogo Mubarak— el régimen marroquí optó por evitar una confrontación directa con los manifestantes y reaccionó

*Coordinador de RESET (Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional).

1. En Marruecos sería más adecuada la denominación *primavera democrática*, tal y como reseñan especialmente los habitantes de aquellas zonas del país cuya población es mayoritariamente amazig (bereber).

con gran rapidez. En su discurso del 9 de marzo de 2011, Mohamed VI anunció una nueva fase del proceso de regionalización, vinculada a la consolidación del modelo democrático y de desarrollo nacional, y una reforma constitucional global. A diferencia de las constituciones anteriores —otorgadas directamente por la monarquía— se previó la creación de una comisión para su elaboración que consultase a los partidos políticos, representantes de sindicatos, asociaciones, jóvenes, intelectuales y otros profesionales cualificados.

Dicho discurso obtuvo reacciones dispares. Mientras que la gran mayoría de los partidos políticos y una parte de la sociedad civil, incluyendo a las principales asociaciones feministas, aceptaron implicarse en el proceso, los jóvenes del M20F y otras asociaciones y partidos políticos de izquierda minoritarios —que solicitaban una asamblea constituyente para la elaboración del texto— rechazaron incorporarse a la ronda de consultas.

El día 1 de julio de 2011 se aprobó la reforma constitucional, a través de un referéndum popular. A través de la nueva Carta Magna, el monarca mantiene intactas sus prerrogativas soberanas —al frente del Estado y de la comunidad religiosa de creyentes—, y la estructura institucional del poder permanece esencialmente inalterada. Las reivindicaciones del M20F quedaron en gran medida devaluadas. No obstante, el nuevo texto introduce algunas modificaciones significativas en las reglas de juego del sistema político que, dependiendo de su aplicación en la práctica, podrían suponer un paso al frente en la configuración de un estado de derecho democrático.

Como parte del proceso activado por el M20F, en el mes de noviembre de 2011 se celebraron elecciones legislativas anticipadas, siendo la fuerza política más votada el Partido Justicia y Desarrollo (PJD). Su secretario general fue nombrado primer ministro por el rey, tal y como prevé expresamente la nueva Constitución. La llegada al gobierno por primera vez de esta formación islamista abre, a su vez, un nuevo escenario en la compleja y exigua trayectoria democrática de Marruecos, en donde el islam es el punto de anclaje de la cultura política dominante.

En el contexto actual hay, por tanto, una serie de variables y factores de cuya evolución dependerá, en buena medida, el futuro democrático de Marruecos, así como su estabilidad, prosperidad y cohesión social. Con el fin de abordar dichos aspectos, se exponen,

en primer lugar, algunas claves del contexto histórico, así como del sistema político y la estructura de poder. A continuación, se aborda el contexto actual, y los aspectos más relevantes, a partir de la llegada al trono de Mohamed VI. Posteriormente, y siguiendo la cronología de los acontecimientos reseñados, se analiza el Movimiento 20 de Febrero, la nueva Constitución y el escenario político después de las últimas elecciones generales. La segunda parte del capítulo se dedica al análisis de la sociedad civil, su estructura y rasgos generales. Se expone, además, el marco legal de libertades públicas, con especial atención al derecho de asociación. Y se analiza la trayectoria y principales dinámicas de trabajo del movimiento de derechos humanos, especialmente de las asociaciones de derechos humanos y de las asociaciones feministas.

Para la elaboración del presente capítulo se llevó a cabo un trabajo de investigación en terreno, durante el cual se realizaron cerca de 40 entrevistas con representantes de asociaciones, expertos y jóvenes del M20F.

Contexto histórico

Hassan II

Tras el fallecimiento de Mohamed V, en 1961, accedió al trono su hijo primogénito. Hassan II estableció desde el inicio de su reinado un control férreo de cualquier movimiento de oposición. Previamente, en 1958, había dirigido personalmente una brutal represión en la región del Rif, con un saldo de miles de muertos. En 1962 se sometió a referéndum la primera Constitución del país. El texto supuso el bloqueo definitivo de cualquier posible proceso de modernización del reino. El rey se dotó de facultades omnicomprendivas, su persona se convirtió en sagrada, y se incorporó a la Carta Magna la figura de *Comendador de los Creyentes* (que había caído en desuso), reubicando la religión bajo su competencia exclusiva. Por esta vía, se formalizó la conversión de Marruecos en una monarquía teocrática absoluta, hereditaria y autoritaria. Desde entonces, han tenido lugar nueve referendos constitucionales y cinco nuevas constituciones (en 1970, 1972, 1992, 1996 y 2011).

El ascenso de Hassan II al trono vino acompañado de una progresiva degradación de la situación social y económica. Los estudiantes desempeñaron un papel fundamental como fuerza de oposición al

régimen desde el inicio de la Independencia, en contraste con el perfil bajo y la defeción del conjunto de los partidos del sistema político. En 1965 los estudiantes de los liceos salieron a la calle. Los manifestantes recibieron el respaldo de sus padres y de las clases más desfavorecidas y sin empleo. La represión fue muy violenta, con decenas de muertos y la apertura de unos dos mil procedimientos penales. Desde entonces, los estudiantes y los jóvenes serían considerados por el régimen como opositores potenciales.

Entre 1965 y 1970 se declaró el estado de excepción. En 1971 y 1972 tuvieron lugar dos intentos de golpe de estado contra el rey, lo que implicó un nuevo golpe de tuerca respecto al control político y social del régimen, y una mayor restricción de la libertad de prensa y de los derechos de reunión y asociación. Las autoridades marroquíes disolvieron, entre 1973 y 1978, la UNEM. La década de los setenta estuvo marcada también por la creación de tres grupos de jóvenes marxista-leninistas, cuyo objetivo era desarrollar una vertiente revolucionaria con capacidad para aglutinar a la clase obrera y liberar al pueblo marroquí del yugo de la monarquía. Fue también la década del surgimiento del islamismo, propiciado por el propio régimen para contrarrestar los movimientos revolucionarios de extrema izquierda. Este islamismo desarrolló una vertiente integrista a través del movimiento de la Juventud Islámica (creada clandestinamente en 1969), que se movilizó violentamente, sobre todo contra la izquierda política.

Por otro lado, en 1974 Abdessalam Yassine, líder religioso y antiguo discípulo de la cofradía sufi Bouchichiya, dirigió a Hassan II una misiva titulada *El islam o el diluvio*, que le valió tres años y medio de detención. Autor de una extensa obra doctrinal, el jeque Yassine creó el movimiento Justicia y Espiritualidad (en adelante, JyE), estructurado en torno a una fuerte identidad islamista y política, y que es considerada actualmente como la mayor fuerza de movilización social en Marruecos. JyE no reconoce al rey como Comendador de los Creyentes. En 1987 el movimiento adoptó la denominación de Justicia y Espiritualidad (al -`Adl wa al-ihsân).² A partir de finales de los ochenta, JyE se implantó en los campus universitarios y tomó el

2. Este movimiento es designado también como «Justicia y Caridad» o «Justicia y Bienestar».

control de la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (UNEM), trasladando a este espacio público la vertiente política del islam, y dándole una nueva visibilidad (Zeghal, 2005: 163-187).

A principios de los ochenta la degradación de la situación social y económica y la reducción de las subvenciones de los productos de primera necesidad impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desembocaron, en 1981, en la convocatoria de una huelga general. La posterior manifestación de Casablanca se saldó con cientos de muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Los partidos y sindicatos fueron temporalmente suspendidos. En 1981 y 1984 se produjeron las denominadas «revueltas del pan».

El contexto económico y social fortaleció la oposición al régimen, forzando a este a iniciar una cierta apertura, muy dosificada, del espacio público y político, en la cual también desempeñó un papel relevante la presión internacional. En consecuencia, la última década del reinado de Hassan II (denominada la «década reformista»), estuvo marcada por una serie de reformas políticas y democráticas, impulsadas por la oposición política y el movimiento de derechos humanos marroquí.

Durante este período se creó el Bloque Democrático (Kutla dimukratiya, formado por cinco partidos de la oposición); se produjo la liberación de diversos presos políticos (reconociéndose por primera vez de forma explícita su existencia); y descendió considerablemente la práctica de la tortura. En 1988 accedió al gobierno la oposición política, mediante una «alternancia consensuada» (denominada así porque en la práctica supuso la aceptación por parte de dicha oposición de las reglas de juego impuestas por Palacio), con el líder histórico de la USFP, Abderrahman Yusufi, como primer ministro.

El régimen marroquí y el sistema político

El artículo 19 de la Constitución de 1962 se estableció como la piedra angular del sistema político y religioso.³ Con el fin de dotar

3. Conforme a este artículo el rey, Comendador de los Creyentes, es el representante supremo de la nación, símbolo de su unidad y garante de la perennidad y continuidad del Estado, velando por el respeto del islam y de la Constitución. Él es el protector de los derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades; y garantiza la independencia de la nación y la integridad territorial del reino dentro de sus auténticas fronteras.

de legitimidad religiosa al rey-sultán, desde Palacio se combinó el registro hagiográfico, jurídico y teológico, en dos direcciones: una política —debilitando al clero oficial y manteniendo un pluralismo religioso; lo que implicó tanto la subordinación del Consejo de Ulemas a la figura del rey como el fomento por parte de este del islam popular— y otra doctrinal, monopolizando la interpretación de la religión y sacralizando la persona del descendiente del profeta. La rehabilitación de la *beia* ha sido, además, central en la estrategia de legitimación del sistema político marroquí. Esta ceremonia de lealtad al monarca se articula en Marruecos en base al principio de la necesidad del orden califal y de su omnipotencia (Tozy, 1999: 27-29).

Por otro lado, la estrategia de control del sistema desarrollado por Hassan II se tradujo en la cooptación de los líderes políticos, convirtiendo cualquier movimiento de oposición al régimen en inconstitucional. La monarquía se sustentó, a su vez, en el apoyo de los notables rurales, movilizando todo un entramado clientelar, con las correspondientes prebendas, que le permitió hacer frente a las fuerzas de oposición política, y que estableció los cimientos del sistema político marroquí contemporáneo (Leveau, 1976).

La construcción del Estado-nación se sustentó en la arabización. El carácter arabo-musulmán ha sido el componente fundamental de la identidad nacional, mientras que el componente amazig (o bereber) de la identidad marroquí ha sido marginado continuamente por las autoridades. El proyecto nacional se fundamentó, a su vez, sobre los pilares de la monarquía, la religión y la integridad territorial.

Cualquier cuestionamiento u oposición a dicho pilares fue censurada y violentamente reprimida, y los grupos disidentes y sus miembros (ya fuesen islamistas, saharauis, marxistas, leninistas, militares golpistas u otros grupos disconformes con el sistema, como los estudiantes o el campesinado) fueron considerados enemigos del pueblo y de la nación. Durante los «años de plomo» —etapa que se inicia en 1958, y de especial virulencia desde los sesenta hasta la mitad de los ochenta— los derechos humanos fueron barridos del mapa, y se produjeron centenares de desapariciones forzadas; muy numerosas, en relación a los saharauis, a partir de 1975, incluyendo a familiares de quienes apoyaban la independencia del Sáhara Occidental.

El sistema de poder en Marruecos se denomina *majzen*. En su dimensión más amplia y usual, está compuesto por un entramado de

personas y relaciones en el ámbito político, económico, burocrático y militar (y que, en sentido extenso, incluye a los ulemas, algunas cofradías, asociaciones deportivas y de desarrollo regional y otros actores). Otra dimensión del *majzen* hace referencia a un estilo de gobierno caracterizado por un control férreo sobre los asuntos clave del país, una gran capacidad de persuasión y cooptación, prácticas inmovilistas y un sistema de represión y violencia que no admite disidencias (Feliu, 2004: 45). Una tercera dimensión vincula al *majzen* con una corriente oculta de gran fuerza y contornos difusos que subyace a las instituciones y a su revestimiento de modernización, y que mide sabiamente la relación de fuerzas locales y la naturaleza de recursos y capacidades de cada persona, en función de la legitimidad histórica, la riqueza, la religión y el prestigio, entre otros factores. El espacio físico y núcleo central del majzén, y donde se construye la cultura del poder, lo constituye el rey y sus consejeros (*Dar el Majzen*) (Tozy, 1999: 42).

El Ministerio del Interior es el agente de vertebración y control de todo el territorio, tanto a nivel regional (a través de los *walis* —a nivel de la región— y de los gobernadores — a nivel de la prefectura o provincia) como local. Otras características del sistema de control político del *majzen* son el diseño de los distritos electorales, la creación de partidos políticos desde Palacio, y un Parlamento muy fragmentado a nivel de representación de los partidos políticos. Los procesos electorales se han caracterizado, además, por la compra de votos (favorecida por el sistema electoral mayoritario); la gran desafección del electorado; la concurrencia de un gran número de formaciones políticas; y las alianzas de todo tipo y el transfuguismo.

La mejora de los procesos electorales es, por tanto, determinante. Algunos partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil reclaman que se ponga fin a la tutela del Ministerio del Interior sobre la organización de los procesos electorales y que este traspase sus poderes en esta materia al Parlamento (en relación a la fijación de las fechas de las elecciones y los adelantos electorales, y al diseño de las circunscripciones), el Poder judicial (organización de la jornada electoral) y la sociedad civil (supervisión de la operación de voto).⁴

4. Documento de Análisis del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM), Ficha electora: Marruecos/Referéndum constitucional 1 de julio de 2011.

Contexto actual

Mohamed VI

La subida al trono de Mohamed VI en 1999, tras la muerte de su padre Hassan II, suscitó grandes esperanzas para el futuro del país. El pueblo marroquí había padecido durante casi cuatro décadas un régimen muy represivo en materia de derechos y libertades fundamentales y, por tanto, recibió la llegada del joven monarca (bautizado enseguida como el «rey de los pobres») y sus primeros discursos —sobre los derechos de la mujer o el nuevo concepto de autoridad— como el inicio de una nueva etapa en la que sus condiciones de vida mejorarían sensiblemente.

Los gestos iniciales desde Palacio apuntaron hacia un posible cambio en las estructuras de poder, una relajación de las líneas rojas tradicionales, y un impulso firme del proyecto democrático y de modernización anunciado, pese a que el propio rey dejó claro desde un primer momento el carácter ejecutivo de la monarquía. El nuevo monarca mantuvo, por otra parte, la tradición de la beia, persistiendo en la relación reverencial con sus súbditos, y cuya ceremonia se celebra cada año.

Pese a dichas señales, transcurrido un año de la llegada al poder de Mohamed VI las grandes expectativas creadas comenzaron a diluirse. En lugar de acometer una estrategia multidimensional a la altura de los grandes retos de Marruecos, Palacio optó por propiciar algunos avances y reformas y seguir, al mismo tiempo, concentrando todos los poderes efectivos y la consiguiente capacidad de control y represión.

Los atentados terroristas de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, supusieron un punto de inflexión clave en la trayectoria del régimen.⁵ Unos días después de los atentados, se aprobó una nueva ley antiterrorista. Las acusaciones se centraron en el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, con vínculos con Al Qaeda. Los medios de comunicación apuntaron como responsables a los círculos militantes e ideológicos del salafismo yihadista y a sus predicadores radicales.

5. El 16 de marzo de 2003 se produjeron 5 atentados con bomba simultáneos en Casablanca, capital económica del país, con un saldo de 45 muertos y numerosos heridos.

Por parte de Palacio y las principales fuerzas políticas, se señaló además a la formación islamista del PJD como «responsable moral» de los atentados, debido al doble lenguaje utilizado por esta formación, a partir de su estructura bicéfala (por un lado el partido y, por otro, el Movimiento Unidad y Reforma, que se analiza más adelante), y por la publicación por sus órganos de prensa de fetuas (dictámenes) violentas. Palacio acometió una redefinición de los modos de regulación religiosa por parte del estado, con el fin de preservar su fortaleza y legitimidad, en un intento por recuperar el control del ámbito religioso, bajo su dominio hasta la mitad de los años setenta, pero desde entonces progresivamente fragmentado (Zegal, 2005: 274-300).

En el balance hasta la fecha del régimen en materia de derechos y libertades cabe apuntar medidas y resultados muy dispares, que reflejan algunos avances y ciertos retrocesos. A modo de ejemplo, por un lado, se ha realizado una cierta apertura en el ámbito político; se han adoptado, a instancias de la sociedad civil, iniciativas relevantes en el ámbito de los derechos humanos (como la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación, en 2004) y reformas jurídicas de primer orden (como la aprobación del Código de Familia, también en 2004); y el monarca ha respaldado la labor de una buena parte de la sociedad civil democrática. Por otro, se han restringido espacios decisivos sobre libertades fundamentales (como el de la prensa independiente), se ha proseguido con la censura y represión puntual de aquellos considerados como disidentes (como, por ejemplo, los islamistas del movimiento JyE que reclaman derechos fundamentales), el *majzen* y Palacio han desplegado sus resortes de control en el ámbito económico (en relación a la patronal marroquí, y en contra de las empresas contestatarias), y las fuerzas de seguridad continúan cometiendo violaciones muy graves de los derechos humanos (como en el caso de las torturas, denunciadas reiteradamente por las organizaciones nacionales e internacionales).⁶

El régimen de Mohamed VI se ha caracterizado también por la apertura de un debate público sobre los problemas estructurales de Marruecos, como la repartición desigual de la riqueza, la exclusión, las

6. En marzo de 2013 el Relator Especial de la ONU presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

grandes diferencias entre el mundo urbano y el rural, o la corrupción. El informe del Cincuentenario (2006) consistió en un amplio ejercicio de balance y análisis sobre diversos aspectos sociales y económicos.

En el ámbito electoral, los sucesivos comicios celebrados en el presente siglo han estado marcados por una baja participación y, hasta 2011, una escasa transparencia. El gran vencedor de las municipales de 2009 fue el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado apenas un año antes por Fouad Ali-Himma (amigo personal del rey, ex responsable de la cartera de Interior y actualmente consejero real). La creación de este partido recordó las maniobras ejercidas por el poder en tiempo de Hassan II, con la creación desde Palacio de diversos partidos para desactivar y dividir a la oposición.

En el plano internacional, Marruecos cuenta con un gran respaldo por parte de la Unión Europea (concedió a Marruecos, en 2008, el Estatuto Avanzado), y de países como Francia, España, y Estados Unidos. Este apoyo, sustentado en intereses económicos y geopolíticos (destacando el control de fronteras y la lucha contra el terrorismo), ha sido criticado en reiteradas ocasiones por parte de diversos sectores de la sociedad civil.

Indicadores sociales y de desarrollo

Marruecos ha experimentado en las últimas décadas diversos fenómenos sociales y demográficos muy relevantes. El éxodo rural, especialmente hacia las grandes ciudades, ha crecido de forma exponencial (en 1960 un 29% vivía en las ciudades, mientras que en 2004 lo hacía un 55%) y el crecimiento demográfico ha ido decreciendo paulatinamente (de siete hijos de media por mujer en 1960 a 2,5 en 2004).⁷ Según el censo reseñado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2012), la población marroquí supera ligeramente los 32.500.000 habitantes. La tasa de analfabetismo estimada es del 34%, y afecta especialmente al medio rural y a las mujeres.⁸

7. Datos del informe *50 years of Human Development & Perspectives, The future is being built and the best is possible, Summary of the general report*, PNUD, 2006.

8. Informe del Sindicato Organización Democrática del Trabajo (ODT), *Bilan 2012: Précarité pour l'ensemble des salariés, classe moyenne et démunis, mais profit pour les riches*, 2013.

Pese al entramado de organismos e instituciones vinculados en Marruecos al desarrollo social, los indicadores sobre educación, exclusión social, salud y malnutrición señalan grandes déficits en muchos aspectos. Las principales instituciones en este ámbito, incluyendo la acción social, son la Fundación Mohamed V para la Solidaridad y la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH). Esta última fue creada por Palacio en 2005, como referente estratégico para el desarrollo socioeconómico.

En el medio rural se han producido algunos avances, si bien existen todavía déficits ingentes. Según el Informe Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2009, el acceso a los servicios de base en el medio rural amplió su cobertura sobre la población, pasando del 9,7% en 1994 al 83,9% en 2009. En el mismo período el abastecimiento de agua potable habría pasado del 14% al 90%. La tasa de pobreza estimada en Marruecos es del 9,1% (en 2009). En el ámbito educativo, la tasa de escolarización se triplicó entre 1994 y 2009 en el medio rural (y se multiplicó por cuatro en el caso de las niñas), pasando la relación total entre niños y niñas en la escuela primaria del 66% al 89% de escolarización.

En el último Índice de Desarrollo Humano (IDH, 2012) del PNUD, Marruecos se sitúa en el puesto 130 (de un total de 187 países).⁹ La media del IDH de Marruecos, según el ranking de 2012 es de 0,591; por debajo de la media de los países que se encuentran en el grupo mundial de desarrollo medio (0,64) y de la media de los países árabes (0,652). La esperanza media de vida es de 72,4 años (entre 1980 y 2012 la esperanza de vida se incrementó en 14,7 años). Respecto a la igualdad de género, Marruecos está situado en el puesto 84, de un total de 148 países, con una valoración del 0,444 (conforme al Índice sobre Desigualdad de Género publicado por el PNUD); la participación en el mercado laboral de las mujeres es del 26,2% (comparado con el 74,7% de

9. Dado que los métodos y datos recabados para la elaboración del índice de desarrollo humano han variado, no cabe hacer comparativas directas con la clasificación de cada país respecto a años anteriores, tal y como se reseña en el documento *Explanatory note on 2013 Human Development Report composite indices – Morocco*.

los hombres), y las mujeres representan un 11% de los miembros del Parlamento.¹⁰

Indicadores económicos

Desde 2008, las tres fuentes principales de divisas y sustento del crecimiento —las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero, las inversiones extranjeras y el turismo— reflejan un estancamiento de los flujos y una tendencia hacia la regresión. Marruecos sigue, por otra parte, teniendo una fuerte dependencia del año agrícola (la agricultura representa el 16% PIB). Por otro lado, el mercado marroquí no es capaz de absorber a los nuevos demandantes de empleo, entre 250.000 y 350.000 personas cada año, de media durante la última década. De hecho, su capacidad estimada de absorción de dichos demandantes se limita a unos 116.000 puestos de trabajo al año (Abdelmoumni, 2013: 127). El paro en Marruecos afecta principalmente a los jóvenes, que representan el 30% de la población, y entre los cuales la tasa de desempleo estimada es del 30%.¹¹

Durante 2012 y, sobre todo, 2013, Marruecos empezó a sentir de forma más drástica todavía los efectos de la crisis. El déficit presupuestario en 2012 fue del 7,4% del PIB, y el crecimiento del PIB del 2,75% (a diferencia de la década anterior, con una media del PIB del 4,5%). El déficit de la balanza de pagos al cierre del ejercicio de 2012 fue del 10,1% del PIB (el nivel más alto desde 1982). La deuda del Tesoro alcanzaba en abril de 2013 el 60% del PIB.¹²

Por otro lado, la política de grandes proyectos acometida, a partir de 2002 por el régimen (autovías, puertos, aeropuertos, complejos inmobiliarios, nuevas ciudades, infraestructuras turísticas, electrificación rural), ha generado una partida presupuestaria que ha ido creciendo año tras año, hasta alcanzar en la ley de finanzas para 2013 los 180.000 millones de dirhams (unos 18.000 millones de euros). El gobierno decidió, en abril de 2013, reducir en un 15-20% esta partida, ante la crisis financiera y el descenso galopante de las

10. Todo estos datos figuran en el documento *Explanatory note on 2013 Human Development Report, composite indice*, Morocco, PNUD, 2013.

11. Informe citado del sindicato ODT.

12. *La Vie Éco*, semana del 5 al 11 de abril de 2013.

reservas de cambio que, en dicho mes, apenas cubría cuatro meses de importaciones, según el Comité Económico y Social.

El Movimiento 20 de Febrero, la reforma constitucional y la configuración de un nuevo gobierno

El Movimiento 20 de Febrero

El M20F estuvo precedido por un número muy elevado de movilizaciones durante los años previos, por parte de diversos colectivos. A través del M20F los jóvenes marroquíes se situaron en la primera línea de frente de las reivindicaciones, exigiendo una remodelación radical del régimen. La irrupción y liderazgo en el espacio público de los jóvenes fue un factor novedoso, ya que las acciones de incidencia y de oposición al régimen en Marruecos han estado habitualmente a cargo de las generaciones previas.

Además del desarrollo del M20F en las redes sociales, a través de varios grupos de discusión en facebook, el primer paso de este movimiento consistió en elaboración de un vídeo en el que 14 personas expresaron sus motivos para movilizarse, en árabe, dariya (lengua dialectal marroquí) y tamazig. Las principales demandas consistieron en una Constitución democrática elaborada por una asamblea constituyente, la dimisión del gobierno, la disolución de las dos Cámaras y la separación efectiva de poderes. La figura del monarca no fue objeto de críticas directas, si bien en el centro de las reivindicaciones estaba la lucha contra la corrupción a todos los niveles, la reclamación de un rey que se limite a reinar, y el cese de determinadas personas de su entorno (como el consejero real Ali El Himma).

El acaparamiento de bienes inmuebles y activos financieros, y el incremento de la fortuna del rey desde su llega al trono, es una cuestión ampliamente conocida por la sociedad civil y debatida por los jóvenes del M20F.¹³ El rey detenta activos empresariales en diversas empresas estratégicas, que le sitúan como el primer accionista en el sector bancario y el primer terrateniente y productor agrícola, además de detentar amplias participaciones en el sector

13. Uno de los libros que circulan en pdf entre los miembros del movimiento es *Le roi prédateur*, de Catherine Graciet y Eric Laurent, Seuil, 2012.

alimenticio, inmobiliario, de minas, cemento, acero, telefonía y seguros, entre otros.

Si bien muchos de los jóvenes integrantes del M20F no pertenecían al tejido asociativo, una parte de ellos contaba con experiencia previa en OSC, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), la Asociación Nacional de Diplomados en Paro (ANDC, por sus siglas en francés) o el Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI).

El M20F se ha caracterizado por ser un movimiento social pacífico, sin una ideología precisa, de estructura horizontal, y sustentado en compartir una serie de reivindicaciones conjuntas. El movimiento no ha tenido una coordinación jerarquizada ni centralizada sino que su funcionamiento se ha articulado a partir de las reuniones asamblearias en cada ciudad y de las redes sociales. Las redes sociales y algunos periódicos digitales y páginas web (como Mamfakinch, «no concesión» en dariya) han canalizado la expresión de reflexiones, debates y demandas. La articulación del M20F se asemejó a la de un «movimiento de movimientos», donde la pluralidad y las dinámicas locales de cada ciudad conformaron su propia idiosincrasia (Jiménez, M, 2013). Las manifestaciones del 20 de febrero de 2011 tuvieron lugar en unas 120 localidades (53 de ellas, ciudades), y congregaron a varios cientos de miles de personas.

Pese a que el régimen marroquí descartó una represión masiva del M20F, las fuerzas de seguridad actuaron con gran contundencia en diversas manifestaciones, provocando numerosos heridos. En Alhucemas cinco jóvenes fallecieron con motivo del incendio de una sucursal bancaria. Varios activistas han sido condenados a penas de prisión. Unos 70 militantes del movimiento estaban todavía detenidos en la primavera de 2013.

Los jóvenes del movimiento islamista JyE se incorporaron al movimiento a partir de las manifestaciones del 20 de febrero de 2011, convirtiéndose en la principal fuerza de convocatoria popular. El abandono por parte de JyE del M20F en diciembre de 2011, provocó un debilitamiento muy importante de este último, y afectó directamente a su capacidad de movilización. A juicio de algunos jóvenes laicos del M20F, la retirada del movimiento JyE obedeció a la frustración de este último por no poder imponer sus propias

reivindicaciones, y a la fricción existente en torno a cuestiones como la igualdad entre hombre y mujer, la forma del Estado o el laicismo.¹⁴ Por su parte, algunos miembros de JyE han señalado que el motivo de su retirada fue el comportamiento oportunista de las fuerzas de izquierda del M20F, denegando a los islamistas su visibilidad e incluso la posibilidad de entablar un diálogo político.

Algunos sindicatos apoyaron directamente al M20F, como la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), la ODT y la denominada «sección democrática» de la UMT. La principal asociación que respaldó y dio apoyo logístico fue la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que cuenta con un centenar de secciones por todo el territorio y unos 10.000 miembros. El M20F recibió también el respaldo de algunos partidos que se sitúan en la extrema izquierda (también denominados, «izquierda no gubernamental»), como el Partido Socialista Unificado (PSU), el Partido de Vanguardia Democrática y Socialista (PADS, por sus siglas en francés) y la Vía Democrática (VD).

Otras organizaciones de derechos humanos apoyaron también al movimiento, entre las que cabe destacar el Foro Verdad y Justicia, la Liga Marroquí de Derechos Humanos y la Instancia Marroquí de Derechos Humanos. Por el contrario, fueron muy escasas las asociaciones de mujeres que se incorporaron como tales al M20F. En cuanto a las principales formaciones políticas del arco parlamentario, todas ellas optaron por quedarse al margen del M20F, incluido el PJD; si bien algunos jóvenes de este último partido, o de otros como la USFP, sí se implicaron en dicho movimiento. El M20F creó un Comité Nacional de Apoyo conformado por diversas asociaciones, partidos políticos y sindicatos.

En pleno auge de las movilizaciones sociales, en abril de 2011, estalló una bomba en un café de la plaza Djama el-Fnaa, en Marrakech, causando 16 muertos. El M20F consideró que el atentado podría haber sido orquestado por sectores contrarios a las reformas anunciadas por Mohamed VI como resultado de las protestas de la sociedad civil, y exigió que el estado cumpliera sus promesas de no paralizar dichas reformas a pesar del acto terrorista.

14. Entrevista mantenida con un joven del M20F en Rabat.

En junio de 2011, el M20F pidió el boicot de las urnas en el referéndum para votar la nueva reforma constitucional, a través de manifestaciones en diversas ciudades; al igual que otros actores, como JyE y tres partidos de la «izquierda no gubernamental. Los partidos políticos, incluido el PJD, y las asociaciones feministas, entre otras, optaron por respaldar la consulta. El propio PJD llegó a calificar de «enemigos del islam» a los jóvenes del M20F que se opusieron a la nueva Constitución.

En las manifestaciones a favor del nuevo texto los medios de comunicación oficiales desplegaron todos los recursos a su alcance. El régimen movilizó también a todas las fuerzas sociales allegadas, como los miembros de la cofradía islamista Tarika Bouchichiya.¹⁵ Los jóvenes del M20F que se opusieron a la aprobación de la Constitución fueron acusados por dichos medios de traidores de la nación y enemigos de la patria y del rey, y sufrieron bloqueos en Internet y el pirateo de sus correos electrónico y facebook. El M20F también ha denunciado la infiltración de diversas personas en algunas de sus manifestaciones.

La actividad del M20F durante los primeros meses de 2013 ha sido muy escasa y se ha limitado prácticamente a algunas grandes ciudades, como Casablanca y Rabat. Pese a ello, las autoridades mantienen sus reflejos represivos, como lo demuestra la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad durante la manifestación pacífica del M20F que tuvo lugar en Rabat en mayo de 2013, así como la censura de algunas de sus actividades (como la prohibición en Alhucemas de la celebración del segundo aniversario del M20F en los locales de la AMDH).

Algunos de los aspectos más relevantes sobre el M20F y su proyección futura, son los siguientes:

- Pese a que en la actualidad su presencia en la escena pública tiene un perfil muy bajo, el M20F mantienen en alza su espíritu reivindicativo. A juicio de diversos expertos, el M20F ha tenido un impacto en la conciencia social, sensibilizando

15. La agencia de noticias MAP estimó que 300.000 miembros de esta congregación habían participado en las manifestaciones del 26 de junio de 2011 a favor del «sí» en el referéndum.

a una parte importante de la población sobre la importancia de la movilización a gran escala. Existen a su vez múltiples sinergias derivadas de la nueva toma de conciencia sobre la posibilidad de un cambio real.¹⁶

- La actitud adoptada por las diversas organizaciones, asociaciones, sindicatos, y partidos políticos respecto al M20F es, por otro lado, un claro reflejo de su posicionamiento frente al poder, y de cómo conciben su estrategia de incidencia frente a las instancias públicas. Esta cuestión se analiza con mayor detalle más adelante.
- La legitimidad incontestable del M20F resultó además reforzada por sus logros directos: la convocatoria de un referéndum, la aprobación de una nueva Constitución —que, no obstante, no ha cumplido en gran parte con las exigencias del M20F—, y un cambio de gobierno, a través de las urnas. Las protestas que se vienen sucediendo a lo largo del territorio marroquí en los dos últimos dos años son una continua llamada de atención para el régimen.
- Algunas de las reflexiones actuales de los jóvenes del M20F se centran precisamente en la necesidad de articular y vincular su trabajo y protestas con las de otros colectivos, y con las referidas protestas sociales. En este sentido, y pese a que el M20F incorporó a diversos miembros de algunas «coordinadoras locales contra la carestía de la vida y la degradación de los servicios públicos» (tansiqiyat), no existe todavía un nexo directo entre el M20F y las protestas sociales locales, especialmente las que tienen lugar en las regiones más marginadas.
- Cabe también subrayar que el nacimiento y expansión del M20F está asociado a la Primavera Árabe en Túnez y Egipto. Todo lo que sucede en ambos países tiene, en mayor o menor medida, una cierta influencia tanto a nivel social como político en Marruecos.

16. Como señaló uno de los expertos consultados, algo ha cambiado a nivel social, en el sentido de que la sociedad ya no está tan bloqueada como antes y que se percibe que el «cambio es posible».

La Constitución de 2011

Como se ha señalado, ante la movilización del M20F, la respuesta de Palacio y su entorno no se hizo esperar. El 9 de marzo se anunció una reforma constitucional global, sustentada en siete fundamentos de orden mayor, referidos, entre otros aspectos, a la independencia de la justicia, la consolidación del principio de la separación y equilibrio de poderes y el fortalecimiento de la ciudadanía (con mención expresa de los partidos políticos, la oposición parlamentaria y la sociedad civil).

El referéndum constitucional estuvo precedido —a diferencia de otras citas electorales similares— de una intensa campaña por parte de los partidarios del sí y del no, y un importante enfrentamiento entre ambos. El rey comunicó su intención de votar (hecho inédito) e hizo un llamamiento a todos los marroquíes para votar sí. También, por primera vez en un referéndum constitucional, se autorizó el voto de los marroquíes residentes en el extranjero.

Tras un proceso de consulta marcado por importantes irregularidades, el referendo popular se saldó con un respaldo del 98,5% de los votos válidos. Según los datos publicados por el Consejo Constitucional, la participación fue de un 73,46% (9.885.020 votantes, de un total de 13.449.445 inscritos). El proceso emprendido por Mohamed VI y la aprobación de la nueva Constitución obtuvo un importante respaldo internacional.

El Centro Marroquí para la Democracia, una instancia independiente, publicó un informe provisional horas antes del referendo en el que indicaba diversas anomalías que impedían el correcto desarrollo del referéndum.

La nueva Constitución dedica un espacio muy amplio a los derechos humanos, reconoce la igualdad de derechos entre hombre y mujer, y otorga a las OSC un papel de participación y seguimiento en relación a las políticas públicas. Estaba previsto, en la primera versión del texto, la consagración de la libertad de conciencia, pero se descartó debido a la oposición de los islamistas.

Un extenso prólogo define a Marruecos como Estado musulmán soberano, cuya unidad está forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámico, tamazig (convertida ahora en lengua oficial, además del árabe) y saharo-hassaní, enriquecido por sus afluentes africano, andalusí, hebraico y mediterráneo.

Los aspectos más destacables de la reforma constitucional son los siguientes:

- La figura del rey se desacraliza, pero continúa manteniendo el estatuto de jefe de la comunidad de los creyentes (Amir al Mouminine o Comendador de los Creyentes) y presidiendo el Consejo Superior de los Ulemas (única instancia habilitada a pronunciar fetuas o dictámenes), además de la jefatura del Estado. Todo ello, en los mismos términos que el artículo 19 anterior (el cual se desdobra en dos disposiciones, el art. 41 y 42).
- Pese a que el nuevo texto representa un cierto reequilibrio de poderes, el rey sigue detentando las prerrogativas soberanas y plenas facultades en el plano diplomático y militar, además del control sobre todas las decisiones estratégicas, tanto económicas, políticas, sociales y culturales.

Algunos ejemplos prácticos de cómo el rey ha continuado ejerciendo sus tradicionales prerrogativas después de la reforma constitucional, son los nombramientos directos de numerosos embajadores, sin consultar al jefe de gobierno; sus viajes a diversos países extranjeros acompañado de sus consejeros y de empresarios; la decisión unilateral de retirar la confianza de Christopher Ross, el emisario personal del secretario general de la ONU para el Sáhara; y la apertura por decisión del monarca de procedimientos penales a varios funcionarios.

- No existe en el texto actual una efectiva separación de poderes. El rey continúa presidiendo el Consejo de Ministros, con amplias prerrogativas. El rey puede revocar libremente a los ministros, y supervisar y validar todos los textos legales antes de su incorporación al circuito legislativo. Además, es norma de Palacio someter a un control exhaustivo todas las leyes a través del Secretariado General del Gobierno, cuyo responsable es nombrado directamente por el rey.
- Por otro lado, el Poder Judicial, que en la anterior Constitución figuraba como simple «autoridad judicial», es reconocido por primera vez como tal, si bien el monarca mantiene un

estatuto de garante, con importantes prerrogativas, tanto en relación a la presidencia, la composición y el nombramiento de los cargos del Consejo Superior del Poder Judicial. Mediante la presidencia de este Consejo, Mohamed VI sigue siendo el superior jerárquico de los magistrados del reino, y ejerce el control sobre la promoción de los mismos y sus traslados, pudiendo además revocar su nombramiento o sujetarles a sanciones disciplinarias.

En octubre de 2012 tuvo lugar una manifestación, la primera de esta índole en Marruecos, compuesta por unos 8.000 magistrados, exigiendo una reforma efectiva que consagre la independencia del Poder Judicial.

- La Constitución introduce la obligación expresa de que el primer ministro, nombrado por el monarca, provenga del partido más votado en las elecciones a la Cámara de Representantes. Este último adquiere una mayor autonomía respecto al rey, ya que únicamente tiene que rendir cuentas a dicha Cámara, y dispone de poderes para disolverla. Igualmente, el jefe de gobierno preside el Consejo de Gobierno, al cual se otorgan una serie de competencias propias, pudiendo remitir leyes al Parlamento y nombrar a altos funcionarios. El grado de operatividad de este Consejo, cuyo refuerzo de competencias es una de las cuestiones más novedosas de la nueva Constitución, permitirá valorar en la práctica hasta qué punto existe una voluntad real desde Palacio para que el poder ejecutivo vaya adquiriendo mayor peso y autonomía.
- Por primera vez se hace mención en la Constitución a la «monarquía parlamentaria». Se refuerzan los poderes del Parlamento, sobre todo en el ámbito legislativo nacional e internacional.
- Por otro lado, y pese a la inmunidad jurisdiccional de la que gozan los decretos reales (*dahir*), algunos autores señalan que la Constitución abre, a través de su artículo 118, una vía para considerar que dicha inmunidad ya no procede; y que a partir del nuevo texto la única fuente legislativa es el Parlamento, quedando circunscrito el *dahir* únicamente a

una decena de ámbitos.¹⁷ Dicho artículo señala que todo acto jurídico administrativo, de naturaleza reglamentaria o individual, puede ser objeto de recurso ante la jurisdicción administrativa competente.

- El papel que desempeñe el Tribunal Constitucional será, a su vez, determinante. El rey continúa presidiendo este órgano judicial y nombra a la mitad de sus miembros. La posibilidad de instar una «excepción de inconstitucionalidad» dota a este órgano de un papel fundamental de cara al futuro. El preámbulo de la Constitución reconoce la preeminencia acordada a la religión musulmana en relación al referente nacional (religión, monarquía e integridad territorial), lo cual deberá ser objeto de interpretación, caso por caso, por esta instancia judicial.

A este tribunal le corresponderá resolver sobre la conformidad legal de principios sustanciales para las libertades y derechos sociales e individuales fundamentales. Esta instancia será la encargada de clarificar el lugar que ocupa el islam en el nuevo marco jurídico. La confrontación e interpretación de estos derechos —como la libertad de conciencia y religión, el respeto de la vida privada, la libertad sexual, la libertad de relaciones sexuales, la igualdad entre el hombre y la mujer, las reglas de sucesión entre ambos sexos— a la luz de los principios inherentes al islam será una cuestión de primer orden y un buen indicador de progreso (Melloni, 2013:16).

- Por otra parte, el preámbulo de la Constitución acuerda a las convenciones internacionales debidamente ratificadas —en el marco de las disposiciones de la Constitución y de las leyes del reino, y en el respecto de su identidad nacional inmutable—, y a partir de la publicación de aquellas, la primacía sobre el derecho interno, debiendo armonizarse en consecuencia las disposiciones pertinentes de la legislación nacional.

A juicio de diversos juristas, la jerarquía normativa que sitúa en la cúspide a los tratados internacionales ratificados por Marruecos queda cuestionada, ya que la Constitución

17. Entrevista con un experto constitucionalista, con motivo del presente diagnóstico.

establece que la primacía del derecho internacional se acuerda por parte de Marruecos respetando su identidad nacional inmutable, en el seno de la cual, como se ha señalado, predomina la religión musulmana. Una vez más, el Tribunal Constitucional (art. 55) es el competente para declarar si un compromiso internacional está o no en contradicción con una disposición contraria a la Constitución. En caso de que existiese contradicción, la ratificación de dicho tratado solo sería válida una vez que se revise la Constitución.

- El título IX de la Constitución está dedicado a las regiones y a las colectividades locales. El nuevo texto establece (art. 135) que los Consejos de las Regiones y de las Comunas serán elegidos por sufragio universal directo. El proyecto de regionalización sigue pendiente de concretarse en la práctica, y su desarrollo se hará a través de una ley orgánica; la cual será determinante para conocer el alcance de dicho proyecto, si bien los *walis* regionales detentan conforme al texto constitucional amplios poderes, lo que, presumiblemente condicionará en la práctica cualquier avance efectivo de dicho proyecto.
- El nombramiento de puestos de alta responsabilidad en la función pública (unos 1.200 cargos, relativos a la escala más alta de decisión en el sistema: consejeros reales, *walis*, presidentes de organismos y empresas públicas) es otra de las novedades del texto constitucional. Anteriormente, el monarca nombraba la totalidad de dichos cargos. La ley orgánica sobre el nombramiento de la Alta Función Pública fue la primera en ser aprobada en aplicación de la nueva Constitución, estableciendo 39 entidades estratégicas, a cuyos responsables es preciso nombrar a través de un *dahir*.

Marco político y principales retos de gobierno

Las elecciones legislativas de 2011 y la victoria del PJD

Como se ha señalado, el PJD fue el partido vencedor en las elecciones legislativas de 2011, consideradas como las más transparentes en toda la historia de Marruecos. Los comicios se organizaron con bastante precipitación. Por primera, vez se establecieron garantías adecuadas para su seguimiento externo de forma imparcial.

La tasa de participación fue del 45,5%, superior a las de las elecciones legislativas de 2007 (37%), si bien las listas de los comicios de 2007 contaban con 2.090.000 electores más. Del conjunto de electores potenciales, un 38% no se inscribió en las listas y otro 34% no acudió a votar, por lo que únicamente acudió a las urnas un 28% de dichos electores (además, de cada diez votos, dos fueron nulos o en blanco). Estas cifras traducidas en términos de los votos obtenidos por el PJD, reflejan que este partido obtuvo únicamente un 5% de los electores marroquíes en edad de votar. No obstante, esta formación es la única que ha obtenido, desde 1984, casi una cuarta parte de los votos válidos (López García, B, 2012: 21). El PJD detenta 107 escaños en la Cámara de Representantes, de un total de 395. El partido, Istiqlal, de carácter conservador (y al mando del anterior gobierno), fue la segunda fuerza más votada, obteniendo 60 escaños. El 16,75% de los miembros de dicha cámara son mujeres.

El PJD ha incrementado progresivamente sus resultados a lo largo de todas las citas electorales en las que ha participado, durante los últimos 15 años (doblando en la de 2011 los votos obtenidos respecto a la precedente), y ha destacado por ser el único partido de auténtica oposición a nivel parlamentario. Esta formación ha venido además manteniendo un perfil bajo a lo largo de las citas electorales previas, con el fin de generar confianza por parte del régimen. Es, además, el partido que presenta un componente interno más democrático. Sus apoyos provienen sobre todo de los jóvenes y los profesionales con cierto nivel de instrucción, en los grandes centros urbanos.

El PJD dispone de una vertiente encargada directamente del proselitismo y de la movilización religiosa y social, el Movimiento para la Unidad y la Reforma (MUR). El discurso de ambas formaciones, con múltiples sesgos, se adapta puntualmente según las circunstancias y el ámbito específico de interlocución. En el reparto de papeles, el PJD es más claramente majzeniano y pro monárquico que el MUR. Esta estructura bicéfala permite una doble pertenencia a numerosos dirigentes del PJD, vinculados a ambas organizaciones, con funciones distintas. Ambas organizaciones han dado muestras evidentes en el pasado de su agenda conservadora en el orden moral. Tampoco existe claridad en su discurso sobre la aplicación de la sharía. El PJD se define como un partido político de referente islamista

(y no como un partido islamista; lo cual está prohibido conforme a la ley), inscrito plenamente en un proyecto nacional de sociedad modernista y democrática.

Para obtener la mayoría parlamentaria, el PJD formó una coalición con el Istiqlal (partido nacionalista, con una presencia tradicional en el gobierno), el Movimiento Popular (en la órbita del *majzen*, de perfil amazig y también presente en numerosos gobiernos) y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, antiguo Partido comunista, y asiduo también en diversos gobiernos). De 31 carteras ministeriales (12 de ellas detentadas por el PJD) solo una corresponde a una mujer. Las tensiones en el seno de la coalición gubernamental terminaron por desembocar, en julio de 2013, en el abandono de la misma por parte del Istiqlal.

La estrategia del PJD está siendo plenamente pragmática, aceptando sin condiciones la superioridad del monarca y sus competencias en las decisiones estratégicas, con el consiguiente descontento de sus bases y diversos dirigentes, quienes critican el acaparamiento de poder por parte de Palacio y su interferencia en las prerrogativas del gobierno. Algunas de las iniciativas del PJD no han prosperado por el bloqueo de Palacio, como, por ejemplo, su programa de reforma del sector audiovisual, que incluía la programación de los cinco rezos y la prohibición de publicidad sobre loterías y otros juegos de apuestas.

Los consejeros reales, como el Himma y Majidi, en el punto de mira del M20F, se mantienen en sus posiciones y siguen presentes en la escena pública. La persistencia de los resortes de Palacio para el control del campo político se resume en dos ejemplos significativos: la dimisión, forzada desde Palacio, del director de la *Vie Éco* por haber abierto las columnas de su periódico al jefe de gobierno (e insinuar que los consejeros del rey deberían inmiscuirse menos en la acción del gobierno), y las gestiones realizadas para el nombramiento de los nuevos secretarios del partido Istiqlal y USFP, con un perfil de clara oposición al PJD y muy poco independientes respecto a Palacio.

Retos de gobierno y contexto social

En un contexto de crisis como el actual, la existencia de dos vertientes institucionales paralelas (Palacio y coalición gubernamental, con la

preeminencia del primero) complica en gran medida la adopción de decisiones estratégicas, que son vitales para la gestión de asuntos determinantes en el ámbito económico y social. La capacidad de maniobra del PJD es, por tanto, limitada.

La tensión social y las movilizaciones del M20F provocaron, a principios de 2011, el anuncio por las autoridades de una serie de medidas de contención, con un importante coste económico, como la creación de 3.500 puestos de trabajo, y un desembolso en la Caja de Compensación equivalente a unos 3.000 millones de euros anuales de media (5.300 previstos para 2013). Este instrumento de amortiguación para las economías más pobres ha sido muy criticado por parte de la sociedad civil, por entender que el grueso de los fondos (un 75%) beneficia principalmente a grandes fortunas y multinacionales, algunas de ellas del holding empresarial del rey.¹⁸

Otros de los retos más importantes de la coalición de gobierno se concretan en la reforma fiscal, incompleta todavía —y sin que se hayan abordado sectores clave, como el agrícola o el de las viviendas sociales—, y en la reforma de las pensiones. En el ámbito de la salud se ha activado un sistema de asistencia para las economías más desfavorecidas (RAMED), si bien los medios existentes son escasos para su puesta en práctica.

En el ámbito electoral e institucional, los comicios locales y regionales, previstos para 2013, están por el momento en suspenso. Una de las razones más plausibles es el temor por parte del conjunto de partidos políticos y de Palacio a que el PJD gane por amplia mayoría. Igualmente, el mandato de un tercio de la Cámara de Consejeros (90 consejeros) expiró en octubre de 2012, si bien permanecen en sus puestos. Los desarreglos institucionales son únicamente la parte visible de las disfunciones de un parlamento que, a partir de la nueva Constitución, tiene que aprobar decenas de leyes, previos los filtros correspondientes.

Una de ellas es la Ley de la Regionalización, que debería reflejar la gran apuesta del estado marroquí para alcanzar mayores cuotas democráticas a nivel territorial. El reto de este proyecto —cuya pieza central es el Sáhara— es crear entidades regionales con competencias

18. Informe citado de la ODT.

efectivas que permitan atender al conjunto diverso y plural de las regiones de Marruecos, y a las especificidades de todas ellas.

La resolución del conflicto del Sáhara se puede considerar, además, como la clave de la democratización de Marruecos (López García, B. 2000: 176). El Sáhara Occidental es un territorio en el que el régimen marroquí tiene un saldo tremendamente negativo en las últimas décadas, y cuyo contencioso atraviesa múltiples facetas y dimensiones del país. La inacción de Marruecos y las acciones represivas llevadas a cabo en el Sáhara, conllevan la pérdida de toda credibilidad respecto al plan de autonomía anunciado hace seis años para este territorio en disputa.¹⁹

Existen, igualmente, múltiples retos en el ámbito de los derechos humanos. En su informe de 2012 (publicado en 2013), la AMDH advierte que durante dicho año se produjo una regresión en materia de derechos y libertades fundamentales. Esta organización señala, entre otros aspectos la represión ejercida por las fuerzas de seguridad con motivo de las manifestaciones, la necesidad de que se aclare la muerte de varios activistas del M20F durante 2011 (y dos casos identificados en 2012), la existencia de números presos, los abusos cometidos contra los defensores de los derechos humanos, y las graves y persistentes vulneraciones en el ámbito de las libertades públicas y en relación a determinados derechos económicos, sociales y culturales.

Los retos reseñados, tienen a su vez un telón de fondo social determinante. La cartografía de las protestas sociales en Marruecos es muy amplia, tanto temporal como geográficamente. Durante la etapa del reinado de Mohamed VI se han venido produciendo protestas de diversa índole, desperdigadas por todo el territorio marroquí. Los déficits en la prestación de servicios sociales básicos, la vulneración de derechos fundamentales, el desempleo, las profundas desigualdades sociales y los agravios de los agentes de la autoridad, son algunas de las causas que durante los últimos años han motivado la movilización de la sociedad marroquí y de las poblaciones locales.

19. Bernabé López García: «Marruecos fracasa en el Sáhara», *El País*, 4 de mayo de 2013.

Por lo que respecta a las desigualdades sociales, Marruecos figura, conforme a los datos del Banco Mundial publicados en 2012 (pero con datos de 2007), con un coeficiente GINI (que mide la diferencia y reparto de los ingresos entre personas y hogares en un determinado país) de un 40,9. Otros datos señalan que el 20% de la población acapara el 56,7% de la riqueza mientras el 20% más pobre detenta únicamente el 3,5%. A lo que se suma un nivel de protección salarial bajo mínimos, ya que solo un porcentaje reducido de la población activa se beneficia del sistema de seguridad social, cuyas prestaciones son además muy bajas.

Con anterioridad a la Primavera Árabe, muchas localidades fueron además escenario de diversas protestas sociales. A partir del M20F, las protestas no solo han continuado sino que, además, se han extendido a otras localidades. La represión y las detenciones sigue siendo en muchos casos la principal respuesta del *majzen* ante las demandas de la población. Se estima que en 2012 hubo protestas sociales en todas las regiones y localidades de Marruecos, contabilizándose (entre enero y noviembre de dicho año) un total de 17.186 manifestaciones.²⁰

A falta de una cartografía detallada, y el consiguiente análisis de estas protestas, algunas de las personas entrevistadas han reseñado que a partir de la Primavera Árabe se observa una mayor tendencia a la ocupación del espacio público y una tolerancia menor frente a los desagrazos de las autoridades. Otro rasgo de las protestas actuales es su prolongación en el tiempo, en ocasiones durante varios días. Las causas o detonantes de las protestas actuales son muy diversas —precios prohibitivos de la electricidad y el agua, la carencia de infraestructuras y servicios sociales básicos, la expropiación de tierras, conflictos mineros, detenciones de jóvenes manifestantes consideradas injustas por la población, e incluso la indignación ciudadana ante el gesto feudal de un fiscal (*procureur du roi*) exigiendo a un mecánico de la localidad que le besase los pies.

Uno de los ejemplos más representativos de estas protestas sociales y de la respuesta de la sociedad civil ha sido el caso de la localidad de Taza, en agosto de 2012. A la movilización de los

20. Informe citado de la ODT.

jóvenes en paro, le siguió, dos meses después, una sentada de los habitantes de un barrio popular, en protesta por el desastroso servicio de agua y electricidad, y su coste prohibitivo. A ambos colectivos se les unieron otros habitantes, muchos de ellos jóvenes y estudiantes, de la localidad. Las protestas se dirigieron contra los consejeros locales, el gobernador, y los responsables de las oficinas del agua y electricidad. Los disturbios se saldaron con una veintena de heridos. A resultas de los disturbios y de la actuación de las autoridades y fuerzas de seguridad, diversas asociaciones y partidos políticos de Taza organizaron una conferencia de prensa, emitiendo una serie de recomendaciones, entre ellas la dimisión del gobernador.

Otro de los acontecimientos objeto de una fuerte controversia, fue el desmantelamiento en noviembre 2010 del campamento de Gdym Izik, a unos kilómetros de El Aiún —en el que, según información del gobierno marroquí, murieron 11 agentes de policía marroquíes y dos civiles saharauis— y las acciones posteriores de represalia en El Aiún por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, en las que se acometieron, según numerosas denuncias y testimonios, actos de agresiones y tortura contra la población saharauí. A principios de 2013, un tribunal militar dictó altas penas de prisión contra 24 militantes saharauis. Algunas organizaciones, como la AMDH, habían denunciado previamente la inexistencia de pruebas para realizar las imputaciones.

El ámbito de la universidad tampoco está exento de tensiones. En 2013 el gobierno realizó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad para prohibir la celebración del congreso nacional de la UNEM (sindicato estudiantil, en que el movimiento Justicia y Espiritualidad es la fuerza mayoritaria) y al que habían acudido miles de jóvenes.

Estructura de la sociedad civil y rasgos generales

Principales etapas y características

Del asociacionismo tradicional al asociacionismo moderno

El primer referente del asociacionismo en Marruecos se ubica en el ámbito de las estructuras sociales y prácticas comunitarias tradicionales, entre las que destacan las congregaciones religiosas y cofradías (*zawiyyas*), las formas de organización y representación

comunitaria (*jemaa* tribales, o asambleas de notables), las de ayuda mutua para ordenar el territorio y aprovechar los recursos (*twiza*), y otras sustentadas en la solidaridad colectiva, el trabajo comunitario y la resolución de conflictos. Este asociacionismo tradicional fue alterado y restringido por el colonialismo, y entró en crisis con el proceso de disgregación de las estructuras sociales originarias y la creciente urbanización.

La trayectoria de la sociedad civil marroquí y de un asociacionismo de corte más moderno se remonta a las décadas anteriores a la Independencia. La sociedad civil marroquí es muy amplia y heterogénea. El tejido asociativo se extiende por multitud de sectores y ámbitos, desde las organizaciones caritativas hasta las que fomentan el ejercicio activo de la ciudadanía; pasando por asociaciones culturales, educativas, deportivas, de protección del medio ambiente, de promoción y defensa de los derechos humanos, de apoyo a la economía social o de microcréditos.

El asociacionismo desarrollado a partir de la Independencia ha atravesado varias etapas. La primera sería a partir de la publicación del código de libertades públicas (1958), a través de la creación de numerosas asociaciones, varias de ellas derivadas o ligadas a los partidos políticos, además de un buen número de entidades caritativas, benéficas, deportivas y culturales, muchas de ellas a iniciativa de la burguesía urbana y con el apoyo de las autoridades. A partir de 1973 se abrió un nuevo período, marcado por una regresión de las libertades públicas. Se crearon entonces las primeras asociaciones de derechos humanos, desarrollándose a su vez diversas organizaciones paragubernamentales.

Posteriormente, el tejido asociativo marroquí tuvo un punto de inflexión, con motivo de la crisis económica y social de inicios de los 80, y de la imposición por parte del Fondo Monetario Internacional de un Plan de Ajuste Estructural, a resultas de la suspensión de pagos por parte de Marruecos. El Estado marroquí se vio forzado a fomentar el desarrollo de entidades no gubernamentales, tanto de carácter asistencial como prestatarias de servicios sociales básicos, para atender las ingentes necesidades de la población, amortiguar la exclusión social y devaluar las tensiones sociales. La década de los ochenta se caracterizó también por un importante movimiento estudiantil. Al mismo tiempo, el *majzen* creó diversas asociaciones

regionales, lideradas por personalidades influyentes, en un intento también por captar la ayuda internacional y dar una imagen al exterior de apertura del régimen. Estas organizaciones detentan la calificación de utilidad pública.

Igualmente, a partir de la década de los ochenta, y a resultas en gran medida de la falta de voluntad e incapacidad de los agentes estatales para proveer servicios básicos a la población, se inició un desarrollo muy significativo de asociaciones islamistas, que progresivamente fueron consiguiendo un gran arraigo social, a través del apoyo a las poblaciones más desfavorecidas del medio urbano y su discurso religioso.

La expansión de la sociedad civil marroquí

En la década de los noventa Marruecos experimentó un nuevo auge asociativo vinculado en esta ocasión a una apertura del ámbito de la participación política. El *majzen* percibió en esta etapa a las asociaciones como un soporte básico para activar un desarrollo más participativo, y de paso seguir proyectando hacia el exterior una imagen de apertura, modernización y liberalización política, recabando así el apoyo de la comunidad internacional.

Ante esta tesitura, aumentaron también las demandas de la población marroquí para la generación de espacios autónomos y la ampliación de su margen de acción. En esta década se consolidaron y desarrollaron las asociaciones de derechos humanos, de mujeres progresistas y amazig. Surgieron también algunas asociaciones que fomentaron el trabajo en red (como el Espace Associatif), la lucha contra la corrupción (como Transparency Maroc), la protección del medio ambiente y los valores ciudadanos (como Afak), entre otros temas.

Durante las dos últimas décadas la sociedad marroquí y su tejido asociativo han experimentado una mutación de amplias dimensiones. Además de la creación de miles de OSC vinculadas a sectores más tradicionales (salud, educación, capacidades productivas), la evolución del tejido asociativo se ha traducido en la creación de asociaciones que desarrollan su labor en el ámbito de los valores democráticos. Es el caso del Forum des Alternatives (con un enfoque de trabajo en red, pero compuesta por personas a título individual) y del Forum de Citoyenneté y el Collectif Démocratie et Modernité (que celebró en 2012 tres encuentros regionales y un seminario internacional sobre la libertad de conciencia en Marruecos). Otras,

como Adelma, han desarrollado una amplia experiencia en el ámbito de la gobernanza local y el trabajo con representantes asociativos y de las comunas (órganos de gobierno local).

También en los últimos años, han surgido diversas asociaciones que abordan algunos temas tradicionalmente considerados tabú, pero a la vez determinantes para el progreso de las libertades civiles y derechos fundamentales; y cuya existencia sería difícil de concebir hace tan solo una década, si bien no está exentas de trabas por parte del régimen. El surgimiento de estas asociaciones refleja la pluralidad y la continua evolución de la sociedad civil marroquí. Algunos ejemplos son la Asociación de Lucha contra el Aborto Clandestino, la referida asociación MALI (que trabaja por el reconocimiento del derecho a no tener que respetar el ayuno en público durante el Ramadán, entre otros temas) y la asociación Kifkif (que se centra en el derecho a la libertad sexual, y de elección de orientación sexual), sin reconocimiento legal.

Otras asociaciones, como las que trabajan con madres solteras —que inicialmente recibieron muchas críticas de sectores islamistas— llevan años atendiendo a un colectivo que refleja como pocos el drama y las consecuencias personales y sociales derivadas de una mentalidad conservadora. Es el caso de asociaciones como INSAF, Solidarité Féminine o Cent pour Cent mamans. Otras, como las que atienden a los enfermos de VIH-SIDA o las que promueven la adopción de métodos anticonceptivos, desarrollan un esforzado trabajo de gran significación social. Al igual que aquellas que luchan contra la trata de mujeres y la explotación de las niñas empleadas del hogar (conocidas, estas últimas, como *petites bonnes*).

A partir de la Primavera Árabe y de la nueva etapa propiciada por el M20F, se han creado también diversas organizaciones. A modo de ejemplo, NODE-Maroc es una asociación que surge directamente de la dinámica activada por la juventud entorno al M20F, y está orientada a la reflexión, el debate y la sensibilización, en relación a las reivindicaciones principales de dicho movimiento.²¹ Otra asociación activa en el plano político y social es Cap Démocratique Maroc (CAPDEMA, 2011), integrada por jóvenes y estudiantes y dedicada

21. Véase al respecto <http://www.nodemaroc.com/>

al debate, reflexión y elaboración de propuestas en el ámbito político, institucional y legal.²² Los jóvenes están también desarrollando después de la Primavera Árabe algunas iniciativas en el ámbito de la comunicación, mediante la creación de radios locales en ciudades como Casablanca (como el proyecto Media/radio communautaire del Forum des Alternatives, consistente en el apoyo a la puesta en marcha de emisoras de radios en Internet) o localidades más pequeñas, como Chaouen. En el ámbito local hay también múltiples iniciativas novedosas que reflejan una nueva conciencia social vinculada a un enfoque de derechos aplicado a la explotación de los recursos naturales. Uno de los ejemplos más mediáticos, en 2013, ha sido la movilización de diversas asociaciones de una localidad del Medio Atlas reclamando que los ingresos derivados de la explotación de la mina de ghassoul (una arcilla con propiedades únicas) reviertan en la población local.

Por otro lado, y como se ha señalado, el tejido asociativo marroquí está compuesto por un sinfín de asociaciones de corte islamista. El movimiento JyE cuenta con centenares de asociaciones que realizan acciones de proximidad y beneficencia, sobre todo en las grandes ciudades. Por su parte, las asociaciones vinculadas al PJD tienen en la actualidad una mayor proximidad a las esferas de gobierno, y desempeñan un papel de peso en aquellas instancias en las que dicha formación mantiene un cierto control o liderazgo, como en la Comisión nacional encargada del diálogo con la sociedad civil. La práctica asociativa de toda la vertiente de organizaciones afiliadas o próximas al PJD tiene como eje central el trabajo del MUR. El cuadro asociativo en Marruecos no sería completo sin la referencia a los salafistas, cuya vertiente asociativa es muy minoritaria en Marruecos. Tienen presencia en las grandes ciudades, con una labor de proximidad social, sobre todo de asociaciones caritativas y educativas.

Pese a los diversos estudios realizados sobre la sociedad civil marroquí, no existen información actualizada sobre el conjunto de su tejido asociativo. Un informe elaborado por el Alto Comisariado del Plan publicado en 2011, a partir de datos de 2007, cifra en 44.771 el número de asociaciones. De las cuales, ocho de cada diez fueron

22. Véase al respecto <http://www.capedema.org/>

creadas entre 1997 y 2007. Otras estimaciones llegan a hablar de hasta de 70.000 asociaciones en Marruecos, si bien muchas de ellas no están realmente operativas. A nivel regional la concentración (una de cada tres) se ubica en las áreas de Rabat-Salé, Zemmour-Zaser y Souss-Massa-Drâa.²³

Por último, señalar que desde finales de los noventa la expansión del tejido asociativo se ha traducido también en la conformación, con el apoyo de algunos donantes internacionales, de redes asociativas temáticas. La experiencia ha sido dispar. Mientras algunas iniciativas fracasaron, sobre todo durante los primeros años, muchas de ellas se han ido consolidando a lo largo del tiempo, y tienen en su haber logros importantes.

Marco legal de las libertades públicas y aplicación

Los textos legales de referencia sobre las libertades públicas se promulgaron mediante el dahir de 15 de noviembre de 1958, y regulan el derecho de asociación, las reuniones públicas y la libertad de prensa. Con la llegada al trono de Mohamed VI se intentó perfilar un nuevo concepto de autoridad fundamentado en la protección de las libertades públicas. En 2002 se reformaron algunos preceptos de la ley de asociaciones, desempeñando la sociedad civil un papel decisivo. Actualmente las OSC reclaman una nueva revisión de la ley que regula el derecho de asociación, entre otros motivos por la ambigüedad de algunos preceptos y la vulneración que realizan las autoridades de algunas de sus disposiciones.

Las asociaciones marroquíes incurren en nulidad de pleno derecho si, además de tener una causa u objeto ilícito o contrario a las buenas costumbres, tienen como objeto atentar contra la religión islámica, la integridad del territorio nacional o el régimen monárquico, o hacer un llamamiento a la discriminación. A partir de la reforma de 2002 la autoridad administrativa está obligada a entregar un recibo provisional en el momento de la entrega de la

23. Enquête National auprès des Institutions sans But Lucratif (Exercice 2007), Rapport de synthèse, Haut-Commissariat au Plan, Royaume du Maroc, diciembre de 2011.

documentación de la asociación, y un recibo definitivo en un plazo máximo de 60 días, si la documentación presentada por la asociación es la que prescribe la ley.

Actualmente son solo unas cuantas decenas (157, según el informe reseñado del Alto Comisariado para el Plan) las asociaciones que han obtenido la calificación de utilidad pública. Esta cuestión ha sido muy criticada por las OSC por entender que la concesión de la utilidad pública se instrumentaliza por parte del *majzen*. Las asociaciones que detentan esta cualificación tienen una mayor capacidad patrimonial que las de carácter ordinario y mayor acceso a las subvenciones estatales.

La ley de asociaciones no se aplica a todas ellas por igual. Pese a la reforma de 2002, en diversos casos las autoridades se han negado a entregar el mencionado recibo provisional, una vez depositada la documentación, o bien su entrega se ha demorado durante largo tiempo, sin justificación alguna. En estos casos, los fundadores de la asociación no tienen medio alguno fehaciente (a juicio de las autoridades) para probar que han efectuado dicha declaración.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) reseña que esta práctica de no entregar el recibo a las asociaciones es frecuente y está extendida geográficamente, lo cual denota una política de control por parte de las altas instancias, con el fin de debilitar a determinadas categorías de asociaciones, cuyos métodos u objetivos no son del agrado de las autoridades.²⁴ El sistema genera una evidente indefensión, y vulnera no solo la normativa interna sino el derecho internacional y los convenios suscritos por Marruecos. La falta de reconocimiento obstaculiza la actividad de estas organizaciones, imposibilita el acceso a fuentes de financiación oficiales y permite a las autoridades denegar su derecho a la reunión en lugares públicos y proceder contra sus miembros.

HRW ha analizado los casos de una serie de asociaciones proscritas por el régimen, como el de la Asociación Nacional de Diplomados en Paro (ANDH). Esta asociación y otras creadas con el mismo objetivo, celebran manifestaciones de forma continuada

24. Human Rights Watch. Freedom to Create Associations. A Declarative Regime in Name Only, 2009.

en varias ciudades desde hace muchos años. Sus concentraciones pacíficas, de carácter diario en Rabat, frente a la sede del Parlamento, han sido frecuentemente reprimidas. Actualmente, el movimiento de jóvenes diplomados es la vertiente asociativa más activa a nivel de movilizaciones en Marruecos. Otros de los casos reseñados por HRW son el de la Red Amazig para la Ciudadanía (como un ejemplo, entre otras muchas organizaciones amazig que han visto denegado por las autoridades su derecho a constituirse en asociación); y el de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharaui (CODESA), como ejemplos de algunas de las muchas organizaciones saharauis que también han visto obstaculizado su proceso de constitución formal.

En el ámbito de las libertades fundamentales, las autoridades marroquíes han restringido también los derechos de diversas organizaciones y actores. La organización Freedom House califica en su informe de 2013 a Marruecos (sin incluir el Sáhara Occidental) como un país «parcialmente libre», otorgándole una puntuación en materia de derechos políticos de un cinco; y un cuatro en libertades civiles.

Por lo que respecta a la libertad de reunión, las autoridades aplican el criterio, utilizado frecuentemente con carácter arbitrario, del orden público. La denegación para reuniones en lugares públicos es frecuente, no solo en el caso de movimientos considerados más extremos (como el de JyE o algunos movimientos amazig), sino también en relación a otras asociaciones.

La libertad de prensa, inaugurada a pequeñas dosis al final de la etapa de Hassan II, y considerada al inicio del reinado de Mohamed VI como uno de los hitos del nuevo periodo, debido a su potencial democrático, ha sido también vulnerada durante los últimos años. La asfixia económica de las publicaciones, ya sea directamente (a través de sanciones económicas), ya sea de forma más sutil (presionando a las empresas para que retiren una publicidad vital como fuente financiera para la prensa independiente) han sido herramientas utilizadas frecuentemente contra determinadas publicaciones. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció, en 2009, que desde el inicio del reinado de Mohamed VI el cómputo de años de las sentencias de cárcel dictadas contra periodistas ascendía a 25 y

las multas económicas a un total de dos millones de euros. Los casos de censura han continuado durante los últimos años. En relación al M20F, el caso más conocido ha sido el del joven rapero Mouad Belghouat, figura emblemática de dicho movimiento y autor de varios temas musicales de denuncia; y que fue condenado a un año de prisión y liberado tras pasar varios meses en la cárcel. La censura también se ha extendido a la cadena extranjera Al-Yazira (que no emite desde 2010) en Marruecos, así como a Internet (con el cierre de diversas páginas web gestionadas por islamistas y diversos procesos judiciales contra jóvenes internautas, entre otros casos).

El ámbito de los derechos humanos. Organizaciones que promueven reformas democráticas y avances

Las asociaciones de derechos humanos

Las asociaciones de derechos humanos han atravesado diversas etapas. Una primera durante los años setenta, se caracterizó por la desvinculación de los partidos políticos y el inicio de un trabajo articulado sobre los derechos humanos desde un referente universalista. La segunda generación, durante los ochenta, inició progresivamente su profesionalización. El colectivo de abogados desempeñó un papel importante en esta etapa. Durante la década de los noventa, la tercera generación de dicho movimiento se orientó más hacia la incidencia. La segunda mitad de esta década estuvo marcada también por el inicio de un importante ejercicio social de recuperación de la memoria histórica, a través de los testimonios de algunas víctimas de los «años de plomo», la publicación de algunas obras y las denuncias de las asociaciones (Feliu, 2004: 229-321).

Las principales asociaciones de derechos humanos han evolucionado también respecto a temas sensibles, como la defensa de presos islamistas o saharauis. A partir de los atentados de Casablanca de 2003, la AMDH asumió de forma activa la defensa de diversos miembros del islamismo radical, considerados por esta organización como presos políticos. En relación con los saharauis, su defensa ha sido objeto de mucha polémica entre dichas asociaciones. Con motivo del desmantelamiento del campamento Gdym Izik algunas asociaciones, como la AMDH, elaboraron un informe crítico con las fuerzas de seguridad marroquí.

La *Primavera Árabe* ha generado, a su vez, a juicio de algunos expertos, una nueva toma de conciencia política, especialmente por parte de los jóvenes. La primera organización de derechos humanos a nivel nacional, la AMDH, ha incrementado notablemente su apoyo desde 2011, a través de la incorporación de unos 2.800 nuevos miembros. Según sus representantes, este incremento de nuevos miembros tiene una relación directa con el M20F.

Por lo que respecta al movimiento amazig, las asociaciones de este ámbito tienen una amplia trayectoria de lucha por el reconocimiento de su identidad y derechos culturales. En el citado informe de 2012 de la AMDH, se señala la discriminación de la que son objeto los amazig, en el ámbito lingüístico, educativo, y de los medios de comunicación. Uno de los movimientos más emblemáticos, es el Movimiento por la Autonomía del Rif, que no tiene reconocimiento legal.

En cuanto a las asociaciones que desarrollan su trabajo en el Sáhara, si bien no han formado parte del trabajo de investigación relativo a este capítulo, hay numerosas entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y que reivindican el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. A partir de la llegada de Mohamed VI, algunas asociaciones marroquíes como la AMDH, la ANDC y el FVJ abrieron sede en el Sáhara. La sección local del FVJ fue disuelta en 2003, a raíz de los atentados de Casablanca, por considerar las autoridades que promovía la independencia del territorio.

Existen también muchas asociaciones, generalmente informales y alegales, creadas por saharauis autóctonos, que trabajan en este ámbito y que han ido ampliando su radio de acción progresivamente, siendo cada vez más reivindicativas, y convirtiéndose en la voz de los nacionalistas y los partidarios de la autodeterminación del territorio. Por otro lado, de forma creciente se ha desarrollado una implicación de saharauis del sur de Marruecos en el movimiento de contestación y en estas asociaciones, con la consiguiente ampliación del espacio de la protesta nacionalista (Barreñada, 2012). Las autoridades marroquíes han llevado a cabo una política de represión muy intensa en este territorio. La Misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO) es la única misión de paz de la ONU que no tiene un mandato para la vigilancia del respeto de los derechos humanos.

La Instancia Equidad y Reconciliación (IER), creada por Mohamed VI, con el fin de abordar las violaciones de derechos humanos

cometidas desde 1956 a 1999, es la gran referencia institucional en este ámbito. La iniciativa, a instancias de las asociaciones marroquíes vino precedida de un importante debate. Mientras la AMDH y el FVJ exigieron en todo momento el procesamiento de los responsables, la OMDH consideró que ello supondría un obstáculo insalvable en el proceso de transición democrática. Finalmente, la identificación de los responsables de dichas violaciones quedó excluida del mandato de la IER.

El proceso de revisión de la memoria histórica se hizo mediante audiencias públicas. El informe que emitió la IER, a principios de 2006, contribuyó a aclarar la escala y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos durante dicho período, si bien el relato que se realizó es únicamente el de las víctimas, sin que se haya incluido ninguna reseña sobre el discurso o la argumentación de quienes perpetraron dichas violaciones.²⁵ Otra de las críticas realizadas ha sido la marginación por parte de la IER de las violaciones de derechos humanos sufridas por la población saharauí, en la medida en que no se celebraron en el Sáhara audiencias públicas, y que el 25% de las demandas presentadas ante la IER procedían de este territorio. La IER estableció una serie de recomendaciones fundamentales, como la prohibición, vía constitucional, de cualquier interferencia por parte del Poder Ejecutivo en relación al judicial; la incorporación al sistema jurídico e institucional de garantías básicas sobre libertades y derechos fundamentales (incluida la primacía de la legislación internacional de derechos humanos ratificada por Marruecos) y la adopción de una estrategia nacional de lucha contra la impunidad.

En cuanto al apoyo internacional recibido por las OSC marroquíes en el ámbito de las reformas democráticas, la UE destaca como el mayor donante, a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Actualmente la Comisión Europea desarrolla un programa de apoyo a las OSC para su implicación en el seguimiento de las políticas públicas. Otros donantes relevantes en este ámbito son los Estados Unidos (con diversos programas de

25. Amnesty International, *Broken Promises, The Equity and Reconciliation Commission and its follow-up*, 2010.

apoyo por parte de los institutos vinculados al partido republicano y demócrata de EEUU); España (que actualmente está desarrollando en Marruecos el programa MASAR, sobre derechos humanos y gobernanza); y Alemania (a través también de las fundaciones de sus partidos políticos, como la Fundación Friedrich Ebert, que lleva varios años apoyando a la sociedad civil marroquí); además de algunos programas desplegados por Francia y Canadá, entre otros países. A raíz de la Primavera Árabe la Cooperación Suiza activó un programa para el apoyo de asociaciones en las regiones más marginadas.

Algunas de las áreas en que el apoyo internacional ha tenido un cierto impacto son las relativas al desarrollo de la sociedad civil y los derechos de la mujer, así como, en menor medida, los procesos electorales. Otros ámbitos en los que se han financiado desde el exterior programas de apoyo, como el de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción o el refuerzo de los partidos políticos, han tenido un menor impacto. En cuanto a los volúmenes de fondos asignados, algunas de las áreas que más han concentrado la atención de los donantes son las reformas de la administración (incluida la justicia) y la descentralización (Khakee, 2010).

Las asociaciones de mujeres

Por lo que se refiere a las asociaciones feministas, estas emergen sobre todo a partir de la Independencia y a través de mujeres vinculadas a las diferentes formaciones políticas. La idea que prevalecía en la cultura política emergente tras el logro de la independencia era que la igualdad sería el resultado del proceso de democratización y modernización de la sociedad marroquí, no siendo por tanto una cuestión prioritaria en la agenda de los partidos políticos.

Posteriormente, durante la década de los ochenta, se crearon las primeras organizaciones de mujeres, como entidades independientes de las secciones femeninas de los partidos políticos. En esta etapa destaca la creación de la Asociación Democrática de Mujeres Marroquíes (ADFM, 1985); la Unión de la Acción Femenina (UAF, 1987), la Asociación Marroquí de Derechos de las Mujeres (AMDF, 1992); y la Liga Democrática para los Derechos de la Mujer (1989). Entre sus objetivos destacan la movilización y sensibilización de la población sobre los derechos de la mujer, la integración de las mujeres al desarrollo y la lucha contra la violencia de género.

A partir de mediados de los noventa, surgió una tercera generación de asociaciones con un mayor componente de especialización en su trabajo por la emancipación de la mujer, y que comenzaron a abordar temáticas más específicas, como las reseñadas, de atención a madres solteras o el problema de las niñas empleadas de hogar. En el ámbito de los derechos políticos de la mujer, la ADFM creó en 1997 el Centro de Liderazgo Femenino (CLEF). Su objetivo es reforzar las capacidades de las mujeres para que puedan asumir puestos clave en el ámbito político, apoyándolas con un programa de formación especializado. En esta fase el movimiento asociativo de mujeres recibió un amplio apoyo de la comunidad internacional.

La cuestión hacia la cual orientan estas asociaciones su trabajo es la lucha contra la discriminación por razón de género. La aprobación del Código de Familia, y la consiguiente reforma del estatuto personal de la mujer (Moudawana), fue durante muchos años la gran reivindicación primordial del movimiento progresista de mujeres. Conforme al derecho islámico, el matrimonio constituye la piedra angular de la familia y, por extensión, de la sociedad islámica. Los derechos de la mujer en el seno de la familia son considerados, por tanto, una cuestión esencial de la identidad musulmana.

En cuanto a las asociaciones islamistas de mujeres, su discurso sobre las relaciones entre el hombre y la mujer está más enfocado hacia la complementariedad de roles que hacia la igualdad. Las organizaciones de mujeres islamistas, como la Organización por la Renovación de la Toma de Conciencia Femenina (ORCOFE), basan su discurso en la *sharía* como referente y fuente privilegiada para interpretar el alcance de los derechos de la mujer (Feliu, 2004: 321-379). Algunas asociaciones feministas consideran que las mujeres del PJD son más conservadoras en algunas cuestiones que las del movimiento JyE.

En 1998, se elaboró el referido PANIFD, fijando una serie de objetivos en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y la capacitación jurídica. Tras un intenso debate sobre los derechos de la mujer y de una extraordinaria movilización por parte de las asociaciones feministas, se aprobó en 2004 el nuevo Código de la Familia, que fue presentado por el rey como uno de los pilares sobre los que pretendía consolidar la transición democrática de su país. La competencia exclusiva de la reforma fue asumida por Mohamed VI, quien formuló el nuevo

texto legal a modo de otorgamiento, y como parte, a su vez, de una estrategia política de legitimación y modernización, en competencia con un movimiento islamista en alza.

El eje fundamental del Código de Familia es la igualdad de la mujer y el hombre en la dirección de los asuntos familiares, eliminándose, por tanto, la cláusula de obediencia por parte de la mujer. El Código recoge, además, innovaciones importantes como la sujeción a autorización judicial del repudio y condiciones taxativas para los casos de poligamia. Además, se eleva de 15 a 18 años la edad legal de la mujer para contraer matrimonio y se elimina la obligación de un tutor matrimonial para la misma.

El movimiento de mujeres ha desarrollado varias iniciativas históricas de gran relieve, como la red de apoyo al Plan de Acción Nacional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo (PANIFD, por su siglas en francés, 1999); la Primavera de la Igualdad (2001); y la Primavera de la Dignidad (que propugna una legislación que proteja a las mujeres contra la discriminación y la violencia). Otra red relevante es *Femme pour Femme*, que ha desempeñado su trabajo en el ámbito de los procesos electorales y de la capacitación de mujeres candidatas y concejalas.

Algunos de los logros de las asociaciones feministas han sido la aprobación del Código de la Nacionalidad, que permite a la mujer marroquí transmitir su nacionalidad de origen a sus hijos en los casos de matrimonios mixtos y la reforma del Código Penal, que ha introducido medidas de protección a las mujeres en caso de violencia de género. Otro ejemplo de buenas prácticas es el trabajo realizado por la ADFM con las mujeres *Soulaliyates*. Consiguiendo la aprobación de dos decretos del Ministerio del Interior, en los que se reconoce la igualdad de derechos del hombre y la mujer respecto a las tierras colectivas y su derecho a percibir por igual la correspondiente indemnización, en caso de expropiación. La ADFM estima que esta cuestión afecta a más de siete millones de mujeres en Marruecos.

Como en otros sectores, a partir del M20F han surgido diversas organizaciones de mujeres. Un ejemplo es la organización *Les femmes arrivent* (aLa3yalate jayate), creada por mujeres jóvenes del M20F a través de Facebook y con una dimensión nacional. Sus acciones y postulados están orientados a hacer frente a los islamistas. Otro movimiento que ha alcanzado cierta notoriedad

es el denominado *Egalité aujourd'hui avant demain* (Moussawat Lyoum 9bal Ghedda), compuesto por asociaciones feministas, de derechos humanos y otros actores, que proclama la igualdad entre sexos y trabaja por la promoción de los derechos de la mujer.²⁶ Otra nueva asociación creada, en 2011, por mujeres es el *International Connecting Group*., que trabaja por el refuerzo de capacidades y la promoción de las mujeres en puestos de responsabilidad profesional y en instancias políticas. Tienen un proyecto en colaboración con la universidad de Tánger en relación a un Máster sobre Género.

En el plano internacional, existen diversas iniciativas de mujeres como el colectivo *Maghreb Égalité* (que abarca toda la región del norte de África y Medio Oriente) y la coalición *Égalité Sans Réserve* (con la misma cobertura regional que la anterior). La Primavera Árabe ha generado, a su vez, diversas iniciativas regionales y ha incentivado el espacio de reflexión conjunto entre asociaciones de mujeres de diversas nacionalidades, que comparten inquietudes e ideas sobre acontecimientos en países vecinos como Túnez y Egipto.

Reivindicaciones y dinámicas de trabajo de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Algunos de los aspectos más relevantes en relación al nuevo escenario posterior a la *Primavera Árabe* marroquí, y vinculados con la sociedad civil, son los siguientes:

- La nueva Constitución de Marruecos ha abierto un gran espacio multidimensional, tanto a nivel institucional como de reconocimiento de derechos, cuyo desarrollo implica la creación de numerosos consejos consultivos (además del papel que desempeñan los que ya estaban creados) y comisiones, así como la aprobación de un buen número de leyes orgánicas.

Todo este entramado orgánico y jurídico está recabando la atención de muchas OSC, y su implicación en el marco de las reformas previstas. A lo largo de todo el territorio marroquí se han venido celebrando encuentros de debate y reflexión sobre el nuevo texto

26. Véase al respecto <http://www.babelmed.net/>

constitucional, y se han creado diversas plataformas e iniciativas.

Algunos de los derechos reconocidos en el nuevo texto cuya puesta en práctica están impulsando las OSC son el derecho de los ciudadanos a presentar mociones en materia legislativa, el derecho a presentar peticiones a los poderes públicos, y el derecho al acceso a la información. La Red Marroquí de Acceso a la Información trabaja activamente en este ámbito.

- Otra cuestión clave es el reconocimiento constitucional de la sociedad civil y del papel que está llamada a desempeñar en las políticas públicas. La Constitución declara que las asociaciones interesadas en los asuntos públicos y las ONG, contribuyen a la elaboración, aplicación y evaluación de las decisiones y proyectos de las instituciones y poderes públicos.

La llegada al gobierno del PJD no ha estado exenta de tensiones con el sector asociativo. En primer lugar, algunos responsables del gobierno criticaron a un conjunto de asociaciones (aportando un listado de 375 asociaciones, si bien concentrando sus críticas en una decena de ellas) que reciben financiación internacional, acusándolas de falta de transparencia. En su respuesta a dichas críticas, las OSC instaron al gobierno para que la transparencia se amplíe a la totalidad de las asociaciones y a las cuentas del estado, reseñando los circuitos opacos de financiación de algunas asociaciones, y criticando las prácticas clientelistas a la hora de acceder a los recursos estatales.

Este primer enfrentamiento entre el PJD y algunas de las asociaciones más relevantes en el ámbito de la promoción de reformas democráticas tuvo su continuación con motivo de la creación de la comisión nacional encargada del diálogo con la sociedad civil, a cargo del nuevo Ministerio de Relaciones con el Parlamento y la sociedad civil (cuyo titular es un miembro del PJD). Esta comisión tiene como finalidad articular la participación de la sociedad civil en el ámbito de las políticas públicas, conforme a la nueva Constitución.

La creación de esta comisión generó el rechazo de unas 400 asociaciones, que criticaron su composición, entendiendo que la misma obedecía a una estrategia de cooptación y control de la sociedad civil por parte del PJD. Estas asociaciones denunciaron la incorpo-

ración a dicha comisión de una serie de personas y expertos que no tienen ningún carácter representativo ni cualificación profesional; y criticaron de la exclusión de algunas organizaciones que son una referencia en el movimiento de los derechos humanos.

- Existe también un debate de fondo en la sociedad civil sobre la pertinencia de aprovechar por parte de las OSC los espacios institucionales establecidos en la nueva Constitución. Mientras que para muchas OSC y actores resulta incuestionable que la nueva etapa establecida abre múltiples oportunidades para avanzar en la senda democrática, otras son muy escépticas y rechazan esta opción de plano, debido a que las estructuras de poder permanecen inalteradas.

En líneas generales, aquellos que entienden que es preciso implicarse —entre los que se encuentran las asociaciones feministas, y otras OSC y actores— valoran el proceso democrático en Marruecos como un camino de largo recorrido, con avances y retrocesos, pero con una evolución claramente positiva. Por el contrario, quienes rechazan el entramado institucional controlado por Palacio —como el M20F, asociaciones como la AMDH, partidos de extrema izquierda y el movimiento JyE— consideran que la reforma constitucional, pese a aportar cambios más o menos significativos en diversos aspectos, no permite realizar progresos sustanciales, ni acometer sobre bases sólidas los grandes retos de Marruecos en el ámbito político, social, económico y cultural. Para estos, la capacidad de cooptación del *majzen* y la concentración de poderes por parte de Palacio lastran de raíz la posibilidad de cualquier avance significativo.

De forma más específica, el argumento jurídico de los detractores de dichas comisiones nacionales y consejos consultativos reside en la configuración que hace la nueva Constitución del doble referente —nacional e internacional/universal— como fuente de derecho y principio constitucional, establecido en el preámbulo de dicho texto. Por un lado, en este apartado se establece que Marruecos es un Estado Musulmán, que ha de preservar su identidad nacional; se reseña además su unidad nacional y su integridad territorial; y se reconocen los diversos componentes y afluentes que conforman la identidad marroquí. En relación a este referente nacional, se otorga la supremacía a la religión, junto con otros valores relativos al entendimiento entre

civilizaciones.²⁷ Por otro, el Reino de Marruecos se compromete a suscribir los principios, derechos y obligaciones recogidos en los tratados y convenios internacionales, reafirmando su vinculación con los derechos humanos en su concepción universal.

Para los referidos detractores, la primacía de la religión en el referente nacional resulta, por tanto, incompatible con la concepción universalista de los derechos humanos; e implica, en última instancia, que el monarca, en su condición de *Comendador de los Creyentes*, puede seguir recabando la competencia sobre cuestiones clave para el avance democrático y de los derechos humanos, y desactivar todas aquellas demandas que puedan afectar a sus prerrogativas soberanas.

- A nivel institucional, el caso más significativo sobre esta cuestión es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Conforme al artículo 161 de la actual Constitución esta instancia, definida como pluralista e independiente, debe desempeñar su trabajo respetando estrictamente los referentes nacionales y universales en el ámbito de su competencia. Mientras que, por ejemplo, las asociaciones feministas apoyan plenamente al CNDH, algunas OSC como, entre otras, la AMDH, entienden que no es una instancia válida de trabajo. Este organismo ha creado una serie de comisiones a nivel regional, en las que también están implicados representantes de las OSC. Las comisiones regionales están organizadas en torno a tres subcomisiones: protección de los derechos humanos; promoción de estos derechos; y reflexión sobre diversas cuestiones en este ámbito.
- A nivel regional la nueva Constitución establece la puesta en práctica de mecanismos participativos a nivel de los Consejos regionales y de las otras colectividades, para favorecer la implicación de la ciudadanía y de las asociaciones en la elaboración y seguimiento de los programas de desarrollo (art. 139).

27. La declaración de Marruecos como un Estado Musulmán —a diferencia de «país musulmán» como parece que figuraba en una primera versión del texto— ha sido criticada por diversos expertos y activistas de la sociedad civil, por entender que implica directamente que el Estado y sus instituciones tienen prerrogativas para imponer cuestiones religiosas al ciudadano.

La reforma de la Carta Comunal (2009) intentó poner en práctica un nuevo espacio de gobernanza, con una mayor presencia de la sociedad civil y la inserción del enfoque de género. Como en tantos otros ámbitos, las estructuras del *majzen* han provocado, en buena parte, la inoperatividad de dichos objetivos. Los presidentes de las comunas no han cumplido, por su parte, con su obligación de crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades.

- Otro de los frentes de reivindicación de la sociedad civil en la etapa actual es el relativo a la separación de poderes. Diversas organizaciones y colectivos trabajan en este ámbito, entre los que destaca el Colectivo para el Seguimiento de las Recomendaciones de la IER y el colectivo de abogados. La asociación de Abogados Marroquíes celebró en junio de 2013 su último congreso, y solicitó el establecimiento efectivo de una monarquía parlamentaria. Otra organización que trabaja en este ámbito es el Colectivo Marroquí de las Instancias de Derechos Humanos.
- Otra cuestión fundamental es la de la lucha contra la corrupción. Asociaciones como Transparency Maroc (TP) vienen realizando un trabajo muy importante, con un amplio apoyo internacional. A nivel nacional existe un Colectivo de lucha contra la corrupción, que agrupa a 52 asociaciones. A partir del M20F son muchas las organizaciones que abordan también puntualmente cuestiones relativas a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas de proyectos públicos. Un ejemplo relevante es el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TGV, por sus siglas en francés), que ha concitado la atención de diversas asociaciones y la creación, en 2012, de la plataforma Stop TGV.

Pese a algunos avances por parte del PJD como la publicación de las licencias otorgadas en el sector del transporte interurbano; de algunos procesamientos por asuntos de corrupción, TP considera que no existe todavía ninguna señal que evidencie la determinación del nuevo gobierno en este ámbito. Conforme al índice de 2012 publicado por la organización Transparencia Internacional, Marruecos se sitúa en la posición 88 (de un total de 174 países), con una puntuación de 37 sobre 100. A juicio de Transparency Maroc,

que denuncia además la impunidad existente, en Marruecos se ha producido en los últimos tiempos un estancamiento en la lucha contra la corrupción, tal y como además corroboran otros índices, como el publicado por el World Economic Forum.

- Por su parte, las asociaciones feministas, consideran que, por un lado, dicha reforma supone un gran avance mientras que, por otro, existen evidentes riesgos de regresión respecto a los logros obtenidos en el pasado, como consecuencia de la llegada al gobierno del PJD (considerado como un «enemigo tradicional»). Muchas de ellas están concentrado su trabajo en la elaboración de propuestas para la configuración de la Autoridad para la Paridad y la Lucha contra Todas las Formas de Discriminación, prevista en el nuevo texto constitucional.

Muchas de las asociaciones feministas han reorientado también sus estrategias a nivel interno, en consonancia con los retos actuales, como en el caso de la UAF o de la ADFM. Una de las cuestiones más importantes es la del relevo generacional, que no solo afecta a las asociaciones feministas. Algunas de las asociaciones feministas están realizando acciones específicas con jóvenes.

Las organizaciones de mujeres siguen, a su vez, trabajando en diversos ámbitos de gran trascendencia social, como la violencia de género, y abogando por la aprobación de una ley específica que aborde esta lacra social. Según una encuesta del Alto Comisariado del Plan, en 2009, un 62,8% de las mujeres sufrieron algún tipo de maltrato o vejación grave durante el año anterior a la encuesta, lo que afecta a 9,5 millones de mujeres entre 18 y 64 años. Los centros de escucha para mujeres víctimas de la violencia han sido un vector de trabajo determinante en la conformación del movimiento asociativo de mujeres.

Otro ámbito de trabajo sigue siendo el código de familia. Estas asociaciones advierten de la inaplicación de algunos preceptos del dicho Código por parte de los jueces. Según algunas asociaciones se percibe una regresión en este tema desde la llegada del PJD al gobierno. Uno de los ejemplos más relevantes es la autorización de matrimonios de mujeres menores de edad (que el código solo contempla en casos excepcionales); hasta el punto de que, según

el informe de la AMDH de 2012, un 92,3% de las solicitudes de matrimonio de menores fueron autorizadas por los jueces.

Relaciones de la sociedad civil con el *majzen*, las instituciones y los partidos políticos

Además de todo lo expuesto, cabe destacar una serie de aspectos clave que, en el contexto actual, cobran una especial relevancia y reflejan retos muy significativos de cara al futuro.

- Como se ha señalado, el *majzen* se ha caracterizado por su capacidad de cooptación y persuasión, en relación a todos aquellos actores cuya oposición es percibida como una amenaza. Esta estrategia de incorporación a instancias y cargos oficiales de personas relevantes de la sociedad civil y otros sectores se ha llevado a cabo en numerosos ámbitos; y es el mejor exponente de la complejidad de las relaciones entre el *majzen* y la sociedad civil, y la diversidad de pareceres por parte de acreditados activistas y militantes respecto a la mejor opción para generar avances en Marruecos. Uno de los casos más polémicos fue el nombramiento como presidente de la IER de una de las figuras más emblemáticas del movimiento de derechos humanos y cofundador del FVJ. Otro caso muy significativo fue la creación del PAM por parte del consejero real El Himma, quien consiguió la incorporación a esta formación de diversas figuras renombradas de la oposición al régimen, para sorpresa de muchos observadores y pese a la consabida capacidad de cooptación del *majzen*. Otro ejemplo también significativo es el de la actual CNDH, cuyo actual presidente y vicepresidente fueron militantes destacados del movimiento de los derechos humanos.
- Con la reforma constitucional, esta cuestión adquiere una gran relevancia, ya que está prevista la creación de numerosas instancias consultivas. Algunas ya existían, pero no se habían incorporado a la Constitución, como el CNDH, el Mediador y el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero. Diversos analistas han señalado que la creación de todo este entramado institucional tiene todos los visos de propiciar la cooptación de figuras críticas con el sistema.

- La trayectoria de este tipo de instituciones en el pasado no permite ser muy optimista. El debate sobre la implicación de las OSC en los organismos creados por Palacio y su colaboración con las estructuras estatales es complejo, ya que hay muchas formas de implicarse, participar e incidir por parte de las OSC, sin estar necesariamente «dentro» o «fuera» del sistema controlado por el régimen. El cual, por otra parte, ha venido instrumentalizando la implicación de las OSC para favorecer una imagen de pluralismo y transición hacia la democracia.

Existe igualmente el riesgo de que todas las OSC que están volcadas con la reforma constitucional concentren en exceso sus esfuerzos y recursos en esta cuestión, y desvíen su atención hacia procesos que no conducen a cambios sustanciales. Este tipo de dinámicas —que serán sin duda fomentadas por el *majzen*— permitirían, una vez más, desactivar las posturas más críticas con el régimen.

- La conformación de esta estrategia conjunta, que responda a un proyecto democrático común por parte de la sociedad civil, es determinante en la etapa actual. La experiencia de las OSC marroquíes constituye un valioso potencial en este sentido, siendo clave incorporar las lecciones aprendidas a lo largo de otras etapas, en las cuales las agendas particulares de cada organización o cada plataforma o red temática no siempre han contribuido a fortalecer esta vertiente.
- Las formas de incidencia y de oposición de la sociedad civil son muy variadas. Las OSC más experimentadas han desarrollado un amplio abanico de programas, acciones, campañas, y diferentes estrategias de incidencia. Los espacios de contestación y de incidencia son, en todo caso, plurales y muy diversos. Por otro lado, cada vez hay más acciones reivindicativas en la web. Los intentos de censura por parte del régimen han ido en paralelo a esta expansión.
- Por lo que respecta a las asociaciones feministas, estas son muy conscientes de que el monarca, en cuya figura se concentra el poder político y religioso, es el único referente con capacidad real para evitar una regresión de los derechos adquiridos por

ellas después de muchos años de esfuerzo y trabajo. Este cierre de filas en torno al rey —cuyas prerrogativas son de carácter absolutista— genera evidentes contradicciones a la hora de avanzar hacia un marco plenamente democrático, en el que la separación de poderes es determinante. La llegada al gobierno de los islamistas del PJD complica todavía más esta ecuación, convirtiéndola en un auténtico nudo gordiano.

- Otra cuestión sobre la que procede reflexionar a partir de la nueva etapa abierta con la reforma constitucional —y apuntada por diversos expertos desde hace años— es la «despolitización» de la gestión de los asuntos públicos. Las reformas en Marruecos han estado impulsadas básicamente por los consejeros y otros tecnócratas, y secundadas por las asociaciones; lo que ha supuesto la marginación de los partidos políticos y la administración pública, contribuyendo además al descrédito de la esfera política y de sus instituciones, incluido el parlamento (Hibou, 2012).
- En cuanto a los partidos políticos, la crítica de los mismos que realizan las OSC es unánime. La gran mayoría de partidos no tiene iniciativa. Es la sociedad civil la que ejerce realmente como actor de propuestas y cambio. Los partidos de extrema izquierda tienen un cierto arraigo en algunos ámbitos de la sociedad civil, pero no dejan de ser muy minoritarios. A partir del M20F algunos jóvenes se han interesado por determinadas formaciones, sobre todo las que pertenecen a la «izquierda no gubernamental». Sin embargo, la falta de estructuras por parte de todos los partidos para incentivar y promover a los jóvenes es un gran obstáculo para que estos puedan desarrollar a medio plazo una trayectoria profesional en el ámbito político.
- Por lo que respecta a los sindicatos, su nivel de representatividad es muy bajo y su dependencia de los partidos políticos muy considerable. Se estima que únicamente un 6% de los marroquíes está afiliado a algún sindicato. Su principal reto consiste en redefinir las relaciones con el estado y la sociedad, y adaptar su modelo de organización interna de forma más acorde con las nuevas formas de movilización social.

- Los retos actuales implican una reflexión en clave política y de justicia social redistributiva sobre cuestiones esenciales, como los servicios públicos o la fiscalidad. Estas cuestiones están directamente relacionadas con la desigual distribución de los recursos y el control por parte de las élites empresariales y de Palacio de amplias franjas de la economía marroquí.
- Las relaciones entre algunas OSC y el estado son también controvertidas en relación a la prestación de servicios sociales básicos, de carácter público, y a la percepción consiguiente de algunos ciudadanos y poblaciones locales en términos de rendición de cuentas. En algunos casos los ciudadanos perciben a las OSC como únicas responsables de la prestación de dichos servicios. Estas, a su vez, pueden convertirse en instrumento de legitimación de las políticas económicas estatales de liberalización de dichos servicios.
- El antiguo modelo de gestión y control de la sociedad por parte del *majzen*, basado en valores conservadores y de corte feudal, el autoritarismo patriarcal, el acaparamiento de rentas, la represión y la corrupción, tienen un margen cada vez más estrecho, debido a las mutaciones sociológicas, económicas, políticas y tecnológicas. La eficacia de dicho modelo parece cada vez más limitada para dar respuesta a las expectativas y demandas sociales en alza (Abdelmoumni, 2013).

Fracturas sociales

Como en toda sociedad compleja y plural, atravesada además por una vertiente religiosa que impregna y condiciona tanto la esfera pública como la privada, en Marruecos existen múltiples fracturas sociales, cuyo análisis excede el objetivo de este diagnóstico. Marruecos es además, como se ha señalado, un país en permanente cambio y evolución, y en el que las tensiones entre modernización y conservadurismo son patentes. A continuación se hace referencia a algunas de las principales fracturas sociales más significativas relacionadas con la sociedad civil:

- La fractura más importante de Marruecos, tanto desde un punto de vista de los derechos humanos como de cara a su futuro democrático y estabilidad es la relativa a las desigualdades sociales, y los ingentes retos de cohesión social existentes.
- En el ámbito de la sociedad civil la fractura más importante es la que divide a las fuerzas progresistas y modernizadoras de las fuerzas islamistas y conservadores. Este enfrentamiento se puso de manifiesto con motivo del PANIFD, y su gran escenificación tuvo lugar en las manifestaciones celebradas referidas de Casablanca y Rabat, en marzo de 2000. El Plan contó con la oposición no solo de los dos principales movimientos islamistas marroquíes —el PJD y el movimiento JyE— sino también del Ministerio de Asuntos Islámicos. Por parte del PJD se expresó una oposición sin paliativos a los preceptos del Plan. Sin embargo, el argumento reiterado por la portavoz de JyE, consistió en presentar su participación como de carácter estrictamente político (rechazando la tutoría del Banco Mundial), y criticó tanto la *Mudawana*, por su carácter restrictivo de la libertad de la mujer, como el régimen monárquico.
- Existe también un enfrentamiento directo entre las asociaciones de mujeres feministas e islamistas, con una clara tendencia hacia la radicalización en la etapa actual. Un ejemplo reciente de este enfrentamiento es el del Foro de Mujeres Parlamentarias (integrado por mujeres parlamentarias y ex parlamentarias), que en etapas anteriores había trabajado de forma conjunta en temas como la cuota de representación parlamentaria de las mujeres. Con motivo de la renovación del comité ejecutivo de dicho foro, las mujeres del PJD bloquearon su composición, cuya presidencia correspondía por turno a las mujeres del USFP. Según una dirigente feminista entrevistada, en la etapa actual las mujeres del PJD están más alineadas con las directrices de su partido.
- La fractura entre aquellos actores que propugnan la defensa de una modernización y adaptación al contexto contemporáneo de los textos religiosos y aquellos situados en posiciones más conservadoras, parece, igualmente, que va adquiriendo más peso en el contexto actual. Esta tensión, creciente en los

dos últimos años, se percibe a través de determinados casos, como el de un destacado miembro de la comunidad amazig y del IRCAM, Ahmed Assid, que realizó una propuesta de modernización del islam, en sintonía con los principios de los derechos humanos. A raíz de estas declaraciones, diversos salafistas le han considerado enemigo de Alá, declarando la licitud de su asesinato. Diversos imanes les secundaron, e incluso el jefe de gobierno criticó a dicho intelectual. Por el contrario, las declaraciones de Assid recibieron el respaldo de una sociedad civil que cada vez está más vigilante ante el posible retroceso de las libertades fundamentales. Un centenar de asociaciones emitió diversos comunicados y manifiestos.

- Frente a todas estas fracturas sociales, el rey se erige como símbolo de la unidad orgánica de la nación y único bastión contra la agenda conservadora de los islamistas, especialmente de los más extremistas. Además, el contexto regional —y, en particular, la agenda conservadora y autoritaria de los islamistas en Túnez y Egipto— juegan a favor.

Conclusiones

La *Primavera Árabe* irrumpió a principios de 2011 en Marruecos a través del Movimiento 20 de Febrero, alentado por los jóvenes. El M20F reclamó, entre otras cuestiones, un cambio sustancial de régimen. El M20F propició una amplia reforma constitucional y la convocatoria anticipada de elecciones a la Cámara de Representantes.

La nueva Constitución no altera la arquitectura institucional del poder ni las prerrogativas soberanas del monarca y sus consejeros, si bien abre un gran espacio multidimensional, cuyo desarrollo implica la creación de numerosos consejos consultivos y la aprobación de diversas leyes orgánicas. Todo este armazón jurídico e institucional tiene, sobre el papel, un potencial considerable para generar avances democráticos, siempre y cuando la sociedad civil pueda realmente incidir en las estructuras previstas, y que las altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, puedan actuar con profesionalidad e independencia, y en líneas con los tratados internacionales suscritos por Marruecos sobre derechos humanos.

Los grandes ejes de transformación democrática de Marruecos, siguen pendientes de aplicarse en la práctica. El proyecto de regionalización no tiene visos de articularse de forma coherente con los objetivos previstos. Respecto a la separación efectiva de poderes tampoco existe ningún indicio favorable. En relación a los derechos humanos se ha generado incluso una cierta regresión, durante el año 2012, a juicio de la AMDH, la mayor organización de Marruecos en este ámbito. Otras cuestiones determinantes, como la lucha contra la impunidad a todos los niveles y contra la corrupción, tampoco parecen ser prioritarias en la agenda del régimen ni del gobierno.

El nuevo escenario a resultas de las últimas elecciones presenta en primera línea de frente a dos actores del islam político, el rey —en su condición de jefe del Estado y jefe de la comunidad de creyentes— y los islamistas del PJD. El movimiento con mayor implantación social y capacidad de movilización, Justicia y Espiritualidad sigue al margen del sistema político. En el nuevo contexto cobra una especial relevancia la evolución del islam político y de sus diversos actores.

Los principales dirigentes del PJD aceptan la superioridad del monarca y su competencia en todas las decisiones estratégicas. Y al mismo tiempo son conscientes del alto precio político que hay en juego, en un contexto de aguda crisis social y económica. Las fisuras de la coalición gubernamental y los estrechos márgenes de actuación que permite Palacio y el *majzen* no facilitan la tarea.

En cuanto a la sociedad civil, una parte de ella se ha posicionado a favor de la nueva Constitución y otra en contra. Mientras las asociaciones feministas y otras OSC se están implicando en el nuevo marco institucional referido, otros actores (como el M20F, la AMDH y JyE) rechazan la reforma constitucional. El entramado institucional previsto implica evidentes riesgos de cooptación de figuras críticas de la sociedad civil por parte del *majzen*. Existe igualmente el riesgo de que todas las OSC que están volcadas con la reforma constitucional concentren en exceso sus esfuerzos y recursos en esta cuestión, desviando su atención hacia procesos que no conducen a cambios sustanciales.

Por otra parte, la llegada del PJD al gobierno ha supuesto un enfrentamiento inicial con diversas OSC de carácter progresista. Existe también un pulso, cada vez más importante, entre fuerzas

conservadoras y progresistas. Las asociaciones feministas están muy activas en la etapa actual, ya que consideran que la presencia del PJD en el gobierno es una clara amenaza para sus conquistas del pasado. La figura modernizadora del monarca cobra para ellas una especial importancia en el contexto posterior a la Primavera Árabe. A nivel regional, la evolución de las formaciones islamistas en los gobiernos de Túnez y Egipto, refuerza también la posición de Palacio, por su capacidad para contrarrestar las tendencias oscurantistas y la imposición de agendas conservadores por parte de los islamistas.

Todo lo expuesto tiene como telón de fondo un profundo descontento social. El modo de reivindicación y las expectativas tanto de la sociedad civil como de las poblaciones locales han ido evolucionando. Y al menos una parte de los jóvenes han adquirido una mayor conciencia política a partir del M20F. Sin embargo, el *majzen* no ha variado su respuesta ante las protestas sociales, que consiste principalmente en la represión.

El refuerzo de la capacidad de incidencia política de las OSC y la reflexión sobre las lecciones aprendidas derivadas de las relaciones de la sociedad civil con el poder (y sus tecnócratas) serán, por tanto, cuestiones clave. Al mismo tiempo, es determinante el progresivo fortalecimiento de los partidos políticos, completamente desacreditados y sin capacidad de iniciativa. La trayectoria de apoyos externos en el ámbito de las reformas democráticas por parte de OSC y organismos internacionales también ofrece enseñanzas relevantes, que deberían integrarse en el nuevo contexto.

Hay suficientes indicadores como para pensar que el modelo de gestión y control de la sociedad por parte del régimen tiene un margen cada vez más estrecho, debido a las mutaciones de todo orden que se han sucedido a lo largo de los últimos años. Pese a que el M20F tiene actualmente una escasa capacidad de movilización, seguirá siendo, durante mucho tiempo, el principal referente de las demandas sociales y políticas de una gran parte de la población. La estabilidad de Marruecos y de su élite dirigente estará cada vez más vinculada a la mejora de las condiciones de vida de la población y a los avances democráticos. En este sentido, Marruecos no constituye ninguna excepción.

Bibliografía

- ABDELMOUMNI, F. (2013), «Le Maroc et le Printemps Arabe», *Pouvoirs*, n.º 145, París.
- BARREÑADA, I. (2012), «Asociacionismo y cuestión nacional en el Sahara Occidental», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n.º 13, Universidad Autónoma de Madrid, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, julio-diciembre de 2012, Madrid.
- DAOUD, Z. (1996), *Feminisme et Politique au Maghreb*, Edif, París.
- (2007), *Maroc, Les années de plomb 1958-1988, chroniques d'une résistance*, Manucius, Houilles.
- FELIU, L. (2004), *El jardín secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos*, Los libros de la catarata, Madrid.
- GRACIET, C. y Laurent, E. (2012), *Le roi prédateur*, éditions du Seuil.
- HIBOU, B. (2011), «Le Mouvement du 20 Février, le Makhzen et l'Antipolitique, l'impensé de reformes au Maroc», *Sciences Po*, CNRS, CERI, París.
- KHAKKEE, A. (2010), «Assesing Democracy Assistance: Morocco», FRIDE, Madrid.
- LÓPEZ GARCÍA, B. (2012), «Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement», Institut Européen de la Méditerranée, Barcelona.
- (2000), «Marruecos en Trance», *Política Exterior*, Madrid.
- JIMENEZ ÁLVAREZ, M. (2013), «El Movimiento del 20 de Febrero: Tánger, en los bordes de la Primavera Árabe», *Anuari del conflicte social 2012*, Salvador Aguilar, Barcelona.
- POUVOIRS, Le Maroc, n.º 145, 2013, Seuil, París.
- RÉMY LEVEAU (1976), *Le Fellah, défenseur du Trône*, Presse de la Fondation nationale des sciences politique, París.
- TOZY, M. (1999), *Monarchie et Islam Politique au Maroc*, Presse de Sciences Po, París.
- ZEGHAL, M. (2005), *Les islamistes marocains, le défi à la monarchie*, Éditions La Découverte, París

II. LA SOCIEDAD CIVIL ARGELINA Y LA PRIMAVERA ÁRABE

Érika Cerrolaza*

Contexto y entorno de la sociedad civil

Contexto político

En 1962 Argelia accedió a su independencia tras una dura guerra de liberación nacional. Se instauró entonces un régimen en el que el Front de Libération National (FLN), como partido único, y el ejército constituían los dos principales poderes. Se impuso una economía socialista basada en la socialización de la agricultura, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del país a través de la inversión en industria pesada. El ejército y, sobre todo la Seguridad Militar (SM), se convirtió en el pilar central del sistema político y el FLN en una extensión política de este.¹

A mediados de los ochenta, la caída de los precios del petróleo unida a la explosión demográfica² provocaron el desmoronamiento del sistema económico forzando una reforma que generó cambios estructurales que profundizaron aún más en la pauperización de la sociedad. Las revueltas sociales que venían sucediéndose desde inicios de la década se recrudecieron ante el deterioro de las condiciones

*Doctoranda en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos.

1. El dualismo del régimen argelino se basa en su estructura caracterizada por la presencia de un representante formal del poder institucional y los verdaderos detentadores del poder, los militares. Este dualismo marca el sistema político actual en el que la balanza del reparto de poder entre el jefe de Estado y el ejército se inclina a favor de este último, en cuyo seno el DRS (Département de Renseignement et de Sécurité, antigua SM) ejerce, *de facto*, el poder.

2. A finales de los ochenta, Argelia había multiplicado su población de tal manera que en treinta años había pasado de 10 a 28 millones de habitantes, de los cuales el 70% tenía menos de 30 años.

de vida al tiempo que la fragmentación social, cultural y política se hizo aún mayor.

En octubre de 1988, Argelia conoció la mayor crisis social de su historia desde la independencia, la llamada «primavera argelina». La población se echó a la calle reivindicando trabajo digno, el derecho a una vivienda y mayores libertades. Después de duros enfrentamientos, el presidente Benyedid anunció el inicio de un proceso de apertura política que desembocó en la promulgación de una nueva Constitución que liberalizó el régimen, la instauración del multipartidismo y el reconocimiento de varias libertades básicas como la de expresión, prensa, reunión y asociación.

A finales de la década de los setenta, el islamismo comenzó a elaborar un proyecto político propiamente dicho a partir de los círculos de reflexión y movilización organizados en las mezquitas para eludir el control del Ministerio de Asuntos Religiosos. El movimiento se politizó, se diversificó y se radicalizó aunque todavía no existía una verdadera coordinación. Fue a principios de los ochenta cuando los actores islamistas se hicieron más visibles mediáticamente y empezaron a sucederse los enfrentamientos con el gobierno y la consiguiente represión. El Estado optó por fortalecer un islam oficial que hiciera de contrapeso a las tendencias contestatarias islamistas. Estas, sin embargo, continuaron con su estrategia de ampliación de su base social mediante la acción de redes de solidaridad social y caritativa, asociaciones religiosas y de mezquitas. A pesar de los esfuerzos del régimen por controlar a los actores islamistas, la capacidad de movilización de estos últimos no cesó de aumentar a medida que crecía el descontento social y las críticas al gobierno.

En este contexto, en 1990, la agrupación de fuerzas islamistas del Front Islamique du Salut (FIS) ganó las primeras elecciones municipales libres.³ El triunfo islamista se nutrió tanto de las consecuencias de la crisis económica y la pésima gestión del gobierno como del rechazo al modelo de Estado y de partido único, autoritario y corrupto

3. En este mismo año el general Mohamed Médiène (conocido como Tewfik) fue elegido jefe del Département de Renseignement et de Sécurité (DRS, antigua SM). Desde entonces hasta hoy el general detenta una parte importante del poder político a través del control de las actividades económicas (sector de los hidrocarburos) y la administración.

que representaba el FLN. Distintas categorías de población hicieron de la corriente islamista una fuerza de oposición lo suficientemente importante como para hacer tambalearse al régimen. Se sucedieron los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los islamistas y varios dirigentes del FIS fueron encarcelados, a pesar de lo cual lograron un 47,5% de los votos en la primera vuelta de las elecciones de 1991.

En enero de 1992 el ejército forzó la dimisión del presidente Benyedid y canceló la segunda vuelta de las elecciones ante la posibilidad de una victoria del FIS. Se decretó el estado de emergencia, la disolución del FIS y la detención de cientos de sus miembros y militantes. La represión gubernamental aceleró la radicalización de una parte del movimiento islamista que optó de forma cada vez más abierta por la violencia haciendo perder peso a los sectores islamistas más moderados. Meses después se desató la ola de violencia que azotó Argelia durante los siguientes diez años y que sumió al país en un conflicto entre los diversos grupos armados islamistas (AIS, GIA...) y el gobierno. La llamada «década negra» se saldó con más de 200.000 muertos, miles de desaparecidos y exiliados (Thieux, 2007).

En pleno desarrollo del conflicto, en 1995, se convocaron elecciones en un intento de recobrar la normalidad y recuperar la legitimidad perdida tras la interrupción del proceso democrático. El general Zerual gobernó desde entonces hasta su dimisión en 1998, años durante los cuales puso en marcha un plan de democratización restringida para calmar los ánimos tanto dentro como fuera del país y recuperar a la juventud, principal nicho de reclutamiento del movimiento integrista. Este proceso incluyó la «recuperación» de una parte del movimiento islamista a través de partidos como el *Mouvement de la société pour la paix* MSP (antiguo Hamas) o *Ennahda*⁴ para participar en el recién recuperado sistema democrático restringido por las limitaciones impuestas al Parlamento.⁵

4. Actualmente escindido en dos: *Ennahda* y *El Islah*.

5. Esta estrategia ha dado lugar a que partidos como *Ennahda* o *El Islah*, originariamente comprometidos en una lógica de oposición al régimen, estén hoy escasamente presentes tanto en el espacio político como en el contestatario. Lo mismo ocurre con personalidades como A. Djaballah (líder del actual *Front pour la Justice et le Développement*) o A. Menasra (a la cabeza del *Front du Changement*), que a pesar de reivindicarse como opositores son muy poco visibles en el espacio de contestación.

En 1997 se produjeron algunas de las mayores masacres de civiles de todo el conflicto. El papel de las fuerzas de seguridad en los asesinatos y sus vínculos con algunos de los grupos terroristas no han sido nunca aclarados por el gobierno (Kervyn y Gèze, 2004). Tras las elecciones legislativas de 1997, una coalición formada por el Rassemblement national démocratique (RND), partido creado unos meses antes por seguidores de Zerual, el FLN, y el islamista Mouvement de la société pour la paix (MSP) se hizo con el gobierno.

En 1999, Buteflika fue elegido presidente de la República con un ambicioso plan de reconciliación nacional recogido en la Ley de Concordia Civil aprobada ese mismo año y un decreto de amnistía para miles de presos islamistas sin implicación en delitos de sangre.

Aunque la elección de Buteflika contaba con el visto bueno de los generales, se han producido ciertas tensiones entre el presidente y las élites militares a lo largo de sus 14 años de mandato, sobre todo en lo que respecta a una hipotética reforma económica que amenazaría los intereses vitales de las élites cuyos miembros dirigen redes de patronazgo basadas en la distribución de privilegios tales como las licencias de importación y distribución.

Por otro lado Buteflika ha demostrado ser un hábil estratega en las relaciones exteriores como prueban la firma del Acuerdo de Asociación con la UE en 2001, o el afianzamiento de los vínculos con EEUU mediante la promoción del papel de Argelia como aliado en la lucha antiterrorista. Sin embargo, en lo que respecta a la política interior, el presidente no ha cumplido la mayoría de las promesas que había hecho : la alta tasa de desempleo juvenil y la fragilidad de las clases medias no cesan de aumentar lo que provoca que las condiciones de vida de la población sigan sufriendo un notable retroceso.

En abril de 2013, Buteflika, al final de su tercer mandato, fue ingresado en un hospital francés. El país, a la deriva en medio del silencio gubernamental desde entonces, se sumerge en la inestabilidad frente a la amenaza del fantasma del terrorismo islamista (ataque en In Amenas, delicada situación del norte de Malí, peligro del contagio de libio) y el aumento de las huelgas y protestas sociales, síntoma de un creciente descontento popular,

y las demandas de un cambio político (Alvarado: 2013). Mientras tanto la cúpula militar vive su propio proceso de transición del que no ha surgido aún ninguna alternativa clara para llenar el vacío de poder existente.

Contexto socioeconómico

Situación socioeconómica

Tras la llamada «década negra» y después del Plan de Ajuste Estructural propuesto por el FMI en 1994, Argelia ha atravesado un notable proceso de estabilización macroeconómica que ha conseguido reducir drásticamente la deuda externa que llegó a representar el 82% de su PIB.

En la primera década del siglo XXI, el aumento de la producción del gas, unido a una buena disciplina monetaria, han hecho crecer las reservas de divisas permitiendo la financiación de un ambicioso plan de infraestructuras públicas y de construcción de vivienda.⁶ El crecimiento del PIB continúa la tendencia alcista de los dos últimos años gracias al papel de la construcción y las obras públicas.

Sin embargo, y pese a la mejora sustancial de los índices macroeconómicos y el superávit de su balanza comercial, las reformas a nivel estructural siguen retrasadas como muestra el grave déficit de las instituciones argelinas en materia de transparencia⁷ y las dificultades de la administración a la hora de implementar las reformas jurídicas.

Por otro lado, el aumento del déficit presupuestario es consecuencia de las políticas fiscales iniciadas en 2011 para apaciguar la situación social y que han conducido a un mayor gasto público para satisfacer la fuerte demanda social en términos de pérdida del poder adquisitivo (aumento de las subvenciones a los productos básicos como el azúcar y los cereales), acceso al empleo (creación de empleo

6. Programa de Apoyo al Crecimiento (1999-2004), Programa de Complementario Apoyo al Crecimiento (2005-2009) y nuevo Plan Quinquenal de Inversiones Pública (2010).

7. El Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparency International en 2012 situaba a Argelia en el puesto 105 de 176 países (donde 0=poco corrupto y 100=muy corrupto). Véase <http://www.transparency.org/>.

público, subida de salarios, subvenciones para la creación de microempresas...) y acceso a la vivienda (aumento de la construcción de viviendas sociales).

La situación económica sigue siendo frágil a pesar de los ingresos de los hidrocarburos. Persisten varios problemas: una escasa diversificación de la actividad económica, la magra inversión extranjera, un alto nivel de desempleo y un gran volumen de importaciones (las exportaciones, al margen de los hidrocarburos siguen siendo residuales, principalmente de productos agroalimentarios).

La economía argelina no solo se caracteriza por ser casi totalmente dependiente de los hidrocarburos, también por el dominio de un sector público que deja poco espacio para la iniciativa privada.

Se estima, globalmente, que la situación socioeconómica argelina es mejor que la de sus vecinos gracias a la ausencia de pobreza extrema, una educación primaria universalizada y unos niveles medios en materia de salud, saneamiento y acceso al agua potable que sitúan al país en un nivel medio de desarrollo según los baremos del Índice de Desarrollo Humano del PNUD.⁸ Sin embargo estos datos no reflejan el aumento de las desigualdades económicas y regionales.

Uno de los principales problemas en Argelia, responsable de gran parte del malestar social que vive la población, es el paro. Las cifras oficiales lo sitúan en torno al 9,7% aunque otras fuentes estiman que debe estar en torno al 25% (ICEX, 2011). Frente a este problema, que lastra fuertemente el desarrollo del país y que genera una gran inestabilidad social, el gobierno ha puesto en marcha varios programas destinados a la inserción laboral de los jóvenes. Estos consisten en la concesión de préstamos sin intereses para el desarrollo de proyectos productivos la mayoría de los cuales han fracasado estrepitosamente debido a la falta de información, formación y seguimiento de los jóvenes emprendedores.

8. Argelia tenía un IDH de 0,713 en 2012, siguiendo un constante y paulatino progreso en la mejora de sus índices de desarrollo que, en cualquier caso, la sitúan por encima del IDH medio de los demás estados árabes (0,652) y del resto del mundo (0,694). Consultado el 25/2/2013 en <http://hdr.undp.org/es/>.

La crisis de la vivienda es otra de las cuestiones que moviliza de forma recurrente a la población en forma de protestas. El altísimo precio de la vivienda en Argelia debido a la especulación provoca que la mayoría de la población tenga que recurrir a las viviendas sociales para poder disponer de un alojamiento (Rolnik: 2011) La falta de transparencia y el clientelismo en el sistema de atribución de estas viviendas provocan constantes denuncias y revueltas. Esta situación aboca a muchas familias a vivir hacinadas en alojamientos que carecen de las condiciones de habitabilidad mientras el 14% de las viviendas sociales están vacías. La Relatora Especial de las NNUU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada señaló en 2011 la marginación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas de vivienda como uno de los motivos de su fracaso (Rolnik: 2011).

A esta crisis se suma la degradación del entorno urbano como espacio de convivencia. Una deficiente planificación urbanística ha convertido las ciudades argelinas en espacios cada vez más hostiles. La ausencia de espacios comunes que permitan el desarrollo de la cultura y la comunicación y que son elementos fundamentales para promover la cohesión social, hacen de los centros urbanos argelinos lugares inhóspitos y alienantes para la población.

La mala calidad de los servicios públicos, en especial de la educación y la sanidad es también una fuente constante de queja por parte de una ciudadanía que se siente abandonada por el Estado. Este sentimiento de exclusión ahonda la desafección por parte de la población, actitud que se refleja en el bajo índice de participación en las elecciones, como muestran los datos de las legislativas de 2012 en las que apenas participó un 38% sobre el número total de electores inscritos (Bustos: 2012).

Por último, la situación de la juventud, que representa el 70% de la población argelina, es uno de los elementos más preocupantes. Como consecuencia del desarrollo del país se ha creado una juventud urbana e instruida que es más consciente que nunca del deterioro de la situación socio-económica y de la imposibilidad de incorporarse a la vida social y económica debido a unas políticas públicas que no les permiten afirmarse como actores sociales. La falta de expectativas provoca que los jóvenes tengan una percepción cada vez más degradada de su papel en la sociedad. A la frustración

de saberse sin futuro se suman la pérdida de referentes identitarios, el fracaso escolar, unos índices de paro superiores al 23%⁹ (en 2010 el 73 % de los parados eran jóvenes menores de 30 años, y el 21,5% tenían entre 16 y 24 años) (Lakhdar, 2012) así como la ausencia de una oferta cultural y de ocio en unos espacios urbanos que impiden la participación en la vida de la ciudad. A este conjunto de elementos se une la *hogra*, concepto que resume la actitud de desprecio de las autoridades argelinas respecto a la población y la humillación e injusticia a la que se sienten particularmente sometidos los jóvenes. Para escapar de la *hogra* y la exclusión a la que los aboca, surgen los *harraga*, «los que queman», los jóvenes argelinos que emigran a centenares cada año de forma clandestina hacia Europa jugándose la vida para cruzar el Mediterráneo. Todos estos factores, unidos a las desgarradoras consecuencias sociales de la «década negra», han contribuido a aumentar el desapego y el repliegue de los jóvenes sobre sí mismos.

Protestas y revueltas

A principios de 2011 se produce un aumento de las revueltas y disturbios sociales sin precedentes en Argelia desde finales de los ochenta. Hay que señalar, sin embargo, que este tipo de protestas populares no son nuevas, y que con mayor o menor intensidad son parte del paisaje social argelino desde principios del siglo XXI. Se trata de conflictos y motines populares espontáneos, sin portavoces ni estrategias claras y generalmente violentos que pueden afectar a un barrio, una ciudad, un colectivo o incluso a una región entera (Cabilia, 2001, M'zab 2004).

Sus protagonistas enarbolan reivindicaciones principalmente socio económicas relacionadas con la degradación de las condiciones de vida y el abandono del gobierno de sus responsabilidades para con la ciudadanía. El grueso de estas dinámicas de protesta se concentra en el norte, sobre todo en Argel, la zona de Orán y

9. Los datos oficiales lo sitúan en torno al 10% aunque otras fuentes citan cifras entre el 20 y el 25%. (El FMI estimaba el paro juvenil en un 21% en 2012. Ver: «Algérie: grève de la faim de chômeurs» publicado en *Le Figaro* el 5 de enero de 2012.

Cabilia, y se basan en cuestiones como el acceso a la vivienda, los cortes de electricidad, la mala situación de los servicios públicos y el comercio informal (y en 2013 particularmente en el acceso al trabajo).

En los últimos años estos actos de contestación se han hecho cada vez más frecuentes como ilustra el hecho de que en 2010 se contabilizaron más de 10.000 en todo el país (Chibani, 2011). La novedad en 2011 es que al aumento de este tipo de acciones se unió una intensificación de las protestas protagonizadas por sectores socio profesionales que demandan mejoras laborales a través de huelgas y otros actos de denuncia.

La situación del sur

Desde hace algo más de dos años hay un aumento importante de los movimientos de protesta de carácter socioeconómico en una región que tradicionalmente se había mantenido al margen de las revueltas. Las principales movilizaciones provienen de parados y trabajadores precarios así como de los trabajadores de las compañías multinacionales, además de las huelgas y protestas de distintos sectores profesionales que tienen lugar en todo el país y que movilizan también a los trabajadores del sur.

El caso del Comité National pour La Défense des Droits des Chômeurs (CNDDC) es particularmente revelador de las nuevas dinámicas sociales en esta región. El colectivo de parados ha logrado en apenas un año organizar un movimiento pacífico que canaliza muchas de las principales frustraciones de los jóvenes argelinos y que en el sur se dan cita con mayor crudeza. El movimiento nace de la situación de marginación de un sur rico en petróleo, explotado por las grandes multinacionales y Sonatrach,¹⁰ pero subdesarrollado y olvidado por el gobierno. El problema del paro juvenil, que condena a la frustración y la pobreza a los jóvenes de la región, se convierte en el eje canalizador de un proceso de maduración social a través del cual la población ha consolidado la conciencia

10. Sonatrach o la Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a. es la empresa pública argelina encargada de la explotación de los hidrocarburos del país.

de la brecha cada vez mayor que separa al norte y el sur del país. El aumento de unas desigualdades socioeconómicas inaceptables y la pésima redistribución de las riquezas son otros de los elementos que ahondan en el malestar del sur. En este contexto el impacto social de las revueltas árabes en Túnez y Egipto ha contribuido, sin duda, a despertar la movilización al demostrar que las poblaciones árabes no están condenadas al inmovilismo y que, después de todo, el cambio es posible.

Esta intensificación de los movimientos de protesta en el sur se produce en una coyuntura bastante propicia, la de la proximidad de las elecciones presidenciales de 2014. En este contexto, el gobierno es más favorable a la negociación ante la necesidad de mantener un sur estable no solo como balance sino como proyecto para 2014. Las poblaciones del sur exigen hoy una mejor distribución de la renta a cambio de su apoyo político al gobierno. Para preservar el equilibrio político en Argel hay que mantenerlo en el sur, de ahí las medidas que ya se están adoptando para mejorar la situación de la región. Estas comprenden la financiación de proyectos agrícolas para jóvenes, la puesta en marcha de programas de inserción socio laboral y de formación, la concesión de microcréditos, la promoción de la contratación de jóvenes del sur y el anuncio de una mayor transparencia en las convocatorias públicas de empleo.

Hay que destacar que estas medidas se han decidido de forma unilateral sin diálogo social alguno y que no han tenido aún un impacto en la desactivación de los movimientos de protesta. Lo que parece probable es que la satisfacción, aunque sea parcial, de ciertas reivindicaciones en el sur conducirá a un aumento de las demandas en otras regiones. Queda por ver si los actores de estas protestas lograrán construir un movimiento que trascienda los límites regionales y que pueda contribuir a la emergencia de una contestación más unitaria.

¿La excepción argelina? Elementos que frenan la emergencia de un movimiento de contestación en Argelia

A pesar de los movimientos de protesta que durante la primera mitad de 2011 sacudieron Argelia con mayor intensidad de lo habitual, el país no se sumó a la ola de cambio político regional. Las causas de

esta ausencia de una contestación de envergadura se explican por la particularidad de una serie de elementos característicos del sistema político argelino y de su realidad social.

El sistema político argelino

Uno de los principales factores que frenan la emergencia de un movimiento de contestación en Argelia es el propio sistema político. Este sistema presenta una serie de características que lo hacen muy resistente a los cambios (Dris Aït Hamadouche y Dris, 2012) asegurando su permanencia en el tiempo a pesar de la pérdida de legitimidad de sus élites debido a la corrupción, la falta de relevo generacional y al deterioro de la situación socioeconómica.

La primera de estas características es su naturaleza híbrida. El hecho de que el régimen argelino no constituya ni un sistema autoritario absoluto ni una democracia¹¹ ha permitido hasta ahora un margen de acción bastante amplio tanto al propio régimen como a los actores de la oposición. Un margen de maniobra que, por otro lado, impide la radicalización de una oposición que disfruta, al menos nominalmente, de ciertas libertades.

Su carácter colegial le ha facilitado resistir a múltiples amenazas, entre ellas, una sangrienta y larga guerra civil. El régimen argelino está constituido de distintos elementos, no es un poder monolítico. Esto implica que el debilitamiento o la caída de uno de ellos no suponga un peligro para todo el sistema. Esta característica constituye tanto una fortaleza como una debilidad porque implica no solo una ausencia de coherencia y una incapacidad de previsión en el medio y largo plazo, también que el régimen esté sujeto a tensiones y disensiones internas.

Por otro lado, el hecho de que no sea un régimen presidencialista hace que su desmantelamiento no dependa, como en el caso de Túnez y Egipto, del derrocamiento de su presidente. El régimen argelino se apoya en un complejo aparato político en el que el sector militar, en particular los servicios de inteligencia (Département du

11. El Democracy Index del Economist Intelligence Unit's sitúa a Argelia en el puesto 125 de un total de 167 países según su nivel de democratización clasificándolo como «autoritario». Véase <http://country.eiu.com/Algeria>.

Renseignement et de la Sécurité), ocupan un lugar preponderante y en cuyo seno existen a su vez distintos grupos de poder.

El régimen argelino es además un régimen rentista en el que aunque la renta está mal distribuida esta es ampliamente repartida. Los últimos escándalos muestran que la corrupción alcanza unas cotas catastróficas pero aún así no se trata de un régimen político predador, por el contrario, la importancia de las prestaciones sociales es cada vez mayor como muestra el aumento de subvenciones, ayudas directas a los jóvenes, programas de inserción económica y laboral, créditos sin intereses, la cancelación regular de deudas a las empresas... La situación financiera privilegiada de Argelia permite al régimen comprar la paz social a través de distintas políticas de compensación económica y social impidiendo que la oposición pueda tener una base social para organizar un movimiento de contestación.

La fragmentación social

Los diez años de violencia sufridos por la población argelina y la gestión del conflicto por parte de las autoridades no solo han debilitado profundamente los vínculos sociales, también han provocado una actitud de desconfianza y rechazo generalizados hacia lo político.

Para comprender la fragmentación social que impide la cristalización de las distintas protestas en un amplio movimiento de contestación política hay que entender la importancia de dos elementos: la memoria social del pueblo argelino (una memoria que comprende la guerra de liberación, el proceso de construcción de la nación-estado independiente y la década del terrorismo) y las divisiones generacionales.

Por otro lado, la crisis identitaria provocada por las altas tasas de desempleo, el éxodo rural y el fracaso del modelo etno-religioso de pertenencia a la nación no han hecho sino ahondar en la fractura social.

Impacto de las Primaveras Árabes en Argelia

Aunque haya sido relativo y más evidente respecto al poder político que a la sociedad civil, las Primaveras Árabes sí han tenido un impacto en Argelia.

La primera respuesta del régimen ante los acontecimientos de 2011 fue la de aumentar las subvenciones de ciertos productos bási-

cos como el azúcar y el aceite, seguida del levantamiento del estado de emergencia, la subida de un 20% de los salarios y, a finales de año, un conjunto de reformas de carácter más bien jurídico que político que se vendieron como una apertura del régimen. Este paquete de medidas legales incluye la nueva ley de asociaciones, la ley de información o la ley de partidos políticos, entre otras. Algunas medidas de carácter económico fueron la subida de los salarios y las pensiones, o el aumento de la partida destinada a las prestaciones sociales (que en 2011 representó un 16% del PIB) (CNES, 2011: 7).

Impacto de las Primaveras Árabes en la sociedad argelina

A lo largo de la primera mitad de 2011 nacieron distintas iniciativas para poner en marcha un movimiento que reorientase el descontento popular y articulase una estrategia de oposición real.¹²

Así, después de una primera eclosión de iniciativas, reflexiones, llamamientos y acciones desorganizadas, el caótico conjunto de acciones contestatarias protagonizadas por la sociedad civil se apagó progresivamente a lo largo de 2011. Las OSC han continuado desde entonces trabajando en un clima de preocupación ante la aprobación de una serie de leyes con tintes liberticidas (REMDH, 2012) frente a las que no han logrado tampoco estructurar un movimiento de denuncia.

Por otro lado, la deriva del proceso de transición que viven países como Túnez y Egipto no ha hecho sino recordar a la sociedad civil argelina el sentimiento de miedo ante el caos y la violencia¹³ que derivaron de su propia «primavera» democrática en 1988. Elementos como la proximidad histórica de la «década negra», la huella indeleble de ese período en el imaginario colectivo y el hecho de que el terrorismo no haya desaparecido todavía, recuerdan a la

12. El mejor ejemplo de ello fue la Coordination National pour un Changement Democratique (CNCD), de la que se hablará más adelante. Pero además de la CNCD cabe mencionar también el Manifeste pour les Droits et les Libertés (MDL), el Front du Changement National (FCN) o la Alliance Nationale pour le Changement (ANC), como ejemplo de las iniciativas conjuntas nacidas a lo largo de 2011, ninguna de las cuales logró cristalizar

13. MacCallister apunta un análisis complementario en el que «una combinación de cansancio, decepción y cinismo definen la relación de Argelia con el cambio político en el marco de la Primavera Árabe» a partir de los acontecimientos de 1988 (MacCallister, 2013).

población argelina la herencia de aquella revolución abortada. A todo ello se une la idea de que la situación en los países que han vivido las Primaveras Árabes no es ahora mismo mejor, sino que, incluso, ha empeorado. Esta percepción constituye una razón más para alimentar la desconfianza argelina respecto a un posible cambio político que pudiera desembocar en un nuevo conflicto interno. En este sentido, la sociedad civil argelina ve en el caso de estos países más una amenaza que una oportunidad y tiende a replegarse sobre sí misma. Una oportunidad que el régimen argelino no ha desaprovechado para capitalizar el miedo al caos y la violencia como la mejor coartada para justificar su permanencia.

Por último, la forma en la que los occidentales han gestionado las Primaveras Árabes constituye un argumento más para la población y la sociedad civil argelinas para rechazar una movilización social en esa línea. La posibilidad de una injerencia extranjera como la de la intervención de la OTAN en Libia, el apoyo a la monarquía de Bahrein, o la gestión de la situación en Siria en un país extremadamente celoso de su autonomía después de 132 años de colonización extranjera, son, por sí solos, motivos que frenan la emergencia de un movimiento de contestación en Argelia.

Principales condicionantes externos que afectan al trabajo de la sociedad civil argelina

Marco jurídico

Una de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la sociedad civil en Argelia son las restricciones impuestas al desarrollo de sus actividades tanto por el marco jurídico como por la práctica administrativa.

Respecto al marco jurídico, la promulgación de la Ley Orgánica 12-06 relativa a las asociaciones ha supuesto un claro retroceso respecto a la ley anterior. Entre otras disposiciones, la nueva ley reinstituye la autorización administrativa frente al sistema declarativo anterior y endurece los requisitos para el reconocimiento legal de una asociación. La ley impone también importantes restricciones a la financiación externa.

Otras disposiciones incluyen la limitación de la cooperación con organizaciones extranjeras, la concesión de amplias libertades al gobierno para ordenar la disolución de las asociaciones y la prohibición

de las relaciones institucionales o estructurales entre asociaciones y partidos políticos. La ley autoriza a trabajar a las asociaciones en un cierto número de sectores pero establece que una asociación pueda ser disuelta si sus actividades interfieren con los intereses nacionales. Además impone severas penas de prisión para los miembros de aquellas asociaciones no autorizadas.

La ley también obliga a las asociaciones a solicitar la autorización del Ministerio del Interior para unirse a una federación u organización internacional lo que pone en peligro el mantenimiento y la ampliación de las relaciones de las OSC argelinas con sus socias en otros países. Las organizaciones extranjeras están autorizadas a trabajar en Argelia siempre y cuando no se considere que sus actividades interfieren con los asuntos del país anfitrión.

La cuestión de la restricción de la financiación extranjera es especialmente delicada ya que cierra la puerta a una fuente de financiación extremadamente importante para muchas asociaciones que no reciben subvenciones de la administración argelina por no situarse en su «esfera de confianza». En ausencia de la posibilidad de recibir financiación pública, la financiación privada nacional es una alternativa apenas viable en un país de economía rentista en el que sector privado está poco desarrollado y donde no existe la tradición del patrocinio.

En cuanto al régimen de constitución de un sindicato, este está regido por la Ley 90-14 y se basa en la presentación de un dossier de solicitud y la entrega de un resguardo por parte de la autoridad competente. En la práctica la entrega de este resguardo funciona como un tipo de consentimiento administrativo por lo que la no recepción del mismo implica un rechazo del dossier de solicitud. Esta práctica constituye una clara violación tanto de la propia ley, que establece que solo una instancia jurídica puede pronunciarse sobre la no conformidad con la ley de un proyecto de creación de un sindicato, como de la Convención 87 de la OIT ratificada por Argelia. Desde mediados de los años noventa numerosos intentos de creación de distintas confederaciones sindicales han sido rechazados por esta vía por la administración.¹⁴

14. Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la Formation (SATEF) en 1994, Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) en 2000, etc.

Otra serie de amenazas para el trabajo de las OSC son las que se refieren a la libertad de reunión y expresión cuyo ejercicio está limitado por importantes restricciones. La libertad de expresión, por ejemplo, está limitada por la acusación de difamación, un delito recogido en el Código Penal. Asimismo, la resolución de aplicación de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2006 criminaliza la crítica a la actuación de las fuerzas de seguridad durante los acontecimientos de la «década negra»¹⁵ (CFDA, 2013: 60).

La Ley 12-05 sobre la información restringe el ejercicio de la libertad de expresión exclusivamente a las asociaciones autorizadas al tiempo que limita la libertad de informar (tanto de los medios de comunicación como de las OSC) al respeto de diversas condiciones, entre ellas algunas tan vagas como la identidad nacional y los valores culturales de la sociedad, los intereses económicos del país o las misiones y obligaciones del servicio público (art. 2). Las publicaciones deben ser además aprobadas previamente por un órgano regulador.

El derecho de reunión en la vía pública sigue estando restringido en Argel a pesar de la anulación del estado de emergencia y, *de facto*, en toda Argelia. Según los artículos 4 a 6 de la Ley 91-19, la celebración de reuniones públicas está sometida a un régimen declarativo ante la autoridad administrativa que puede prohibir la organización de una reunión pública si esta supone un peligro para el orden público (art. 6bis). Por otro lado, se produce un uso desproporcionado de las medidas coercitivas para impedir y disolver las concentraciones en la vía pública mediante la dispersión violenta de las manifestaciones, el bloqueo de los accesos a la vía pública y la detención de los manifestantes.

Dificultades de financiación

El sistema de financiación pública de las asociaciones en Argelia no está formalizado. Diferentes instituciones estatales poseen herramientas para financiar a las asociaciones como son las convocatorias de financiación de proyectos del Ministerio de la Juventud y el Deporte, los programas de apoyo a las asociaciones del Ministerio de la Solidaridad

15. Artículo 46, Ordonnance n.º 06-01.

Nacional, las subvenciones de las *wilayas* a través de la Direcciones regionales de la Juventud, la Salud y la Acción Social y las subvenciones municipales. El sistema de atribución actual está basado en lealtades políticas por lo que no solo no se enmarca en la estrategia de desarrollo del país, sino que se inscribe en un sistema clientelar que prima el grado de proximidad de la asociación al régimen penalizando a aquellas críticas con el sistema político. Esta falta de transparencia, de continuidad y de estrategia en la atribución de financiación hace aún más precario el trabajo de las asociaciones.

En el caso de los sindicatos, el artículo 49 de la Ley 90-14 establece que los más representativos a nivel nacional pueden beneficiarse de las subvenciones estatales mientras que el artículo 48 prevé que el empleador ponga a la disposición del sindicato los medios necesarios para el desarrollo de sus reuniones. Frente a esto, la mayoría de los sindicatos autónomos no han recibido nunca una subvención estatal (caso del SNAPAP y del Syndicat national du personnel de la santé —SNPS—) ni disponen de un lugar para celebrar sus reuniones en las centrales de trabajo. Sus sedes son alquiladas y en muy pocos casos cedidas por las administraciones, de hecho, la mayoría de las secciones regionales carecen de local.

No existen beneficios fiscales directos o indirectos ni exenciones de impuestos por utilidad pública para las organizaciones de la sociedad civil.

Falta de recursos

En cuanto a los recursos materiales, esta carencia se refiere sobre todo a la falta de un local o de los medios para tener uno. La mayoría de las OSC carecen de local propio, algunas lo alquilan, otras disfrutan de locales cedidos por las administraciones públicas y muchas se reúnen en casa de algún miembro. Esta ausencia de una sede estable dificulta tanto el trabajo de la OSC como la propia gestión de la entidad ya que no existe un lugar para guardar la documentación. Esta situación condena a la OSC a trabajar en la precariedad y la imprevisión.

La falta de recursos también afecta a los recursos humanos de la asociación, tanto en términos de los miembros como del personal contratado. La mayoría de las asociaciones funcionan a través de la base asociativa, gracias al trabajo de los miembros fundadores, de los voluntarios y sus redes sociales.

Falta de reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad

En relación con el descrédito de su labor social, la falta de reconocimiento de las OSC es debida también en parte a unas expectativas irreales respecto a la función de los actores de la sociedad civil. La aplicación de los Planes de Ajuste Estructural en los años noventa trajo consigo un deterioro de las condiciones de vida de la población y un progresivo aumento de las desigualdades que se vieron agravados por el abandono de varias políticas sociales. La sociedad y el régimen esperaban que la sociedad civil asumiese la ejecución de los programas de protección social que antes había asegurado el Estado. Se espera que la sociedad civil sea capaz de responder a las necesidades de los grupos más desfavorecidos y vulnerables, entre ellos mujeres y jóvenes, y que sea además mediadora y evitadora de conflictos pero sin apenas dotarla de medios ni reconocer su trabajo.

Represión

Las prácticas represivas del Estado contra las OSC que se sitúan en los escasos espacios de contestación existentes incluyen la prohibición de constitución de asociaciones y sindicatos, de realización de actividades, la restricción del derecho de reunión en la vía pública, detenciones arbitrarias, apertura de procesos judiciales contra los militantes asociativos y acoso.

Una estrategia consiste en controlar una o dos OSC en un sector determinado para que hagan sombra a las demás y muestren a la población que hay otros discursos. Otros recursos para dificultar o impedir el trabajo de las OSC incluyen la cooptación, la manipulación, la clonación y la desestabilización a través de la infiltración y la injerencia interna.

Los poderes públicos acusan a las asociaciones y sindicatos de no ser verdaderos mediadores, de no tener base social y de no ser por tanto capaces de prevenir o ayudar a solucionar los conflictos. Estas acusaciones responden a una estrategia de deslegitimación de los actores sociales para evitar que la sociedad civil pueda convertirse en una verdadera mediadora social.

La situación que viven las asociaciones y militantes de derechos humanos es particularmente preocupante, como denuncian distintos informes independientes en los últimos años (FIDH, LADDH y

CFDA, 2010; AI, 2013; HRW, 2013; CFDA y CIHRS, 2012). Los datos recogidos por estas organizaciones muestran que las violaciones de derechos humanos de los defensores de derechos humanos han aumentado en 2013 así como el acoso judicial y las detenciones arbitrarias.

Descripción y estructura de la sociedad civil

Tipología y distribución geográfica de las asociaciones

Según datos oficiales de enero de 2012 existen unas 93.654 OSC censadas, de las cuales 1.027 operan a nivel nacional y las 92.627 restantes a nivel local.¹⁶ De esta cifra distintas fuentes estiman que apenas un 5% están realmente activas (Amar, 2011) y que muchas de estas asociaciones solo existen en realidad sobre el papel. Por otro lado, todos los actores consultados coinciden en señalar la alta tasa de «mortalidad asociativa» (Salhi y Karaouzène, 2007).

Hay una mayor concentración del número de asociaciones en las regiones del norte con Argel y sus 7.199 asociaciones a la cabeza. A partir de ahí, y aunque el reparto es desigual según las *wilayas*¹⁷ (que varían mucho en extensión y número de habitantes), son las provincias del noreste las que más asociaciones registran: Batna (3.342), Constantine (2.962), Biskra (2.291) y Skikda (2.401). Al noroeste son Tlemcen (2.363) y Mostaganem (2.380) las *wilayas* con un mayor número de asociaciones locales mientras que en el sur destaca la provincia de Adrar, con 2.756 asociaciones, la mayoría de ellas religiosas (569) y medioambientales (517).¹⁸

Pero sin duda alguna uno de los datos más reseñables es el del significativo dinamismo asociativo de regiones como Cabilia (norte) y el M'zab (en la *wilaya* de Ghardaïa) que capitalizan sus recursos comunitarios para desarrollar el ámbito asociativo. La región de Cabilia, por ejemplo, con casi seis millones de habitantes repartidos

16. Datos del Ministerio del Interior y de las Colectividades Locales. Consultado el 03/03/2013 en <http://www.interieur.gov.dz/>.

17. *Wilaya* es la división territorial equivalente a una provincia en árabe. Argelia está compuesta por 48 *wilayas* subdivididas en *dairas* y administradas por su respectivos *walis* o gobernadores.

18. *Ibid.*

en siete provincias, concentra 19.388 asociaciones. Ghardaïa, por otro lado, con apenas 93.000 habitantes, tiene 2.170 asociaciones registradas.¹⁹

La sociedad civil argelina es además predominantemente urbana con una concentración de sus actores en los núcleos urbanos en detrimento del medio rural, en el que el asociacionismo es algo más reciente.

Sectores y ámbitos de intervención

A nivel nacional hay un total de 1.027 asociaciones de las cuales 213 son asociaciones profesionales, 151 intervienen en salud, 143 en arte, cultura y formación, 50 en juventud, 82 en deporte, 23 son de mujeres y 7 se dedican a los derechos humanos.²⁰

A nivel local hay una preeminencia de los comités de barrio (20.137), seguidos de las asociaciones religiosas (15.304), las asociaciones de carácter educativo y deportivo (15.019), las AMPA (14.891) y las asociaciones culturales (10.014). Las asociaciones de mujeres representan apenas el 0,99% del total de asociaciones locales y las de jóvenes el 2,89%.²¹

La mayoría de las asociaciones trabajan en sectores cuyas actividades vienen a complementar aquellas del Estado sin entrar en competencia con este y, sobre todo, sin constituir un posible polo de oposición. Las asociaciones vinculadas a la incidencia política (derechos humanos, sindicatos autónomos, mujeres, víctimas del terrorismo, identidad amazigh...) son minoritarias.

La cultura es uno de los sectores de intervención en los que más asociaciones trabajan a través de actividades puntuales pero también de proyectos a largo plazo como la creación de bibliotecas y mediatecas, la rehabilitación de actividades tradicionales en relación con programas de turismo sostenible, escuelas de arte y de teatro...

Las asociaciones medioambientales todavía son minoritarias pero se advierte un progresivo aumento de su número debido a una mayor sensibilización social sobre esta cuestión en relación con el desarrollo sostenible.

19. *Ibíd.*

20. *Ibíd.*

21. *Ibíd.*

Respecto a los sindicatos, existen unos 70 sindicatos autónomos²² con distintos grados de representatividad, según lo sectores, y de autonomía.

Características generales

La principal característica de la sociedad civil argelina son sus complejos vínculos con el poder político, relaciones que hacen difícil hablar de una sociedad civil completamente independiente. Una de las mayores dificultades en Argelia es precisamente establecer el grado de independencia de los distintos componentes de la sociedad civil respecto a un Estado que intenta a toda costa controlar el estrecho margen de acción tolerado a la sociedad civil. Pese a todo, la realidad es que una parte de la sociedad argelina se organiza más allá del Estado aunque sea a través de medios más o menos artesanales debido a la falta de financiación y recursos. Y, aunque sean minoritarios, también es cierto que en su seno existen espacios de contestación representados sobre todo por asociaciones de derechos humanos, organizaciones culturales vinculadas a la identidad bereber y algunos sindicatos autónomos.

Otro de los rasgos que definen a esta sociedad civil es que se trata de una sociedad heterogénea y compleja, profundamente marcada por los acontecimientos históricos recientes como la «década negra» que han tenido como consecuencia la desarticulación de los vínculos sociales y la fragmentación social.

La sociedad civil argelina es además una sociedad civil joven que empezó a desarrollarse hace apenas treinta años y que se encuentra todavía en un estado de refuerzo de capacidades. Sus actores caminan hoy hacia una madurez asociativa que incluye la aceptación de la pluralidad como requisito indispensable para el reconocimiento mutuo y el trabajo conjunto. El agotamiento del enfoque culturalista centrado en las cuestiones de la lengua, la identidad y la religión ha debilitado profundamente tanto a los partidos políticos como a las OSC que se

22. Hemos dejado fuera de este diagnóstico a la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), creada en 1956, y presente desde la independencia en todos los sectores económicos como sindicato único hasta la apertura democrática de 1989. Estimamos que una estructura dependiente del estado como la UGTA no puede considerarse parte de la sociedad civil, motivo por el cual no ha sido objeto del análisis.

inscribían en esta lógica por lo que las OSC buscan ahora articular dinámicas que les faciliten la superación de las divisiones provocadas por la excesiva politización de los años ochenta y noventa.

La instrumentalización del movimiento asociativo por parte de los partidos políticos y las redes institucionales ha desembocado en una pérdida de legitimidad a nivel social. La credibilidad de la sociedad civil se ha visto profundamente minada por sus vínculos, muchas veces poco claros, con el poder y los partidos, instituciones desacreditadas a ojos de una población que muestra un fuerte desapego hacia el sistema político.

En cuanto al heterogéneo movimiento sindical autónomo, podemos destacar algunos elementos comunes como son la práctica sindical reivindicativa y la organización de manifestaciones, huelgas y sentadas como estrategias de visibilización y movilización social. Por otro lado, las diferencias en cuanto a composición, estructura y grado de autonomía de estos sindicatos pueden dificultar el desarrollo de acciones comunes de coordinación intersindical. A esta diversidad se suman la falta de formación sindical y de experiencia en la construcción organizativa lo que resulta en ocasiones en un funcionamiento poco democrático y transparente.

Sobre la participación de las mujeres en la sociedad civil cabe señalar que esta es menor que la de los hombres. En cuanto a su presencia en los órganos de dirección de la OSC, también aquí se constata una escasez de mujeres si bien estas son mayoría frente a los hombres como beneficiarias de las acciones de las OSC.

Debilidades estructurales que restan eficacia a las organizaciones de la sociedad civil

- Las OSC son todavía muy frágiles debido a la falta de recursos financieros y materiales y a las carencias a nivel de formación de sus miembros lo que dificulta su viabilidad en el tiempo e impide que puedan constituirse en verdaderas mediadoras sociales.
- La falta de organización interna, la escasa comunicación tanto interna como externa y la ausencia de una estrategia de capitalización de las experiencias constituyen las principales debilidades de las organizaciones. Estos problemas organizativos responden en gran medida a una falta de planificación,

un ejercicio difícil para la mayoría de las asociaciones que no solo tienen un equipo demasiado reducido para crear un comité de planificación sino que además tienen que dedicar la mayoría de su trabajo diario a la gestión de las actividades y los proyectos. La falta de organización interna es debida en parte a la ausencia de claridad en la definición de las funciones tanto de los órganos de gobierno como del equipo técnico, si existe, o del equipo de voluntarios que implementa las actividades de la asociación. También la carencia de una gestión administrativa y financiera regulada por procedimientos internos y desarrollada mediante las herramientas adecuadas tiene un impacto negativo en la organización de la asociación.

- Las organizaciones de la sociedad civil recurren poco al trabajo en red tanto con otros actores del tejido asociativo argelino como a nivel internacional. Los problemas de orden personal y los enfrentamientos ideológicos además de las consecuencias de la fragmentación social característica de la sociedad argelina son algunos de los elementos que provocan la mayoría de las dificultades para promover el intercambio entre las OSC argelinas. La escasez de medios materiales y de formación de los miembros de las OSC además de la ausencia de unos objetivos claros también constituyen importantes obstáculos para desarrollar una comunicación y una colaboración fluidas con otros actores sobre la base de un proyecto común.
- Cabe destacar además la ausencia de un verdadero proyecto asociativo. Muchas asociaciones realizan todo tipo de actividades sin definir el sector de intervención, los objetivos ni el público al que dirigen sus acciones, desperdigando su energía y recursos y logrando un impacto muy limitado. Esta es una de las razones del elevado número de organizaciones que apenas si llegan a sobrevivir unos meses.
- La falta de relevo generacional y la escasa participación de los jóvenes es otro de los problemas estructurales de la sociedad civil. La generación de los veteranos no lo ha previsto y se resiste a incorporar a los jóvenes como miembros activos en la gestión y toma de decisiones de las entidades. El diálogo intergeneracional es difícil porque son distintas formas de

hacer y comunicar y la escasez de iniciativas de acercamiento no hace sino afianzar la visión negativa del otro. Incluso en las asociaciones que sí integran a los jóvenes, estos están aún escasamente presentes en las instancias de toma de decisiones.

- La cuestión del liderazgo: la mayoría de las OSC tienden a estar lideradas por una sola persona, en general el presidente y fundador de la misma. Este es el actor clave en la vida de la OSC y quien suele acaparar las funciones de representación institucional y protagonizar las relaciones de las OSC con otros actores. La personalidad del presidente y su red relacional personal suelen determinar el funcionamiento de la OSC tanto en términos de acceso a los recursos como de la elección de posibles *partenaires*. En este sentido, los conflictos personales del presidente con otros actores son un factor clave que puede dificultar seriamente el trabajo conjunto. Estas disputas pueden tener su origen tanto en diferencias de carácter político y cultural como en una competencia por el protagonismo, el capital social y la capacidad de incidencia. La actitud represiva del Estado y las leyes liberticidas fomentan esta conflictividad al reducir cada vez más el espacio de acción de la sociedad civil.
- La mejora del funcionamiento interno continua siendo un desafío para una gran parte de las OSC que reproducen en su interior muchos de los rasgos que critican del sistema político: falta de transparencia y democracia internas, opacidad, escasa comunicación interna, estructuras organizativas verticales... Algunas de estas características se deben a la falta de participación de los miembros (con frecuencia las OSC funcionan exclusivamente a través de 3 o 4 miembros que toman las decisiones y no consultan a los demás, que no están presentes).
- El enfoque de género está escasamente integrado tanto a nivel de la práctica organizativa como en los proyectos. Hay una mala comprensión de lo que significa la transversalización del enfoque de género que muchas asociaciones interpretan como la simple inclusión de las mujeres en las actividades. Por otro lado, se evidencia un cierto desinterés por incorporar el enfoque de género a las reflexiones y las prácticas organizativas probablemente por desconocimiento de la herramienta.

Fortalezas: diversidad del tejido asociativo y trabajo de proximidad

- El dinamismo asociativo: aunque la cifra de casi 100.000 asociaciones no se corresponda con la realidad del número de OSC activas, lo cierto es que el tejido asociativo argelino es bastante denso. Desde 1990 no han dejado de crearse cada año varios miles de OSC que, pese a todas las dificultades a las que se enfrentan en el ejercicio diario de sus actividades, mantienen una voluntad de seguir trabajando.
- Hay una gran diversidad de OSC según su estructura, valores, estrategias, actividades y sectores de intervención. Esta característica es positiva si la sociedad civil es capaz de entender esta diversidad como una riqueza en la que todos los actores suman, en lugar de constituir un obstáculo. Además, aunque existe una clara concentración de asociaciones en la *wilaya* de Argel, hay un reparto relativamente homogéneo de OSC en el conjunto de *wilayas* del extenso territorio argelino.
- Destaca también la presencia de una importante dinámica asociativa local, cuyos protagonistas, las OSC locales, demuestran ser buenas conocedoras del medio, los actores y problemas del contexto gracias al trabajo de proximidad que realizan. Un ejemplo de ello son los comités de barrio²³ cuya fuerza reside en su arraigo en la microlocalidad y la capacidad de reforzar los vínculos comunitarios a través del trabajo sobre las necesidades cotidianas de los vecinos. Se observa que estos comités, además de ser la estructura organizativa mayoritaria

23. Los comités de barrio funcionan como intermediarios entre las administraciones locales y los habitantes de cada barrio. Los comités intentan buscar soluciones para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y hacer propuestas a las administraciones locales. Sirven además como instancias de participación comunitaria en la medida en que se constituyen en espacios de reflexión colectiva sobre proyectos relacionados con el barrio sobre los cuales los propios vecinos aportan su opinión. Los comités representan la forma de asociacionismo mayoritaria en Argelia y, en algunos, casos, un interesante ejemplo de experiencia de democracia participativa.

a nivel local, están cada vez más presentes en la vida diaria de la población. Parte de la revitalización de la actividad de los comités reside en la voluntad de luchar contra el deterioro generalizado de las condiciones de vida y por la mejora de la habitabilidad de las ciudades argelinas.

- A nivel local las OSC juegan un papel cada vez más importante en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de su trabajo de incidencia con las administraciones públicas para lograr cambios en las políticas públicas locales y las decisiones de los gestores. En este sentido, las asociaciones desarrollan toda una labor negociadora para mejorar el desarrollo local a través de la cual se están instituyendo progresivamente en una fuerza propositiva.

Reivindicaciones y movimiento de mujeres

Reivindicaciones

Se constata una progresiva transformación de la naturaleza de las reivindicaciones tanto a nivel de la población en general como de una parte de la sociedad civil.

En lo que se refiere a los movimientos de protesta espontáneos y muchas veces violentos que sacuden diariamente el país, sus demandas están basadas en necesidades que buscan ser satisfechas aquí y ahora y que no se inscriben en una estrategia de reivindicación de derechos. La juventud argelina, protagonista por excelencia de este tipo de acciones, siente un profundo desapego por las instituciones y los partidos políticos en general. Sin embargo, la despolitización de las reivindicaciones y su mutación en simples demandas de acceso a recursos materiales o de otro tipo facilita la satisfacción temporal y a bajo coste de estas por parte del régimen, que no se ve impelido a poner en marcha verdaderas medidas orientadas a una democratización del sistema político y al respeto de los derechos humanos y las libertades. Jabi apunta, en referencia a este fenómeno, a la emergencia de una cultura política popular basada en la satisfacción de las demandas bajo la amenaza de la acción directa (Jabi, 2012). Además, esta dinámica impide que la sociedad civil pueda canalizar el malestar social para estructurar un verdadero movimiento de contestación ya que el énfasis no se pone en la transformación social sino en la satisfacción de las peticiones.

Las huelgas y movilizaciones de distintos colectivos profesionales (médicos, profesores, funcionarios, trabajadores del sector de los hidrocarburos, *gardes communaux*²⁴...) se inscriben también mayoritariamente en esta dinámica de reivindicaciones relacionadas con los derechos como trabajadores de estos colectivos pero desprovistas de un discurso de cambio político.

Por otro lado, hay que ser cautos a la hora de analizar estas dinámicas ya que la presentación despolitizada de las protestas es una de las estrategias del régimen argelino para desactivar el potencial contestatario de las revueltas y presentarlas como «pataletas sociales» que, ya sea recurriendo a la represión o, si ello no fuera posible, a la satisfacción superficial de ciertas demandas, pueden ser fácilmente acalladas. Ejemplo de ello es la manipulación mediática de las demandas del movimiento de parados en el sur que pese a basar sus reivindicaciones en el derecho a un trabajo digno son presentados como un grupo de jóvenes que solo buscan empleo.

Esto no significa que toda la sociedad civil haya despolitizado su programa. Es cierto que las reivindicaciones socio-económicas ocupan ahora un lugar preponderante en la agenda de la sociedad civil habiendo incluso desplazado a las de carácter político ante el agotamiento de estos discursos. Pero también lo es que una parte de la sociedad civil (asociaciones de derechos humanos, algunos sindicatos) siguen inscribiendo estas demandas en el discurso de los derechos humanos, de la democratización, de los derechos sociales y económicos y de la instauración de un estado de derecho.

Por lo tanto, bien sea a través de un discurso político que reivindica el respeto de los derechos económicos y sociales de la población, a través de demandas de acceso a una vivienda y un empleo dignos, o mediante la denuncia de la dejación de responsabilidades del Estado, todas estas reivindicaciones, bajo distintas formas y protagonizadas

24. Los *gardes communaux* son los miembros de la Guardia Comunal que se creó en Argelia durante la «década negra» para combatir el terrorismo islamista. Organizada en 1996 por el gobierno, la misión de la Guardia Comunal fue la de colaborar con el ejército en la lucha antiterrorista. Los *gardes communaux* reclaman desde hace años la no disolución del cuerpo (decretada en 2012), un mayor reconocimiento de su trabajo y la aprobación, con carácter retroactivo, de un aumento de sus salarios.

por diferentes actores, tienen un punto en común: la exigencia de justicia social.

Las principales reivindicaciones socioeconómicas tienen que ver con la pérdida de estatus social y económico de la población como consecuencia del adelgazamiento del sector público durante los ochenta y los noventa y del deterioro global de las condiciones de vida. Pero son sin duda el empleo y la vivienda, las dos claves principales para la emancipación de los jóvenes, los problemas que más agitan el malestar social.

El acceso a una vivienda digna y la denuncia del sistema de corrupción y clientelismo de asignación de las viviendas sociales son los dos elementos que aglutinan las protestas en torno a la cuestión de la vivienda.

Otras demandas se refieren al lamentable estado de los servicios públicos: carreteras, hospitales, escuelas... y al progresivo deterioro de estos servicios a causa de la dejación de responsabilidades del Estado.

Las reivindicaciones políticas se articulan mayoritariamente desde el paradigma de los derechos humanos, las libertades públicas y el estado de derecho. Las reivindicaciones de las OSC que trabajan desde esta perspectiva se han ido alejando del discurso de los partidos político y centrándose en cuestiones concretas más que en una reivindicación global por el cambio político y la democratización, aunque ese sea el horizonte hacia el que todos apuntan.

La acción de las escasas OSC que mantienen actividades de sensibilización e incidencia en este ámbito se centra en la exigencia de una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la denuncia de la corrupción y de las violaciones de derechos humanos, la reivindicación de un sistema de redistribución de la riqueza más equitativo, en el reconocimiento legal de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la penalización jurídica de la violencia de género. Los derechos de la población migrante han sido incorporados recientemente a la agenda de las OSC que trabajan sobre derechos humanos como la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LADDH).

Descripción del movimiento de mujeres y sus principales expresiones

Las primeras asociaciones de mujeres autónomas se crean tras la promulgación de la Ley de 1990 a partir de los embrionarios colectivos estudiantiles y sus luchas (aunque la primera en crearse fue la Association pour l'Égalité devant la loi entre les hommes et les femmes, en 1985). Se registran entonces alrededor de una treintena de asociaciones todas con el mismo objetivo: la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres que se traducían entonces, principalmente, en las demandas de abrogación/reforma del Código de la Familia aprobado en 1984. A partir de 1992, comienza una época en la que las circunstancias político-sociales fuerzan un cambio de prioridades en el seno del movimiento. La lucha por la igualdad se transforma durante la «década negra» en la lucha contra el integrismo y por la separación de lo político y lo religioso. Durante esta época, muchos miembros dejan el mundo asociativo, sobre todo en las asociaciones situadas en el centro del país donde la violencia azota con mayor fuerza. La instrumentalización por parte del régimen de gran parte de las asociaciones para defender su política erradicadora también pasará factura al movimiento que se escindió entre quienes apoyaban la política gubernamental de exclusión de los islamistas del escenario político (que constituyó la postura mayoritaria entre las asociaciones de mujeres) y las «reconciliadoras». Así, tras diez años de violencias que fracturaron el tejido social dejando huellas aún hoy indelebles, las asociaciones iniciaron el nuevo siglo muy debilitadas.

En 2012, de 92.627 asociaciones registradas a nivel local solo 919 (es decir un 0,99%) son organizaciones de mujeres y a nivel nacional solo 23 de 1.027.²⁵ Estas asociaciones se pueden agrupar en tres tipos distintos: las que fueron creadas sobre la base de la reivindicación de igualdad entre hombres y mujeres (generalmente a partir de 1990), las constituidas a partir de agrupaciones de profesionales de un mismo sector que suman a las demandas de igualdad otras de carácter socio profesional, y, finalmente, aquellas

25. Datos del Ministerio del Interior y de las Colectividades Locales de 10 de enero de 2012. Consultado el 02/04/2013 en <http://www.interieur.gov.dz>.

cuyo fin social inicial era otro pero que ha ido evolucionando hacia un enfoque feminista.

Principales reivindicaciones y actividades

Con el apoyo de la financiación externa que empezó a llegar en el año 2000, las actividades y los sectores de intervención se han diversificado.

- Lucha contra las violencias contra las mujeres: el trabajo de las asociaciones en este sector tiene una doble vertiente. Por un lado se centra en la labor desarrollada a través de los centros de escucha, apoyo jurídico y psicológico. Y, por otro, en desarrollar actividades de sensibilización e incidencia a través de los datos y experiencias recogidos mediante el trabajo de proximidad realizado en los centros.

Hay que señalar que aunque las acciones de acompañamiento y ayuda de emergencia ocupan un lugar importante en este sector de intervención, el objetivo principal del trabajo es el empoderamiento y refuerzo de capacidades de las usuarias y no el mero asistencialismo. Esta labor de atención directa a las víctimas se complementa con el trabajo de sensibilización e incidencia mediante actividades como seminarios de formación, talleres, concursos de dibujos, charlas en centros educativos y casas de la juventud, la puesta en marcha de redes de trabajo, la formación de los actores involucrados en el tratamiento de las violencias (sanitarios, trabajadores sociales de los centros de escucha...), programas de radio, la creación de una base de datos, e incluso colaboraciones con las administraciones locales.

El resultado de todas estas campañas, estudios y publicaciones unido a la difusión que cierta prensa escrita ha hecho del trabajo de las asociaciones ha contribuido a hacer de la cuestión de las violencias contra las mujeres un problema público relacionado con la igualdad entre los sexos. El impacto de la acción de las OSC logró en 2007 que el gobierno adoptase una Estrategia Nacional de Lucha contra las Violencias contra las Mujeres.

Abundan también en este ámbito de intervención las iniciativas de trabajo en red entre las asociaciones como el Observatoire des violences contre les femmes (OVIF), gestionado por el Réseau

Wasila²⁶ y Djazairouna (entre otras asociaciones), y cuyo principal objetivo es la incidencia sobre las violencias, aunque se encuentra aún en estado embrionario. Otro ejemplo es el Collectif Stop la violence (iniciado por la Association Algérienne de Planning Familiale en 2010 y formado por varias asociaciones para redactar un proyecto de ley de 13 artículos que fue presentado ante la Asamblea Popular 2007-2012), en cuyo marco se propone un nuevo enfoque sobre las violencias que haga hincapié en que estas violencias no son un problema individual sino social.

- Participación de las mujeres en el sector económico. El mayor problema de Argelia, según el informe Global Gender Gap Report, son las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito económico. Y es que si bien el Estado ha hecho importantes esfuerzos en las últimas décadas por mejorar los niveles de educación femenina, estos no han ido acompañados del mismo éxito en cuanto a la integración de las mujeres en el sector económico.

Uno de los elementos que determinan los bajos índices de actividad económica de las mujeres es el hecho de que el sector público en Argelia está basado en la industria pesada (hidrocarburos), ámbito en el que se privilegia la mano de obra masculina. Por otro lado, el dominio del sector público deja poco espacio para la iniciativa privada que podría procurar más oportunidades laborales a las mujeres (Thieux, 2010).

Así pues el 75% del empleo femenino se concentra en un entorno urbano, principalmente en la administración y un 21% en la industria manufacturera, principales sectores de actividad femenina (ONS, 2011). La tasa de desempleo femenino oficial es del 19% (ONS, 2010), el triple que los hombres en el medio rural y el doble en asentamientos urbanos. Persiste el trabajo informal como principal sector laboral femenino. Las mujeres están generalmente excluidas de los puestos de toma de decisión y su presencia en los órganos de dirección de las empresas es todavía muy débil.

267. El Réseau Wasila fue fundado en el año 2000 y reúne a más de cinco asociaciones que trabajan en la atención a mujeres y niños víctimas de violencia

Sin embargo, pese a los bajos índices de empleo femenino, estos se han triplicado en los últimos años debido, entre otras razones, al empeoramiento de las condiciones de vida, que hace cada vez más necesaria la ampliación de los recursos económicos de los hogares, y la transición demográfica (ONS, 2011). Este proceso, iniciado en los años setenta, ha traído consigo cambios sociales muy importantes en cuanto al modelo de familia, el papel de las mujeres en la esfera pública y el mercado laboral y el acceso a la educación pública.

Por otro lado, existen una serie de factores ligados a las formas que la desigualdad en las relaciones entre los sexos y los roles de género adoptan en Argelia que dificultan la integración de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, una mujer productora de ingresos puede representar una amenaza para la tradicional estructura familiar patriarcal basada en un padre de familia como único proveedor. Además, la incorporación de las mujeres a un mercado laboral ya saturado por el paro hace que la competencia por los escasos puestos de trabajo sea aún mayor lo que genera actitudes proteccionistas de rechazo entre ciertos sectores de la población masculina. Por último, parece evidente que el avance de una tendencia social ultra conservadora que basa parte de su discurso en el papel de las mujeres como cuidadoras y procreadoras situándolas en una posición de subordinación y relegándolas al espacio doméstico no juega tampoco a favor de una mayor participación de las mujeres en el sector económico.

Para promover la participación de las mujeres en el sector económico, las asociaciones basan su estrategia en actividades de formación profesional y de inserción sociolaboral. Aunque la formación es un eje de trabajo compartido por casi todas las asociaciones, la inserción laboral solo es trabajada por algunas de ellas en función de sus objetivos.

En cuanto a los sindicatos autónomos, varios tienen secciones de mujeres dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. El Comité de Femmes del SNAPAP, por ejemplo, se creó en 2002 con el doble objetivo de hacer respetar los derechos de las mujeres trabajadoras y asegurar un espacio para las mujeres en el seno del sindicato y en pocos años ha logrado aumentar considerablemente el número de trabajadoras afiliadas gracias a la promoción de un trabajo de proximidad.

- Participación política de la mujeres: Según el Global Gender Gap Report de 2012, el ámbito de la participación política es el único en el que Argelia, clasificada en el puesto 57 de 135 en 2012, ha mejorado ostensiblemente tras la aprobación de la Ley Orgánica del 12 de enero de 2012 que establece las modalidades para promover un mayor acceso de la representación de las mujeres en las asambleas electas. El texto dispone una cuota de mujeres en cada lista electoral tanto para las elecciones legislativas como municipales y a nivel de las *wilayas*. Además, la Ley Orgánica n° 12-4 de enero de 2012 relativa a los partidos políticos, también concreta la participación efectiva de las mujeres en la vida política y establece que los partidos deben reservar una parte de los puestos de dirección así como en el resto de órganos del partido a las mujeres (art. 24, 35 y 41) bajo pena de sanción (art. 5).

Tras las elecciones legislativas de mayo de 2012, 145 escaños de la Asamblea Popular Nacional están ocupados por mujeres frente a los apenas 31 del mandato anterior. Una de las principales críticas al respecto se basa en que la mayoría de estas mujeres no tienen una trayectoria previa ni en el ámbito de la política ni en el de la igualdad de derechos. Para paliar estas deficiencias, el Centre d'Information et de Documentation sur les Droits de l'Enfant et de la Femme (CIDDEF) ha puesto en marcha una primera formación para 25 parlamentarias con el apoyo de NNUU y comienza en el segundo semestre del 2013 con la segunda.

Tampoco se ha respetado la alternancia de género para las elecciones municipales y provinciales que implicaría crear listas cremallera para garantizar la presencia de las mujeres tanto en las listas electorales como en los cargos electos.

Si bien las organizaciones de mujeres han saludado ciertas disposiciones de la ley como un paso en el camino hacia la igualdad, muchas de ellas no han dejado de denunciar que el reconocimiento de los derechos de las mujeres no puede dissociarse de una democratización del sistema político que permita la instauración de un estado de derecho en el que hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos como ciudadanos libres.

- Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entre el año 2000 y el 2006, el gobierno lleva a cabo una serie de reformas legislativas como la del Código Penal, del Código de la Nacionalidad, del Código del Trabajo y del de la Familia. Pese a ello, tanto el Código Penal como el Código de la Familia mantienen disposiciones discriminatorias hacia las mujeres. Y no solo eso, en lo que concierne a los tratados internacionales Argelia mantiene las reservas a la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Mujeres) desde 1996 (a los artículos 2, 15 párrafo 4, 16 y 29) y no ha ratificado aún el Protocolo Facultativo que permite al Comité controlar la aplicación de la Convención ni ha incluido en la Constitución una definición de «discriminación» acorde con la de la CEDAW.

Para las asociaciones de mujeres laicas la igualdad de derechos como objetivo principal no puede ser subordinada a ninguna otra reivindicación. Democracia, libertad y justicia están indisolublemente ligadas a la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de derechos entre los sexos se inscribe en el discurso universalista de los derechos humanos por lo que no hay espacio para formulaciones de otros feminismos o especificidades culturales.

Esta reivindicación cristaliza en las campañas para la modificación del Código de la Familia que han sido el hilo conductor del movimiento desde mediados de los ochenta. Aparte del trabajo de sensibilización e incidencia que cada asociación continúa desarrollando al respecto, las asociaciones siguen trabajando también de forma conjunta. Desde las movilizaciones de los noventa, se han sucedido las campañas como «20 ans Barakat», una iniciativa colectiva entre asociaciones argelinas y francesas nacida en 2003 para demandar la derogación del Código de la Familia o «Kif kif devant la loi», una campaña puesta en marcha en el año 2010 a través de acciones de sensibilización e incidencia para reivindicar un nuevo código de la familia igualitario.

Divisiones internas, estrategias de superación y relaciones con el Estado y los partidos políticos

Una de las principales características del movimiento de mujeres son las profundas divisiones internas que lo atraviesan debido tanto a su

origen altamente politizado como a susceptibilidades y divergencias personales. Pese a ello, se constata en los últimos años un proceso de reflexión sobre las causas y consecuencias de estas fragmentaciones y una maduración progresiva que se plasma en una mejora de las relaciones entre asociaciones. Las desavenencias entre asociaciones pueden ser de carácter ideológico o estratégico. En cuanto a los conflictos de carácter estratégico, estos se estructuran en tres ejes: las relaciones con el régimen (o el grado de proximidad al poder), las relaciones con los partidos políticos y cuestiones ligadas a la competencia por los recursos económicos, el protagonismo, etc.

Las posturas del movimiento de mujeres respecto a las relaciones con el poder político basculan entre la oposición al régimen y la neutralidad. La oposición al régimen se expresa principalmente a través de la crítica abierta a las políticas gubernamentales y de la renuncia a recibir fondos públicos, lo que no significa que estas asociaciones no trabajen, en determinados momentos, con instituciones públicas. Las asociaciones que optan por la neutralidad en sus relaciones con el Estado reivindican su autonomía pero no renuncian a su derecho a recibir subvenciones públicas ni a dialogar y trabajar con el Estado aunque mantengan un perfil más bajo en cuanto a las acciones públicas de incidencia. Se trata de una opción estratégica para ser mejor escuchadas y avanzar en la lucha. Próximas a estas se sitúan cierto número de asociaciones cuyos complejos vínculos con el poder y su respaldo al discurso gubernamental hacen cuestionable su independencia como organizaciones de la sociedad civil. Por último cabe mencionar un feminismo de Estado, representando por organizaciones satélites del régimen.

En lo que respecta a los partidos políticos, si bien gran parte de las asociaciones veteranas fueron creadas en los noventa por militantes de partidos políticos hoy día muchas de ellas rechazan este vínculo que ha provocado muchas desilusiones y enfrentamientos por la manipulación que los partidos han hecho del movimiento de mujeres. Sin embargo otro sector de las asociaciones ha elegido cooperar con los partidos para promover la igualdad, aunque generalmente se trate de alianzas puntuales para evitar la instrumentalización. Un ejemplo de esta colaboración son las formaciones en igualdad de género que ofrecen algunas asociaciones como el CIDDEF a militantes de partidos.

Algunos ejemplos de superación de estas divisiones son iniciativas de trabajo conjunto como la campaña «20 ans Barakat», o la articulación de acciones coordinadas entre asociaciones contra la violencia (Collectif Stop la violence, OVIF, Réseau Balsam²⁷...).

Se da una progresiva apertura hacia el trabajo con otro tipo de OSC: de derechos humanos, de jóvenes, medioambientales, culturales, sindicatos... con las que comparten ciertos valores. En Orán, por ejemplo, asociaciones veteranas de mujeres como al Association Féministe pour l'Epanouissement de la Personne et l'Exercice de la Citoyenneté (AFEPEC) y Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits (FARD) comparten espacios de reflexión y trabajo con asociaciones culturales, de patrimonio, de jóvenes... A través de la colaboración en la realización de actividades conjuntas y la participación en formaciones sobre ciudadanía, igualdad y derechos humanos, por ejemplo, las asociaciones de mujeres sensibilizan a otros actores sociales sobre la cuestión de la igualdad entre los sexos al tiempo que aumentan su base social, construyen un relevo generacional y desarrollan un frente de acción conjunto.

Otra forma de establecer vínculos con otras OSC y de darse a conocer y sensibilizar es la estrategia de las caravanas que visitan distintos lugares (como las de la asociación Femmes en Communication —FEC—) o la creación de redes de trabajo (como la iniciada por la AFEPEC entre Orán, Mostaganem y Sidi Bel Abbes con colectivos de jóvenes a través de los espacios de formación que ofrece desde hace años).

En el caso de los sindicatos, aunque el diálogo con las secciones de mujeres se revela difícil debido a las diferencias de formación, filiación política y la distinta priorización de las preocupaciones, existen contactos entre asociaciones y sindicatos. El Réseau Wasila y el CIDDEF, por ejemplo, mantienen un diálogo con la Section Femmes de la UGTA sobre el acoso sexual pero no han conseguido todavía encontrar espacios de colaboración con los sindicatos autónomos, aunque varios de ellos tienen secciones de mujeres. En esta línea, el Groupe Solidarité Algérie del Réseau Euro-méditerranéen

27. Creado en 2008, el Réseau Balsam, coordinado por el CIDDEF, agrupa a 15 centros de escucha.

des droits de l'Homme (REMDH) ha puesto en marcha algunas iniciativas para promover la cooperación entre asociaciones de mujeres y otros actores, entre ellos los sindicales, como ha sido un seminario de formación organizado en Argel en 2012.

Retos del movimiento de mujeres

Entre los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres destacan los siguientes:

- Ser capaces de desarrollar coaliciones duraderas y sostenibles que vayan más allá de la colaboración en un proyecto puntual tanto entre ellas como con actores externos con los que compartan el principio de la igualdad.
- Promover el relevo generacional a través de formaciones y de la incorporación de las nuevas generaciones a todos los aspectos de la vida de la asociación. La mayoría de las asociaciones creen que las nuevas generaciones no están preparadas aún para asumirlo, que les falta implicación en la causa porque el empeoramiento de las condiciones de vida desvía sus preocupaciones y energías hacia cuestiones como la educación y el empleo. La generación de las asociaciones veteranas no encontró, en ese sentido, tantos obstáculos como las jóvenes de hoy.

Algunas asociaciones han buscado averiguar las causas de esta ruptura a través de encuestas y estudios. Ejemplo de ello son los informes del CIDDEF y de FEC que revelan un preocupante desconocimiento de las jóvenes de sus derechos además del progresivo avance de una tendencia conservadora contraria a la igualdad de derechos entre los sexos que se legitima a través del discurso religioso (CIDDEF, 2008; Eco-Techniques, 2009).

En lo que parece estar de acuerdo gran parte del movimiento de mujeres es en la necesidad de continuar desarrollando colaboraciones con asociaciones de jóvenes a nivel local y de barrio, colectivos que trabajen en otros sectores, más que en intentar atraer a nuevos militantes individualmente.

- También está el reto de diversificar regionalmente el movimiento de mujeres para que todo deje de seguir ocurriendo en el norte. En este sentido destaca la experiencia de

SOS Femmes en Détresse que desde 1999 promueve el trabajo en el sur a través de pequeños proyectos como el Centro de Derechos Humanos en Djanet. Además, la asociación, que opera a nivel nacional, ha privilegiado la creación en su seno de comités locales y centros regionales para diversificar su trabajo en distintas *wilayas* del país.

- Preservar los logros, especialmente los conseguidos en el terreno jurídico, y continuar trabajando para que estos tengan su traducción en el avance de la sociedad hacia la igualdad de género. En este sentido también, las organizaciones destacan la necesidad de mantenerse vigilantes respecto a posibles concesiones del gobierno a corrientes conservadoras que se manifiestan en contra de la igualdad entre los sexos.

Estrategias de la sociedad civil

El impacto de las Primaveras Árabes en Argelia respecto a la sociedad civil ha sido muy relativo pero sí ha marcado una tendencia clara: la prudencia. Las OSC coinciden en la importancia de no precipitar un cambio que podría desembocar en el caos y la violencia. Esta actitud ha generado una dinámica de reflexión acerca de cómo trabajar para la consecución de unos objetivos cuyo logro se sitúa en el medio y largo plazo. Esta reflexión se apoya en la importancia de la formación, la sensibilización y la incidencia como estrategias para promover una transformación social progresiva pero duradera y radical.

Hay un abandono progresivo de la estrategia de las grandes manifestaciones que no consiguen movilizar muchos efectivos, a favor de las sentadas pacíficas de más corta duración. Resalta una mayor presencia de eslóganes y pancartas individuales. Las NTIC juegan, por supuesto, un papel determinante como herramienta de comunicación, reflexión y movilización. Existe además una profunda preocupación por hacer prevalecer el carácter pacífico de cualquier tipo de acción de movilización ciudadana como muestra el caso del movimiento de parados en el sur.

La preeminencia de las reivindicaciones socio-económicas, además de marcar un giro en los discursos, supone nuevas posibilidades para el trabajo conjunto. La despolitización de los discursos permite distanciarse de las posturas partidistas y culturalistas de las décadas

anteriores que implican polémicas y disensiones internas que debilitan a los movimientos de contestación. Frente al agotamiento del discurso político, quizás sea la demanda de justicia social la reivindicación global a través de la cual lograr federar los esfuerzos de la sociedad civil para promover una transformación social.

Nuevas modalidades de acción colectiva y movilización social que implican a los jóvenes

La juventud representa uno de los grupos sociales de mayor importancia en la sociedad argelina (un 70% de la población son jóvenes entre 18 y 35 años). Sin embargo su participación en las estructuras de la sociedad civil es menor de lo que indica su peso demográfico (apenas un 4,7% de jóvenes son miembros de una asociación y un 1,5% de un sindicato) (RAJ, 2012).

Los jóvenes se sienten poco representados por los partidos políticos pero en general tienen una opinión bastante mejor de las OSC (un 51,5% reconocen que las actividades de las OSC son positivas y el 31,8% opina lo mismo de los sindicatos) (RAJ, 2012).

En este contexto, la juventud tiende a adoptar distintas formas de expresión e interacción social de las cuales reseñamos dos tendencias principales. Una, aparentemente mayoritaria, que son las revueltas populares descritas con anterioridad, y otra ligada a su participación en las organizaciones de la sociedad civil.

Jóvenes y revueltas populares

Aunque, como hemos explicado previamente, las revueltas sociales son movimientos espontáneos y no están organizadas ni convocadas por organizaciones de la sociedad civil, incluimos en este apartado un breve análisis de sus estrategias por la importancia que han adquirido en el panorama social y el papel protagonista de la juventud en este tipo de protestas. Como hemos apuntado, estas revueltas están fragmentadas geográficamente y no se producen en lugares públicos emblemáticos (más bien frente a ayuntamientos y barricadas) ya que su objetivo es interpelar al Estado y no movilizar a la ciudadanía. Sus demandas están totalmente despolitizadas y se basan en la denuncia de ciertas injusticias (paro, falta de viviendas sociales, mal estado de los servicios públicos...). Su estrategia responde a la confrontación directa con el Estado o sus representantes ante la ausencia de

mediadores sociales. La desintegración del tejido social fruto de las violencias vividas en la «década negra» puede explicar en parte la desestructuración de los mecanismos de mediación y prevención social y el recurso a la violencia. Sólo llegados al extremo y tras una importante represión policial se instituye una mediación ad hoc para intentar rebajar la conflictividad. Como explica el profesor Salhi, estas confrontaciones se inscriben en la lógica de la inmediatez de los resultados: se trata de acceder cuanto antes a la satisfacción de las demandas (Salhi, 2010). El carácter pragmático de esta dinámica cortoplacista dificulta la posibilidad de estructurar un movimiento de contestación orientado a la transformación social y revela la profunda división existente entre sus protagonistas, los jóvenes, y las generaciones anteriores que se movilizan a través de la sociedad civil y los partidos.

Jóvenes y organizaciones de la sociedad civil

Existe un sector de la juventud que sí participa en las actividades de la sociedad civil y al que le gustaría tener un papel más relevante en la actividad asociativa y sindical para pasar de ser mayoritariamente beneficiarios de las acciones a actores protagonistas.

La presencia de estos jóvenes se concentra en asociaciones de tipo cultural y deportivo, de trabajo con la infancia y la juventud, medioambientales y, en menor medida, de derechos humanos. De su experiencia de participación en las organizaciones veteranas, los jóvenes critican la falta de interés de las OSC por incorporarles a los procesos de toma de decisión y gestión de la entidad. Sienten que su voz no se escucha, que no hay una voluntad de crear y estructurar un relevo generacional, de trabajar conjuntamente.

Por otro lado, los elementos que configuran la cultura política de ambas generaciones difieren ostensiblemente lo que abre una brecha aún mayor en la comunicación intergeneracional. La cultura política de los fundadores de estas asociaciones está basada en los activos político-intelectuales movilizados en torno a la lucha por la descolonización y la construcción de un Estado independiente y, posteriormente, por los discursos y acciones de los partidos progresistas. Sin embargo, las nuevas generaciones no solo han sido educadas en una lectura única de la legitimidad revolucionaria en una universidad en la que el movimiento asociativo brilla por su ausencia, sino

que se han distanciado completamente de unos partidos políticos debilitados que no ofrecen alternativa política alguna.

En el movimiento de mujeres, por ejemplo, esta ausencia de un relevo generacional es bastante evidente. Las jóvenes se sienten excluidas de las instancias de decisión de las organizaciones y están creando sus propios espacios. Los colectivos de mujeres jóvenes tienen nuevas preocupaciones relacionadas con la sexualidad, el acoso sexual y el aborto que para buena parte de las asociaciones veteranas no son prioritarias. También tienen nuevas formas de hacer como ilustra la estrategia del movimiento Sawt Nssa, cuyo nombre hace referencia a una canción de una de las pioneras del rap en Marruecos. Sawt Nssa nace en Constantine como una página de Facebook cuyas usuarias recurren al espacio virtual como foro de reflexión, puesta en común y denuncia sobre el acoso sexual. El colectivo sigue el modelo de HarrasMap, de origen egipcio, y, como ellas, quieren fomentar la solidaridad entre las víctimas y empoderarlas frente a un discurso social que las culpabiliza. Internet es un espacio de interacción pero no la única actividad del grupo que se reúne regularmente para discutir sobre feminismo, organizar proyecciones y debates en la universidad, etc.

El ejemplo de Sawt Nssa ilustra bien algunas de las estrategias de acción y movilización que proponen los jóvenes. Ante las dificultades para constituir una asociación, conseguir un local y lograr los permisos para organizar actividades, los jóvenes se organizan en estructuras más informales. Estas nuevas formas de organización tienden a ser más horizontales y flexibles. Buscan que la comunicación fluya de forma circular, no de forma jerárquica, y para ello recurren a estructuras de carácter asambleario. El recurso a las NTIC tiene aquí una importancia capital tanto en su dimensión comunicativa como estratégica. Respecto a la comunicación, las NTIC facilitan una forma de comunicación y reflexión colectiva más anónima, interactiva y simultánea. Se abren nuevas posibilidades respecto a las formas de organizarse internamente pero también de movilizar a otros jóvenes. Iniciativas como Algérie plurielle, Citoyen Algérien réveillé o J'accuse L'Algérie!, surgidas durante la intensificación de las protestas en 2011, ilustran también la importancia de lo virtual como espacio de sustitución de un espacio público secuestrado. En su dimensión estratégica, las NTIC son una útil herramienta para el

trabajo asociativo a nivel de gestión, movilización, sensibilización y comunicación externa a bajo coste.

A pesar de la proliferación de espacios de intercambio y contestación a través de la red, estos no parecen tener el mismo eco que en otros países como Túnez o Egipto quizás porque en Argelia el uso de internet está menos extendido y porque la desafección de los jóvenes argelinos por la actividad política es mucho mayor.

Otro ejemplo de las dinámicas de acción colectiva lideradas por jóvenes es el caso de la Coordination Nationale Autonome des Etudiants (CNAE), creada en 2011 a raíz del descontento provocado por un decreto presidencial que establecía una nueva correspondencia entre el nuevo sistema de grados y posgrados universitarios y el sistema convencional. La CNAE funcionaba a través de comités sindicales autónomos dentro de cada universidad que se reunían cada vez en una provincia del país para poner en común sus reivindicaciones. Los miembros de la CNAE a nivel nacional eran reelegidos de forma asamblearia cada poco tiempo para evitar infiltraciones de las fuerzas de seguridad. La movilización de nuevos estudiantes, la organización de las acciones y la coordinación del movimiento se hacían en la medida de lo posible a través de las NTIC. Después de una primera manifestación multitudinaria en Argel que movilizó a cientos de estudiantes, la CNAE recibió el apoyo de varios partidos políticos, un apoyo que los jóvenes decidieron silenciar para no perjudicar el movimiento. La CNAE no fue capaz de asegurar una continuidad de la movilización y acabó disolviéndose a finales del mismo año pero su experiencia reúne varias de las estrategias juveniles que hemos apuntado previamente. El caso de la CNAE es interesante también como conato de movilización en un ámbito universitario que, desde la despolitización forzada tras la «década negra», se ha convertido en un espacio fuertemente controlado en el que tan solo están presentes los sindicatos UNEA (Union Nationale des Étudiants Algériens) y UGEL (Union générale des étudiants libres), próximos al poder y al islamista MSP, y algún club universitario.

Otra tendencia interesante en el desarrollo de nuevas formas de acción protagonizadas por la juventud es la que surge a través de las experiencias de formación ofrecidas por las OSC veteranas (CIDDEF, AFEPEC, LADDH...). Estas experiencias se basan tanto en la formación de jóvenes a nivel individual como en la promoción del

desarrollo de un tejido asociativo joven y su impacto está siendo muy positivo. Presentamos brevemente el caso del movimiento asociativo en Orán, con una importante presencia de jóvenes en asociaciones «veteranas», pero también de asociaciones creadas por jóvenes, para comprender mejor estas nuevas dinámicas.

El caso de Orán y el asociacionismo juvenil

Orán es la segunda ciudad de Argelia y un importante centro comercial y económico que concentra un alto porcentaje de jóvenes en torno a sus dos campus universitarios (Es-Senia y USTO). La provincia de Orán presenta un tejido asociativo muy dinámico en el que destacan las asociaciones deportivas, culturales y de educación cívica. El hecho de que la *wilaya* no padeciese el mismo grado de violencia que asoló el resto del país durante la década de los noventa ha favorecido que el tejido social y el asociativo no hayan experimentado una fragmentación tan profunda. Las principales asociaciones, nacidas a finales de los ochenta y principios de los noventa, comenzaron a partir del año 2000 a desarrollar programas de formación para jóvenes sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, asociacionismo, ciudadanía, etc. gracias a la financiación de la UE. Estas dinámicas formativas han desembocado, tras varios años, en la creación de un conjunto de asociaciones de jóvenes que se activan gracias al apoyo de las asociaciones veteranas que ponen sus recursos técnicos y humanos a su disposición. En su mayor parte se trata de grupos informales y asociaciones no constituidas legalmente debido a las dificultades impuestas por el marco jurídico y el procedimiento administrativo. Los principales ámbitos de acción son la ciudadanía y la educación cívica, la cultura, la sensibilización de la juventud y la acción social, especialmente con niños.

En paralelo a esta intensificación de la creación de asociaciones por parte de los jóvenes, las asociaciones veteranas que han facilitado su formación han desarrollado una reflexión intraorganizacional que está conduciendo a la adopción de una política de rejuvenecimiento de sus cuadros mediante la integración de miembros jóvenes en las juntas directivas.

La relación entre las asociaciones veteranas y las asociaciones de jóvenes es muy estrecha, comparten espacios e inquietudes, hay una comunicación fluida y continua y un reconocimiento del pa-

pel y la valía del otro. Por otro lado, muchas de estas asociaciones tienen su local en la misma calle por lo que comparten un espacio físico que facilita enormemente el contacto entre sus miembros y simpatizantes. Esta dinámica se ha generado precisamente a raíz de los proyectos de formación que han aproximado a las asociaciones veteranas a los jóvenes de forma que estas han dejado de percibirles exclusivamente como beneficiarios.

Por otro lado, los retos de estas jóvenes asociaciones son similares a las de otras OSC: la profesionalización, la promoción del trabajo en red, la reflexión sobre nuevas formas de militatismo, las restricciones impuestas por el marco jurídico...

Trabajo en red

El trabajo en red es uno de los principales desafíos para la sociedad civil argelina. La fragmentación social explica en parte las dificultades de las OSC argelinas para desarrollar espacios de trabajo conjunto a medio y largo plazo. Otro de los factores que influyen en la escasez de redes activas es la falta de capacitación de las OSC. El trabajo en red requiere no solo de una planificación estratégica, también de una cierta capacidad de gestión y coordinación.

El trabajo en red entre asociaciones argelinas se puede estructurar en torno a tres tipos de vínculos. En primer lugar existen alianzas coyunturales para trabajar sobre una cuestión concreta en un momento dado (como es el caso de las 39 asociaciones de la *wilaya* de Bejaia que se han unido en una campaña de incidencia para interpelar a la administración contra las condiciones de construcción de una nueva autopista). En segundo lugar existen colaboraciones entre varias asociaciones basadas en una temática en concreto, como hace el colectivo Stop la Violence! Y por último existen alianzas formales entre asociaciones para desarrollar un trabajo en red con una agenda común como el Réseau NADA, una red sobre derechos de la infancia formada por una veintena de asociaciones a nivel nacional.

En general se aprecia una mayor tendencia de las asociaciones que trabajan en cuestiones como los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el medioambiente a trabajar en red.

Algunas de las dificultades señaladas por las OSC en lo referente al trabajo en red son: los problemas de comunicación para hacerse entender y comprender al otro, los intereses personales y organiza-

tivos de cada asociación que impiden el desarrollo de un proyecto inclusivo basado en lo común, la falta de reflexión sobre los objetivos y de coordinación del trabajo y el coste en términos de trabajo y recursos de mantener la red.

Aún así se advierte un progresivo aumento tanto de los espacios de trabajo conjunto más informales (sobre todo a nivel local), como de las redes de trabajo a nivel nacional cuyos miembros saludan la oportunidad para poner en común experiencias y capitalizarlas, aunar esfuerzos y mejorar la calidad del trabajo.

En general los espacios de trabajo en común más eficaces se desarrollan principalmente en torno a un proyecto o una acción concreta. Destacan las experiencias de coordinación que se dan sobre todo a nivel local como es el caso de Orán, donde OSC de sectores tan diferentes como los derechos de las mujeres, el patrimonio, la ciudadanía y la atención a la infancia, realizan cotidianamente actividades conjuntas y se forman las unas a las otras.

Asimismo, a través de las formaciones de la LADDH y otras asociaciones sobre derechos humanos se está logrando vincular el movimiento de derechos humanos a otros sectores como el de los medios de comunicación, los jóvenes y los sindicatos con vistas a desarrollar una cultura ciudadana de los derechos humanos.²⁸

A nivel internacional, el aislamiento de la sociedad argelina es patente sobre todo en su escasa presencia en redes euro-mediterráneas y regionales. En el plano regional es significativa la experiencia del Collectif 95 Maghreb Égalité, o la creación de la Union Maghrébine pour la Lutte contre le Chômage et le Travail Précaire. Constituido en 2007 después de un largo proceso, el Forum Social Magrebin, del que forma parte el recién creado Forum Social Algerian, quiere ser un punto de encuentro de las iniciativas de cambio en la región, al igual que la La Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH), en materia de derechos humanos.

A nivel internacional, las OSC argelinas participan en redes de derechos humanos como la Fédération Internationale des Ligues des

28. Esta misma estrategia siguen algunos actores del movimiento de víctimas del terrorismo de la década de los noventa que colaboran en red con otras OSC (sindicatos, asociaciones de mujeres, de derechos humanos...) para integrar sus reivindicaciones en la agenda de la sociedad civil.

Droits de l'Homme (FIDH), la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH) o la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED), sobre derechos del pueblo amazigh, como el Congrès Mondial Amazigh (CMA), relacionadas con el arte, la cultura y la ciudadanía, como la Fundación Anna Lindh, etc.

Estrategias de superación de las divisiones que fragmentan la sociedad civil

Islamistas, seculares y reconciliación nacional

Una de las principales divisiones en la propia sociedad civil es la polarización entre las OSC defensoras de un proyecto sociopolítico de corte islamista y los actores seculares. Esta ruptura hay que entenderla a partir del papel social y político que se le ha sido asignado al islam a lo largo de la historia contemporánea argelina.

El modelo de ciudadanía elegido por el movimiento de liberación nacional argelino se basó, paradójicamente, en el modelo republicano francés, que desarrolla un concepto unitario y monolítico de la ciudadanía según el cual es el Estado quien define los modos de pertenencia en consonancia con su idea de nación. De este modo el movimiento de liberación nacional primero y el Estado revolucionario después, otorgaron al islam un papel central como referente de una única identidad argelina basada en una lengua (el árabe) y una religión (el islam). La instrumentalización del islam por parte del poder en el proceso de construcción de una identidad nacional basada en el referente etnorreligioso desembocó en una transferencia constante de elementos del ámbito religioso al ámbito político. Esta ambigüedad del gobierno respecto al discurso religioso y su instrumentalización alimentaron el fortalecimiento del islam político en Argelia durante los años setenta y ochenta.

Durante la década de los setenta, el islamismo se opuso al gobierno sobre cuestiones como la reforma agraria, la gestión económica socialista, la moral pública y el Código de la Familia. La presión del polo de contestación islamista hizo que el Estado, celoso de preservar la legitimidad religiosa, cediese en ciertos aspectos como la construcción de un gran número de mezquitas en los barrios más populares o la aprobación en 1984 de un Código de la Familia, basado en la jurisprudencia islámica, que incluía varias disposiciones discriminatorias contra las mujeres.

El avance de la corriente islamista se produjo, durante estos años, en el marco de las luchas ideológicas y políticas en el seno del régimen (entre facciones liberales y autoritarias) al tiempo que aumentaba el malestar social debido a la crisis económica de los ochenta. En este sentido, el islamismo vino a ocupar el lugar dejado por el arabismo tras la derrota de esta ideología en el 1967. La alternativa islamista recuperó el contenido movilizador del arabismo redefiniendo la relación entre este y el islamismo. Los islamistas desarrollaron una efectiva estrategia de proselitismo a través de las mezquitas de barrio y las asociaciones caritativas vinculadas a su proyecto sociopolítico. Al mismo tiempo, un sector del movimiento islamista se radicalizó progresivamente como consecuencia de la represión gubernamental y el contacto con otras corrientes más integristas.

Tras la apertura democrática iniciada en 1988, la creación del FIS terminó de movilizar a importantes sectores de la población que se sentían excluidos del sistema y que encontraron en el discurso islamista una nueva alternativa.

Pero la decisión del régimen de excluir a los actores islamistas del escenario político y el recurso a las armas de varios grupos islamistas radicales terminaron con el proceso democrático.

Las consecuencias de los diez años de violencias, agresiones y terror de la «década negra» han dejado una profunda huella en la memoria de una sociedad marcada a fuego por la herencia del conflicto.

A lo largo de este sangriento enfrentamiento, la división entre propuestas religiosas y seculares se hizo, evidentemente, mucho más profunda, mientras que en el seno de la sociedad civil se produjo una fragmentación paralela. La escisión que supuso la polarización entre «erradicadores» (defensores de la postura del ejército) y «reconciliadores» (partidarios de un diálogo con los islamistas) continúa vigente en la memoria asociativa. La iniciativa de San Egidio²⁹ no solo movilizó a los partidos políticos, también las organizaciones de la sociedad

29. En noviembre de 1994 se reunieron en Roma, con la desaprobación del gobierno argelino, los principales partidos de la oposición (FIS, FLN, FFS, MDA, PT, Ennhada) y Ali Yahia Abdenour (presidente de la Ligue algérienne des droits de l'Homme). Fruto de esta reunión fue la propuesta en 1995 de un Contrato Nacional para poner fin a la violencia acordado por todos los participantes. El gobierno rechazó el texto y la escisión social y política entre «erradicadores» se hizo aún más profunda.

civil (muchas de ellas próximas a diferentes partidos) se posicionaron respecto a la propuesta: unos a favor del diálogo (como la LADDH) y otras en contra (varias asociaciones feministas). Las mujeres fueron unas de las principales víctimas de la corriente conservadora y de regresión social preconizada por los islamistas durante los años ochenta y noventa, razón por la cual una gran parte de las asociaciones de mujeres progresistas defensoras de la igualdad se posicionaron contra el diálogo con los actores islamistas.

La oficialización de la impunidad y del silencio sobre los acontecimientos de la «década negra» que impone la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale supone un duro revés para el restablecimiento de la cohesión social a través de un proceso de justicia transicional. El silencio y la inacción de una gran parte de la sociedad civil argelina respecto al atentado contra los derechos humanos y la justicia universal que implica el Plan de Reconciliación Nacional impulsado por Buteflika no hace sino exacerbar la fragmentación social impidiendo la rehabilitación de los vínculos sociales. El movimiento de víctimas del terrorismo de la década de los noventa (Collectif Des Familles de Disparus en Algérie —CFDA-Sos Disparus—, Soumoud, Djazairouna...), por ejemplo, trabaja con muy escasos apoyos de otros actores de la sociedad civil que no parecen situar las demandas de verdad y justicia entre sus prioridades. Estas asociaciones, sin embargo, siguen una estrategia de colaboración en red con otras OSC para que sus reivindicaciones no sean olvidadas. Djazairouna, por ejemplo, trabaja en red con varias asociaciones de mujeres en campañas contra la violencia de género y por la igualdad entre los sexos mientras que CFDA-Sos Disparus colabora con sindicatos y asociaciones de derechos humanos.

Conflictos generacionales

Como hemos apuntado al inicio de este texto, una de las principales causas de la fragmentación social son los conflictos generacionales. El sociólogo Nasser Jabi ha identificado tres grupos generacionales y descrito las dinámicas relacionales entre ellos: la generación de la independencia y de la construcción del Estado-nación, la generación que desarrolló el aparato del Estado y la generación de los ochenta, nacida en la crisis y la falta de expectativas (Jabi, 2012). La primera

generación, de origen rural y popular, ejerce el poder desde la independencia a través de un sistema que no ha abierto la puerta a un trasvase de poder a la siguiente generación. La segunda generación, por el contrario, se ha socializado en los núcleos urbanos, los centros educativos y las organizaciones políticas, sindicales y asociativas más o menos toleradas por el régimen. Esta generación, que constituye el grueso de la actual clase media urbana, está profundamente dividida por las polémicas y disensiones culturales y políticas. Por último, la tercera generación, que ha crecido en la cultura de la globalización, el consumismo y el individualismo, se caracteriza por un rechazo visceral hacia toda forma de expresión política. Jabi explica cómo el carácter apolítico de la tercera generación, que culpa a la primera de la situación actual, impide cualquier tipo de colaboración con la segunda, profundamente fragmentada y desacreditada ante la juventud por sus vínculos con el poder y la clase política. Esta ausencia de colaboración provoca que la segunda generación (fundadora del movimiento asociativo y entre quienes se cuentan sus principales representantes) no sea capaz de reorientar el malestar de una juventud que solo conoce las revueltas callejeras como forma de expresión, hacia un movimiento de contestación política.

La dificultad para establecer relaciones de cooperación entre los tres grupos generacionales identificados por Jabi es una de las principales debilidades de la sociedad civil argelina. Un ejemplo de ello fue la *Coordination National pour un Changement Democratique* (CNCD), una plataforma informal de la sociedad civil que agrupaba a sindicatos, organizaciones legales o no, partidos políticos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, militantes a título individual, etc. La CNCD fue creada el 21 de enero de 2011 al calor del aumento de las protestas y de lo que estaba ocurriendo en Túnez y Egipto para intentar poner en marcha un movimiento que canalizase el descontento popular y articulase una estrategia de oposición real al régimen. Sin embargo, la iniciativa, como otras que le sucedieron posteriormente, acabó fracasando debido a la escasa movilización social (ausencia del apoyo de las clases populares), las divisiones internas (de tipo generacional y político) y la represión gubernamental (Baamara, 2012).

Otra dimensión de los conflictos generacionales es la falta de un relevo generacional en la sociedad civil. Esta carencia viene determi-

nada por las dificultades del diálogo intergeneracional pero también por una marcada ausencia de voluntad y una falta de estrategia por parte de la generación fundadora del movimiento asociativo y sindical para incorporar a los jóvenes. Este elemento es una de las principales debilidades de la sociedad civil argelina que reproduce en su interior la estructura social patriarcal que sitúa a los jóvenes al margen de la gestión y la toma de decisiones.

Un excelente ejemplo de superación de estas divisiones y de la voluntad de promover el desarrollo de un relevo generacional son los proyectos formativos desarrollados por asociaciones de la segunda generación (AFEPEC, CIDDEF, LADHD, FEC...) dirigidos a los jóvenes. Estos proyectos se apoyan en un doble objetivo: por un lado formar a esa tercera generación que vive en permanente rebelión contra la *hogra* y, por otro, contribuir a crear espacios de reflexión e intercambio intergeneracional que puedan favorecer la organización de acciones conjuntas. La dimensión formativa es sumamente importante ya que contribuye a desarrollar un marco político para el malestar social de la juventud desde el que canalizar y organizar las protestas y reivindicaciones.

Relaciones con los partidos políticos

Las relaciones de la sociedad civil con los partidos políticos son complejas y polémicas.

Tras la apertura del campo político y asociativo de finales de los ochenta, los discursos y acciones de las OSC convergieron con los proyectos de los distintos partidos de oposición. Durante estos años la relación entre asociaciones y partidos fue muy estrecha y las fronteras entre ambos tipos de actores, confusa. Los partidos políticos se apoyaron en las asociaciones para elaborar sus programas políticos al tiempo que recurrieron a ellas buscando apoyos para movilizar a la sociedad.

La «década negra» condujo a una polarización del ámbito político que alcanzó de lleno a la sociedad civil. Las OSC fueron instrumentalizadas para legitimar las distintas posturas políticas frente al conflicto por el poder escenificado por el régimen y los islamistas lo que les supuso un alto coste en términos de debilitación interna y descrédito social. Sin embargo, la crisis de las mediaciones políticas iniciada en los años noventa, que provocó el debilitamiento de

los partidos políticos y con él el de las OSC que se situaban en su ámbito de influencia, ha facilitado la aparición de un debate sobre el papel que deben tener los partidos políticos en la sociedad civil y cómo deben trabajar las OSC de forma complementaria con ellos desde la autonomía.

La tendencia en los últimos años es a avanzar hacia una mayor autonomía de las OSC como requisito para superar las divisiones internas, recuperar el reconocimiento de la población y redefinir su identidad como actores sociales.

En la actualidad, la nueva ley de asociaciones prohíbe las relaciones entre partidos políticos y asociaciones. Según los actores consultados, estas relaciones se limitan en la mayoría de los casos a contactos personales no orgánicos con el objetivo de buscar apoyos para las campañas de incidencia.

Relaciones con el Estado

Las relaciones con el Estado se articulan en dos dimensiones, por un lado el grado de proximidad al poder y, por otro, la existencia de espacios de concertación con las administraciones públicas.

Respecto al grado de proximidad de los actores de la sociedad civil al régimen este varía desde la total lealtad hasta una autonomía marcada por la represión y el acoso. Las estrategias de manipulación, cooptación e injerencia mencionadas previamente hacen difícil a muchas OSC sustraerse a la influencia del régimen.

En cuanto a los espacios de diálogo y concertación entre sociedad civil y poderes públicos, estos son escasos y no están formalizados. Siguiendo la lógica política de un régimen que no reconoce a la sociedad civil como socia, existe entre ambos una relación de confrontación y desconfianza. No hay ninguna instancia formal de interlocución del Estado con asociaciones y sindicatos si bien según el sector de actividad, las OSC pueden entrar en contacto con instituciones como la Direction de la jeunesse et des sports, la Direction de la culture, la Direction de l'environnement o la Direction des affaires sociales que, en cooperación con el ministerio del que cada una depende, tienen programas de subvenciones para las asociaciones.

Las experiencias de trabajo conjunto entre asociaciones y administraciones públicas se reducen prácticamente al nivel local y

siguen estando basadas, en su mayoría, en contactos personales de los miembros de las asociaciones por lo que dependen del capital social de estos. A pesar de ello, parece que se está produciendo un progresivo desarrollo de las experiencias de partenariado gracias al infatigable trabajo de las asociaciones. Se abren nuevos espacios de colaboración con las administraciones locales sobre todo para trabajar con colectivos en situación de vulnerabilidad, un sector de intervención en el que las asociaciones actúan como prestatarias de unos servicios que antes de las reformas estructurales eran públicos. La profesionalización alcanzada por ciertas asociaciones fruto de su experiencia ha hecho de ellas unas socias potenciales para las administraciones locales y regionales que necesitan de sus capacidades para asegurar la protección social de una población cada vez más vulnerable. La cuestión es que, de momento, la voluntad de las administraciones parece ser más la de mantener una relación instrumental con las asociaciones en función de su valor como prestatarias de estos servicios, que de convertirlas en verdaderas interlocutoras para la mejora de la gestión local y regional.

Una experiencia particular es la de la asociación Jeunes Idles de Bejaia, en Cabilia, cuyos miembros decidieron que para lograr sus objetivos el espacio asociativo no era suficiente, que debían abrir su estrategia al ámbito político a nivel local. Decidieron entonces que uno de ellos, se presentase a las elecciones de Ouzellaguen de cuyo ayuntamiento es hoy vicepresidente. Desde entonces el municipio se ha convertido en una referencia de trabajo conjunto entre asociaciones y administraciones locales.

Este caso ejemplifica una tendencia cada vez más al alza en las relaciones entre el ámbito asociativo y el de las administraciones locales que consiste en recorrer el camino inverso al de hace veinte años. Si a finales de los 80 y 90 eran los militantes de los partidos políticos quienes creaban asociaciones, ahora son las asociaciones quienes toman el escenario político para acceder a los espacios de gestión pública, expandir sus horizontes de acción y aumentar el impacto del trabajo asociativo. Ante las dificultades para ser involucradas en la gestión de los asuntos públicos y los límites impuestos a la acción asociativa por la falta de voluntad de las administraciones públicas y un marco jurídico muy restrictivo, las asociaciones se abren hoy al trabajo desde otros espacios que multipliquen sus posibilidades

de acción. No se trata de diversificar y aumentar los apoyos sociales como era el caso de la estrategia de los partidos políticos que creaban asociaciones en distintos sectores de intervención a través de sus militantes, estas asociaciones buscan aumentar su capacidad de transformación social a través de la reinención del vínculo entre lo asociativo y la gestión de lo público.

A nivel nacional, en cambio, la interlocución con los poderes públicos se vuelve más difícil y las colaboraciones entre asociaciones y entes públicos mucho más escasas. La mayoría de experiencias en este sentido suelen estar protagonizadas por organizaciones cuya proximidad al régimen y su vinculación a las estructuras del sistema político dificultan la valoración de la experiencia en términos de una verdadera concertación entre actores independientes de la sociedad civil y el Estado.

En el caso de los sindicatos autónomos, su marginación y exclusión del diálogo social a favor de la UGTA, institucionalizada por el poder en la práctica como único interlocutor del ámbito sindical, es total.

Referencias bibliográficas

- ALVARADO, David (2013), «Argelia en transición. Después de Bouteflika, ¿quién?» en *Opinión CIDOB*, n.º 193, publicado el 07 junio 2013. URL: http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/argelia_en_transicion_despues_de_bouteflika_quien
- AMAR (2011), *Etude d'identification et de faisabilité du projet de «Centre de ressources pour les ONGs algériennes»*.
- AMNESTY INTERNATIONAL (2013), *Rapport 2013. La situation des droits humains dans le monde*. URL: <http://www.amnesty.org/fr/annual-report/2013>
- BAAMARA, Layla (2012), «(Més)aventures d'une coalition contestataire: le cas de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD) en Algérie» en *L'Année du Maghreb* [en línea], VIII|2012. URL: <http://anneemaghreb.revues.org/1444>; DOI: 10.4000/anneemaghreb.1444.
- BUSTOS, Rafael (2012), *Análisis de OPEMAM. Ficha electoral Argelia. Elecciones legislativas 10 de mayo de 2012*, Observatorio Político

- y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (UAM).
- Centre d'Information et de Documentation sur les Droits de l'Enfant et de la Femme CIDDEF (2008), *Connaissance des droits des Femmes et des Enfants en Algérie. Enquete auprès des adultes de 18 ans et plus*. URL: <http://www.ciddef-dz.com/pages-index/autres-publications-femmes-politique-page1.html>
- Conseil National Economique et Social CNES (2011), «Atelier 2: Système de protection sociale et solidarité nationale: les conditions de sa pérennité et de sa durabilité» en *Etats Généraux de la Société Civile*.
- Collectif Des Familles de Disparus en Algérie CFDA y Cairo Institute for Human Rights Studies CIHRS (2012), *Rapport à l'attention du Conseil des droits de l'Homme dans le cadre de l'Examen Périodique Universel (EPU) Observations du CFDA et du CIHRS sur la situation des droits de l'Homme en l'Algérie*.
- Fédération internationale des droits de l'Homme FIDH y Ligue algérienne pour la défense des droits de l'Homme LADDH (2010), *La mal vie : situation des droits économiques, sociaux et culturels en Algérie*. URL: <http://www.fidh.org/IMG/pdf/AlgerieDESCfr.pdf>.
- CHIBANI, Ali (2011), «Algérie : les raisons d'un soulèvement» en *Le Monde Diplomatique*, edición del 13 de enero de 2011. URL: <http://danactu-resistance.over-blog.com/article-algerie-en-2010-plus-de-9000-emeutes-les-raisons-d-un-soulevement-65406999.html>
- DRIS AÏT HAMADOUCHE, Louisa, y DRIS, Chérif (2012), «De la résilience des régimes autoritaires : la complexité algérienne» en *L'Année du Maghreb* [en línea], VIII Dossier: Un printemps arabe? Algérie L'année politique. URL: <http://anneemaghreb.revues.org/1503>
- ECOTECHNICS (2009), *Les étudiantes algériennes et le féminisme. Etude/enquete de la association Femmes en Communication*.
- FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2012), *Global Gender Gap Report 2012*. URL: <http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap-2012>
- HUMAN RIGHTS WATCH (2013), *World Report 2013, Events of 2012*, URL: <http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/algeria>.

- ICEX (2011), *Informe económico y comercial de Argelia*, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Argel, actualizado en mayo de 2011. URL: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4508914,00.html
- JABI, Abdelnasser (2012), «The Impasse of Political Transition in Algeria: Three Generations and Two Scenarios», Arab Center for research and Policy Studies. Doha Institute. <http://english.dohainstitute.org/>
- KERVYN, Jeanne y GÉZE, François (2004), «L'organisation des forces de répression» en *Comité Justice pour l'Algérie*, Dossier n.º 16.
- LAKHDAR, Siad (2012), «Le chômage handicape les jeunes» publicado en *La Tribune* el 24 de julio de 2012. URL: <http://www.latribune-online.com/suplements/thema/70419.html>
- MACCALLISTER, Edward (2013), «Immunity to the Arab Spring? Fear, Fatigue and fragmentation in Algeria» en *New Middle Eastern Studies*, n.º 3.
- Office Nationale des Statistiques ONS (2010), *Enquête Emploi 2010*. URL: <http://www.ons.dz/>.
- (2011), *Enquête emploi auprès des ménages – 2011*, Collections statistiques n. 173. URL: <http://www.ons.dz/>.
- RAJ (2012), *Sondage d'opinion sur la jeunesse et la politique*
- REMDH (2012): *Réformes politiques ou verrouillage supplémentaire de la société civile et du champ politique? Une analyse critique*. URL: http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/remdh_reformes_politiques_2012.pdf
- ROLNIK, Rachel (2013), «Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context», Human Rights Council Twenty-second session, Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. URL: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/111/56/PDF/G1311156.pdf?OpenElement>
- SALHI, Brahim (2010), *Algérie. Citoyenneté et identité*. Tizi Ouzou, Achab y KARAOUZÈNE, Mohamed (2007), *Le mouvement associatif en Algérie: Histoire, législation, état des lieux*, Unité de Gestion de Programme – UGP/ONGs.

- THIEUX, Laurence (2010), *Rapport sur le Mouvement Associatif et la Femme dans le Milieu Rural en Algérie*, CERAI. URL: http://www.iecah.org/web/images/stories/publicaciones/otros/descargas/rapport_iecah_cerai.pdf
- (2012), «Le secteur associatif en Algérie: la difficile émergence d'un espace de contestation politique» en *L'Année du Maghreb* [en línea], V|2009. URL : <http://anneemaghreb.revues.org/545> ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.545

III. LA SOCIEDAD CIVIL EN TÚNEZ DESPUÉS DE LA CAÍDA DE BEN ALI

Awatef Ketiti*

Desde el estallido de la revuelta popular¹ en Túnez y el derrocamiento del régimen dictatorial de Ben Ali el 14 de enero de 2011, el país ha emprendido un proceso de cambio y de transformación en todos los ámbitos. Con la conquista de la libertad de expresión ha emergido un importante activismo protagonizado por nuevos actores políticos y sociales. Esta nueva sociedad civil, que ha demostrado en estos últimos años una gran capacidad de movilización social, ha liderado y promovido los debates que han estado marcando la agenda política de este período de transición. En medio de la agitación propia de cualquier proceso de transición, del caos por la profusión de tantos actores políticos y sociales y de la ansiedad por aprovechar al máximo la libertad recién adquirida, la sociedad civil se ha convertido en un influyente actor en esta nueva escena política. Sin embargo, todas estas dificultades y problemas de la transición constituyen un riesgo potencial para la sociedad civil, su dinámica interna y su evolución.

El cambio político no ha traído todavía las transformaciones y mejoras anheladas. Túnez sufre en estos momentos una aguda crisis económica, un incremento importante del desempleo (uno de los factores detonantes de la revuelta popular), una inquietante

*Profesora de Comunicación en el departamento de Teoría de los lenguajes y ciencias de la comunicación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia.

1. Para no entrar en el debate sobre la definición conceptual de los cambios políticos en Túnez, que no constituye una prioridad en este estudio, utilizaremos invariablemente los términos más usados «revuelta popular» y «revolución».

inestabilidad política y una precaria situación social. Algunos de los nuevos debates sociales, además, amenazan con ralentizar el ritmo del cambio. Entre ellos son especialmente importantes los relativos a los derechos de la mujer y su protección jurídica, la islamización del Estado y la sociedad, la amenaza a las libertades individuales y colectivas y el incremento de la violencia y represión del nuevo gobierno de transición ante la naciente sociedad civil.

Contexto y entorno de la sociedad civil

La sociedad civil tunecina se mueve en un entorno de permanente inestabilidad, tensión y cambio. La transición del régimen dictatorial de Ben Ali a un nuevo modelo de gobernabilidad se anuncia particularmente difícil y compleja. La sociedad está todavía en un proceso de búsqueda de referentes culturales, sociales y económicos sobre los cuales cimentar la Constitución en curso. Si bien esta intensificación del debate sociopolítico ha permitido la participación de todas las fuerzas sociales, también ha puesto de manifiesto la fractura ideológica, política y social del pueblo tunecino y sus consecuencias sobre la propia transición democrática y la recuperación económica del país. Las posibilidades de cambio social y de construcción de nuevos modelos de gobernabilidad conviven con una aguda crisis en los órdenes político, económico y social.

Contexto político

Desde la caída del régimen de Ben Ali se han producido grandes cambios en el escenario político de Túnez. Se ha disuelto o «congelado» una parte del dispositivo institucional del Estado y se han creado nuevas instituciones, instancias de participación y formaciones políticas. El partido único Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) ha sido desmantelado y se han legalizado todos los partidos políticos incluyendo aquellos que operaban desde la clandestinidad, como son Ennahda de tendencia islamista y el Parti des Ouvriers de Tunisie (POCT) de orientación izquierdista. En total se han legalizado 144 partidos políticos después de la revuelta social, si bien algunos de ellos han acabado formando coaliciones para poder participar en las elecciones del 23 de octubre de 2011 para la Asamblea Constituyente. Posteriormente, los resultados de los

comicios electorales han reducido a 49 el número de formaciones políticas. Los partidos políticos que responden a seis corrientes distintas de pensamiento político (islamismo, liberalismo, centrismo, nacionalismo, socialismo y ecologismo), no obstante el análisis de los programas políticos, desvela tres grandes tendencias: el conservadurismo, el centrismo y la izquierda (Ben Mami, 2013).

Aún así la sociedad tunecina refleja una fuerte bipolarización en torno a dos proyectos sociopolíticos distintos: el religioso, encarnado por el bloque de partidos conservadores, y el secular, que reagrupa a los partidos liberales y los de izquierda y que, sin negar la identidad islámica de la sociedad, reivindica la separación entre la religión y el estado. Los enconados debates y enfrentamientos ideológicos entre las formaciones islamistas y las de izquierda han tensado el clima social de tal modo que está afectando este período de transición. Otro factor de inestabilidad política es el cambio permanente de gobierno. Desde el derrocamiento de la dictadura en enero de 2011, Túnez ha tenido cinco presidentes de gobierno con gabinetes y equipos diferentes, cambios provocados la mayoría de las veces por la presión de la calle que, a través de huelgas y manifestaciones, muestra su rechazo a las diferentes políticas gubernamentales.

El gobierno interino

Desde la caída de la dictadura en enero de 2011 hasta las primeras elecciones posrevolucionarias en octubre de 2011, Túnez ha tenido tres presidentes de gobierno. En este corto período se han tomado medidas muy importantes como la disolución del partido del anterior régimen Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) y la autorización/legalización de diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Pero, sin duda, la medida más relevante ha sido la anulación de la Constitución de 1956, lo que ha permitido convocar elecciones para conformar la Asamblea Constituyente que deberá encargarse de redactar un nuevo proyecto de constitución. Paralelamente, se ha formado un gobierno provisional que asegure la gestión del estado hasta la redacción de la Constitución y la organización de las primeras elecciones legislativas.

EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas en octubre de 2011 han llevado al poder al partido islamista Ennahda con una mayoría simple de 89 de los 217 escaños, lo cual obligó esta formación a gobernar en coalición con otras dos formaciones políticas: Congrès Pour la République (CPR) —15 escaños (laico, izquierda) y Etakatol 13 escaños (social demócrata). Entre los tres partidos políticos se han distribuido los principales cargos de gobierno, si bien ha sido el partido islamista el más beneficiado colocando a Hamadi Jebali como primer ministro y asumiendo las carteras de Interior, Asuntos Exteriores, Educación, Asuntos Religiosos, Transporte y Comunicación. La Presidencia de la República ha sido asignada al presidente del partido CPR Moncef Marzuki, y el líder del tercer partido Etakatol, Mustafa Ben Jaafar ha sido nombrado presidente de la Asamblea Constituyente

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente está compuesta en un 38% (mayoría) por diputados del partido islamista Ennahda, el resto de escaños están repartidos entre partidos de izquierda, liberales, de centro e independientes. Si bien la suma de votos de todos estos partidos representa el 59% del total, la gran dispersión de formaciones políticas no les ha permitido un número equivalente de escaños. El mandato que la Ley de la Organización Provisional de los Poderes Públicos ha definido para la Asamblea Constituyente consiste en: 1) representar el poder legislativo, 2) elegir al presidente de la Asamblea y al presidente de la República, 3) controlar la gestión del gobierno y 4) redactar la Constitución.

La Asamblea Constituyente ha sido, desde su formación, el escenario de acalorados debates entre las distintas formaciones políticas acerca del modelo de sociedad y su plasmación en el nuevo articulado de la Constitución.

LA NUEVA CONSTITUCIÓN

La nueva Constitución deberá proporcionar el marco jurídico para la gobernanza y los derechos fundamentales, en su redacción trabajan ocho comisiones legislativas permanentes de 25 miembros cada una. La redacción de la nueva Constitución está resultando un proceso complejo y difícil, la sociedad está polarizada en torno

a dos proyectos sociopolíticos distintos: el estado laico y el estado religioso. Este hecho confiere al nuevo marco jurídico una mayor trascendencia. Algunos artículos de la Constitución, como el 1 y el 28, han generado agudas controversias entorno al carácter civil o religioso del Estado y al principio de la igualdad de género. La movilización y la presión de la sociedad civil han obligado al partido islamista Ennahda a retirar sus propuestas de considerar la Sharía islámica como el marco de referencia de las leyes constitucionales y de sustituir el concepto de igualdad por la complementariedad entre hombres y mujeres.

DESAFÍOS POLÍTICOS

El asesinato de dos figuras políticas de la oposición laica, Chokri Belaid (líder del partido de la izquierda Patriotas Demócratas) el 6 de febrero de 2013 y Lotfi Naguedh (liberal laico, Secretario General del partido liberal laico Nida Tunès y de la Unión de los Agricultores en Tatauine) el 18 de octubre de 2012, constituye un punto de inflexión en el nuevo escenario político. Si bien los culpables no han sido aún identificados las sospechas apuntan hacia los grupos salafistas ya que el propio Chokri Belaid había denunciado días antes de su muerte en una programa de televisión amenazas de muerte por parte de grupos islamistas. Los asesinatos políticos representan una verdadera amenaza para los procesos democráticos en Túnez y los partidos de la oposición han advertido de un posible escenario de guerra civil si no llegase a formar un gobierno de salvación nacional que ponga fin a la violencia política, a los discursos de odio y al clima de impunidad que prevalece.

Contexto económico

Muy dependiente de Europa, la economía tunecina ha sufrido un importante retroceso a partir de la crisis financiera mundial en 2008. La caída de los ingresos del sector turístico, la disminución de las remesas en divisas de los inmigrantes y el deterioro de las exportaciones han reducido el PIB a la mitad 2007 y 2010.² A esta situación

2. International Crisis Group. (2012), Tunisie: Relever les défis économiques et sociaux. Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord. N°124, 6 juin, Tunis.

económica hemos de añadir el malestar acumulado en las dos últimas décadas por los altos índices de corrupción sistémica; las desigualdades de desarrollo regionales fruto del fracaso en el reparto equitativo de la riqueza; la tasa de paro entre jóvenes e universitarios que, unida a la reducción del papel empleador del estado, arrojó en 2010 un desempleo del 30% para los jóvenes de 18 a 29 años, y del 50,63%³ en el caso de los jóvenes con estudios universitarios. El panorama económico en estos momentos de transición es de agudización de la crisis y también de resistencia ya que, a pesar de las enormes dificultades, las instituciones financieras siguen funcionando, las empresas tienen una mínima actividad y el sector de turismo se recupera lentamente. La economía tunecina se enfrenta, no obstante, a importantes desafíos. Las mejoras económicas anheladas por amplios sectores de la población relativas a la mejora del empleo, el incremento de salarios y de un desarrollo regional justo y equitativo no se están produciendo. A pesar de algunas medidas de urgencia adoptadas por el Estado no solo no mejoran los indicadores socioeconómicos sino que muestran un claro retroceso, según diversos informes.⁴ Las expectativas socioeconómicas frustradas han incrementado las movilizaciones sociales. Solo entre 2011 y 2012 se han registrado 17.000 actos de protesta social, según datos aportados por el anterior ministro del Interior Ali Laaraydh.⁵ Los actuales indicadores económicos reflejan un panorama general negativo y en proceso de deterioro:

- *Aumento de la inflación*: según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inflación ha alcanzado en enero de 2013 la cifra del 6%, lo que supone un incremento respecto de los datos de octubre (5,3%) y de noviembre (5,5%) de 2002. Para Moez El Judi, experto económico y financiero y presidente de la

3. *Ibíd.*

4. Ministère du Développement Régional et de la Planification (2012), Indicateurs de Développement Régional de la Tunisie: Étude comparative en termes de développement, Tunis. Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme. (2012) La Tunisie d'après le 14 Janvier et son économie politique et sociale, RMDH, Tunis.

5. «Tunisie: Séance exceptionnelle de l'Assemblée constituante», Xinhua, 13 avril 2012.

Asociación Tunecina de la Gobernanza,⁶ este dato es especialmente grave ya que dobla la peligrosa frontera del 3% que los expertos aconsejan no superar. Esta inflación está afectando al conjunto de la economía nacional, a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y, especialmente, a los más desfavorecidos, cada día más lejos de poder cubrir sus necesidades básicas.

- *Incremento del desempleo*: según los datos del último informe del Instituto Nacional de las Estadística, en 2013 se ha llegado a la cifra de 653.000 parados, lo que supone el (16,7%) del total de la población activa (3,9 millones). Esta tasa de desempleo desvela las siguientes tendencias:
 1. Aumento del paro entre los jóvenes cualificados. El desempleo de los jóvenes universitarios, actores clave del sublevamiento social, ha aumentado en un 0,5% es decir, hay 227.000 nuevos parados universitarios más en el mercado, lo que representa una tasa total del (33,2%).
 2. Feminización del desempleo: Las mujeres están más afectadas por el desempleo (24,2%) que los varones (13,9%). Esta tasa de paro femenino se incrementa cuando comparamos las tasas de desempleo de las mujeres diplomadas (47,5%) con las de sus homólogos varones (20,6%).
 3. Desigualdad regional del desempleo. El paro sigue afectando más a las zonas marginadas del centro-oeste (25%) que a la capital y su área metropolitana (11,4%).

Estructura y dinámica de la sociedad civil

Evolución histórica de la sociedad civil

Al igual que el resto de actores políticos y sociales durante el régimen de Ben Ali, la sociedad civil tunecina estaba bajo el yugo de

6. Joudi, Moez. (2012), «Tunisie-Economie: Politique de relance ou politique de rigueur ?» WMC actualités, publicación electrónica en <http://www.turess.com/fr/wmc/114369> [consultado el 27 de febrero de 2013].

la dictadura y la represión. Debilitada y muy controlada no pudo llegar a ser un contrapoder. Si bien hubo un *boom* asociativo en los primeros años del mandato de Ben Ali (3.497 nuevas asociaciones entre 1988 y 1989), lo cierto es que estas entidades fueron creadas para aparentar la apertura democrática del régimen. De hecho, la mayoría de estas asociaciones son de naturaleza caritativa, deportiva o pertenecen a las llamadas entidades de «Acción y Desarrollo de las Escuelas Primarias». Después de este *boom*, el ritmo de creación de nuevas asociaciones se ha ralentizado creándose alrededor de 191 anualmente durante las décadas de los años 1990 y 2000.⁷ A partir del año 2000 y hasta la Revolución, la mayoría de las aproximadamente 9.000 asociaciones existentes en Túnez gravitaban alrededor de la órbita del poder. La reforma de la ley de las asociaciones de 1992 que prohibía a las entidades rechazar una solicitud de adhesión, permitió a las autoridades vigilar desde dentro el mundo asociativo y a sus activistas, obstaculizando así un normal desarrollo de la sociedad civil. No obstante, y a pesar del férreo control gubernamental, algunas entidades y asociaciones⁸ han logrado, con dificultad, ejercer un papel de contrapoder. A menudo, desde la clandestinidad, los activistas de estas entidades han podido dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional las injusticias y atentados contra los derechos humanos del régimen de Ben Ali, quebrando esa imagen idílica que la dictadura intentaba proyectar hacia el exterior. Otras asociaciones profesionales y sindicales han podido romper el cerco de la dictadura y organizar algunos actos de protesta como el sindicato Unión Générales des Travailleurs Tunisiens; la Association des Jeunes Avocats, la Association de Magistrats Tunisiens o el Syndicat National des Journalistes Tunisiens. Algunos activistas han recurrido al activismo virtual (blogueros) para denunciar a la dictadura y organizar redes activistas tanto dentro como fuera del

7. Fondation For the Futur, (2013), Étude sur les organisations de la société civile en Tunisie, Rapport final. FFF, Tunis.

8. Estas entidades son: Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH), Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), Association de Lutte Contre la Torture en Tunisie (ALTT), la sección local de Amnesty International, Conseil national pour les Libertés en Tunisie (CNLT), Association de Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD).

país: *Débat Tunisie* (de la bloguera Amira Yahyaoui), *Parti Pirate Tunisien*, *Nawat.org*, *Sayeb Salah Ya Ammar*, *Takriz*, *Révolution Tunisienne*, *Lina Ben Mhenni*, o @slim404. El activismo de esta pequeña parte de la sociedad civil, apoyado por organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Right Watch, Amnistía Internacional, Federación Internacional de los Derechos Humanos o Reporteros sin Fronteras, derivó en acción política, en parte debido al bajo perfil político de los partidos oficiales de la oposición. Y es precisamente esta militancia política uno de los ejes del debate acerca de la identidad y la definición de la sociedad civil tunecina después de la Revolución.

Actores sociales durante la Revolución y la transición

El sociólogo Mohamed Kerrou argumenta que tras la dictadura y de forma casi espontánea han surgido «nuevos actores de la revolución y de la transición».⁹ Según el sociólogo, estas nuevas fuerzas sociales son:

- *Los diplomados parados*: Una nueva categoría social cuya movilización comenzó a adquirir relevancia con el alarmante incremento del número de diplomados parados (42%). Este movimiento, originado en la ciudad minera de Gafsa, comenzó en 2007 a organizarse en comités, tanto a nivel regional como nacional, para reivindicar su derecho al empleo. Su participación en el levantamiento popular ha sido clave puesto que ha movilizado a todas las categorías sociales marginadas y desfavorecidas en las regiones y ha liderado, durante la Revolución, las protestas por el empleo y justicia social.
- *Los militantes sindicalistas de base*: Si bien el sindicalismo en Túnez ha mantenido una trayectoria autónoma desde 1946 hasta 1984, la presión de los gobiernos de Bourguiba y Ben Ali acabaron por someter a la cúpula directiva de todos los sindicatos, incluso del mayoritario Unión Générale des Travailleurs Tunisiens. A pesar de ello las bases han seguido

9. Kerrou, Mohamed (2011), «Les nouveaux acteurs de la révolution et de la transition politique». IADH. Tunisie.

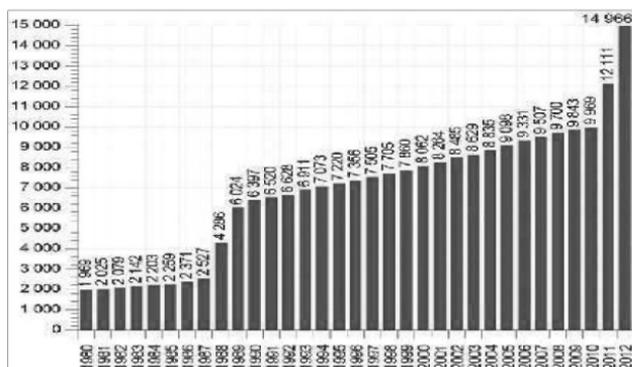
manteniendo un espíritu militante y combativo. De hecho, han sido estas bases las que han protagonizado en 2008 las protestas mineras de Gafsa y también las que han apoyado en la calle el movimiento de los jóvenes parados en la revolución de 2011. La presión de estas bases militantes para conseguir la huelga general del 14 de enero de 2011 fue clave para la caída definitiva de Ben Ali.

- *Los abogados*: El colectivo de los abogados ha surgido como una nueva fuerza social que ejerce de portavoz y legitima las reivindicaciones de la población marginada y oprimida por la dictadura. A veces como acompañantes, a veces liderando con sus togas las manifestaciones, han conseguido que los tunecinos y tunecinas los perciban como defensores y garantes del pueblo.
- *Los ciberactivistas*: Este colectivo ha jugado un papel fundamental tanto en la difusión de la información como en la organización de los movimientos de protesta. Representan un nuevo modelo de militancia que, ante el control y cierre del espacio mediático por parte del gobierno, han conseguido crear un nuevo espacio fuera del control del Estado y también de los partidos políticos. Un nuevo espacio para el encuentro, el debate, el intercambio y la comunicación y una apuesta firme ante cualquier intento de sofocar a la sociedad civil.

Cartografía de la sociedad civil

En marzo de 2013 IFEDA contabilizó 15.167 asociaciones registradas. En el momento de elaboración de este informe, el dato no se había trasladado todavía a los gráficos y estadísticas del centro. Como podemos ver en el siguiente gráfico hay dos períodos en los que el número de asociaciones experimenta acelerados crecimientos: el primero de ellos ocurre durante los dos primeros años del gobierno de Ben Ali (1988-1989), donde el número de asociaciones pasa de 2.527 en 1987 a 6.024 en 1989; el segundo período pertenece ya al momento posrevolucionario actual, en el que se pasa de 9.969 asociaciones en 2010 a las 14.966 que constan en los últimos registros del IFEDA.

Gráfico 1
Evolución del número de las asociaciones (1980-2012)



Fuente: IFEDA.

El ritmo de creación de nuevas asociaciones refleja un importante incremento anual comparado con el período de régimen de Ben Ali. La media anual de creación de nuevas asociaciones entre 2011 y 2012 alcanzó la cifra de 4.997 después de la revolución, mientras que era de 197 asociaciones anuales en la época anterior.

Distribución geográfica de las asociaciones

La organización territorial política de Túnez está conformada por 24 gobernaciones. En el período del antiguo régimen las asociaciones estaban concentradas en la capital y en las grandes ciudades costeras como Sfax, Sousse, Nabeul y Monastir. Esta distribución refleja las desigualdades regionales que durante décadas han sufrido sobre todo las regiones del sur y del interior. El cambio político y la nueva dinámica de la sociedad civil han transformado la configuración regional del mapa asociativo ya que ahora se aprecia un claro incremento del número de asociaciones en todo el país sin excepción, especialmente en las regiones marginadas del interior.

Si bien los datos muestran que las regiones costeras (Túnez, Sfax y Nabeul) siguen liderando la creación de asociaciones, se aprecia, sin embargo, una verdadera redistribución territorial en todo el país. A modo de ejemplo, podemos citar cómo el número de asociaciones en ciudades marginadas como Sidi Bouzid y Kasserine supera el

Tabla 1
Distribución de las asociaciones por gobernación (2012)

Gobernación	Número de asociaciones	Gobernación	Número de asociaciones
Tunis	2064	Jendouba	470
Sfax	1366	Kairouna	463
Nabeul	1078	Gafsa	463
Medenine	729	Mahdia	435
Bizerte	662	Tataouine	386
Sousse	656	Kebili	367
Ariana	645	Siliana	362
Sidi Bouzid	642	Kef	360
Kasserine	626	Beja	355
Ben Arous	525	Manouba	312
Monsatir	520	Zagouan	228
Gabes	504	Tozeur	163

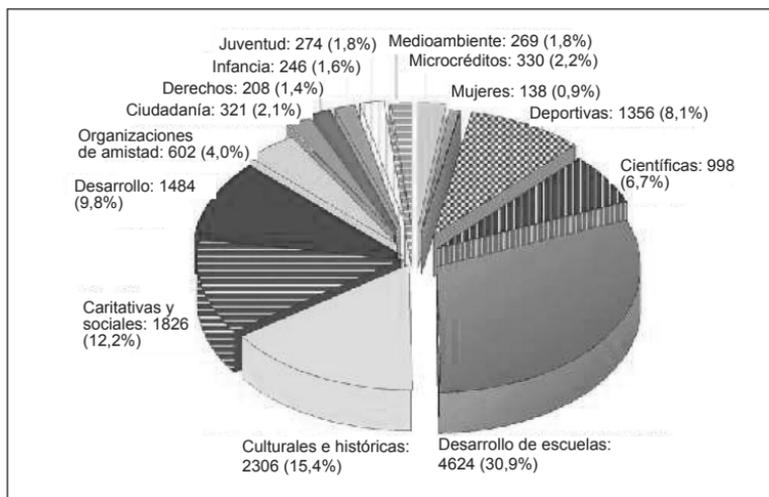
Fuente: IFEDA.

número de asociaciones de otras ciudades más privilegiadas como Monastir, Ben Arous o Mahdia. Queda pendiente, no obstante, un análisis más cualitativo de la sociedad civil que arroje luz sobre el verdadero impacto de todo este entramado asociativo ya que los datos cuantitativos regionales pueden estar engrosados por asociaciones de tipo caritativo o deportivo.

Tipología de las nuevas asociaciones

El censo tunecino de asociaciones contempla 13 amplias categorías: Juventud, Ciudadanía, Derecho, Medio-ambiente, Desarrollo Escolar, Infancia, Desarrollo, Beneficencia y social, Cultura, Amistad, Deporte, Mujer, Ciencia. Actualmente se está trabajando en una revisión del sistema de categorías más acorde con el complejo mapa asociativo actual. El censo desvela que de las 4.997 asociaciones creadas entre 2011 y 2012 el mayor porcentaje (1.130 asociaciones) se dedica a obras sociales y beneficencia, por delante de las asociaciones culturales y artísticas con la cifra (1.018), de las asociaciones de desarrollo (935) y de las asociaciones de carácter científico (494).

Gráfico 2
Distribución de asociaciones por categoría-Enero 2013.
Centro IFEDA



Cabe resaltar el incremento de asociaciones en los ámbitos en los cuales la dictadura había ejercido un férreo control y censura como son las asociaciones defensoras de los derechos humanos y la ciudadanía (500 asociaciones). Sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2010 solo el 1% de las 9.969 asociaciones existentes intervenían en el ámbito de los derechos humanos.¹⁰ Otro de los aspectos importantes es la variedad del nuevo mapa asociativo que desde la Revolución va tejiendo la sociedad civil tunecina: Ciudadanía (310 asociaciones), Derechos (190 asociaciones), Medio Ambiente (167), Mujeres (68), Juventud (63), Desarrollo (935). Destacar también que existe una relación directamente proporcional entre la movilización social de una región en el período revolucionario y posrevolucionario y el número de asociaciones de desarrollo. La región de Kaserine, por ejemplo, una de las primeras regiones sublevadas contra la dictadura, dispone ahora del mayor número de

10. Foundation For The Future, (2013). Op.cit.

asociaciones de desarrollo (129), después de la capital Túnez (154). En cuarto lugar aparece Sidi Buzid, cuna de la revolución, con 54 asociaciones de desarrollo. Resulta significativo (y novedoso) que todas las regiones tengan asociaciones de defensa y promoción del derecho, la ciudadanía y la democracia, a pesar de que el mayor número de ellas estén concentradas en la capital y en las grandes ciudades costeras como Sousse, Sfax o Nabeul.

LAS ASOCIACIONES ISLAMISTAS

El alto porcentaje de asociaciones de corte caritativo o de beneficencia resulta sumamente llamativo. Representan el 23% del total, habiendo alcanzado la cifra de 1.260 asociaciones. Su crecimiento ha ido de la mano de la legalización de los partidos políticos religiosos. De hecho, estas nuevas asociaciones tienen una orientación religiosa y están en la órbita de partidos políticos conservadores. Si no existe actualmente ningún estudio sobre sus actividades e impacto social es en parte por la necesidad de ocultar sus verdaderos objetivos y su opaca financiación. En un artículo publicado en la página web de la red de asociaciones *Touensa*, titulado «Tunisie: L'inquiétante opacité du milieu associatif islamique» (Ben Hamida, 2012). Hassen Ben Hamida denuncia la concesión de subvenciones (dinero catari) por parte del gobierno islamista a estas asociaciones sin concurso público. El autor cita como prueba la firma de un acuerdo de entendimiento entre el entonces jefe de gobierno tunecino Hamadi Jebali y las autoridades catari. Esta firma compromete la cooperación entre la «Association Tunisienne de Coopération et de Communication Sociale», la Association Tunisie Humanitaire del lado tunecino, con la Association de Bienfaisance de Qatar. El autor denuncia que gran parte de estas asociaciones caritativas son de tendencia islamista y que también reciben fondos de organizaciones internacionales de tendencia islamista radicadas en Gran Bretaña o en Arabia Saudí (Human Appeal, WAMY, Islamic Relief). El proyecto y marco de acción de estas asociaciones, más que orientado al desarrollo, se limita a actos de beneficencia: comida, ropa, ayudas para celebrar matrimonios, mesas de caridad en Ramadán, etc. Este tipo de asociaciones está presente en todas las regiones del país y trabaja sobre todo en los barrios más pobres y marginados.

Activismo virtual: un nuevo componente de la sociedad civil

La llamada Primavera Árabe ha puesto de manifiesto el importante papel de los ciberactivistas como nuevos actores de la sociedad civil. En el caso particular de Túnez este ciberactivismo ha resultado clave en la denuncia de los abusos de la dictadura antes y durante la Revolución. Las redes sociales han permitido a los activistas tunecinos contar al mundo la inmolación de Mohamed Buazizi y los detalles de la revuelta popular en todas las ciudades y regiones. Los internautas no solo han roto el cerco mediático impuesto por la dictadura a través de relatos, fotografías o noticias sino que también han sido capaces de movilizar a estudiantes, obreros, marginados y parados en manifestaciones y concentraciones a lo largo y ancho del país. La importancia del ciberactivismo en Túnez ha ido creciendo con el aumento del número de usuarios de la red que alcanzó 3 millones en 2012 para una población de 11 millones. Un tercio de la población sigue las noticias por Internet. El perfil de la mayoría de los usuarios de la red es joven, instruido y con suficientes conocimientos en las nuevas tecnologías. Los distintos estudios realizados sobre los usuarios de la red tunecinos después de la Revolución destacan dos principales tendencias: la primera se refiere al liderazgo de Facebook, durante tres años consecutivos (2010-2013) en el ranking de las redes más utilizadas con un total de 2.997.260 cuentas de Facebook y un incremento del 40% en el período de enero de 2011 a enero de 2012 (primeros años de la transición);¹¹ la segunda apunta hacia el interés por seguir las noticias y los acontecimientos a través de Internet, de hecho, las páginas de carácter informativo son las más visitadas de la red.

La experiencia tunecina de la transición ha demostrado la extraordinaria rapidez y dinamismo del activismo virtual. La mayoría de las convocatorias de movilización producidas durante el proceso de debate de la Constitución se han organizado desde el espacio virtual. La presión de las redes sociales sobre las decisiones políticas se ha convertido en un fenómeno habitual. La red virtual está ayudando también a muchas asociaciones a incrementar su notoriedad y también el número de seguidores, aunque estos sean

11. Fuente: Open Sigma: <http://www.e-sigmaconseil.com/>

virtuales. Algunos de los ciberactivistas y blogueros se han convertido en importantes personalidades como la activista Lina Ben Mhenni, candidata al premio Noble de la Paz (2011) o el activista Slim Amamu conocido como @slim404 y redactor de *ReadWriteWeb*, que fue nombrado Secretario de Juventud y Deporte después de la Revolución. Páginas webs como Nawat.org, Révolution Tunisienne, Parti Pirate Tunisien o Takriz, han jugado, asimismo, un importante papel durante y tras la Revolución.

Activismo virtual de las asociaciones

Algunos de los ciberactivistas tunecinos han llegado a crear sus propias asociaciones como es el caso de Sofiane Churabi que ha creado la Association de la Sensibilisation Politique o de la bloguera Amira Yahyaoui, autora de la página web Débat Tunisie, que ha creado la asociación Bawsala (Brújula) para hacer seguimiento y vigilancia de la Asamblea Constituyente y poder informar así al público de todo lo que acontece en el proceso de redacción de la nueva Constitución. La mayoría de las asociaciones creadas por ciberactivistas tienen como misión la sensibilización política y la promoción de los valores de la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. A menudo también son observatorios desde los cuales se vigilan las actuaciones de la clase política (gobierno y oposición) y se denuncian posibles abusos de poder o casos de corrupción. Por otro lado, conscientes del gran potencial que ofrece la red, algunas asociaciones han abierto cuentas en las distintas redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance comunicativo con la población. Los ejemplos son abundantes pero citamos algunos como el papel destacado de vigilancia jugado por las asociaciones en las elecciones del 23 de octubre de 2011 (Asamblea constituyente). La Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (Atide) y la Ligue des électrices tunisiennes (LET) que solo posee un grupo en Facebook compuesto de 595 seguidores y el colectivo Murakibun (Observadores), que es una red de ciudadanos formada por 4.000 observadores de las elecciones. Otras redes de 60 asociaciones y ciudadanos independientes destacaron por su acción ciudadana Lam Echaml a través de la página web lamechaml.org o twitter.com/LamEchaml. La página web touensa.org es una asociación nacida a raíz del lanzamiento de la iniciativa del Pacto Ciudadano en facebook el 12 de enero de 2011,

Touensa al servicio de la alerta y la vigilancia obra en el campo de la ciudadanía y de la sensibilisation política.

También el islamismo tunecino ha entrado con fuerza en el activismo virtual que ha creado numerosas páginas web desde las cuales se hace predicación o se ofrece información de interés para el público de tendencia islamista. Por citar algunos de estos portales podemos destacar Kooora.com o Babnet.

Migrantes tunecinos y codesarrollo

Los tunecinos residentes en el extranjero representan el 10% de la población total¹² y su participación en la Revolución y la transición, además de inédita, ha resultado de capital trascendencia, ya que ha actuado como puente entre los residentes en el país y el mundo exterior. Mediante el uso de las redes sociales y gracias también a las manifestaciones que han organizado en sus países de residencia han contribuido significativamente en el proceso de cambio social. Antes de la Revolución la repercusión de los inmigrantes en el proceso de desarrollo del país se limitaba al envío de remesas a los familiares¹³ y a algún proyecto de codesarrollo lastrado, la mayoría de las veces por la corrupción imperante en el antiguo régimen. Después de la Revolución la participación de los inmigrantes tunecinos ha evolucionado hacia nuevas modalidades de solidaridad. Se han creado nuevas asociaciones que sirven de puente entre los países de residencia y el país de origen en temas de desarrollo y de cooperación, así como redes de asociaciones en el extranjero que posibilitan a los tunecinos residentes participar en el proceso de transición a través de foros y debates virtuales.

La Association des Tunisiens en France (ATF) está impulsando con la colaboración de 60 asociaciones de tunecinos en el extranjero un proyecto a favor de la plena ciudadanía binacional. Liderada por

12. Los inmigrantes representa un millón de personas (600.000 en Francia, 150.000 en Italia, 85.000 en Alemania, 20.000 en Benelux, 13.000 en Suiza, 87.000 en Libia, 18.000 en Arabia Saudí, 16.000 en Argelia, 13.000 en los Emiratos Árabes, 15.000 en Canadá y 13.000 en Estados Unidos, etc. Fuente:<http://assisesdelimmigrationtunisienne.over-blog.com/article-pour-la-creation-d-un-conseil-des-residents-tunisiens-a-l-etranger-crte-69110739.html> [consultado el 13 de marzo de 2012].

13. En 2009 las remesas de los tunecinos inmigrantes representan el 5% del PIB y el 23% del ahorro nacional.

su presidente, Tarek Ben Hina recientemente nombrado miembro de la Alta Instancia Para la Realización de los Objetivos de la Revolución (HIROR), esta plataforma reivindica ampliar el concepto de ciudadanía a través de nuevas estructuras de representación de los inmigrantes y la eliminación de las prácticas de nepotismo que caracterizaron las relaciones entre algunos inmigrantes y las autoridades a través de la Office National des Tunisiens de l'Étranger (OTE). Otro ejemplo representativo es la red Dynamique Citoyenne des Tunisiens à l'Étranger (DCTE),¹⁴ compuesta por asociaciones de inmigrantes independientes y de individuos residentes en el extranjero.

Redes de asociaciones y espacios de coordinación

La creación de redes de asociaciones es una experiencia novedosa en el panorama asociativo nacional. Antes de la Revolución destacaron dos redes asociativas: una de ellas estaba compuesta por OSC del ámbito de los derechos humanos (CNLT, LTDH, LADH, ATFD) y la otra es la red magrebí de asociaciones de mujeres Collectif Maghreb-Égalité 95 cuya misión era la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en el Magreb. Después de la Revolución el fenómeno de la creación de redes se ha intensificado, sobre todo en el primer año de la transición. Las redes se forman siguiendo distintos criterios:

- *Geográfico*: se crean nuevas redes regionales en las grandes ciudades como Sfax (Réseau des Associations pour le développement durable) o Sousse; pero también se están desarrollando redes en regiones más marginadas como Kaserine, Sidi Buzid o Siliana. Algunas asociaciones nacionales como la Unión des Chômeurs Diplômés han desarrollado durante la transición una estructura regional.
- *Sector de intervención*: las redes también se están articulando siguiendo como criterio el sector en el cual intervienen. Así se han creado redes de asociaciones de defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la ciudadanía y la gobernanza participativa, la construcción

14. Página web de la red: <http://www.facebook.com/dynamique.tunisie>, Comunicado de DCTE <http://dcte.free.fr/pdf/DCTE-communique05082011.pdf> [consultada el 23 de febrero de 2013].

democrática y la vigilancia ciudadana, la justicia transicional, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la igualdad y los derechos de la mujer, juventud y empleo, etc.

- *Objetivos comunes*: algunas asociaciones han formado coalición en torno a objetivos comunes. Como ejemplo destacamos la *Coalición pour les Femmes de Tunisie* que fue creada en 2011 y está conformada por 17 asociaciones procedentes de ámbitos tan diversos como los derechos humanos, la ciudadanía, la cultura y comunicación, el desarrollo o el género y que tienen como misión transversal a todas ellas la defensa de la igualdad y el estatuto de la mujer ante la amenaza de las fuerzas religiosas y conservadoras en el poder. Interesante también es el caso de la red de asociaciones Murakibun (observadores) formada por asociaciones de sectores como la cultura, la ciudadanía, el desarrollo o los derechos, y cuyo objetivo es vigilar el proceso de transición democrática y ejercer un continuo control sobre la gestión de gobierno para que transcurran conforme a la legalidad vigente y con total transparencia.
- *Fomento del intercambio y el diálogo*: se trata de iniciativas cuyos objetivos son reunir a las asociaciones de todos los sectores para crear plataformas colaborativas para el intercambio la comunicación y el diálogo entre las asociaciones. La red más ilustrativa es *Lam Chaml* que en árabe significa juntar. Esta red se crea en 2011 de la mano de Tarek Madaoui,¹⁵ y actualmente está formada por 80 asociaciones (de todos los sectores) y cerca de 2.000 ciudadanos independientes. Su objetivo es federar las entidades para consolidar el intercambio, la comunicación y el diálogo en aras de fortalecer la sociedad civil tunecina y crear una plataforma de actuación común en esta fase de transición. Sus principios fundamentales son la defensa de la república, los derechos humanos, la laicidad, la democracia, la igualdad de género y el medio ambiente. Su primera actividad fue la organización de la manifestación que

15. Entrevista realizada con Tarek Madaoui, coordinador de la red Lam Chaml, el 22 de marzo de 2013.

llevaba por lema «Ne touche pas a mes créateurs» en apoyo a los artistas y creadores agredidos por la policía de Ben Ali durante la Revolución y luego por los grupos salafistas.

La red se ha implicado de forma apartidista en la preparación de las elecciones organizando caravanas de sensibilización, las denominadas Veilles Civiques (veladas cívicas), para animar la participación en las elecciones en las regiones más marginadas del país. En 2012 la red ha organizado 11 talleres sobre la elaboración de la Constitución para dejar en evidencia que es un asunto no solo de los diputados sino de toda la ciudadanía. Otro de los ejemplos de este tipo de red lo constituye la Maison des Associations. Esta red es el primer espacio de encuentro de las asociaciones en Túnez y se ha generado en el marco de la cooperación francesa. Financiada por el Institut Français de Túnez (IFT) y creado por la Association Française Développement Sans Frontières (DSF), este espacio asociativo se extiende por múltiples ciudades y regiones del país con el propósito de reunir a las asociaciones, reforzar su trabajo en común, consolidar su expansión y facilitar su colaboración con la sociedad civil francesa.

Colaboración entre las asociaciones

A pesar de las múltiples experiencias de trabajo en red entre las asociaciones y los exitosos resultados de algunas de ellas, este trabajo colaborativo de la sociedad civil está todavía lejos de consolidarse. Según Rami Salhi, director de Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme, y Rim Kéfi de IFEDA¹⁶ la falta de experiencia de las nuevas asociaciones en gestión organizativa y de trabajo en red, unido al clima de inestabilidad y conflictividad que está caracterizando este período de transición, están dificultando enormemente la solidificación de todas estas experiencias. Salua Guiga, coordinadora de la red Coalition pour les Femmes de Tunisie, afirma que la sinergia y entusiasmo que se produce entre las asociaciones al inicio de la creación de una red se va diluyendo poco a poco con el tiempo y al final el trabajo de coordinación se lleva a cabo únicamente gracias al esfuerzo de dos o tres

16. Entrevista con Rami Salhi, director de Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme realizada el 18 de marzo 2013 y entrevista con Rim Kéfi responsable de la comunicación y la documentación del centro IFEDA, el día 15 de marzo 2013.

asociaciones. Este desequilibrio de esfuerzos y dedicación convierte el mantenimiento de la red en una tarea agotadora para las activamente implicadas, hecho que ya ha provocado la caída de varias redes.¹⁷ La falta de recursos económicos y humanos, sobre todo de voluntariado, y la ausencia de locales dificulta también la gestión de las redes. Rami Salhi asegura que la mayoría de las redes quedaron como estructuras huecas y figurativas y que existe una dinámica constante de creación y disolución de redes en toda el área territorial. La ausencia de un proyecto a medio y largo plazo representa una amenaza tanto para las asociaciones como para las redes y la sociedad civil en general. Los resultados del sondeo realizado por el Banco Africano de Desarrollo (2012)¹⁸ muestran que solo el (25%) de las asociaciones forma parte de una red o coalición a nivel local, nacional o internacional.

Nuestros entrevistados insisten en la necesidad de reactivar la experiencia de las redes asociativas porque las sinergias permiten consolidar el conocimiento y el aprendizaje mutuo. No obstante hay que reconocer que la mayoría de las asociaciones que pertenecen a redes lo hacen en el marco de los proyectos de cooperación para el empoderamiento de la sociedad civil (Cooperación Francesa, Foundation For The Future, Red euro mediterránea de los derechos humanos, etc.). De acuerdo con las asociaciones consultadas, más que las deficiencias de estructura, financiación o capacitación, el mayor obstáculo consiste en la politización de las asociaciones que impide la solidaridad y la colaboración entre ellas. Otro de los factores de tensión y desconfianza entre las asociaciones es el desequilibrio regional entre las asociaciones de las grandes ciudades costeras y las regiones marginadas que reivindican la adopción de medidas de discriminación positiva después de tantos años de exclusión. El tejido asociativo requiere, además de apoyo financiero, acompañamiento técnico y formativo para la gestión de redes y el trabajo colaborativo.

17. Entrevista realizada con Saloua Guiga coordinadora de la red Coalition pour les Femmes de Tunisie el 23 de marzo 2013.

18. Banque Africaine de Développement. (2012), La gouvernance participative en Tunisie, BAD, Tunis.

Reivindicaciones de las OSC

La ausencia de información exhaustiva y estructurada dificulta el trazado de un mapa global que muestre las reivindicaciones, objetivos y valores de la sociedad civil tunecina. No obstante, a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo y de la documentación existente, podemos extraer las líneas generales, pautas o tendencias más significativas:

- a) Proliferación y regionalización de iniciativas ciudadanas: en el período de transición se han generado un sinnúmero de iniciativas ciudadanas, reflejo de las ansias de participación en el nuevo régimen democrático y de reivindicación de sus necesidades de «empleo, dignidad, justicia social y desarrollo regional equitativo». La mayoría de estas nuevas asociaciones han articulado su misión y objetivos en torno a los derechos económicos, políticos y sociales, como reflejan las estadísticas sobre los ámbitos de intervención de las asociaciones creadas entre 2011 y 2012. Especialmente significativo resulta también el incremento regional de asociaciones de ámbitos como el desarrollo sostenible, la ciudadanía y la democracia participativa, así como la defensa de los derechos civiles, tal y como corrobora el estudio realizado por Foundation For the Futur.¹⁹
- b) Correlación entre dinámicas asociativas y necesidades sociopolíticas concretas: las primeras elecciones para la Constituyente (octubre de 2011) congregaron una importante participación de la sociedad civil. Numerosas fueron las acciones de sensibilización y manifestaciones para incitar a la ciudadanía tunecina a participar, votar, observar y supervisar todo este proceso electoral. Ejemplo de ello es la creación de la red Lam Chaml o asociaciones como Le Bus Citoyen, Association Pour la Sensibilisation Politique, Touensa, entre otras. La elaboración del texto constitucional también está

19. Foundation for the Futur (2012), Tunisie, Année Zéro: Opinions et perceptions de la société civile tunisienne un an après la révolution : Enquête sur les opinions et perceptions de la société civile tunisienne concernant le nouveau contexte politique, la Constitution et la transition. FFF, Tunis.

provocando una amplia movilización de la sociedad civil, que muestra interés por todos aquellos temas que afectan al proceso democrático.

- c) Las OSC intensifican sus funciones de vigilancia y supervisión de la labor gubernamental: una vez transcurridas las elecciones y formado el nuevo gobierno la sociedad civil ha perdido capacidad de iniciativa y de anticipación. La toma de decisiones ha sido asumida por el nuevo gobierno, relegando a las OSC a un papel secundario de vigilancia que ha tenido que emplearse a fondo ante las pretensiones de la troika en el poder de islamizar el sistema de gobernanza y de socavar los principios de la república (democracia, derechos, libertades, etc). Todas las OSC entrevistadas en el marco de esta investigación han expresado su decepción al tener que dedicar gran parte de su energía a reaccionar ante los abusos del nuevo gobierno, en lugar de estar trabajando en la construcción del nuevo estado democrático. Las representantes de las asociaciones de mujeres, que llegaron a conseguir la paridad en las listas electorales, se ven ahora obligadas a seguir manifestándose en la calle ante el riesgo de perder los derechos adquiridos a manos del nuevo gobierno islamista. «Ya no se trata de reivindicar más derechos, nos hemos visto obligadas a luchar para proteger y mantener los derechos que han sido reconocidos en el Código del Estatuto Personal de 1956», reconoce Emna Aouadi de la Comisión de la Mujer de UGTT.²⁰ Mohsen Kalbusi, experto en temas de sociedad civil, afirma que la capacidad de iniciativa de las OSC ha sido frenada por las agresivas embestidas ideológicas del partido mayoritario del gobierno que, en cierto modo, ha conseguido imponer su agenda islamizadora a toda la sociedad civil. Kalbusi opina que la sociedad civil laica debe abandonar su papel de vigilancia y aprender a adelantarse a los acontecimientos si no quiere correr el riesgo de perder capacidad de influencia y de acción.

20. Grupo de discusión con las representantes de las asociaciones de mujeres organizado el día 18 de marzo de 2013.

21. Grupo de discusión con representantes de OSC de la ciudad de Kaserine el 20 de marzo de 2012 y entrevista con Faiza Skandrani presidenta de la asociación Egalité et Parité.

- d) Imposición de criterios desde el exterior: algunos actores de la sociedad civil²¹ constatan como determinadas agencias internacionales de cooperación y financiación «vienen con objetivos pre-establecidos e imponen su realización en los proyectos como condición para la financiación».
- e) División ideológica de la sociedad civil; laicos vs religiosos: se ha ido conformando en el seno de la sociedad civil tunecina una fractura ideológica que ha desembocado en dos bloques o proyectos distintos, el laico y el religioso. Este hecho impide la articulación de objetivos comunes ya que ambos bloques parten de proyectos sociopolíticos incompatibles.

Asociaciones y movimientos juveniles

Los jóvenes tunecinos (menores de 30 años) representan el 54,3% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística.²² Han sido precisamente el motor de la Revolución a través de los movimientos de desempleados, del activismo virtual y de las principales plataformas de acción revolucionaria. Este liderazgo juvenil ha sido una constante durante el período de transición y sigue vigente hasta la fecha. Las reivindicaciones juveniles se están centrando, sobre todo, en el empleo y el desarrollo económico, por una parte, y en la consolidación democrática y participativa, por otra. A lo largo de este período revolucionario y posrevolucionario la participación juvenil ha ido adoptando formas y fórmulas diversas como la creación de entidades y redes, como la Union des Diplômés Chômeurs, la organización de manifestaciones y concentraciones sociales y culturales.

El agravamiento de la crisis económica después de la Revolución con el consiguiente repunte del desempleo²³ no ha hecho más que aumentar la frustración de los jóvenes que siguen reivindicando soluciones urgentes al gobierno para este problema tan importante. Actualmente existen más programas de formación y empleo destinados a los jóvenes instruidos y diplomados que a los jóvenes no instruidos, lo que constituye para ellos una doble discriminación y

22. Las estadísticas se pueden consultar en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas en www.ins.nat.tn/indexfr.php.

23. La tasa de desempleo pasó de (13%) en 2010 a (16,05%) en el primer trimestre de 2013 según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

exclusión del sistema. Toda esta frustración convierte a este colectivo de jóvenes marginados en caldo de cultivo para la delincuencia y el fanatismo religioso. Precisamente, las redes de reclutamiento de adeptos actúan en barrios pobres con altas tasas de analfabetismo y de desempleo juvenil. Después de la Revolución algunos barrios populares de la capital y de las grandes ciudades se han convertido en auténticos feudos del movimiento salafista. En la capital destacan barrios como Hay Tadhamen, Sijoumi, Mourouj y Kabaria. El ministro del Interior ha reconocido la existencia de redes islamistas que reclutan a centenares de jóvenes a cambio de dinero para participar en la guerra siria contra el régimen de Al Assad.²⁴ La exclusión de los jóvenes está provocando la transformación del mapa demográfico y sociológico de las ciudades, que ven como su periferia marginada y excluida se está convirtiendo en una amenaza para la estabilidad social. A pesar de todas estas dificultades el gobierno ha puesto en marcha algunas medidas paliativas, muchas de ellas en el marco de la cooperación internacional. En 2013 el gobierno ha elaborado un plan nacional de empleo para el período 2013-2017 para reducir la tasa de paro, generar empleo y alentar las capacidades emprendedoras de los jóvenes, sobre todo en las regiones.²⁵ La mayoría de las veces la demanda para participar en programas de empleo supera a la oferta lo cual genera frecuentes conflictos e incidentes provocados por los aspirantes excluidos.

Desempleados activos en las asociaciones: para aplacar el descontento de los parados las autoridades han puesto en marcha el programa AMAL que consiste en la concesión de una prestación mensual por desempleo de 200 dt (100 euros) para ayudar a los jóvenes diplomados en el proceso de búsqueda de empleo. Un total de 156.000 jóvenes se han podido beneficiar de este programa en 2011. En 2012 este programa ha añadido como requisito para poder cobrar la prestación la realización

24. «Encarcelado un yihadista tunecino por instar a sus compatriotas a unirse a los rebeldes sirios». Europa Press, publicación electrónica, en <http://www.europapress.es/internacional/noticia-encarcelado-yihadista-tunecino-instar-compatriotas-unirse-rebeldes-sirios-20130403181823.html>. [consultado el 4 de abril de 2013].

25. Ministère de Formation Professionnelle et de l'Emploi (2013), La stratégie nationale de l'emploi 2013-2017. MFPE, Tunis.

de alguna actividad social o de bien público, lo que ha incrementado enormemente la presencia de jóvenes en las asociaciones, sobre todo en aquellas que potencian el desarrollo local. Todos los jóvenes que hemos encontrado en las distintas asociaciones de la ciudad de Kaserine, por ejemplo, percibían esta prestación por desempleo.

Dinámicas de los jóvenes: algunas experiencias

Union des Diplômés Chômeurs: creada en 2006 esta asociación no fue reconocida por el régimen de Ben Ali a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, en principio, por «negarse a someterse a la dictadura y sus restricciones», tal y como explica su coordinador Salem Ayari.²⁶ Muchos de sus militantes fueron injustamente arrestados y encarcelados con el propósito de desmovilizar y quebrar las voluntades de sus bases y simpatizantes. Precisamente, han sido los afiliados de esta asociación el motor de la revuelta que estalló con la inmolación del joven Buazizi, en protesta por la marginación y la exclusión. Consiguieron organizar y movilizar a los desempleados de todo el país en una sublevación sin precedentes. Tras la legalización de la asociación después de la dictadura han ampliado estructuras y sedes en todas las regiones. Actualmente, cuenta con 10.000 miembros, frente a los 70 de 2006, y 170 sedes en los 24 gobernados del país, donde dispone de núcleos muy activos que persiguen la lucha por los derechos de los desempleados a través de la organización de actividades formativas, concentraciones y manifestaciones. La manifestación más importante en magnitud ha sido la marcha a la capital desde todas las regiones (septiembre de 2012) con el lema revolucionario «Trabajo, Libertad, Dignidad». Para mejorar la organización y la estructura de la asociación se ha creado una coordinación general y se han organizado elecciones regionales para elegir los coordinadores locales de cara al primer congreso de la asociación, convertida ahora ya en una red nacional. Con este Congreso, celebrado en mayo de 2013, la asociación pretende consolidar la planificación, evitar la dispersión de acciones y objetivos, mejorar la organización interna y optimizar los recursos humanos y técnicos.

26. Entrevista realizada el 23 de marzo de 2013 en Túnez.

Colectivo Yil Yadid (nueva generación): el enfoque del colectivo es novedoso en el panorama asociativo tunecino. Desde una sólida visión filosófica e intelectual su proyecto persigue un progresivo cambio de mentalidades a través de lo que para ellos es prioritario en el país: la revolución cultural. Este movimiento nació en 2009 en el seno de la organización estudiantil Unión Générale des Étudiants Tunisiens y durante la Revolución pasó a ser un proyecto de reflexión-acción, llegando a cristalizar ya en la transición como colectivo de jóvenes. Está formado por unos 300 jóvenes que participan de forma voluntaria y tienen como principio no aceptar subvenciones o remuneraciones por su trabajo. Según Murad Jachnaoui, un miembro fundador:²⁷ «Ante la represión del Estado, la polaridad entre izquierdistas e islamistas y el agotamiento de los conflictos ideológicos, hemos decidido buscar una vía alternativa ajena a estas fracturas que responda a nuestras aspiraciones de cambio social como jóvenes fuera de estos ámbitos tan desgastados». Por este motivo consideran que son fundadores de lo que llaman «la tercera vía». ¿En qué consiste? En la creación de un espacio abierto donde confluyan todas las ideas y tendencias de los jóvenes, contrariamente a los modelos ideológicos cerrados que aprisionan y jerarquizan el pensamiento y la acción en torno a la figura de un líder.

Inspirados en los pensadores Gilles Deleuze y Felix Guattari, defienden el trabajo en red como espacio de autoconstrucción. Se organizan a través de comités de coordinación con alternancia de gestión/poder y su estructura alberga la Comisión de la Mujer, la Liga de los Clubs Culturales Universitarios, la Asociación de los Investigadores y los Comités Sindicalistas. No disponen de un local físico porque quieren ser independientes, pero sí de un espacio, la red virtual, que es una metáfora de su propia estructura. Los jóvenes del colectivo reflexionan conjuntamente y escriben textos sobre la política, la sociedad o la cultura que difunden entre los jóvenes para fomentar el debate. Por ese motivo consideran que son todavía un «movimiento elitista» pero que ya tiene más jóvenes seguidores que las asociaciones o los partidos políticos convencionales que, según Jachnaoui, solo buscan a adeptos. A medio y largo plazo, el

27. Entrevista realizada con Mourad Jachnaoui, miembro fundador de colectivo Yil Yadid, el 18 de marzo de 2013.

colectivo se plantea poder llegar a todos los estratos sociales. Piensan que los valores conciliadores de su proyecto pueden facilitarles la tarea, ya que buscan superar los desequilibrios regionales y la dicotomía capitalismo VS socialismo para conseguir una sociedad justa, donde se repartan equitativamente los recursos y se aplique una dinámica económica responsable, donde se consuma sin deteriorar el medioambiente. Es un colectivo muy solicitado, como demuestra su popularidad en Facebook. Según Jachnau, el éxito del proyecto radica en que responde a las necesidades de los jóvenes que buscan estructuras flexibles, sin control, autogestionadas y que vayan más allá del debate entre laicidad y religión.

El movimiento de mujeres

El Código del Estatuto Personal promulgado en 1956, año de la independencia de Túnez, representa el inicio de un proyecto de sociedad moderna en cuya construcción las mujeres estaban llamadas a ocupar un lugar preponderante. Esta y otras leyes vanguardistas a favor de una mayor igualdad de género han hecho de Túnez un país excepcional, si lo comparamos con el resto de estados árabes y musulmanes de la región. La abolición de la poligamia, la igualdad en el divorcio, la anulación del repudio o el reconocimiento del principio de igualdad en la constitución, entre otras medidas, han permitido a las mujeres gozar de derechos y participar activamente en la vida pública y social. Por otra parte, la política de apoyo a la educación gratuita y universal, a la planificación familiar y a la salud reproductiva promovida por el primer presidente Bourguiba desde los años 60, ha permitido el control de la natalidad y el acceso de las mujeres al mundo laboral. A la consolidación de los derechos de las mujeres ha contribuido, ya más recientemente, la derogación de algunas leyes injustas.

El principio de obediencia de la esposa al marido ha sido anulado con una nueva disposición (1993) que apela a la responsabilidad familiar compartida de los conjugues. El Código Penal ha sido modificado en 2004 para castigar y penalizar el acoso sexual (art. 226 ter) y la edad mínima del matrimonio ha subido hasta los 18 años para ambos sexos (2007). En 2008 se ha mejorado la protección de las madres divorciadas con hijos gracias al derecho de disponer del alojamiento conyugal, y en 2010 se ha concedido a las madres casadas con extranjeros el derecho de transmitir la nacionalidad tunecina a sus hijos. A pesar de la

importancia histórica y social del Código del Estatuto personal que ha consolidado los derechos de las mujeres tunecinas, existen todavía algunas disposiciones jurídicas discriminatorias sobre el matrimonio, la herencia, la penalización de la violación y la autoridad parental que constituyen un obstáculo para la igualdad. Las leyes a favor de los derechos de las mujeres no han ido acompañadas de una voluntad política para sensibilizar y transformar la sociedad tunecina en este aspecto. De hecho, una de las mayores denuncias de las activistas tunecinas es precisamente esta disonancia entre las leyes y la política estatal.

Las mejoras en el Código del Estatuto Personal se deben más a la presión de los organismos internacionales y del movimiento de mujeres, respaldado por las organizaciones de derechos humanos, que a la iniciativa o voluntad propia de los diferentes gobiernos. Tanto Bourguiba como Ben Ali han instrumentalizado esta causa creando organizaciones de mujeres afines al poder que, más que reivindicar una verdadera igualdad de género, se han dedicado a elogiar al gobierno y a divulgar los logros legislativos alcanzados. Con la institucionalización de una especie de «feminismo oficial» (Ministerio de la mujer, OSC de mujeres, figuras políticas femeninas) estos gobiernos se han apropiado del discurso reivindicativo feminista, complaciendo y calmando así a las fuerzas conservadoras políticas y judiciales.

La representación social de los derechos de las mujeres se ha ido deteriorando, sobre todo, durante los 23 años del gobierno de Ben Ali. A pesar de la consolidación de los derechos de las mujeres en el Código del Estatuto Personal, la estrategia de abanderar la defensa de los derechos de las mujeres por parte de un Estado autoritario ha acabado por «instrumentalizar su causa y inscribirla en un insostenible chantaje: o derechos de las mujeres o libertades públicas y derechos humanos» (Ben Achour: 2007, 61). Esta institucionalización de las reivindicaciones de las mujeres, aun sin tomar medidas para hacer efectivos sus derechos, ha sido utilizada por el gobierno de Ben Ali para atenuar en el exterior su imagen autoritaria. Mientras tanto ha proseguido con su política de persecución a las activistas y a las organizaciones de mujeres contrarias a la dictadura del régimen. La connivencia entre este feminismo «oficial» y la dictadura ha dañado profundamente la causa de las mujeres y ha provocado un incremento tanto de la hostilidad social hacia las mujeres como del desafecto y rechazo al régimen.

Revolución y nuevos desafíos

La revolución tunecina no habría podido tener lugar sin la participación de las mujeres. Desde el estallido de las revueltas las mujeres de todas las categorías sociales han estado en primera fila en todas las manifestaciones, huelgas y concentraciones populares. Su movilización se ha desarrollado en los ámbitos político, sindical, asociativo, artístico, mediático y virtual. Esta participación femenina masiva tuvo como consecuencia la trágica muerte de algunas activistas bajo la represión policial de Ben Ali. Las milicias del régimen convirtieron a las mujeres en el blanco de abusos sexuales, vejaciones y violaciones, una violencia utilizada por el régimen como arma de castigo y represión. Gracias a todos estos sacrificios las mujeres han logrado junto a los hombres derrocar a la dictadura y han hecho más visible su importante papel en el cambio político y social. Sin embargo el período posrevolucionario no está incorporando los cambios anhelados por las mujeres en cuanto a la mejora de sus derechos y el reconocimiento de su papel político y social. Las expectativas creadas en cuanto al incremento de libertades y mejora del estatuto jurídico han tropezado con nuevos retos y desafíos.

Desafíos Jurídicos: después de la victoria electoral del partido islamista Ennahda en las elecciones para la Asamblea Constituyente (23 de octubre de 2011) el estatuto de la mujer y sus derechos se han convertido en un nuevo campo de batalla que se libra entre dos frentes, las asociaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos, por una parte, y la nueva clase política islamista y sus aliados por la otra. A pesar de las reiteradas promesas públicas del partido Ennahda de mantener y consolidar el estatuto de la mujer se está produciendo un nuevo retroceso en los derechos de las mujeres. La ley de adopción promulgada en 1956 (única en el mundo musulmán) ha sido anulada y sustituida por la «Kafala», la tutela, una modalidad islámica que priva a la persona adoptada del derecho a la herencia.²⁸

Cuestionamiento de la CEDAW: A pesar de que el primer gobierno interino ha declarado la anulación de todas las reservas emitidas por

28. El derecho al aborto autorizado desde 1973 está siendo seriamente amenazado como ha alertado la Asociación de Mujeres Demócratas en una jornada organizada sobre las amenazas a la ley del aborto organizada por ATFD el 29 de marzo de 2013.

el gobierno tunecino contra esta convención en 1985, el gobierno provisional islamista ha iniciado una campaña para desacreditar la convención de CEDAW acusándola de ser contraria a las leyes islámicas.

Desafíos políticos: antes de las elecciones de la Asamblea Constituyente, las mujeres se movilizaron para exigir una ley electoral que garantice su presencia paritaria en las listas electorales. La aprobación por unanimidad de esta ley ha significado el primer triunfo político de los movimientos de mujeres después de la Revolución y ha conferido al país una gran notoriedad a nivel regional e internacional. Sin embargo, el hecho de no decretar la obligatoriedad de inscribir a las mujeres en la cabeza de las listas electorales ha impedido que esta paridad llegara a hacerse efectiva, a pesar del aumento de la proporción de mujeres elegidas respecto a otros comicios electorales. Las grandes expectativas y esperanzas que generó esta ley de la paridad electoral se han esfumado después de las elecciones.

La representatividad de las mujeres en la vida política se ha reducido sustancialmente en comparación con el anterior gobierno de Ben Ali. En la conformación del nuevo gobierno las mujeres han sido excluidas de las instancias más destacadas como el Consejo de los Sabios, nuevo órgano consultivo creado por el Presidente del Gobierno, Hamadi Jebali, en febrero de 2013, encargado de evaluar la situación del país y proponer soluciones para salir de la crisis política y social. La presencia de las mujeres en las instancias de decisión de los partidos políticos y de los sindicatos es, también, escasa. Cabe resaltar, asimismo, que la mayoría de mujeres que accedieron a las instancias políticas y a la Asamblea Constituyente gracias a la ley de la paridad electoral, pertenecen a partidos políticos que promueven un proyecto social conservador y contrario a la igualdad.

Desafíos sociales: el acceso al poder del partido islamista Ennahda está suponiendo un retroceso en los derechos de las mujeres. A pesar de las promesas electorales de respetar el Código del Estatuto Personal, el gobierno islamista ha ido promocionando un modelo de sociedad contrario a los derechos de las mujeres y el principio de igualdad. La política declarada del nuevo gobierno incluye la exclusión de las mujeres de las instancias de decisión política y administrativa, el intento de imponer el principio de complementariedad en lugar de igualdad en la nueva constitución y la promoción de

Tabla 2
Participación de las mujeres en la vida política (2010-2013)

	Gobiernos pos-revolución Desde 23 de octubre de 2011		Gobierno de Ben Ali 2010
	Gobierno interino 2012	Gobierno provisional 2013	
Representación en el gobierno	2 ministras y una Secretaria de Estado de un total de 42 miembros del gobierno	1 ministra y 2 Secretarias de Estado de un total de 31 miembros del gobierno.	4 ministras de un total de 45 miembros del gobierno.
Representación en la asamblea nacional	59 de un total de 217 diputados (27,19%).	59 de un total de 217 diputados (27,19%).	59 de un total de 214 diputados (27,57%)

un discurso religioso favorable a la práctica de la poligamia y a la superioridad del varón en la sociedad.

- *Propaganda salafista*: el discurso conservador y tradicionalista que hizo irrupción en la sociedad tunecina está sostenido tanto por las estructuras religiosas del gobierno (ministerio de los asuntos religiosos, mezquitas, medios de comunicación afines al partido islamista) como por los grupos extremistas salafistas, que también gozan del apoyo gubernamental. Los salafistas promueven un discurso contrario a los derechos de las mujeres alegando que van en contra de las leyes religiosas.
- *Aumento de la violencia*: la violencia contra las mujeres se ha incrementado de una forma alarmante con el aumento de la pobreza y la marginación social a la que quieren relegarlas los extremistas religiosos. Son cada vez más frecuentes las agresiones contra las mujeres en espacios públicos, tanto para obligarlas a llevar el velo como para impedir su participación en manifestaciones y actos públicos.
- *Pobreza y exclusión*: distintos informes y estudios sobre Túnez²⁹ muestran una clara tendencia de feminización de la pobreza.

29. Association des Femmes Tunisiennes Pour la Recherche et le Développement, (2012) «Précarité économique et soutien aux droits des femmes» Afturd, Tunis.

Las consecuencias de este fenómeno es el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres a la hora de defender sus derechos, sobre todo en este momento tan crítico de transición político-social.

- *Paro femenino alarmante*: aunque la crisis económica en Túnez ha afectado a todas las regiones, sectores y categorías sociales, las mujeres han sido el colectivo más perjudicado. La tasa de paro femenino en Túnez es una de las más altas del mundo, según el informe Estrategia Nacional de Empleo (2013-2017).³⁰ En 2012, la cifra del paro femenino ha alcanzado el 26,9%, contra una media mundial de 6,5%. El informe habla de una brecha alarmante que no para de crecer entre mujeres y hombres en el acceso al mercado laboral.

Tabla 3
Tasas de Empleo y paro por género en 2012

Tasa de empleo (2012)		Tasa de Paro (2012)	
Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
27,9%	70,1%	28,2%	15,4%

Fuentes: Banco Mundial y Estudio de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

- *Desciende el trabajo femenino formal, aumenta el informal*: en 2010 la tasa de participación de las mujeres en la vida laboral es del 27% según el informe de la OIT. Y aunque esta cifra es la más alta de los países de la región (Marruecos 26%, Argelia 16%) sigue estando muy por debajo de la media mundial (51,2%). En los países de la OCDE esta cifra alcanzó el mismo año el 52,9%, siendo la tasa más alta la de Portugal (56%) y la más baja la de Italia (37,7%), según los datos del Banco Mundial.³¹ Sin embargo, en el caso tunecino, esta cifra no refleja realmente la participación de las mujeres en

30. Los resultados del informe han sido presentados públicamente el 14 de Enero de 2013 por Akram Belhaj Rhouma, el presidente de la comisión encargada de preparar la Estrategia Nacional de Empleo.

31. Se pueden consultar las estadísticas en la página web oficial del Banco Mundial en <http://donnees.banquemondiale.org>.

la economía nacional puesto que no contempla la actividad económica informal. En este ámbito hay una importante presencia de mujeres que se dedican al sector agrícola (sobre todo en cultivos estacionales), a las actividades artesanales o a la actividad doméstica productiva (sastrería, peluquería, comida y repostería, baños públicos, etc.). Según un estudio de diciembre de 2012 patrocinado por la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA) y realizado por el Institut pour la liberté et la démocratie (ILD), la economía informal representa el 30% del Producto Interior Bruto. De un total de 616.000 empresas existentes en Túnez, 524.000 operan en el sector informal, con unos beneficios de 115 millones de dólares, el equivalente a 6,5 veces el presupuesto del Estado en 2013. Este sector informal es casi exclusivamente urbano o periurbano y absorbe entre el 35 y el 42% de la población activa no registrada, de la que una mayoría son mujeres aunque no existen estadísticas oficiales.³²

Dinámicas de las asociaciones de mujeres

El movimiento asociativo de mujeres se remonta a la época colonial, mediados de los años treinta del siglo XX. Emergió en un contexto en el que las dinámicas sociales, políticas y sindicales luchaban contra el colonialismo para conseguir la independencia. El movimiento de las mujeres en Túnez surge a partir de tres factores desencadenantes: la focalización de la cuestión de la mujer en el centro del proyecto sociopolítico de liberación nacional, la influencia de las dinámicas del feminismo occidental y las reivindicaciones del movimiento sufragista de finales del siglo XIX y principios del XX. La cuestión de la mujer fue el centro de grandes polémicas en el seno del naciente movimiento de liberación nacional. Las profundas divisiones ideológicas entre las dos visiones del proyecto de sociedad que había que construir sembraron los gérmenes entre las fuerzas de la izquierda (formaciones comunistas, socialistas y sindicalistas), que asociaban la lucha por la liberación de

32. Estudio sobre «Las mujeres y el trabajo informal» en el marco del proyecto «precariedad económica y apoyo a los derechos de las mujeres» de la Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) durante el periodo 2009-2011 y financiado por la cooperación española.

las mujeres con la liberación nacional y las de la derecha (conservadores e islamistas), que consideraban la emancipación de las mujeres como una asimilación de la cultura del ocupante y una amenaza para la identidad religiosa del país. Desde sus orígenes, el movimiento asociativo de mujeres conllevó esta división ideológica. Estaba polarizado entre formaciones conservadoras como la Asociación de las Mujeres Musulmanas (1936) y formaciones progresistas como las Comisiones de Mujeres de los partidos socialista y comunista.

Con la proclamación de la independencia y la aprobación del Código del Estatuto Personal en 1956, el nuevo gobierno nacional de Bourguiba se apropió del discurso sobre la emancipación de la mujer e impulsó la creación de una única asociación nacional de mujeres, la *Union Générale des Femmes Tunisiennes* (1958), que fue impulsando cambios progresivos en el estatuto de la mujer. A partir de los años 90, el régimen del segundo presidente Ben Ali estimuló y apoyó la creación de asociaciones de mujeres afines al poder mientras eran excluidas y perseguidas las activistas de las asociaciones autónomas que denunciaban la instrumentalización política de la causa de las mujeres y sus nefastas consecuencias. Las dos asociaciones que destacaron por su discurso contestatario y su lucha contra la dictadura fueron *La Association Tunisienne des Femmes Démocrates* (ATFD) y *la Association des Femmes pour la Recherche sur le Développement*.

Después de la revolución el activismo de las asociaciones de mujeres ha conocido un nuevo impulso y un dinamismo sin precedente en la historia. Se ha incrementado notablemente el número de asociaciones de mujeres en todas las regiones que pasó de 19 en 2010 a 68 asociaciones en 2012. Según las representantes de las asociaciones de mujeres,³³ este aumento es debido a:

- el protagonismo político y social de las mujeres en las protestas populares que derrocaron a la dictadura;
- la conciencia de las mujeres de la trascendencia de la transición como momento político para la defensa de sus derechos

33. Grupo de discusión con las representantes de las asociaciones de mujeres organizado el 18 de marzo de 2013.

y libertades, fuertemente amenazados por las fuerzas reaccionarias contrarias al principio de igualdad de género;

- la focalización de los proyectos de cooperación y de desarrollo en las asociaciones de mujeres y en la igualdad de género como elementos centrales de cambio.

Esta transformación posrevolucionaria del mapa asociativo de las mujeres en Túnez no es solo numérica, obedece también al incremento de la diversidad de ámbitos asociativos y de tendencias ideológicas y políticas que las motivan.

Por primera vez, desde la independencia, han visto la luz asociaciones femeninas islamistas, al igual que han podido emerger las asociaciones laicas que fueron reprimidas en la época de Ben Ali. La coalición Unión de Mujeres Libres, formada por cuatro asociaciones de mujeres, fue creada en 2011 «con el objetivo de fortalecer la presencia de la mujer en la vida pública». Estas asociaciones de tendencia islamistas constituidas por la Asociación de Mujeres Tunecinas, Asociación Hawa, Asociación las Mujeres y la Complementariedad y Asociación Tounissiet han elaborado una declaración conjunta en la cual afirman su defensa de la identidad árabe y musulmana de Túnez, denuncian la tutela política y la explotación de la imagen de la mujer por el régimen de Ben Ali y reclaman la necesidad de someter a un referéndum a los convenios internacionales y proyectos educativos y culturales que «pueden afectar a la identidad árabe-musulmana».

Es importante remarcar que las asociaciones islamistas de mujeres, lejos de consolidar la pluralidad del activismo feminista y reforzar la cohesión de este movimiento en el panorama nacional, han sido instrumentalizadas por el gobierno islamista en el poder reproduciendo, ahora con nuevos actores, el viejo esquema de la época de Ben Ali.³⁴ La vieja fractura entre feminismo de Estado y feminismo contestatario ha sido sustituida ahora por otra fractura de consecuencias aún más perjudiciales para los derechos de la mujer; si bien la instrumentalización política de las mujeres por parte de los anteriores regímenes no permitió un verdadero avance

34. Ídem.

en el campo de la igualdad no constituyó, al menos, una verdadera amenaza para los derechos de las mujeres, para su libertad o para el modelo secular de sociedad.

Por el contrario, la alianza de las nuevas fuerzas femeninas con el gobierno islamista supone el espaldarazo definitivo a un proyecto de estado religioso contrario a los principios de igualdad de género y a los derechos de las mujeres, tan costosamente conquistados. Por tanto, las asociaciones de mujeres están polarizadas en torno a dos proyectos de sociedad opuestos: un proyecto de sociedad laica y democrática, por una parte, y otro que defiende una sociedad islámica. Las diferencias son notables; las asociaciones laicas cuentan con una dilatada trayectoria militante contra la discriminación de género y contra la dictadura, mientras que las asociaciones de mujeres islamistas acaban de constituirse al calor del nuevo gobierno islamista, sin experiencia previa y sin tener la defensa de la igualdad de género en su agenda política.

Por otra parte, las asociaciones laicas cuentan con el apoyo de un amplio sector de la sociedad civil, los partidos políticos y una importante franja de población que defiende la secularidad del Estado, incluidas mujeres de todas las tendencias. Sus fuentes de financiación proceden, principalmente, de donantes occidentales y de organizaciones internacionales. Las asociaciones de mujeres islamistas, en cambio, están apoyadas por el partido islamista Ennahda en el gobierno y la emergente sociedad civil islamista, siendo sus principales fuentes de financiación el Estado y algunos países islámicos. La desconfianza entre estos dos bloques de movimientos de mujeres augura una época de confrontación del activísimo femenino en Túnez.

Las estrategias de las OSC para la incidencia política y la acción

El acusado debilitamiento de los partidos políticos de la oposición, por el desgaste, y división que está suponiendo la formación y las decisiones de la Asamblea Constituyente ha impedido que se conviertan en una fuerza efectiva de contrapoder. Ante esta situación la sociedad civil está ocupando este espacio de vigilancia, denuncia, protesta, sensibilización y movilización en aras de garantizar el éxito del proceso democrático

en un marco de transparencia. Desde el inicio de la Revolución han surgido asociaciones que persiguen este objetivo. A continuación expondremos las asociaciones que han destacado por su trascendencia y las estrategias de incidencia política que han utilizado. Hablaremos concretamente de L'Assemblée Constituante Civile (ACC); la plataforma Bawsala y el colectivo-red Dusturna.

a) Assemblée Constituante Civile (ACC)

Incidencia política: Garantizar la participación de la sociedad civil en la Asamblea Constituyente (ANC), que «fue elegida y es soberana, pero la sociedad civil tiene un papel clave en la transición democrática, especialmente en ausencia de fuerzas de contrapoder. En este período de la construcción de un nuevo sistema político, es necesario ampliar el debate». Con estas palabras justificó Mohsen Marzuk a finales de 2011 la creación por parte de líderes independientes y representantes de la sociedad civil de la Assemblée Constituante Civile.³⁵ Para Marzuk no se trataba de competir o sustituir la Asamblea Constituyente elegida soberanamente en octubre de 2011 sino de posibilitar la participación de la sociedad en foros civiles paralelos, tal y como ocurre en otras democracias. El principal objetivo de la Asamblea Constituyente Civil es fortalecer y ampliar la participación de la sociedad civil en la elaboración de la nueva Constitución y apoyar la labor de la Asamblea Nacional Constituyente. Para ello se han creado dos foros virtuales a través de los cuales se posibilita esta participación ciudadana:

- La propia página web de la ACC,³⁶ que contiene información sobre la labor de las diferentes comisiones de esta asamblea civil.
- La página web (www.karari.org), que significa «mi decisión» y que contiene información actualizadas de los debates de la Asamblea Constituyente, así como foros para debates, sensibilización e información.

35. Discurso pronunciado por Mohsen Marzouk, uno de los fundadores de la ACC en la conferencia de prensa celebrada el día 3 noviembre 2011 para anunciar la creación de la Asamblea constituyente civil. Enlace: <http://www.letemps.com.tn/article-60414.html>.

36. <http://www.constituantecivile.sitew.com/>

En cuanto al modo de funcionamiento de la ACC, los fundadores insisten en su independencia y autonomía política. Cualquiera puede formar parte y participar, siempre y cuando se comprometan a respetar los derechos humanos y a aceptar los principios universales de la revolución.

La ACC está compuesta por 217 miembros y cuenta con su propio estatuto en el cual, entre otros aspectos, se regula su funcionamiento democrático. Territorialmente, la ACC se ha desplegado en todas las regiones del país a través de Asambleas Locales. Todo el trabajo deliberativo se eleva posteriormente a la Asamblea Constituyente para que los diputados tomen en consideración la voz democrática de la sociedad civil. La primera sesión plenaria de la Asamblea Constituyente Civil se celebró en 2012 y contó con la participación de 170 activistas de la sociedad civil y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones de desarrollo y otras personas sin ningún tipo de afiliación.

b) Plataforma Bawsala

Bawsala significa «brújula», y es el sentido que esta plataforma quiso dar a sus acciones que consisten en vigilar cualquier desviación política de la línea democrática. Esta plataforma es, por lo tanto, una instancia ciudadana de control y vigilancia a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Se rige por tres principios:

- poner al ciudadano en el centro de la acción política garantizando su información (de todo aquello que hacen sus representantes electos) y sus derechos fundamentales;
- establecer relaciones con los diputados y los responsables políticos para reforzar el buen gobierno y la ética política;
- potenciar el empoderamiento de los ciudadanos.

Su visión a medio plazo consiste en convertirse en la entidad referencia para la ciudadanía en materia de actualidad política, buenas prácticas y derechos fundamentales. La actividad de Bawsala gira en torno a la vigilancia de la acción política y a la defensa de la ciudadanía.

Vigilancia: Trabaja para construir una nueva cultura política y contra la emergencia de una «aristocracia política abusiva». ³⁷ La asociación se dedica a vigilar y controlar el trabajo de los diputados y de los responsables políticos ya que considera que son agentes al servicio del pueblo. Asimismo, la asociación ha denunciado en varias ocasiones y a través de comunicados de prensa y de artículos publicados en los medios de comunicación el absentismo de los diputados y los retrasos que causan en las sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Desde Twitter informan en directo del desarrollo de las sesiones parlamentarias. Bawsala ha denunciado también la doble función de algunos diputados en el gobierno y en la Asamblea lo que ha provocado la dimisión del ministro de Asuntos Sociales Jalil Zaouia (2012) de su cargo como diputado en la ANC. ³⁸

Defensa: Con el objetivo de promover la transparencia, el deber de informar y el derecho a estar informado, la asociación ha puesto en marcha el observatorio «MARSAD» de la Asamblea Constituyente. La asociación está luchando contra la reproducción de las viejas prácticas de la dictadura acostumbrada a operar en la opacidad y a tomar las decisiones de forma unilateral. El observatorio tiene una página web (marsad.tn) en el cual aparece un listado de los 217 diputados con sus currículum, un mapa de la sede de la Asamblea Constituyente, una revista de prensa, un espacio para hacer preguntas a los diputados y un informe de los votos de los diputados después de cada deliberación. El sitio publica un barómetro del avance de los trabajos de la Asamblea y también un seguimiento económico de lo que le cuesta al presupuesto público cada jornada de la Asamblea.

Relaciones de las OSC con las autoridades y los partidos políticos

El nuevo decreto-ley (nº2011-41) ³⁹ sobre el acceso a los documentos administrativos de los organismos públicos representa un cambio de

37. «Communiqué de Presse Al Bawsala: démission de Khelil Zaouia de son poste d'élú à l'ANC», publicado el 9 de mayo de 2013. http://www.albawsala.com/uploads/documents/Communique_de_presse_Al_Bawsala_09-05-2013_Fr.pdf

38. *Ibidem*.

39. Decreto-ley nº 2011-41 de 26 de mayo 2011 relativo al acceso a los documentos administrativos públicos.

tendencia en cuanto a la relación entre las OSC y las autoridades y partidos políticos. Gracias a ella se han mejorado, si lo comparamos con la etapa anterior, la consulta y acceso a la información pública y la participación de las OSC en la vida pública y política en general. La ley ha posibilitado a las OSC:

- asistir a los debates de la Asamblea Constituyente;
- disponer como interlocutor en la Asamblea Constituyente de un representante encargado de la relación con las OSC;
- acceder a los documentos político-administrativos;
- formular diligencias y sugerencias a los diputados de la Asamblea Constituyente;
- convocar a los medios de comunicación para expresar su punto de vista sobre la actuación de los políticos;
- denunciar abusos de poder y actos de corrupción y prevaricación de cualquier órgano de gobierno;
- denunciar ante la ley a responsables políticos.

Sin embargo persisten algunos obstáculos que se interponen en la relación entre las autoridades y la sociedad civil. Algunos de ellos son heredados del anterior régimen, otros, en cambio, se deben a la falta de experiencia y de cultura democrática, o son producto de la nueva configuración del contexto sociopolítico. A partir de las observaciones y datos recogidos de actores políticos y de OSC destacamos, por su importancia, dos de estos factores: la fractura ideológica de la clase política y la creciente hegemonía en el poder del nuevo gobierno provisional

La fractura ideológica

El país está fuertemente polarizado y dividido en torno a dos proyectos o tendencias distintas: islamismo vs laicismo. Esta fractura deriva de la vieja dualidad entre la corriente modernista y la corriente religiosa y conservadora vigente en el país desde la primera mitad del siglo veinte. La ausencia de un proceso histórico de reconciliación entre las distintas corrientes ideológicas al amparo de un sistema democrático en el período de la independencia ha convertido esta dualidad en un antagonismo endémico. La revolución ha desenterrado esta vieja fractura con el consiguiente afloramiento de toda

las problemáticas asociadas. La legalización de los partidos políticos ha permitido la construcción de dos proyectos sociopolíticos antagónicos: el estado islámico y el estado secular. El sector islamista encontró en la falta de cultura política de la población el caldo de cultivo perfecto sobre el cual cimentar su estrategia electoral y propagandística, consistente en desacreditar a sus adversarios generando confusión y controversia en torno a la «laicidad», a la que llegaron a comparar con «herejía» y «ateísmo». Para ello contaron con la inestimable colaboración del ciberactivismo islámico, algunos líderes religiosos y los imanes de las mezquitas.

De poco sirvieron los intentos de los ya estigmatizados partidos políticos y de la sociedad civil laica de desprenderse del profundo calado de esta «etiqueta». El sector islamista contó, además, con la inestimable «infraestructura» de las mezquitas que, desde cada barrio, predicaban a favor de los partidos de corte islamista. «No es ningún secreto que las mezquitas se desplegaron antes de las elecciones el 23 de octubre de 2011 para hacer campaña a favor del partido islamista Ennahdha centrado en la islamización de la política y demonizando a los laicos» ha escrito Mohabmed Ben Sassi en un artículo titulado «Ghanouchi à la reconquête des mosquées pour séduire ses électeurs».⁴⁰ El punto álgido de esta fractura sociopolítica laicoreligiosa fue el doble asesinato de los líderes de la oposición Chokri Belaid (Frente Popular) y Lotfi Nagad (Partido Nida Tunis). Preocupa, además, la emergencia de grupos extremistas que amenazan de muerte a los laicos por considerarles «enemigos del islam».⁴¹

La hegemonía del gobierno provisional

El debilitamiento de los partidos de oposición está contribuyendo enormemente a la hegemonía del gobierno provisional islamista.

40. Ben Sassi, Mhamed. (2013), «Ghannouchi à la reconquête des mosquées pour séduire ses électeurs » Wbdo.tn publicación electrónica en <http://www.webdo.tn/2013/03/18/ghannouchi-a-la-reconquete-des-mosques-pour-seduire-ses-electeurs/> [consultada el 18 de marzo 2013].

41. Jirou, Elsa. (2013) «Tunisie: d'autres figures de l'opposition menacées», BFMTV.com, publicación electrónica en <http://www.bfmtv.com/international/tunisie-dautres-figures-lopposition-menacees-443604.html> [Consultado el 9 de febrero de 2013].

Ciertamente, hemos asistido en los últimos meses a la desaparición del Pôle Démocratique, formado en 2011 en torno al partido Ettajdid (excomunista); al renombramiento (Al-Joumhour) del Parti Démocrate progressiste (PDP), a la formación de una nueva coalición de izquierdas, el Front Populaire, y una de centro-liberal en torno a Nida Tunes. Asimismo los socios laicos en el gobierno del partido Ennahda (CPR y Etakatol) han visto como sus bases les han dado la espalda. Ante un gobierno islamista que cada día acumula más poder, la sociedad civil laica se está convirtiendo prácticamente en el único contrapoder, sufriendo por ello amenazas y agresiones por parte de los extremistas religiosos. Las agresiones sufridas por Nadia el Fani, Nuri Bouzid, Habib Kasdaghi o Sofiane Ben Farhat son algunos ejemplos. El deterioro de las relaciones entre la sociedad civil laica y las autoridades deriva del incumplimiento por parte del gobierno de la troika, de sus promesas con respecto a la clase política y la sociedad civil. No se ha avanzado en la independencia del poder judicial como tampoco se están respetando los derechos humanos ni las libertades individuales y colectivas en las decisiones del gobierno.

Ante esa situación, la sociedad civil expresa su temor ante esta deriva antidemocrática y dictatorial. El primer gran enfrentamiento abierto entre el gobierno y la sociedad civil laica se produjo seis meses después de las elecciones (abril de 2012), a raíz de la decisión gubernamental de prohibir las manifestaciones en la avenida Habib Bourguiba, la más emblemática del país. El ministro del Interior ordenó una brutal represión policial contra los manifestantes. La indignación y la presión de la sociedad civil forzaron a este ministro a explicarse públicamente en la Asamblea Constituyente y a volver a permitir las manifestaciones pacíficas en esta avenida. Otros grandes enfrentamientos se produjeron para impedir que la legislación islámica fuese el marco de referencia de la nueva Constitución o para que fuese la igualdad y no la complementariedad el criterio imperante en las relaciones de género. La sociedad civil ha logrado también que el Código de Estatuto Personal que garantiza los derechos de las mujeres desde 1956 no pueda ser reformado sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea Constituyente.

Estrategias de superación de las fracturas políticas e ideológicas

Desde el principio de la transición la sociedad civil ha planteado diferentes estrategias para superar las divisiones ideológicas y políticas interasociativas, por una parte, y entre la sociedad civil y las autoridades políticas, por la otra. A continuación presentamos algunos ejemplos.

Propuesta de diálogo nacional de UGTT: Cumpliendo con su tradicional e histórico rol unificador de la sociedad civil, la organización sindical Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), ha logrado en mayo de 2013 reunir a todos los actores políticos y sociales alrededor de una mesa de diálogo nacional. El objetivo de esta mesa era acercar puntos de vista y discutir el futuro de la transición en Túnez. En la iniciativa tomaron parte 40 partidos políticos, incluidos los partidos de la coalición en el gobierno (Ennahda, CPR, Etakatol) y las asociaciones de la sociedad civil. En la mesa se abordaron los principales temas sociopolíticos: modalidades para superar con éxito la transición democrática, la aguda crisis económica y la menguante capacidad adquisitiva, el calendario de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, la Constitución, la elección del tipo de régimen político (parlamentario, presidencial o mixto) y el análisis de la violencia política en el país, así como la posibilidad de la adopción de una convención nacional contra la violencia y el extremismo. Los participantes coincidieron en denunciar la violencia y establecer una comisión de diálogo que continuara las negociaciones en una próxima reunión. También estuvieron de acuerdo para organizar las próximas elecciones seis meses después de la formación de la nueva Instance Supérieure Indépendante pour les élections (ISIE).

Pacto tunecino por los derechos y las libertades (IADH): El Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH) convocó en julio de 2012 a la sociedad civil a sumarse al Pacto Tunecino por los Derechos y las Libertades. A este Pacto se adhirieron destacadas entidades de todos los ámbitos como la Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LTDH), el Syndicat des Journalistes Tunisiens (SNJT), Ordre National des Avocats Tunisiens (ONAT), o la Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD).

La sociedad civil elabora su proyecto de sociedad (REMDH y FIDH)
«Elaborar un proyecto de sociedad global para Túnez» es el título del foro civil organizado en diciembre de 2012 para elaborar, desde las OSC, un proyecto de sociedad en común basado en los valores del estado civil, la democracia, la descentralización, los derechos humanos, la paridad y la igualdad. Patrocinado por REMDH y FIDH y organizado por cuatro asociaciones (*Dustourna*, LTDH, ATFD, FTDES) este foro es la primera iniciativa de este tipo que se organiza en el país. Con la participación de 120 asociaciones y 30 organizaciones sindicales profesionales (UGTT, UTICA, UGET, Ordre des Médecins, Ordre des Architectes, entre otras) se elaboró a lo largo de tres días un proyecto alternativo de la sociedad civil.

Cuestiones sociales y políticas que movilizan a la sociedad civil
Los temas que más han provocado la movilización de la sociedad civil han sido aquellos relacionados con la defensa de los derechos humanos y las libertades, el empleo y la lucha sindical, la justicia en la Transición, el desarrollo regional y el medio ambiente. Si bien estos temas han movilizadado al conjunto de la sociedad civil a nivel nacional, existen diferencias regionales que merece la pena citar. Así por ejemplo las OSC de las regiones del interior lideran la lucha por el desarrollo regional, el empleo y el medio ambiente, mientras que en la capital y las grandes ciudades costeras (Túnez, Sousse, Sfax, Monastir, etc) la lucha de la sociedad civil se centra, además de los temas citados, en los derechos humanos, la justicia transicional y la independencia de los medios de comunicación. La lucha sindical sigue siendo transversal en todo el territorio nacional.

Los derechos humanos

A pesar del cambio político y la evolución en temas de libertad de expresión y participación política, la cuestión de los derechos humanos sigue siendo un tema pendiente en Túnez. Los abusos a los derechos humanos se registran sobre todo en la represión de las manifestaciones populares, donde generalmente prevalece un «uso desproporcionado de la fuerza acompañado, en muchos casos, de violaciones graves de los derechos humanos: arrestos y detenciones arbitrarias, malos tratos y en algunos casos de actos de tortura», como

señala el informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Túnez después de la Revolución.⁴² El informe alerta, además, de la impunidad que gozan los responsables de estos abusos y la dificultad de llevarlos ante la justicia. Esta situación convierte el tema de los derechos humanos en una preocupación social de primer orden que moviliza, no solo a las organizaciones que trabajan en este ámbito específico, sino a todos los actores de la sociedad civil.⁴³ Actualmente, las estrategias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos internacionales y nacionales en Túnez son las siguientes:

- La lucha por la constitucionalización de los Derechos Humanos. «Es imprescindible impulsar la coordinación entre los diferentes componentes de la sociedad civil para defender los derechos humanos en su sentido más general» proclamó Abdesatar Ben Musa, presidente de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, en el encuentro de septiembre de 2012 organizado por la sección tunecina de Amnistía Internacional, LTDH, ATFD, AFTURD y la Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort. A través de esta iniciativa las entidades convocantes perseguían un doble objetivo:
 - que la nueva Constitución recogiera los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte y la penalización de la tortura;
 - la creación de una coalición inter-asociativa para hacer un frente común en estas reivindicaciones.

El rechazo del gobierno tunecino a las recomendaciones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas⁴⁴ relativas a la despenalización de la difamación, la no discriminación

42. Fédération Internationale des Droits de l'Homme (2011) «La Tunisie post Ben Ali face aux démons du passé: Transition démocratique et persistance de violations graves des droits de l'Homme», fidh, Paris.

43. Comunicado de fidh «Les droits et libertés au cœur du projet de constitution». Note de position Octobre 2012.

44. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el resultado del examen periódico universal sobre Túnez 19 de septiembre 2012, en su 21º período de sesiones.

contra las mujeres, la no discriminación basada en la orientación sexual y la abolición de la pena de muerte, han hecho saltar todas las alarmas. En un comunicado público la sección tunecina de Amnesty International lamentó profundamente esta actitud del gobierno tunecino conminándole a reconsiderar su decisión.⁴⁵ Por otra parte, diversas asociaciones de defensa de los derechos humanos y de otros ámbitos se han movilizado para denunciar la negativa de la mayoría de miembros de la comisión encargada de redactar el preámbulo y los principios generales de la Constitución a incluir el principio del respeto a los Derechos Humanos Universales, hecho aún más grave si tenemos en cuenta que Túnez ha ratificado la declaración universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales que los garantizan. Después de una intensa campaña de presión, la comisión ha acabado accediendo a incluir el respecto a los Derechos Humanos Universales como principio en el preámbulo de la Constitución.

- La lucha contra la violación de los derechos humanos. Ante la permanente violación de los Derechos Humanos durante el período de transición, la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH), el Conseil National des Libertés en Tunisie (CNLT) y la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) han elaborado un informe⁴⁶ en el cual se recogen y denuncian todas estas prácticas. En el informe se hace también un llamamiento a las autoridades tunecinas para que pongan fin al uso de la violencia arbitraria y la tortura, y también para que emprenda reformas urgentes en los sistemas carcelario y judicial. Asimismo, el manifiesto apela a la comunidad internacional a presionar a las autoridades tunecinas para que cese la violación a los derechos humanos y para que apoyen al gobierno en el proceso de reforma conforme a las recomendaciones citadas en el informe.

45. Comunicado de Amnesty International «La Tunisie a rejeté plusieurs recommandations du Conseil des droits de l'Homme», <http://www.tunisiefocus.com/politique/la-tunisie-a-rejete-plusieurs-recommandations-du-conseil-des-droits-de-lhomme-21549/> [Consultado el 25 de abril de 2013].

46. Fédération Internationale des Droits de l'Homme (2012), op.cit.

- La sensibilización y la formación sobre derechos humanos: las asociaciones y organizaciones de la defensa de los derechos humanos han diseñado programas de sensibilización y formación sobre este tema dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general. La mayoría de estos proyectos están promovidos y financiados por organismos internacionales y regionales como FIDH, IRDH, la red REMDH, PNUD, UE, FFF, etc.
- Asociación preferente con la UE basada en el respeto a los derechos humanos: en abril del 2013, se celebró la conferencia sobre «Oportunidades y desafíos para los Derechos Humanos y la reforma democrática en el marco de la asociación preferente entre Túnez y la Unión Europea». En este evento se presentaron las recomendaciones de la sociedad civil sobre las principales cuestiones relativas a los derechos humanos en el marco de las relaciones bilaterales entre Túnez y la Unión Europea: derechos humanos e igualdad de género; derechos de los migrantes y refugiados; derechos económicos y sociales y reforma de la justicia. La conferencia contó con la presencia de más de 180 organizaciones de la sociedad civil tunecina, de los representantes del gobierno de Túnez, de los estados miembros de la Unión Europea y de la delegación de la UE en Túnez.

La Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos, a través de las organizaciones tunecinas asociadas, instó al gobierno de Túnez y a la Unión Europea a implicar a la sociedad civil en la implementación y seguimiento del Plan de Acción, adoptado en el marco de la asociación preferente entre Túnez y la Unión Europea en 2011.⁴⁷ Los cambios políticos en Túnez han llevado a la UE a replantear su colaboración y la política de vecindad con los países mediterráneos favoreciendo una mayor participación de la sociedad civil y potenciando las reformas democráticas. Por esta razón, la REMDH solicita que las reformas democráticas y la promoción de los derechos humanos estén en el centro de todas las políticas entre

47. Déclaration le Partenaire Privilégié Tunisie-UE en: <http://www.ldh-france.org/DECLARATION-LE-PARTENARIAT.html>

Túnez y la Unión Europea con el fin de apoyar de manera efectiva el proceso de transición.

Sin embargo, es esencial para el éxito de esta asociación garantizar una participación transparente y efectiva de la sociedad civil. Los representantes de la sociedad civil han elaborado las siguientes propuestas:

- establecer nuevas relaciones entre Túnez y la Unión Europea basadas en el respeto de los derechos fundamentales en el contexto de una asociación igualitaria y equilibrada;
- colaborar activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Acción de la asociación preferente, una vez el gobierno de Túnez y la Unión Europea acuerdan implicar a la sociedad civil;
- crear un mecanismo institucional entre las autoridades de Túnez y de la UE y la sociedad civil para sistematizar y garantizar las consultas y la información sobre las políticas Túnez-UE, así como del proceso de seguimiento y evaluación de la implementación del plan de acción y de la cooperación financiera;
- evaluar de forma continua los progresos realizados en base a criterios, indicadores y un calendario definido;
- continuar el proceso de reflexión y análisis de nuevas recomendaciones que garanticen los derechos humanos en la asociación entre Túnez y la UE.

UGTT un actor clave en la transición

La Union Generale de Travailleurs Tunisiens (UGTT), creada en 1946, ha jugado un papel histórico en la defensa de los trabajadores y de las grandes causas sociales enfrentándose a la dominación colonial y al autoritarismo de Bourguiba y Ben Ali. A pesar de los intentos de dinamitar su influencia a través de la imposición de cúpulas directivas afines al poder, las bases han permanecido siempre militantes y con gran capacidad de movilización, como lo demuestra la revuelta de los mineros en la región de Gafsa en 2008.⁴⁸ También

48. Para más información véase el informe de Amnesty Internacional sobre la represión de la revuelta de Gafsa en 2008.

en la actual Revolución la UGTT ha jugado papel clave; los sindicalistas regionales apoyaron desde el inicio las revueltas de Sidi Buzidi (tras la inmolación del joven vendedor ambulante Buazizi) y de otras regiones como Kaserine, Siliana, Makthar, etc.; el anuncio de huelga general por parte de la UGTT el 14 de enero de 2010 resultó ser la señal definitiva de la caída del régimen de Ben Ali esa misma tarde. Durante la transición el protagonismo de la UGTT como organización líder a nivel nacional se ha incrementado, sobre todo después de poder celebrar su congreso, tras 5 años de prohibición, y de haber renovado a su cúpula directiva.

El aumento de la credibilidad de esta organización sindical viene avalado por los 650.000 nuevos afiliados después de la Revolución (pasando de 100.000 a un total de 750.000 afiliados). No obstante, la Revolución tunecina ha facilitado la emergencia de dos nuevos sindicatos Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) y la Union des Travailleurs Tunisiens (UTT) que diversifican el panorama sindical de Túnez. La CGTT cuenta con 50.000 afiliados mientras la UTT ha logrado 30.000. Las dos nuevas formaciones sindicales CGTT y UTT son escisiones de la poderosa UGTT puesto que sus fundadores son antiguos afiliados que desempeñaron funciones directivas en la organización durante la dictadura. A estos dos nuevos sindicatos, en proceso de posicionamiento ante los trabajadores y la sociedad civil, hemos de sumar la potente organización patronal UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat). UGTT se mostró reticente a la creación de nuevas organizaciones sindicales por temor a debilitar la fuerza del colectivo sindical. Por otra parte los nuevos sindicatos han criticado el hecho de estar excluidos de las negociaciones salariales llevadas a cabo entre UGTT y UTICA. Para UGTT solo las organizaciones sindicales y patronales más representativas están habilitadas para participar en este tipo de acuerdos sociales.

RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y UGTT

Primer gobierno de Unidad Nacional: involucrada en el proceso de transición la UGTT formó parte del primer gobierno de Unidad Nacional, formado justo después del derrocamiento de Ben Ali, con el nombramiento de tres sindicalistas como ministros. Ante la presión popular y de las bases sindicales, que rechazó de pleno la

connivencia con un gobierno con numerosos miembros del partido de Ben Ali, estos presentaron su dimisión a las 24 horas de su nombramiento. Desde ese momento la UGTT rechaza toda colaboración con los símbolos del antiguo régimen, lo que representa una ruptura histórica de la cúpula directiva con el poder. Las tensiones entre el nuevo gobierno provisional liderado por el partido Ennahda y la organización sindical aparecieron cuando la UGTT convocó la huelga general de agosto de 2012 para exigir medidas de desarrollo regional en las regiones desfavorecidas y la liberación de los jóvenes desempleados detenidos durante las protestas de Sidi Bouzid. Ennahda intentó convencer a las bases del sindicato de abstenerse de toda participación política y limitarse a las reivindicaciones sindicales, lo que provocó numerosos incidentes entre los partidarios de Ennahda y los sindicalistas de UGTT.

Estas tensiones alcanzaron su punto culminante con motivo de la conmemoración de la muerte del fundador del sindicato, Farhat Hachad, cuando en la víspera los salafistas y miembros de los «Comités de Protección de la Revolución», cercanos al partido Ennahda, atacaron a 20 líderes sindicalistas delante de la sede central de la UGTT. Como protesta la UGTT anunció un boicot a los programas de televisión en el que participen miembros de Ennahda y la convocatoria de una huelga general para diciembre de ese mismo año, mientras este partido no reconozca su responsabilidad en las agresiones. Tras la mediación de varias personalidades políticas la UGTT accedió a desconvocar la huelga, pese a la oposición de numerosos afiliados. A cambio se crearía una comisión conjunta para investigar los ataques cometidos contra los militantes de la UGTT. Desde los enfrentamientos entre la UGTT y el partido Ennahda se ha polarizado la opinión en torno al papel que debe jugar la UGTT en la vida social y política. Para los partidarios del gobierno, la UGTT es una organización manipulada por su cúpula directiva y debería limitarse únicamente a su rol sindical y para la oposición la UGTT debe ser independiente del gobierno y participar activamente en la política como un contrapoder. Las tensiones entre la UGTT y el gobierno volvieron a aparecer unos meses más tarde a raíz de las negociaciones sobre los funcionarios de la función pública.

En las últimas elecciones sindicales de 2011 salió vencedora la lista consensuada de izquierdas. La fractura ideológica la

izquierda/derecha-religiosa que divide el país se percibe también en el seno del sindicato. Esta tensión de la UGTT con el gobierno es un claro reflejo de la ausencia de liderazgo de los partidos de la oposición y su incapacidad de conformar una fuerza política de contrapoder. En cuanto a su relación con la sociedad civil, la UGTT afirmó en su primer Congreso después de la Revolución un claro compromiso «junto a la sociedad civil y el pueblo tunecino en su diversidad para defender no solo a las masas trabajadoras, sino también, y sobre todo, a la eepública y a sus instituciones.» Las movilizaciones iniciadas por la organización para defender las libertades individuales y para denunciar la violencia de las facciones salafistas o de la policía van muchas veces por delante de las propias movilizaciones sociales.

Recordando siempre la legitimidad histórica de su organización, los dirigentes de UGTT afirman que no vacilarán en tiempos de crisis a la hora de asumir un papel político. A pesar del importante rol de la UGTT, las tensas relaciones con el gobierno y la fractura ideológica que impregna la vida del país están pasando factura a los militantes y al desarrollo interno de la organización en esta delicada fase de transición. Así lo expresa M. Mohamed Kamun, profesor y militante sindical: «Como sindicalistas de base estamos cansados. Ayer luchamos contra el antiguo partido RCD y hoy contra Ennahda, en lugar de centrarnos en nuestros problemas —como la reorganización interna— y proponer alternativas económicas. Por otra parte, la focalización de los esfuerzos de oposición en la dicotomía islamistas/demócratas tiende a dar prioridad a cuestiones relacionados con la lucha por el poder, lo que minimiza la importancia de la cuestión social».

La libertad de expresión y los medios de comunicación

La creación de la Haute Instance Independante de la Liberté de la Communication Audiovisuelle (HAICA), en mayo de 2013, representa el triunfo de la sociedad civil en la batalla por la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación. La HAICA es un órgano independiente de regulación de los medios audiovisuales dirigido por profesionales independientes, un activo importante para la pluralidad y la libertad de los medios en el país. En el proceso de constitución no han faltado, sin embargo, los intentos

de control y censura por parte del gobierno provisional que, finalmente, ha acabado cediendo a las presiones de periodistas, sindicatos y sociedad civil.⁴⁹ A pesar de la libertad de expresión conquistada tras la revolución los profesionales de los medios de comunicación siguen sufriendo acosos y agresiones físicas y verbales, reflejo de la gran tensión que preside la relación entre gobierno y periodistas. El informe anual del *Syndicat National des Journalistes Tunisiens* (SNJT) ha censado más de 30 agresiones a periodistas entre 2011 y 2012, puntualizando que: «Los ataques contra periodistas, sus organizaciones profesionales y algunos medios de comunicación tienen el promedio de una agresión por semana». Con el nuevo gobierno los periodistas han sufrido el extremismo islamista, sobre todo cuando han abordado temas religiosos o han criticado al gobierno liderado por el partido islamista. La organización Reporteros sin Fronteras, con el Grupo de Vigilancia en Túnez, ha denunciado esta situación a las autoridades tunecinas, mostrando su preocupación por la libertad de expresión y la integridad física de los periodistas que están siendo continuamente acosados y amenazados.⁵⁰

El incremento del control y de la presión sobre los medios de comunicación críticos, la multiplicación de las agresiones contra los periodistas está generando un clima de miedo entre los profesionales de la comunicación. El informe de Reporteros sin Frontera advierte que: «Estamos observando una insidiosa vuelta a la autocensura, particularmente en medios audiovisuales y entre los corresponsales y periodistas que trabajan en las regiones del interior».⁵¹ Los profesionales de los medios de comunicación han llevado a cabo en los últimos meses numerosas acciones de protesta, negociación, denuncia y reivindicación para conseguir la tan ansiada libertad de prensa y para erradicar definitivamente los abusos y las agresiones a las que

49. Yousfi, Héra. (2012), «Sur les braises du printemps arabe: ce syndicat qui incarne l'opposition tunisienne», *le Monde Diplomatique*, 12 de noviembre de 2012.

50. «Lakdar, Melek. (2012), «Le syndicat national des journalistes tunisiens accuse...», *Le Temps*, 08-12-2012.

51. «Lettre ouverte de Reporters sans frontières aux autorités tunisiennes», Reporters Sans Frontières, publication électronique, en <http://fr.rsf.org/tunisie-lettre-ouverte-de-reporters-sans-12-01-2012,41664.html> [Consultado 12 de enero 2012].

se han visto sometidas. La acción que ha tenido más repercusión, no obstante, ha sido la convocatoria en octubre de 2012 de una huelga nacional de todo el sector de la comunicación y la información precisamente con el objetivo de «conseguir la libertad de prensa y de expresión no solo de los periodistas sino de todos los tunecinos» como afirmó Najiba Hamrouni, presidenta del sindicato NJT.⁵²

El mismo día de la huelga, el gobierno accedió a las reivindicaciones de los profesionales consistentes en el desbloqueo y aplicación de los decretos 115 y 116, firmados en 2011 por el gobierno interino, que garantizan la libertad de prensa. El decreto 115 garantiza los derechos de los periodistas, prohíbe las restricciones a la circulación de la información y protege las fuentes periodísticas; por su parte, el decreto 116 autoriza la creación de una alta autoridad de la comunicación audiovisual independiente para garantizar «la libertad de comunicación audiovisual». Este órgano es el que autoriza las licencias para radios y televisiones tunecinas.

Ante la persistencia de las autoridades de ignorar la totalidad de las reivindicaciones de los periodistas para garantizar la libertad de prensa, varios sindicatos profesionales y asociaciones de la sociedad civil han hecho un llamamiento (abril 2013) para movilizar la opinión pública nacional e internacional en la defensa de la libertad de expresión. El llamamiento denuncia la actitud de las autoridades para impedir la reforma del sector de la información conforme a las normas de la profesión y los estándares internacionales sobre la libertad de expresión y reiterado uso de los medios de comunicación como instrumentos de propaganda. Varios sindicatos y asociaciones de la sociedad civil, intelectuales, activistas y personalidades nacionales han decidido formar un frente común ante las amenazas que se ciernen contra la libertad de expresión conseguida tras la Revolución. En una conferencia de prensa celebrada a finales de abril de 2013 esas organizaciones han anunciado la creación de la Coalición Civil por la Defensa de la Libertad de Expresión. Los objetivos de esta coalición son: i) presionar para que se aplique la legislación vigente en materia de libertad de prensa, la edición, la comunicación audiovisual y el acceso a la información; ii) derogar el

52. Ibid.

artículo 121 de la Constitución que habilita la Instancia Oficial de Información, un órgano de control del sector de la información en manos del gobierno; iii) consolidar el derecho a la libertad de expresión, de prensa, información y acceso a la información de acuerdo a las normas internacionales; iv) revisar los estatutos jurídicos de las instituciones mediáticas públicas para garantizar la transparencia y la buena gestión de los recursos humanos y financieros; v) vigilar y reorganizar los canales de distribución de la prensa para evitar su monopolio por parte de individuos o partidos concretos.

La sociedad civil en la región de Kaserine

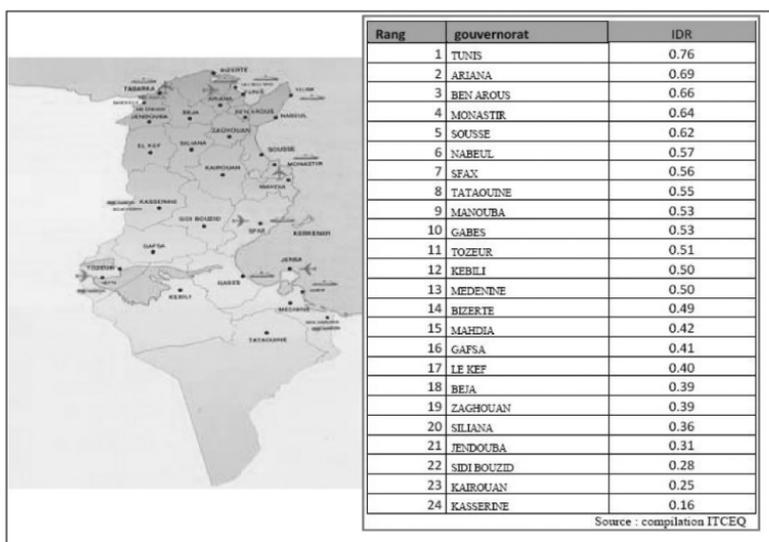
En Túnez existen 24 gobernados con características sociodemográficas específicas y con problemáticas distintas. Si bien es cierto que los efectos de la crisis económica y social se observan en todas las regiones, sin excepción, incluidas las grandes ciudades del país no podemos olvidar que afecta en mayor medida a las zonas de interior, lo que denota una acentuada desigualdad regional en términos socioeconómicos. Los índices de desarrollo regional, publicados en julio de 2012 por el Ministerio de Desarrollo Regional y de Planificación en el informe *Indicateurs du développement Régional*, reflejan un importante desequilibrio entre las regiones costeras y las zonas del interior, en detrimento de estas últimas. Los indicadores relativos a la educación, riqueza y empleo, sanidad y población, justicia y equidad, delimitan claramente 3 zonas con niveles distintos de desarrollo:

i) zonas «privilegiadas» ubicadas en el norte y la costa: Túnez capital, Ariana, Monastir, Sousse; ii) zonas intermedias: nordeste y el sureste, iii) zonas desfavorecidas: centro-oeste, noroeste.

La región de Kaserine

La región más desfavorecida del país es Kaserine, que tiene 428.100 habitantes con una tasa de pobreza que alcanza el 57% y de desempleo que ronda el 40%. Situada en el centro-oeste de Túnez; Kaserine forma parte de lo que se conoce como el «Triángulo de la muerte», compuesto por las regiones más desfavorecidas de Túnez (Gafsa, Thala-Kaserine, Siliana). Fue una de las primeras regiones que se sublevó contra el régimen dictatorial de Ben Ali a finales de 2010. Los habitantes de Kaserine han participado activamente

Gráfico 3
Índice de desarrollo regional en Túnez



Fuente: Ministerio de planificación y desarrollo regional – 2012

en la Revolución para protestar contra la marginación y la pobreza y reivindicar el desarrollo y el derecho al empleo: «Ha sido un momento mágico, toda la población, sobre todo los jóvenes y parados, han transformado los cafés y los espacios públicos en foros y lugares de debate como si de asociaciones se tratara», explicaba un participante del grupo de discusión organizado sobre la sociedad civil en Kasserine.⁵³ Las movilizaciones han continuado durante los dos últimos años de transición ya que las reivindicaciones no han sido atendidas todavía por el nuevo gobierno. «Como en la época de Ben Ali, las autoridades actuales no nos hace caso. Seguimos sintiéndonos marginados como población y como jóvenes tenemos necesidades específicas y urgentes», comenta otra participante. Kaserine ocupa el último puesto en el ranking de desarrollo de las 24 regiones administrativas de Túnez. Los indicadores del informe

53. Grupo de discusión con representantes de 21 asociaciones de diversos ámbitos de intervención organizado el 20 de marzo de 2013 en la ciudad de Kasserine.

sobre el desarrollo regional relativos a Kaserine⁵⁴ revelan problemas socioeconómicos específicos. El desequilibrio entre Kaserine y Túnez capital, por ejemplo, evidencia la desigualdad en cuanto al nivel de vida, acceso a la educación y acceso a la sanidad y a las instalaciones sanitarias de base.

Destaca, asimismo, la desigualdad de género ya que las mujeres son a menudo excluidas del mercado laboral formal (representan más del 70% de la población en paro en edad laboral) y sufren exclusión y marginación en cuanto al acceso a la educación, la formación y los servicios de base. Esta situación constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo en la región. En cuanto a la educación y el conocimiento, Kaserine está en niveles del 0,3%, cuando la capital Túnez obtiene el 0,91%. Kaserine es, además, la región con la tasa más alta de analfabetismo en el país, su 32% de población analfabeta contrasta con el 12% de la capital y el acceso a las comunicaciones e internet apenas llega al 03%. En cuanto al nivel de desarrollo los índices sitúan a Kaserine en el último puesto del ranking nacional (véase cuadro del índice de desarrollo). La tasa media de paro en la región es del 29% y el tejido empresarial, escaso (tasa del 0,2 contra 3,1 en la capital). El acceso al agua potable es del 50% (del 99% en Túnez, Monastir o Sousse), y la tasa de pobreza alcanza ya al 27% de la población.

Los actores de la sociedad civil en Kaserine

El nuevo contexto político ha posibilitado una nueva dinámica de la sociedad civil en la región de Kaserine, que ha visto nacer numerosas asociaciones en todos los ámbitos y zonas de la región. Se ha destacado también el importante interés que están mostrando las organizaciones internacionales para apoyar el desarrollo de la región junto a la sociedad civil local. Sin embargo, de acuerdo con muchos representantes de organizaciones de la sociedad civil, la afluencia de organizaciones y proyectos de cooperación en esta región no ha desembocado en acciones concretas con impacto notable sobre la situación económica y social de la región. Las promesas de apoyo y colaboración incumplidas por parte de las agencias de cooperación

54. Ministère du Développement Régional et de la Planification. (2012), L'indicateur du Développement Regional de Kasserine, Tunis.

han generado reticencias y desconfianza en la sociedad civil local. Además, en los pocos proyectos puestos en marcha, las asociaciones han tenido que plegarse a las exigencias políticas e ideológicas de los donantes. En cuanto a las relaciones con las autoridades centrales y locales, los actores de la sociedad civil y los habitantes se sienten todavía excluidos de la esfera de decisión regional. Lamentan particularmente la falta de comunicación con las autoridades locales y la indiferencia ante sus reivindicaciones de impulsar el desarrollo local. Asimismo, constatan la persistencia o empeoramiento de prácticas administrativas autoritarias heredadas de la dictadura, a las que ahora cabe añadir un cierto desorden y descontrol.

El tejido asociativo de Kaserine, que cuenta con 370 organizaciones, ha captado la atención de redes internacionales y donantes. La Red Euro-mediterránea de Derechos Humanos y sus socios locales han organizado en 2011 un foro de asociaciones de Kaserine con el objetivo de identificar sus necesidades y apoyar sus actividades a través de la creación de redes interasociativas de colaboración. En ese mismo año, en el marco de un programa de cooperación de la agencia norteamericana USAID, se creó la red Réseau des Associations pour la Citoyenneté et le Développement, compuesta por 62 asociaciones. La disfuncionalidad estructural provocada por la falta de experiencia y de formación de sus miembros precipitó a los pocos meses su disolución.

Actualmente, pervive la red creada en 2012 Citoyenneté et Développement, integrada por 8 asociaciones que colabora con la organización francotunecina Jasmin d'Orient, con sede en Francia. El objetivo de la red es el desarrollo global de la región de Kaserine y la intervención en todos los ámbitos prioritarios para responder a las necesidades más urgentes de la población y mejorar sus condiciones de vida. Una de las preocupaciones detectadas de la población es la medioambiental ya que existe la amenaza de contaminación de las aguas subterráneas por los vertidos de la industria de transformación de la planta de Halfa. Algunas asociaciones locales, como la Association de Protection de l'Environnement à Kasserine, han convertido la reivindicación del traslado de la fábrica a un lugar apartado de los manantiales subterráneos de agua en uno de sus objetivos principales. Muy activa, sobre todo en el ámbito escolar y rural, esta asociación realiza programas de sensibilización en las escuelas donde forma a

jóvenes estudiantes como «Embajadores medioambientales» para que sean agentes multiplicadores en su entorno sobre la necesidad de protección del medioambiente. Realiza también programas de sensibilización con las mujeres en las aldeas y zonas rurales para formarlas en el reciclaje de los residuos domésticos. Entre las asociaciones de Kaserine destacan también algunas organizaciones de mujeres que realizan una labor clave de sensibilización con las mujeres del ámbito rural en diferentes campos. La asociación Tigart, creada en 2011 tras la Revolución, tiene como misión la defensa de los derechos de las mujeres en los ámbitos económico, político y social. Su ámbito de intervención es el entorno rural y el sindical y a ello contribuye, sin duda, la dilatada experiencia de su presidenta Aziza Mansour en el sindicato de UGTT en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Las socias han formado comités o grupos que se desplazan a las zonas rurales aisladas para tomar contacto con las mujeres, informarles de la actualidad de su región y del país y conocer sus preocupaciones con el objetivo de diseñar proyectos de desarrollo adaptados a sus necesidades. Tigart cuenta con el apoyo de la Association Tunisienne des Femmes Democratés que ha enviado una delegación a la región para conocer sus necesidades y prestar apoyo. Fruto de esta colaboración se han iniciado programas de intervención con mujeres de Kaserine, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Otras asociaciones como Citoyennes pour la défense des femmes sans travail et sans diplômes, trabaja en solitario y en condiciones sumamente difíciles con colectivas de mujeres jóvenes y rurales, extremadamente vulnerables y expuestas a todo tipo de explotación y abusos.

Conclusión

El cambio político, social y legislativo tras la Revolución ha transformado drásticamente el panorama de la sociedad civil en Túnez, que ha conocido en los últimos meses una actividad sociopolítica sin precedentes en la historia del país. No obstante, si bien es cierto que esta nueva realidad ha posibilitado avances en temas como la libertad de expresión, el activismo asociativo y el pluralismo político, no es menos cierto que paralelamente han aparecido obstáculos y amenazas en el proceso de construcción democrática. Estos obstáculos son:

- reivindicaciones de la Revolución insatisfechas y escasa voluntad de las autoridades de llevarlas a cabo a corto o medio plazo;
- deterioro de la situación económica y social e incremento de la violencia y el malestar social;
- ideología política de las nuevas autoridades islamistas incompatible con los valores democráticos, los derechos humanos y los derechos de las mujeres;
- tensión entre los actores políticos y debilidad de los partidos de la oposición.

Frente a esta compleja situación y ante el temor de reeditar hegemonías políticas del pasado, la sociedad civil y los sindicatos están asumiendo en esta fase de transición el papel de oposición, convirtiéndose en el mayor contrapoder del gobierno en la defensa de los valores democráticos y las reivindicaciones revolucionarias. Este hecho ha provocado un hondo debate en la sociedad tunecina acerca de cuál debe ser la misión y funciones de las OSC ante el poder político. Todo hace que la sociedad civil esté consumiendo fuerzas y energía en la defensa de los mismos valores que ya defendía durante la dictadura —libertad, democracia, justicia social y reparto equitativo de la riqueza, en lugar de estar trabajando en la construcción y consolidación democrática. A este desgaste ha contribuido, sin duda, la grave fractura ideológica entre laicos y religiosos que ha llegado a polarizar a la sociedad en torno a debates sobre la identidad y la reislamización. La demonización del sector laico, iniciada durante la campaña electoral, ha producido una división laicidad/islamismo que ha llegado a afectar a todos aquellos aspectos sujetos a debate en este período de transición, como la Constitución, el sistema de gobernanza, los derechos de la mujer, los derechos humanos y tantos otros que están agotando la capacidad de acción de la sociedad civil laica. Dentro de este contexto, ha florecido un movimiento asociativo islamista, afín al partido en el poder, muy dinámico y estructurado que, integrado por asociaciones caritativas y grupos salafistas, difunde una cultura religiosa extremista wahabita.

El diagnóstico de la sociedad civil tunecina nos ha permitido poner de manifiesto y alertar sobre las amenazas del contexto actual y sobre las

debilidades y necesidades de las OSC, pero también nos ha posibilitado visibilizar y poner en valor sus fortalezas consistentes en:

- gran dinamismo y capacidad de movilización de la sociedad civil tunecina;
- voluntad y compromiso militante de sus actores de luchar por un sistema democrático y plural que responda a las expectativas creadas por la revolución;
- el importante papel de las mujeres y los jóvenes como fuerzas de cambio social y de resistencia ante los intentos de hegemonía y retroceso;
- la existencia de un marco legislativo e institucional favorecedor de la libertad de acción de las OSC;
- la capacidad de convocatoria y de movilización social de grandes organizaciones como los sindicatos.

La sociedad civil está en proceso de construcción y de (re) definición y lucha por tener un papel importante en el presente y futuro de un país inmerso en una compleja crisis social, política, económica y cultural.

Referencias bibliográficas

- BEN HAMIDA, H. (2012), «Tunisie: L'inquiétante opacité du milieu associatif islamique», *Le Courrier de l'Atlas*, publicación electrónica en <http://touensa.org/2012/08/31/tunisie-linquietante-opacite-du-milieu-associatif-islamique/> [consultada el 23 de enero de 2012].
- BEN MAMI, S. (2013), «Les partis politiques tunisiens à la veille des élections législatives de juin 2013», *Le Carnet de l'IRMC*, revista electrónica en <http://irmc.hypotheses.org/848> [consultado el 23 de febrero de 2013].
- BEN SASSI, M. (2013), «Ghannouchi à la reconquête des mosquées pour séduire ses électeurs» Wbdo.tn publicación electrónica en <http://www.webdo.tn/2013/03/18/ghannouchi-a-la-reconquete-des-mosquees-pour-seduire-ses-electeurs/> [consultada el 18 de marzo 2013].

- JIROU, E. (2013) «Tunisie: d'autres figures de l'opposition menacées», BFMTV.com, publicación electrónica en <http://www.bfmtv.com/international/tunisie-dautres-figures-lopposition-menacees-443604.html> [Consultado el 9 de febrero de 2013].
- JOUDI, M. (2012), «Tunisie-Economie: Politique de relance ou politique de rigueur» WMC actualités, publicación electrónica en <http://www.turess.com/fr/wmc/114369> [consultado el 27 de febrero de 2013].
- KERROU, M. (2011), « Les nouveaux acteurs de la révolution et de la transition politique ». IADH. Tunisie.
- LAKDAR, M. (2012), «Le syndicat national des journalistes tunisiens accuse...», *Le Temps*, 08-12-2012.
- YOUSFI, H. (2012), «Sur les braises du printemps arabe: ce syndicat qui incarne l'opposition tunisienne », *le Monde Diplomatique*, 12 de noviembre de 2012.
- (2012), «Le pouvoir tunisien cède à une revendication des journalistes en grève». *Le Monde*, 17-10-12.

IV. LA SOCIEDAD CIVIL EGIPCIA TRAS LA PRIMAVERA ÁRABE

Ignacio Álvarez-Ossorio*

Introducción

En los dos últimos años y medio, Egipto ha experimentado radicales transformaciones en el ámbito sociopolítico. La Revolución del 25 de enero de 2011 provocó la caída del presidente Hosni Mubarak y el inicio de una confusa fase de transición repleta de altibajos que situó al Partido de la Justicia y la Libertad (PJJ), marca política de los Hermanos Musulmanes (HHMM), al frente del aparato legislativo (tanto en la Asamblea Constituyente como en la Asamblea Consultiva) y ejecutivo. El 3 de julio de 2013, el presidente Mohamed Morsi fue derrocado por un golpe militar que contó con un amplio respaldo social y político.

Aunque las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no jugaron un papel central en las movilizaciones antiautoritarias, sí que las acompañaron y las secundaron. Probablemente su papel ha sido mayor del reconocido hasta el momento, ya que en el curso de las últimas tres décadas han desarrollado una labor imprescindible al denunciar las prácticas autoritarias de Mubarak y defender las libertades públicas. Como afirma Negad El-Borei, exsecretario general del Egyptian Human Rights Organization (EHRO), «ningún martillo, por muy fuerte que sea, puede romper una pieza sólida de roca, pero gotas de agua pueden llegar a erosionarla con el transcurso del tiempo. Hemos trabajado duro durante los últimos 25 años emitiendo declaraciones públicas y formando a miles de jóvenes con el fin de hacer la revolución posible» (El-Borei, 2011).

*Profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante.

La activista Nawla Darwiche, directora del New Women Foundation (NWF), coincide en este diagnóstico e interpreta: «Personalmente creo que las organizaciones de derechos jugaron un papel determinante en la preparación de la revolución, porque si observas sus reivindicaciones son exactamente las mismas de dichas organizaciones durante la época de Mubarak. Si hablas de dignidad humana y justicia social es exactamente lo que defendían las organizaciones de derechos humanos, incluidos los derechos sociales y económicos».¹

La victoria electoral del PJP en las elecciones legislativas de 2011 y presidenciales de 2012 provocó una inusitada concentración de poderes en manos del presidente Mohamed Morsi, especialmente tras el decreto presidencial del 22 de noviembre, que le concedió poderes prácticamente absolutos y plena inmunidad. Esta decisión polarizó a la sociedad egipcia y rompió los canales de diálogo que hasta el momento habían mantenido los sectores islamista y secular. Al respecto, Gamal Eid, director de Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), interpretaba que «tras este decreto llegamos a la conclusión que estábamos ante una nueva dictadura que pretendía controlar el Gobierno, el Parlamento y la Judicatura. Hemos pasado de la dictadura de Mubarak a la del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) y los HHMM»².

La creciente polarización de la sociedad egipcia y el progresivo deterioro de la situación económica llevaron al país al borde del colapso. Kamal Abu Eita, diputado por el Partido Karama en la Asamblea Constituyente, resumía esta delicada situación de la siguiente manera: «Mubarak amenazó ‘yo o el caos’, mientras que la máxima de Morsi parece ser ‘yo y el caos’».³ Ante esta situación, diversas voces llamaron a una intervención militar para desalojar del poder a los HHMM. El sociólogo Saad Eddin Ibrahim, exdirector de Ibn Jaldun Center for Development Studies, reclamó el retorno de los militares durante un período transitorio y la convocatoria de unas nuevas elecciones presidenciales,⁴ lo que finalmente aconteció el 3 de julio de 2013.

1. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.

2. Entrevista personal con Gamal Eid, 10 de abril de 2013.

3. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.

4. *Al-Youm al-Sabaa*, 5/4/2013.

Cartografía de la sociedad civil egipcia

Uno de los principales problemas a la hora de abordar el estudio de la sociedad civil egipcia es la falta de estadísticas y las discrepancias existentes en torno a su número, composición y distribución sectorial y geográfica. Según el Egyptian Human Development Report (EHDR), elaborado en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Solidaridad Social reconocía la existencia de 21.500 ONG en 2007, pero la Federación General de Asociaciones de Egipto solo contabilizaba 15.150 (advirtiendo que había otras 500 que operaban como compañías sin ánimo de lucro para sortear la ley 84/2002). Es importante subrayar que no todas ellas están activas, calculándose que solo la mitad de ellas operan en la actualidad. En 2010 se contabilizaban también 23 sindicatos integrantes de la Egyptian Trade Union Federation (ETUF) con 3.365.000 afiliados, 23 asociaciones profesionales con 1.500.000 de miembros, 26 cámaras de comercio y 13 partidos políticos.

Como ocurre en el resto de los países del mundo árabe, la mayor parte de las OSC la componen asociaciones benéficas que ofrecen servicios a los sectores más necesitados. Las asociaciones de servicios y desarrollo se centran, a su vez, en las prioridades del desarrollo humano como la pobreza, el desempleo, la salud, la educación y las desigualdades sociales. Las organizaciones que tienen una agenda de buen gobierno y de reforma democrática, en las que nos centraremos, representan una clara minoría.

El EHDR distingue cuatro grandes grupos dentro de la sociedad civil:

1. Organizaciones de desarrollo, bienestar y prestación de servicios.
2. Organizaciones de incidencia que promueven el bien común, incluidas las de derechos humanos que tratan de influir en la legislación y la opinión pública.
3. Asociaciones que reflejan los intereses empresariales.
4. Colegios profesionales y sindicatos de trabajadores que engloban a médicos, ingenieros, abogados, maestros y otras profesiones.

Según el mencionado informe, las OSC cumplen diversas funciones:

1. *Incidencia*: cambian la opinión pública respecto a una determinada cuestión.
2. *Observación*: miden los progresos en torno a los compromisos adquiridos en las conferencias internacionales de la ONU y evalúan la situación de los programas de ayuda y cooperación al desarrollo.
3. *Redes*: coordinación con las demás OSC que trabajan en un sector particular.
4. *Investigación* sobre temas relevantes vinculados a una función de incidencia.
5. *Paraguas*: asumen la coordinación y la representación.
6. *Federaciones*: las OSC especializadas en un área o sector se federan en torno a objetivos comunes que pueden defender mejor de manera coordinada.

En cuanto a la distribución geográfica, el 70% de las OSC se concentra en áreas urbanas a pesar de que son las zonas rurales las más vulnerables a la pobreza. Por ejemplo, el Alto Egipto tiene las comunidades rurales más pobres, pero tiene menos ONG per capita que el Bajo Egipto, una zona más desarrollada. Las gobernaciones de Port Said, El Cairo, Alejandría y Suez disfrutan de una alta densidad de ONG.

Tabla 1
Distribución geográfica de las ONG en 2007

Zona	Número de asociaciones	%
Cairo	2.788	18
Alto Egipto	3.465	23
Giza	1.399	9
Bajo Egipto	6.894	46
Zonas fronterizas	608	4
Total	15.154	100

Fuente: EHDR, 2008: 67.

En el curso de las últimas décadas, las OSC han experimentado un significativo crecimiento, que se ha intensificado tras la Revolución del 25 de Enero. Desde la aprobación de la ley 84/2002 se han establecido una media de 600 asociaciones por año, buena parte de ellas dedicadas al desarrollo y la incidencia. En este crecimiento exponencial también juega un papel relevante el aumento de la financiación externa. USAID, por ejemplo, distribuyó en el período 2005-2011 más de 400 millones de dólares para fortalecer a la sociedad civil egipcia en el marco del Middle East Partnership Initiative (MEPI).

Tabla 2
Crecimiento de ONG

Periodo	Nuevas ONG	Porcentaje por año
1964-1973	3.161	316
1974-1983	2.304	230
1984-1993	2.441	244
1994-2003	4.768	479
2004-2006	1.694	850

Fuente: EHDR, 2008: 68.

El marco regulatorio egipcio

Las OSC se han visto obligadas a actuar en un marco legal adverso. Como recuerda el informe *An Overview of Civil Society in Egypt: Civil Society Index Report for the Arab Republic of Egypt*, elaborado por CIVICUS, «una larga historia de centralización estatal del poder y limitada libertad política ha hecho que las OSC hayan funcionado en un entorno altamente inhibitorio que no es propicio para la acción civil sin restricciones. Esto se refleja en el nivel de autonomía de las OSC, el posible papel que pueden jugar y el alcance de la influencia que pueden ejercer sobre quienes toman las decisiones» (CIVICUS, 2005: 79).

Las autoridades dificultan la labor de las OSC, que operan en un marco legal poco definido y con una evidente inseguridad jurídica. Para tratar de dificultar su labor y debilitar al movimiento asociativo, el gobierno egipcio ha impuesto unas leyes restrictivas, entre ellas la obligación de que las asociaciones soliciten la inscripción en el registro del Ministerio de Asuntos Sociales, reservándose el derecho

a autorizarlas o disolverlas, así como a aprobar sus juntas directivas, controlar las fuentes de financiación o imponer fuertes sanciones en el caso de incumplimiento de esta normativa (Shokr, 2009: 3-4). Por todo ello, las OSC afrontan restricciones legales, injerencias administrativas, campañas de difamación de las autoridades y sus medios de comunicación afines, una financiación restringida e inestable y la competencia de las organizaciones cooptadas o patrocinadas por el propio gobierno (El-Borei, 2009: 2).

La ley 84/2002 regula la actividad de las organizaciones no gubernamentales.⁵ Para poder desarrollar su labor, las asociaciones deben registrarse previamente en el Ministerio de Asuntos Sociales, que puede rechazar el registro. Para tratar de evitar esta supervisión administrativa, muchas organizaciones prefieren operar como centros de investigación u organizaciones sin ánimo de lucro en el marco de la menos restrictiva ley 32/1964. En palabras de Kristina Kausch, investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), la ley 84/2002 «es una acumulación de regulaciones restrictivas, barreras administrativas y procedimientos que representaban una carga no razonable para las ONG y que reduce de manera significativa, si no suprime, su capacidad para operar» (2009: 4).

Algunos de los artículos más controvertidos de la ley 84/2002 son:

- El artículo 11, que fija los ámbitos en los cuales las asociaciones pueden desarrollar su labor advirtiendo que no se autorizará a aquellas que «amenacen la unidad nacional, violen el orden público o la moralidad o aboguen por la discriminación de los ciudadanos en función de su sexo, origen, color, lengua, religión o credo». Dicho artículo también «restringe la práctica de toda actividad política y sindical a los partidos políticos y las organizaciones sindicales».
- El artículo 8, que permite a las autoridades modificar los estatutos de las asociaciones en el caso de que interpreten que vulneran la ley, y el artículo 34, que otorga al Ministerio

5. <http://www.egypt.gov.eg/english/laws/ngo/index.asp>

de Asuntos Sociales la potestad de excluir a los candidatos al consejo directivo de las asociaciones, tal y como ha ocurrido en varias ocasiones basándose en informes de las fuerzas de seguridad, lo que supone una inaceptable interferencia en la autonomía de las ONG.

- Los artículos 16 y el 17 impiden que las ONG egipcias se asocien con otras organizaciones extranjeras o se integren en alianzas internacionales o reciban financiación externa sin la previa autorización de las autoridades.
- El artículo 42 establece que las organizaciones pueden ser disueltas en caso de que incumplan la legislación vigente citando como motivos de disolución «la obtención de fondos enviados por una parte extranjera», «la comisión de una grave violación de la ley, del orden público o de la moralidad» o «la incorporación o afiliación a algún club, sociedad, autoridad u organización domiciliada fuera de Egipto».
- Los artículos 74, 75 y 76 fijan penas de tres a doce meses de prisión e imponen multas de hasta 10.000 libras egipcias a quienes violen la legislación.

La arbitrariedad y discrecionalidad con la que puede interpretarse esta ley ha permitido a las autoridades entorpecer la labor de las OSC o disolver a aquellas a las que consideraba molestas por la labor que desarrollaban. Por ejemplo, el régimen no autorizó hasta 2003 las actividades de EOHR a pesar de que lo había venido solicitando desde su creación en 1985. En otras ocasiones ha retirado la licencia de las ONG ya existentes, como en el caso de Arab Women's Solidarity Association (AWSA) en 1993, como castigo a su oposición a la participación egipcia en la guerra contra Irak. El año 2000, Saad Eddin Ibrahim, director del Ibn Jaldun Center for Development Studies, fue condenado a siete años de prisión acusado de malversación de fondos y de dañar la imagen de Egipto. Al igual que el AWSA, el Ibn Jaldun Center fue clausurado.

Tras la Revolución del 25 de enero, el sindicalista Kamal Abbas, coordinador del Center for Trade Unions and Workers' Services (CTUWS), fue condenado el 26 de febrero de 2012 a seis meses de prisión tras criticar la presencia del ETUF en una reunión de la

Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. El 12 de junio de 2013 Karam Saber, director del Land Center for Human Rights (LCHR), fue sentenciado a cinco años de prisión acusado de difamar a Dios, incitar a los disturbios y propagar el ateísmo por un libro publicado dos años antes titulado *¿Dónde está Dios?* Ante esta persecución, EOHR emitió un comunicado que denunciaba:

la existencia de una campaña estatal organizada para desacreditar a los grupos de la sociedad civil, en particular los que trabajan en derechos humanos... Las investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía de Seguridad del Estado y las acusaciones de conspiración y traición a la patria sirven conjuntamente para que la sociedad egipcia recele de dichos grupos y sospeche de sus objetivos. Además, siembra dudas en torno a su mensaje y extiende la idea de que estos grupos están implementando agendas extranjeras. Esta incitación al odio contra las OSC conlleva la amenaza de algún tipo de acción violenta en el futuro resultado de esas acusaciones provocadoras. También predispone a la sociedad contra las ideas promovidas por esos grupos.

Los movimientos de mujeres

Tal y como subrayara el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe (IDHA) de 2005 *Towards the Rise of Women in the Arab World*, el mundo árabe sigue estando en última posición mundial en lo que respecta a cuestiones de alfabetización, escolarización, participación económica y política, derechos civiles y políticos de las mujeres. Según el Índice de Desigualdad de Género del IDHA de 2013, Egipto ocupa el puesto 126 con un valor de 0,590 con tan solo 2,2% parlamentarias, 43,4% mujeres mayores de 25 años que han completado sus estudios de secundaria (frente al 59,3% de los hombres) y una tasa de participación en el trabajo de la fuerza laboral mayor de 15 años de un 23,7% (frente al 74,3% de los hombres). Según el Informe Anual de 2012 del Foro Económico Mundial, Egipto ocupa el puesto 125 de los 133 analizados en cuanto a derechos de las mujeres. Las mujeres sufren, por lo tanto, situaciones de discriminación en todos los ámbitos fruto del contexto patriarcal y religioso.

El movimiento de mujeres egipcio registró un fuerte impulso en la década de los ochenta con la aparición del AWSA, Progressive Women's Union (PWU) y el Committee for the Defense of the Rights of the Women (CDRW). Como ocurre con varias asociaciones de derechos humanos, algunas organizaciones de mujeres prefirieron registrarse como empresas privadas o centros de investigación para sortear las trabas administrativas. Entre los grupos de defensa de los derechos de la mujer más relevantes hoy en día cabe mencionar la Alliance of Arab Women o New Women Foundation (registradas como ONG) o New Women's Research Centre, Together y Daughter of the Land Group (que operan como organizaciones sin ánimo de lucro o centros de investigación). El Nadeem Center for the Management and Rehabilitation of Victims of Violence lucha, por su parte, contra la violencia de género, la tortura y los abusos sexuales practicados por las fuerzas de seguridad.

Entre sus objetivos compartidos cabe mencionar la lucha por la igualdad de género, el combate contra el analfabetismo y la pobreza, el acceso de la mujer al trabajo y la sanidad, la asistencia legal o la participación política. Algunas ONG también han lanzado campañas sobre el papel reproductivo de la mujer o la violencia doméstica. Mediante su acción intentan sensibilizar a la población, pero también influir en el mecanismo de toma de decisiones mediante campañas de incidencia y presión para modificar la legislación. Además organizan seminarios y talleres de debate y publican libros, revistas e informes sobre aspectos concretos.

En cuanto a las estrategias, estas ONG colaboran puntualmente en campañas que persiguen objetivos concretos como el levantamiento de las reservas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la lucha contra la violencia de género practicada en el ámbito de la familia y los crímenes de honor, pero también mantienen una relación de competencia para captar fondos extranjeros, lo que afecta negativamente a su capacidad de influencia. Otro de los problemas más acuciantes es que esta dependencia de financiación extranjera les obliga a menudo a aceptar la imposición de su agenda de trabajo desde el exterior. La acción de estas organizaciones choca con la frontal oposición del movimiento islamista que considera que deben preservarse las tradiciones locales a toda costa, entre ellas el

patriarcado, como medio para frenar el proceso de occidentalización de la sociedad egipcia.

Durante la Revolución el 25 de enero de 2011 se experimentó un cambio radical, puesto que hombres y mujeres se movilizaron conjuntamente para reclamar la caída del régimen. Como recuerda Maha Abdelrahman:

Las mujeres lideraron las protestas, emplearon su creatividad y talento escribiendo eslóganes, apoyando al resto de manifestantes y manteniendo alta la moral. No hubo diferencias entre las mujeres seculares o las religiosas, porque todas se sentían parte de un mismo pueblo que creía en la misma causa. Derribar las barreras sociales, ideológicas y políticas entre las masas y fortalecer el sentido de la solidaridad y la colectividad han sido, en mi opinión, uno de los logros más importantes de las revoluciones tunecina y egipcia (2011: 234).

La movilización de las mujeres desató la ira de los sectores más inmovilistas de la sociedad egipcia que trataron de evitarla mediante acciones punitivas. El 8 de marzo de 2011 varias organizaciones se congregaron en Tahrir para conmemorar el Día de la Mujer, pero las mil mujeres reunidas fueron insultadas, golpeadas y acosadas sexualmente. Nawla Darwiche, una de las participantes de la marcha, relató:

Habíamos decidido reafirmar nuestro derecho a estar en la calle. Teníamos un permiso para organizar una marcha desde el Sindicato de Prensa a la plaza de Tahrir donde nos estaban esperando los salafistas, que nos atacaron violentamente. Además se registraron casos de acoso sexual. Llevábamos carteles que reivindicaban nuestros derechos y los salafistas nos insultaron diciendo que defendíamos las leyes de Mubarak.⁶

Un día más tarde tuvo lugar otra manifestación en la que fueron detenidas 17 mujeres, siendo sometidas a pruebas de virginidad y

6. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.

condenadas, algunas de ellas, a un año de prisión por un tribunal militar (aunque dicha pena fue posteriormente suspendida). Una de ellas interpuso una denuncia ante la justicia, que falló a su favor al considerar dichas prácticas ilegales. En unas declaraciones señaló: «No he ido a los tribunales como Samira Ibrahim. Las violaciones que han tenido lugar han sido cometidas contra todas las mujeres de Egipto» (ITUC-CSI, 2012: 16).

Uno de los principales problemas del periodo de transición ha sido la marginación de las mujeres en el proceso político debido a que ni el CSFA ni el PJJ tienen un enfoque de género. De los ocho integrantes del Comité de Revisión de la Constitución que designó el CSFA ninguno era mujer, tan solo una mujer participó en el gobierno interino y únicamente siete mujeres tomaron parte en el comité de cien personas encargado de realizar varias enmiendas constitucionales. El Egyptian Centre for Human Rights Education (ECHRE) emitió un comunicado, secundado por 63 organizaciones, para denunciar la exclusión de las mujeres del proceso de reforma constitucional:

Cuestionamos los criterios seguidos para elegir a los miembros de la Comisión Constitucional. ¿Fueron criterios políticos o basados en los valores de igualdad y justicia impulsados por la revolución? Si estos se basan en la eficiencia e integridad, entonces ¿por qué las mujeres juristas son excluidas a pesar de que Egipto existen gran cantidad de expertas constitucionalistas, tanto en el Tribunal Supremo Constitucional como en las Facultades de Derecho?⁷

A pesar de su activa implicación en la revolución, el número de mujeres candidatas a la Asamblea Constituyente fue limitado: solo representaban el 16% de los candidatos de la coalición Revolución Continua, el 1,7% del Bloque Egipcio, el 13,7% del Partido Wafd, el 13,6% del PJJ y el 13,2% del salafista al-Nur. Las mujeres solo lograron nueve de los 508 escaños en juego (aunque el CSFA posteriormente

7. ECHRE, «El Comité Constitucional comienza sus trabajos descuidando y excluyendo a mujeres expertas en Derecho»: <http://www.nodo50.org/csca/agenda11/misc/arti63.html>

designaría otras dos) o, lo que es lo mismo, un 2,2% del total (en comparación con el 12% elegidas en los comicios de 2010).

Esta baja representación se debía a la derogación por el CSFA de la ley que establecía un cuota de 64 mujeres diputadas. Otro tanto ocurrió en la Asamblea Consultiva donde solo disponían de cinco de los 180 escaños (un 2,7%). El primer ejecutivo formado por el PJI únicamente incluía a dos mujeres de un total de 31 ministerios: Fayza Abu al-Naga (Cooperación Internacional) y Nagwa Jalil (ministra de Solidaridad y Asuntos Sociales).

Tras la llegada del PJI al poder se alzaron numerosas voces que demandaban la revisión de las leyes aprobadas durante la época de Mubarak para hacerlas acordes con la *sharía*, entre ellas, las que le otorgan el derecho al divorcio sin la aprobación del marido o la que concede a las mujeres la custodia de sus hijos hasta que cumplan los 15 años (ley 1/2000). También se pidió que se despenalizara la mutilación sexual femenina. La diputada islamista Azza Algarf planteó la revisión del Código de Familia por considerar que «ha provocado un mayor número de divorcios y la disolución de la familia egipcia» (ECWR, 2012: 21). Algarf también justificó que «el acoso sexual tiene lugar por la desnudez de la mujer, por lo que los acosadores no están equivocados».

Otro de los problemas que deben afrontar las mujeres egipcias es la violencia de género, que no ha decrecido tras la revolución. Según un estudio promovido en 2012 por el Consejo Nacional de la Mujer tras entrevistar a 13.500 mujeres, el 88% había sufrido mutilación genital, el 60% de las mujeres había sido objeto de violencia doméstica, el 51,5% había sido sometido a acoso verbal (por un 31,8% que ha sufrido tocamientos) y el 38% era forzado a matrimonios contra su voluntad (ECWR, 2012: 23-24). Todo ello dibuja un panorama poco optimista en el que los derechos de las mujeres parecen haber sido sacrificados en un acuerdo entre las fuerzas religiosas y conservadoras, contrarias a modificar los valores patriarcales y religiosos de la sociedad egipcia.

Las organizaciones de derechos humanos

Entre las asociaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos cabe destacar EOHR, ANHRI, Nadeem Center, Cairo Ins-

titute for Human Rights Studies (CIHRS), Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) y Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE), cada una de ellas con sus ámbitos de actuación. Entre sus actividades figuran la elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos, la prestación de asistencia legal, la observación electoral o la promoción de los valores democráticos, así como las campañas de incidencia y presión para que se modifiquen las leyes egipcias.

Es habitual que dichas organizaciones participen en alianzas internacionales y regionales. El ANHRI forma parte de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), International Federation for Human Rights (IFHR) y Front Line. El CIHRS es, igualmente, integrante de la REMDH y del International Freedom of Expression and Exchange y es observador en la Comisión Africana de Derechos Humanos y en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). EOHR también tiene estatuto consultivo en el ECOSOC y toma parte en cinco organizaciones internacionales: Arab Organization for Human Rights, Organization Mondiale Contre La Torture, Federation International des Droits de L'Homme, International Commission for Jurists e International Freedom of Expression Exchange. Al mismo tiempo, debe subrayarse la dimensión regional de buena parte de estas organizaciones, puesto que Egipto ocupa un lugar central en el sistema árabe. ANHRI y CIHRS, por mencionar tan solo algunos ejemplos, no solo son organizaciones egipcias, sino también panárabes.

La agenda de estas organizaciones no se vio modificada tras la caída de Mubarak, puesto que los derechos humanos continuaron siendo vulnerados. En opinión de Ayda Seif al-Dawla, «la mentalidad es la misma y ahora las fuerzas de seguridad son más agresivas y brutales: quieren vengarse de la revolución y de la pérdida de poder. Además nos enfrentamos a un nuevo fenómeno: las torturas perpetradas por actores no estatales como las milicias de los HHMM o las campañas que persiguen a la población copta en el Alto Egipto».⁸ En su informe de 2012, el CIHRS señalaba:

8. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.

El uso de tribunales militares excepcionales para juzgar a civiles también aumentó, al igual que la detención de numerosos activistas políticos, blogueros y manifestantes pacíficos. La tortura y los tratos crueles o degradantes se sigue practicando en las cárceles y comisarías de policía con la novedad de que la policía militar también se involucró en la tortura de civiles (CIHRS, 2012: 85).

Precisamente una de las principales reivindicaciones de los revolucionarios sigue siendo la de juzgar a los responsables de la violencia. En el curso de los dieciocho días de la Revolución del 25 de enero murieron 846 personas, pero tan solo un policía ha sido condenado por dichas muertes hasta el momento. Para la activista Magda Adly del Nadeem Center:

No creo que podamos pasar página hasta que todos aquellos que han cometido crímenes contra la nación sean juzgados y depurados de los servicios de seguridad, en cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura. Sólo esto permitirá a la nueva generación perdonar y abrir una nueva página. Todo el mundo, desde el oficial de menor rango hasta el de más alto rango y el ministro de Interior —incluso Hosni Mubarak y todos los ministros que estaban al tanto de estos informes e hicieron declaraciones acerca de ellos en los medios— todos ellos deben ser llevados a juicio. No puede haber perdón hasta que esto suceda (Adly, 2011: 233).

La victoria electoral del PjL en las elecciones legislativas y presidenciales representó un reto de gran envergadura.⁹ Aunque los HHMM han manifestado en numerosas ocasiones su compromiso hacia los derechos humanos, siempre han condicionado su cumplimiento a que no entren en conflicto con la *sharía*. Para Moataz El Fegiery, investigador del CIHRS, su concepción de los derechos humanos choca frontalmente con la reconocida universalmente,

9. Sobre la situación de los derechos humanos con el CSFA y con los HHMM leer el informe de Nadeem Center (2013): *Summary: 2012 Report - 6 months of military rule; 6 months of MB rule*: https://docs.google.com/file/d/0B1qqm_EjPpz8cVVlemt5eFVMcVU/edit

en especial en lo que atañe a «la cuestión de género, la igualdad, los derechos de las minorías, la libertad de expresión, el pluralismo político, la libertad de credo y la prohibición de los castigos inhumanos y crueles» (El Fegiery, 2012: 8).

En lo que se refiere a la igualdad de género, los HHMM consideran que el concepto de igualdad de género, tal y como recoge la CEDAW, va en contra de los valores y de la moral islámica, por lo que abogan por la complementariedad entre ambos sexos, lo que les lleva a establecer diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta al matrimonio, la herencia y el testimonio judicial, por citar tan solo algunos ejemplos.

En lo que respecta a los derechos de las minorías religiosas, los HHMM garantizan la libertad religiosa para todas las religiones monoteístas reveladas, pero creen que debería excluirse a los chiíes (unos 200.000 fieles en Egipto) a los que se considera una versión descarriada del islam. El acceso al poder de los islamistas también intensificó los temores de la minoría copta, que representa el 10% de la población egipcia.¹⁰ Desde 2011, la violencia sectaria ha ido en aumento con frecuentes ataques contra iglesias y propiedades privadas de la Iglesia copta y problemas constantes con la construcción, reparación o ampliación de los centros de culto. En 2010 se registraron 45 ataques sectarios, 70 en 2011 y 112 en 2012 (Tadros, 2013).

La nueva Constitución, aprobada el 22 de diciembre de 2012 y derogada el 3 de julio de 2013, fracasaba a la hora de garantizar las libertades públicas y no prohibía expresamente ni la tortura ni los juicios militares contra civiles. La Constitución no garantizaba la libertad de expresión y de opinión, a pesar de que la National Coalition for Media Freedom (NCMF) había planteado, desde mediados de 2011, varias iniciativas para garantizar la libertad de prensa, entre ellas la campaña *La libertad es el origen*, que incluía 25 propuestas de artículos para garantizar las libertades básicas y los derechos civiles.¹¹

10. Sobre la violencia sectaria se puede consultar el informe del EIPR (2010): *Two Years of Sectarian Violence: What happened? Where do we begin? An Analytical Study of Jan 2008 -Jan 2010*: <http://eipr.org/en/report/2010/04/11/776>

11. NCMF, «Media Freedom: New Rights and Civil Liberties Initiative»: <http://ncmf.info/?p=388>

Resumiendo el sentir de una buena parte de la población egipcia, el analista político Hasan Nafea advertía en las páginas de un conocido diario egipcio:

Los HHMM quieren imponer una Constitución a su medida y no a la medida de la sociedad egipcia en toda su diversidad, y garantizarse, a través del control de todos los medios económicos y simbólicos y apoyados por sus aliados de la misma corriente ideológica, una gran mayoría en las próximas elecciones parlamentarias aunque el precio sea la paralización del poder judicial y que este no pueda ejercer su papel de control sobre la labor de los poderes ejecutivo y legislativo. Así quedaría despejado el camino para que los HHMM puedan reformular todas las instituciones del Estado y la sociedad egipcia de acuerdo con su visión y sus intereses políticos e ideológicos.¹²

El movimiento sindical

La libertad sindical está seriamente constreñida en Egipto. A pesar de que Egipto ha ratificado las Convenciones 87/1948 y 98/1949 de la OIT, no acepta la independencia y la libertad sindical. ETUF es un claro ejemplo de sindicato centralizado y burocratizado. Tradicionalmente ha estado a servicio del régimen y no de los trabajadores. Establecida en 1957 contaba en el año 2000 con unos 3.8 millones de afiliados (de una fuerza laboral de 27 millones de personas), 1.745 comités sindicales, 21.000 cuadros sindicales, 23 sindicatos sectoriales y 17 federaciones regionales. La relación del Estado con el ETUF es una relación de patrón/cliente y su misión es la de controlar a los trabajadores más que representarlos. La ley 35/1976, modificada posteriormente con la ley 1/1981, reconoce a la ETUF como la única federación de sindicatos legítima y legal.

La ley del trabajo 13/2003, aprobada en plena fase de políticas neoliberales, introdujo la flexibilidad laboral en los contratos para atraer inversiones extranjeras. El generalizado deterioro de las condiciones laborales provocó una creciente movilización de

12. *al-Misr al-Youm*, 3/12/2012.

los trabajadores. La media anual de manifestaciones en el período 1998-2003 ascendió a 118 (frente a las 27 anuales en el período 1988-1993), buena parte de ellas concentradas en el sector textil por ser el primero en privatizarse. Entre 2004 y 2008 un total de 1.7 millones de trabajadores (obreros, médicos, periodistas, profesores, farmacéuticos, recaudadores de impuestos...) reclamaron una mejora de sus condiciones laborales en más de 2.500 huelgas y movilizaciones. Como señala Nadine Abdallah, «ante la falta de un sindicato creíble, las huelgas y las manifestaciones se convirtieron en las únicas herramientas eficaces para ejercer presión sobre los empleadores (en el sector privado) o el gobierno (en el sector público)» (Abdallah, 2012: 1).

La más importante movilización de la pasada década tuvo lugar en Mahalla al-Kubra, la principal industria textil de Egipto situada en el Delta del Nilo. El 6 de abril de 2008, 24.000 trabajadores de la Misr Company for Spinning and Weaving salieron a la calle para demandar mejores condiciones laborales. La convocatoria fue respaldada por numerosos partidos y organizaciones, pero también por los nuevos movimientos de protesta como Kifaya,¹³ «transformando las demandas estrictamente económicas del movimiento obrero en una dura crítica de la situación social y política más amplia del país, por ejemplo los aumentos constantes de los precios, la muy extendida corrupción y la tortura de activistas políticos por la policía» (Abdalla, 2012: 2). Kamal Abu Eita, presidente de Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU), interpreta que «en época de Mubarak las huelgas se intensificaron y no solo por motivos laborales y sociales, sino también de otra naturaleza. De demandas de índole económica y de clase pasaron a luchar por la democracia y la libertad sindical».¹⁴

Tras la Revolución del 25 de Enero cambiaron parcialmente las tornas. Mientras la oficialista ETUF demandaba a los trabajadores

13. El Movimiento Egipto por el Cambio, más conocido por Kifaya, fue creado en 2004 por una heterogénea mezcla de grupos, activistas y partidos de variada ideología que compartían su rechazo a la pretensión de Mubarak de presentarse a un quinto mandato presidencial. Kifaya demandó también la derogación de la ley de excepción, el fin del monopolio político del Partido Nacional Democrático y la lucha contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

14. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.

que no abandonaran sus puestos de trabajo, la recién creada EFITU reclamó en su primer comunicado, del 8 de febrero, la dimisión de Mubarak y convocó una huelga general. En palabras de Abu Eita, «convocamos la huelga general en solidaridad con la revolución, ya que las demandas de la revolución eran las mismas por las que habíamos luchado siempre los trabajadores y solo la interrumpimos tras la salida de Mubarak». ¹⁵ Este llamamiento fue ampliamente seguido en El Cairo, Alejandría, el Canal de Suez y Mahalla al-Kubra. Según Sons of the Land Center for Human Rights, estas huelgas «fueron un factor determinante para acelerar la decisión de Mubarak de abandonar».

El 19 de febrero de 2011 los líderes sindicales independientes firmaron un manifiesto llamado *Demandas de los Trabajadores en la Revolución*, que incidía en que «las libertades no serán completas sin libertades sociales» y en el que se demandaba la disolución del ETUF (y la persecución judicial de sus mandos corruptos), un salario mínimo de 1.200 libras egipcias, la instauración de un subsidio de desempleo, el derecho a la libre sindicación y a la huelga y el acceso a la seguridad social.

El 12 de marzo se aprobó un decreto sobre libertades sindicales que autorizaba a los trabajadores a constituir sindicatos independientes, poniéndose fin de esta manera a la prohibición existente en la época precedente. Las dos principales federaciones independientes son EFITU, creada el 30 de enero de 2011, y Egyptian Democratic Labor Congress (EDLC), establecida el 14 de octubre, que dicen agrupar a más de tres millones de trabajadores. Sus congresos fundacionales se celebraron, respectivamente, del 28 al 30 de enero de 2012 y del 24 al 26 de abril de 2013.

Aunque dichas organizaciones comparten buena parte de sus reivindicaciones, difieren de manera notable en la estrategia para alcanzarlas. EFITU tiene una estructura centralizada y jerarquizada, que aspira a convertirse en un contrapeso a la oficialista ETUF. Considera que la vía política puede contribuir a mejorar las condiciones laborales, por lo que ha establecido sólidos vínculos con algunas fuerzas políticas y participó activamente en el Frente de Salvación

15. *Ibíd.*

Nacional que agrupaba a los opositores a Morsi. Kamal Abu Eita, su presidente, es un histórico líder del partido naserista Karama y en 2011 fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente.

En sus estatutos, EFITU se posiciona a favor de las libertades sindicales, la democracia, la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. Además pretende aglutinar no solo a los trabajadores en el sector formal, sino también a los del sector informal, los jubilados y los desempleados, todo ello con el objeto de disponer de la suficiente masa para poder influir en las decisiones económicas, sociales, culturales, legislativas y medioambientales (Ortega, 2013: 339).

Por su parte, el EDLC plantea una estrategia a medio plazo consistente en concienciar a la clase trabajadora sobre sus derechos y aspira a establecer una amplia coalición de sindicatos que funcione de manera democrática.¹⁶ Kamal Abbas, su impulsor, es un reconocido sindicalista que se curtió en la Helwan Iron and Steel Factory y que dirigió el CTUWS. Entre los principales objetivos del EDLC están la lucha para eliminar todas las restricciones administrativas impuestas en el pasado a los trabajadores y la consecución de un marco laboral adecuado que cumpla lo marcado por las normas internacionales. El EDLC es partidario de establecer alianzas parciales y concretas con aquellas fuerzas políticas con las que compartan planteamientos, pero rechaza involucrarse directamente en el juego político.

La expansión de los nuevos sindicatos y su capacidad de movilización fue respondida con la intensificación de la represión. El 24 de marzo el CSFA aprobó el decreto militar 34/2011 que criminalizaba las huelgas y manifestaciones laborales castigándolas con penas de un año de cárcel y multas de hasta 500.000 libras egipcias para todo aquel que «entorpeciera el trabajo de las instituciones o de las autoridades públicas» en el caso de que empleasen la violencia o amenazaran «la unidad nacional y la seguridad y el orden público», criterio sumamente vago que permitía múltiples interpretaciones. De hecho, el 29 de junio cinco trabajadores de la empresa Petrojet fueron objeto de una sentencia ejemplarizante al ser condenados a un año de prisión por participar en una sentada reivindicativa.

16. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.

Tras la llegada al poder del PjL se mantuvieron las mismas dinámicas. El CIHRS denunció la sistemática persecución de los sindicatos en los primeros cien días de Morsi en la presidencia con 39 líderes sindicales despedidos, otros 32 investigados por tomar parte en huelgas y cinco sentenciados a penas de prisión. Además, Yusri Maaruf, presidente del EDLC, fue condenado a una pena de tres años de prisión por haber encabezado la huelga del 1 de octubre de 2011 en la Alexandria Container and Cargo Handling Company. En opinión de Ibrahim Awwad, profesor de la Universidad Americana de El Cairo, «si se hubiera adoptado una ley de libertad sindical se hubiera facilitado el establecimiento de sindicatos que se habrían convertido en interlocutores válidos, lo que a su vez habría evitado huelgas y enfrentamientos».¹⁷

Entre las principales debilidades del movimiento sindical cabe mencionar:

- *Ausencia de marco regulatorio.* La actividad de EFITU y EDLC se encuentra en un limbo legal, puesto que la Constitución no contempla la libertad de asociación y sindicación y limita la creación de sindicatos a uno por sector. Al no haberse derogado ni reformado la ley 35/1976, ni los empresarios ni tampoco las autoridades les reconocen como interlocutores legítimos.
- *Atomización sectorial.* Uno de los principales retos de EFITU y EDLC es lograr implantación en el conjunto del país para poder conseguir la fuerza suficiente para plantear reivindicaciones a escala nacional. A pesar de que Egipto tiene una larga historia de movilizaciones laborales estas han sido menos efectivas por culpa de la fragmentación de los sindicatos.
- *Falta de influencia política.* Las demandas laborales no han encontrado eco entre la clase política. Buena parte de la oposición liberal (y, en especial, el Partido de los Egipcios Libres del empresario copto Sawiris) son contrarios a las reivindicaciones de los nuevos sindicatos independientes.

17. Entrevista personal con Ibrahim Awwad, 11 de abril de 2013.

- *Rivalidades personales*. Los dos líderes sindicales —Kamal Abu Eita y Kamal Abba— mantienen una enconada rivalidad, aunque iniciativas como el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Laborales y las Libertades Sindicales pretenden aproximar sus posiciones.
- *Falta de financiación*. Su falta de recursos y sus dificultades para financiarse les impide realizar cursos de formación de sus cuadros sindicales, un aspecto central si tenemos en cuenta las restricciones existentes en la época precedente.

Nuevas modalidades de acción colectiva y movilización social

El activismo virtual

La irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales alivió parcialmente las restricciones que el régimen imponía a los medios de comunicación tradicionales y permitió una cierta libertad de expresión a la hora de abrir debates públicos en torno a temas considerados tabúes en el pasado. Las redes sociales y los blogs de activistas fueron útiles para difundir información sensible, criticar la corrupción y convocar manifestaciones o concentraciones.

El primer test para este nuevo activismo llegó con la convocatoria de la huelga general del 6 de abril de 2008, cuyo llamamiento se difundió a través de una página de Facebook que, a la postre, se convertiría en el germen del Movimiento 6 de Abril. Según un artículo publicado en el National Coalition for Media Freedom, «los blogueros y los activistas comenzaron a formar a un cierto número de jóvenes en el uso de los nuevos medios de movilización, organización, supervisión, documentación y publicación, lo que creó una nueva dimensión en torno al papel de las nuevas tecnologías y la transición democrática» (Omran, 2011). También las OSC se beneficiaron de la red al poder difundir sus actividades, colgar sus materiales y hacer llegar su trabajo a todos los confines del país.

Los blogueros jugaron un papel determinante en la Revolución del 25 de enero, pero también en la difusión de las imágenes de la represión. No nos debe extrañar, por lo tanto, que tras la caída de Mubarak, el CSFA y el PjL redoblaran la presión sobre ellos al considerarlos una potencial amenaza. El programa electoral del PjL señala

que «la prensa es libre y no está sujeta a ningún tipo de censura, excepto la censura de la conciencia profesional, los valores de la sociedad y la ley» y que «la libertad de publicar periódicos, revistas u otros medios electrónicos o impresos está garantizada sin obstáculos legales o administrativos, siempre y cuando lo publicado respete la Constitución y la ley, así como la moral pública», lo cual introduce un factor de subjetividad importante. Posteriormente, el artículo 48 de la Constitución permitiría cerrar un medio de comunicación si violaba la regulación o por «exigencias de la seguridad nacional».

El Movimiento de Jóvenes 6 de Abril

Los jóvenes asumieron un papel central en las movilizaciones contra Mubarak. Debe tenerse en cuenta que Egipto cuenta con 85 millones de habitantes y una tercera parte de la población tiene entre 15 y 29 años. Dos terceras partes de la población, por lo tanto, había nacido bajo la presidencia de Hosni Mubarak.

Una de las convocantes de la manifestación del 25 de enero de 2011 fue Asmaa Mahfuz, dirigente del Movimiento 6 de Abril en el que también toman parte los activistas Ahmed Maher y Mohammed Adel, que previamente habían sido miembros de la rama juvenil de Kifaya: Jóvenes por el Cambio. Hoy en día es el movimiento juvenil más dinámico y de mayor capacidad movilizadora no solo en las grandes urbes —El Cairo y Alejandría—, sino en el conjunto del país.

Tras las multitudinarias manifestaciones en la plaza de Tahrir, el movimiento planteó sus reivindicaciones el 6 de febrero de 2011: liberación de todos los detenidos durante la revolución, dimisión inmediata de Mubarak, disolución de la Asamblea del Pueblo y la Asamblea Consultiva, creación de un consejo de salvación nacional integrado por políticos, intelectuales, juristas y representantes de movimientos juveniles, instauración de un gobierno interino de coalición, juicio de los responsables de la represión de Tahrir, convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales y redacción de una nueva constitución.

Al igual que otros actores de la sociedad civil, el Movimiento 6 de Abril ha sido objeto de numerosas campañas de desprestigio. El comunicado n° 69 del CSFA, emitido el 23 de julio de 2011, le acusó implícitamente de intentar abrir una brecha entre el pueblo y el ejército, así como tener una agenda secreta para sembrar el

caos y el desorden en el seno de la sociedad. Tras la llegada del PJJ al poder no dejaron de convocar a la población a manifestarse y tuvieron un importante papel en la campaña Tamarod. Muhammad Adel, un exmiembro de la Hermandad, consideraba que «Morsi está utilizando las mismas herramientas (la policía y el Ministerio del Interior) y las mismas tácticas que Mubarak para atacar a la oposición» (Azeem, 2013).

El derrocamiento de Morsi de la presidencia contó con el pleno respaldo del Movimiento 6 de Abril, que emitió un comunicado el 4 de julio de 2013 señalando:

Hoy nuestra gloriosa revolución ha vencido una nueva batalla que abre el nuevo camino de esperanza para Egipto. Hoy, las demandas del tsunami popular se han cumplido: el pueblo resultó ser el líder y el profesor. La declaración de hoy del CSFA coincide con las demandas del pueblo y con la hoja de ruta propuesta por las fuerzas políticas y, en particular, con el plan de trabajo presentado el 1 de julio por el Movimiento 6 de Abril. Esperamos que todas las partes reconozcan la necesidad de cooperar y colaborar por el bien de la nación y que no cometan los errores del pasado: la exclusión, la toma de decisiones de manera dictatorial y el aislamiento frente a las demandas de la población.

El principal reto del movimiento es adaptarse al nuevo contexto posrevolucionario. En los últimos meses vienen barajando diferentes opciones, que conviven con sus postulados tradicionales de flexibilidad a la hora de establecer alianzas con otras fuerzas sobre temas concretos.

La primera de ellas pretende convertir al movimiento en un grupo de presión para hacerlo más efectivo. Como señala Mohamed Adel:

Un grupo de presión puede trabajar con los pobres, ofrecer servicios a la población y también disponer de un *think tank*. Podemos trabajar en la calle, podemos trabajar con el gobierno y podemos hacer una campaña contra el gobierno por apoyar o estar en contra de una determinada ley. El partido es política clásica, pero un *lobby* es algo nuevo en Egipto (Azeem, 2013).

La segunda idea consiste en ampliar su base social para llegar a sectores que, hasta ahora, han estado lejos de sus redes de acción. Para Ahmad Maher:

Ahora todo el mundo utiliza las nuevas tecnologías para hacer política, pero no llega a todas partes y por eso debemos mejorar su efecto real en la sociedad. Los medios de la red son viejos, es más importante llegar a los barrios pobres, y tener una mayor difusión entre los que no están conectados. Es una herramienta efectiva pero no llega a la mayoría de la población. Fue útil en la convocatoria del 25 de enero de 2011 porque hubo mucho apoyo externo, pero para las elecciones no tuvo un gran alcance (Fibla, 2012).

Relaciones de las OSC con las autoridades

Tras la caída de Mubarak, las OSC egipcias han mantenido un estrecho diálogo con las autoridades tratando de que flexibilizaran sus posturas y asumieran un enfoque de derechos humanos y de género en la nueva legislación. Esta tarea no ha dado los resultados deseados debido a la cerrazón tanto del CSFA como del PJJ. Debe establecerse una clara distinción entre los primeros meses de la revolución y los posteriores, ya que en el primer gobierno interino estaba mucho más inclinado al diálogo. Gamal Eid, director de ANHRI, considera que:

Tras la revolución se vivieron dos meses vibrantes en los que pensamos que era posible el cambio. Además consideramos que, en el nuevo contexto, deberíamos replantearnos nuestra forma de trabajar: de realizar campañas de incidencia sobre la libertad de expresión empezamos a plantear iniciativas legislativas al propio gobierno en torno a la reforma de los medios de comunicación o del Ministerio de Interior. Tras estos dos primeros meses entendimos que el CSFA era parte del régimen de Mubarak y pretendía que las OSC cerráramos los ojos ante sus crímenes.¹⁸

18. Entrevista personal con Gamal Eid, 10 de abril de 2013.

Con el PJJ en el gobierno, CIHRS y NWF tomaron parte en el debate del Consejo Consultivo sobre la nueva ley de ONG, pero sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta. Aunque ANHRI fue invitado a tomar parte en dichas deliberaciones se abstuvo al considerar que «no se trataba de una verdadera discusión, sino mera fachada democrática».¹⁹ De la misma opinión era Ayda Seif al-Dawla, del Nadeem Center, quien interpretaba que «estamos dispuestos a dialogar, pero no a ser instrumentalizados para hacernos una foto que legitime al presidente. Eso no es un diálogo, sino una mera consulta destinada a mejorar su imagen».²⁰

Esta misma opinión es compartida por los líderes sindicales. Kamal Abu Eita interpretaba que «las autoridades egipcias están abiertas al diálogo, pero no al compromiso»,²¹ mientras que Kamal Abbas considera que «los HHMM emplean constantemente la idea del diálogo, pero es una mera maniobra. Mantienen el diálogo, pero no se comprometen a aplicar los acuerdos logrados. Se trata, por lo tanto, de un mero diálogo formal que no tiene ninguna consecuencia práctica».²²

Las leyes Borei y Azhari

El 7 de marzo de 2011 Ahmed El-Borei fue designado ministro de Trabajo e Inmigración y se cifró como su principal prioridad aprobar una nueva ley que reconociera la libre sindicación y reemplazara a la ley 1/1981. Borei planteó un proyecto de ley que contó con el apoyo de las nuevas federaciones sindicales EFITU y EDLC y que fue aprobado en septiembre de 2011 por el Consejo de Ministros, aunque no llegó a ser ratificado por el CSFA ni por el PJJ.

Tras su dimisión, el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Jaled al-Azhari, vicepresidente de ETUF y miembro de los HHMM, planteó un nuevo borrador que no recogía las propuestas de su predecesor en el cargo. El nuevo proyecto planteado por Azhari fue rechazado tanto por EFITU como por el EDLC en una reunión que mantuvieron con el ministro el 18 de septiembre de 2012. Tras ser

19. *Ibíd.*

20. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.

21. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.

22. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.

aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de octubre no llegó a ser ratificado por el presidente Mohamed Morsi.

Existen diferencias radicales entre los dos proyectos de ley (Abdalla, 2012: 3-4). Borei contemplaba el reconocimiento de los sindicatos independientes siempre que tengan más de cincuenta afiliados y, además, permite, más de un sindicato por sector. Azhari pretendía mantener la posición hegemónica de ETUF, que además podría seguir gestionando los denominados fondos sociales (las contribuciones realizadas por los trabajadores durante su vida laboral que garantizan los servicios de la seguridad social y la percepción de las pensiones). Este fondo se nutre de las cuotas sindicales, directamente deducidas de los salarios de los trabajadores. Según Azhari, quien se retirase de ETUF perdería sus derechos consolidados (al contrario de lo que proponía Borei).

A pesar de que ha quedado debilitado tras la emergencia de los nuevos sindicatos, el ETUF ha conseguido sobrevivir en un contexto sumamente adverso. Con la ayuda primero del CSFA y después del PJI ha conseguido recuperar parte del terreno perdido. Tras la victoria electoral del PJI se intensificaron los movimientos para hacerse con el control de ETUF dentro de una ambiciosa estrategia destinada a extender el control islamista al conjunto de las instituciones estatales. El 25 de noviembre de 2012 el decreto presidencial 97/2012, condenado por EFITU y el EDLC, ordenó la destitución de todos los miembros del comité ejecutivo del ETUF mayores de 60 años y su sustitución por los segundos más votados en las elecciones de 2006, maniobra destinada a reemplazar a la vieja guardia sindical por una más joven y próxima a los HHMM. Al frente del ETUF se situó a al-Gibali al-Maraghi, al que poco después se premió designándolo miembro de la Asamblea Consultiva.

La ETUF, que cuenta todavía con cuatro millones de afiliados, es un objetivo estratégico a pesar de que, «desde el período monárquico, los HHMM adoptaron posiciones antisindicales, al percibir el movimiento obrero como un competidor entre los más desfavorecidos desde postulados izquierdistas, postura que se reforzó con la tutela del régimen naserista sobre el sindicato oficial» (Barreñada, 2013: 118). Tras la revolución, «los HHMM colaboraron con remanentes del régimen de Mubarak en la burocracia de la ETUF. Sus intereses comunes son mantener el control sobre una entidad relativamente rica

y contener (y quizá hacer retroceder) el crecimiento del sindicalismo independiente. Al igual que en otros centros de poder, los HHMM han buscado acomodo con el aparato de la era de Mubarak en lugar de eliminarlo o reformarlo de otros modos» (Beinin, 2013: 3).

La nueva ley de ONG

Tras la Revolución del 25 de enero, 39 organizaciones de derechos humanos y de desarrollo plantearon el 16 de noviembre de 2011 su propia propuesta de ley de asociaciones con el objeto de adaptar la existente a los estándares internacionales.²³ Dicha propuesta pretendía garantizar la autonomía de las organizaciones frente a las injerencias administrativas del Ministerio de Asuntos Sociales y de los servicios de seguridad. Una de sus principales demandas era que las ONG pudieran establecerse, tal y como ocurre en otros países árabes, por notificación y que no requiriesen la autorización previa de las autoridades. Al mismo tiempo reclamaba la libertad para integrarse en redes nacionales e internacionales o percibir financiación del extranjero sin el permiso correspondiente del Ministerio de Asuntos Sociales. Estas demandas cayeron en saco roto, ya que el gobierno interino y el CSFA las rechazaron.

Una vez elegida la nueva Asamblea Constituyente fueron planteados varios proyectos de ley destinados a remplazar a la ley 84/2002. Desde un primer momento quedó manifiesta la escasa voluntad del PJI de incorporar las sugerencias de las OSC, aunque sí que hubo un diálogo abierto en el marco del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente en el que participaron algunas OSC. Pese a ello, los nuevos proyectos de ley fueron sumamente restrictivos, lo que demostró que la interlocución no implicaba necesariamente capacidad de influencia.

Los temores de las ONG fueron confirmados a principios de 2013 cuando aparecieron tres nuevos proyectos de ley elaborados, respectivamente, por los ministerios de Asuntos Sociales, Desarrollo Local y Justicia. Mohamed Elagati, director del Arab Forum for Alternatives, interpretaba que estos proyectos pretendían «trans-

23. <http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2011/11/Draft-Law-on-Associations-en.pdf>

formar las ONG en NGO gubernamentales» (2013: 8) y denunciaba los siguientes artículos:

- El artículo 1 fijaba la cantidad de 250.000 libras para establecer una ONG, algo poco viable especialmente en el ámbito rural.
- El artículo 6 admitía el registro de ONG por notificación, pero otorgaba a las autoridades un plazo de 60 días para oponerse.
- El artículo 11 señalaba que las ONG podían «concienciar» (en lugar de «defender») sobre los derechos humanos y prohibía cualquier tipo de actividad política o sindical de las ONG.
- El artículo 14 condicionaba la colaboración con otras agencias u organizaciones extranjeras a la previa autorización de las autoridades.
- El artículo 16 imponía la aceptación previa de ayudas extranjeras.
- Según el artículo 39, las autoridades podían designar un consejo de dirección de las ONG en el caso de que no fueran capaces de reunir un quorum suficiente.
- El artículo 42 contemplaba la disolución de las ONG si no cumplían los objetivos que se habían cifrado.
- El artículo 56 limitaba la naturaleza de las actividades de las ONG al ceñirlas a las necesidades del medio egipcio y a «la observancia del orden público y la moral».
- El artículo 57 establecía un Comité de Coordinación responsable del control financiero de las ONG y, en particular, del control de la financiación internacional, en el que participaría el Ministerio de Interior y la Seguridad Nacional.

Finalmente, el 29 de mayo de 2013 el presidente Mohamed Morsi sometió a la Asamblea Consultiva su propio proyecto de ley. La REMDH emitió un comunicado en el que consideraba que de ser finalmente aprobado:

Hará extremadamente difícil el trabajo diario de las ONG locales e internacionales, en todos los campos que van desde el desa-

rrollo de la cultura a la promoción de los derechos humanos, debido a los controles burocráticos excesivos, el escrutinio del gobierno y los procedimientos de autorización para todas sus actividades. El espíritu fundamental de esta ley es alinear a la sociedad civil con las políticas gubernamentales con el riesgo de ahogar cualquier voz disidente y criminalizar a los activistas civiles.²⁴

Diálogo y coordinación entre la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil con una agenda de reforma política han mantenido una estrecha colaboración y han planteado diversas iniciativas relevantes en la fase posrevolucionaria. Debe tenerse en cuenta que las radicales transformaciones experimentadas en el país les han obligado a centrar buena parte de sus iniciativas en el ámbito político y, de manera especial, en las nuevas propuestas regulatorias planteadas por las autoridades. En este sentido, el establecimiento de coaliciones transversales y sectoriales, en el marco de una movilización flexible ha sido una práctica habitual y necesaria para tratar de confrontar las tendencias autoritarias de los gobernantes.

La Coalición de Organizaciones Feministas Egipcias

Tras la Revolución del 25 de enero, los grupos de defensa de la mujer constataron que el CSFA no tenía la menor voluntad de incluir el enfoque de género entre sus prioridades. Para defender sus derechos, las más importantes asociaciones de defensa de las mujeres decidieron establecer la Coalition of Egyptian Feminist Organizations que incluía en un principio a once miembros. Una de sus integrantes recuerda cómo se formó y cuál era su modo de acción:

El 20 de febrero de 2011 organizamos un encuentro al que asistieron medio centenar de organizaciones de mujeres. Las

24. Euro-Mediterranean Human Rights Network, «Statement on the Situation in Egypt», 5 de junio de 2013: <http://www.euromedrights.org/eng/2013/06/05/urgent-statement-emhrn-obs/>

que éramos claramente feministas establecimos una coalición que hoy en día cuanta con 23 integrantes. Las actividades consisten en emitir comunicados, organizar conferencias de prensa, convocar movilizaciones y sentadas. Ahora intentamos ser más abiertos hacia otros grupos de mujeres para tratar de incorporarlos, porque han surgido grupos espontáneos e informales como Bahiya Ya Misr o el Comité de Coordinación de la Mujer. Entre todos ellos intentamos hacer labor de incidencia y presionar a las autoridades para que defiendan los derechos de la mujer.²⁵

Desde su creación, esta coalición ha emitido numerosos comunicados de posicionamiento ante las radicales transformaciones experimentadas en el país. También ha celebrado conferencias, talleres y reuniones a distinto nivel con el objeto de debatir la nueva situación y los retos que presenta para el movimiento de mujeres. Su primer comunicado, emitido el 16 de febrero de ese mismo año, reivindicaba la necesidad de establecer «un nuevo orden político, social y económico» y «eliminar todas las formas de discriminación de género, clase o credo como una condición para la plena igualdad».

En una conferencia de prensa celebrada el 10 de abril de 2011, la Coalition of Egyptian Feminist Organizations planteó cinco reivindicaciones:

- Representación real de la mujer acorde a su peso específico y a su contribución al desarrollo del país. La mujer debería estar representada adecuadamente en el Comité Constitucional y en todos los órganos y comités nacionales, regionales e internacionales.
- Las mujeres deben tomar parte en el proceso de reforma de todas aquellas leyes que les afectan.
- Las mujeres deben estar representadas en los puestos de liderazgo, ya que muchas de ellas están altamente cualificadas para participar en la gestión de los asuntos del estado.
- Demanda de disolución del Consejo Nacional de la Mujer, por haber sido manipulado por el régimen de Mubarak.

25. Entrevista personal con Nawla Darwiche, 9 de abril de 2013.

- La Coalición exigió que el estado jugase un papel activo en la creación de una cultura que apoyase los derechos de las mujeres.

La coalición también criticó la infrarrepresentación de la mujer en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Diferentes grupos de defensa de la mujer plantearon sus dudas en torno al borrador constitucional, por su fracaso a la hora de defender la plena igualdad de género. También varias organizaciones de derechos humanos hicieron llegar a dicho comité sus propuestas y recomendaciones en torno a los derechos de la mujer. El Egyptian Center for Women Rights (ECWR) envió un detallado informe titulado *Igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución* que no influiría en las deliberaciones de los legisladores.

El Foro de Organizaciones de Derechos Humanos Independientes

El Forum of Independent Human Rights Organizations agrupa a 13 organizaciones egipcias que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Mantienen una estrecha relación para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas antes y después de la época de Mubarak. Suelen publicar informes y comunicados, así como organizar ruedas de prensa, talleres y seminarios. Además, el foro asume la representación de las organizaciones de derechos humanos egipcias ante organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su modo de acción se basa en que uno de sus miembros presenta un comunicado y lo somete a la consideración de los demás integrantes de la plataforma para recabar sus comentarios y adhesiones, tras lo cual se hace público.²⁶

Además de denunciar las violaciones contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, este grupo lanza propuestas como la formulada en el debate en torno a la reforma constitucional. El 9 de julio de 2011 planteó una propuesta denominada *Libertad, dignidad y justicia social. Provisiones básicas en la Constitución* destinada a aportar un enfoque de derechos humanos

26. Entrevista personal con Elvira Giráldez, investigadora del CIHRS, 9 de abril de 2013.

en el texto constitucional. Dicho documento subrayaba «la identidad multidimensional de Egipto» en lo que se refería a religiones, sectas, confesiones, étnicas y culturas afirmando que «esta diversidad era la fuente más importante de riqueza de la identidad egipcia» y que «no podía ser reducida a una única dimensión» en referencia a la islámica (artículo 1). Además reclamaba «el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tal y como reconocen las convenciones y la legislación internacional; todos ellos deberían ser preservados por la Constitución que debería garantizar la libertad de establecer partidos políticos, colegios profesionales y sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras formas de asociación por notificación» (artículo 2). También demandaba la separación de poderes, el gobierno de la ley, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la consecución de la justicia social y la dignidad combatiendo toda forma de incitación al odio religioso, ya que «no debería permitirse a ninguna mayoría suprimir a una minoría por cualquier medio, ya sea ideológico, religioso, confesional o étnico» (artículo 3).

El Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Laborales y las Libertades Sindicales

Dos de las principales taras que lastran la capacidad de maniobra del movimiento sindical son la desconexión entre las demandas laborales y las políticas y la rivalidad existente entre EFITU y EDLC, a pesar de compartir buena parte de sus objetivos. Para superar esta situación se estableció, el 15 de octubre de 2012, el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Laborales y las Libertades Sindicales.

Entre sus principales reivindicaciones estaban: la cancelación de la ley 35/1976, la aprobación del proyecto de ley de Borei, la protección de los trabajadores contra los despidos como represalia a su labor sindical, el combate contra las violaciones laborales cometidas tanto por el Estado como por los empresarios y, por último, el establecimiento de una escala salarial justa en la que el salario máximo no pudiera superar 15 veces el mínimo.

Entre los integrantes de dicha plataforma se contaban, además de EFITU y el EDLC, diversos partidos que tradicionalmente simpatizaban con las reivindicaciones de la clase trabajadora, como el Partido Social Demócrata Egipcio, el Partido Comunista Egipcio,

el Partido Tagammu, el Partido Karama, el Partido de la Alianza Popular Socialista y el Partido Socialista Egipcio, pero también otros grupos que habían mantenido cierta distancia con el movimiento sindical, como el Partido de la Constitución de Baradei.

A pesar de estos intentos, la desconfianza entre la clase política y los sindicatos es profunda. Sobre las relaciones con la sociedad civil y las fuerzas políticas, el presidente de EFITU interpreta que «es necesaria la colaboración con el resto de OSC y también con los partidos políticos en los asuntos en los que podamos establecer sinergias, pero siempre que no traten de entrometerse en nuestra autonomía sindical».²⁷ El director de CTUWS considera:

No hay una cooperación estrecha entre los movimientos sindical y político, ya que existe un serio problema de entendimiento entre ellos. Tras la revolución se establecieron numerosos partidos políticos, la mayor parte de ellos integrados por los jóvenes y la clase media. Todos ellos intentaron establecer relaciones con los nuevos sindicatos. Para nosotros es importante que cuando los partidos hablan de libertad y democracia tengan en cuenta que no pueden alcanzarse si los trabajadores carecen del derecho a establecer sus sindicatos o a la huelga... Tras la revolución, todos los partidos hablan de justicia social y nosotros consideramos que los derechos de los trabajadores son indispensables para alcanzar dicha justicia social.²⁸

Identificación de experiencias relevantes y buenas prácticas

Campañas contra el acoso sexual

Según el informe *Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt* realizado por UN Women, las áreas urbanas (y, en especial, El Cairo y Alejandría) se encuentran a la cabeza del acoso sexual. El 99,3% de las encuestadas aseguraron haber sufrido alguna forma de acoso sexual (en el 96,5% de los casos en forma de tocamientos), especialmente en la calle y en el transporte pú-

27. Entrevista personal con Kamal Abu Eita, 10 de abril de 2013.

28. Entrevista personal con Kamal Abbas, 12 de abril de 2013.

blico (89.3% y 81.8%, respectivamente). Las más acosadas son las estudiantes (91.3%), las trabajadoras (66.09%) y las amas de casa (46.5%). Según un 49.2% de las encuestadas, el acoso era diario, para un 19.2% era semanal (UN Women, 2013).

Como ya hemos señalado, la Revolución del 25 de Enero implicó nuevas dinámicas de movilización conjuntas en las que hombres y mujeres, de diferentes edades, clases y procedencias, compartieron durante 18 días un mismo espacio y unas mismas experiencias. No obstante, también irrumpieron nuevas formas para tratar de desactivar este creciente activismo femenino, como «el acoso sexual organizado, algo que no existía previamente lo cual nos lleva a pensar que está planificado».²⁹

Entre las principales iniciativas populares para tratar de poner coto a este fenómeno cabe señalar las emprendidas por varias organizaciones informales como Haraka Bassma, Nafsi, Shoft Taharrush, Nun li-l-ibda o Bahía Ya Misr. Todas estas iniciativas han contribuido a sacar a la luz un asunto que antes era considerado un tabú y a combatir ciertos prejuicios, entre ellos que solo las mujeres vestidas con ropas provocativas eran objeto de violencia sexual y que las mujeres respetables no la sufrían.

Dina Farid, promotora del movimiento ‘Las mujeres egipcias son una línea roja’ (*Banat Misr Jatt Ahmar*), manifestaba: «La revolución nos ha enseñado a ser positivos y nos ha dado la esperanza de que el cambio es posible».³⁰ Este grupo es especialmente activo en el centro de El Cairo, donde organizan grupos que previenen los abusos. Otra de las iniciativas lleva el nombre de ‘Compórtate como un hombre’ (*Estargel*) que centra sus actividades en el metro caiota. Sherine Badr, una de sus responsables, señala: «El hecho de que la sociedad haya empezado a advertir el problema y a hablar sobre él es en sí mismo un avance».

El Frente de la Creatividad

Uno de los aspectos menos conocidos de la transición egipcia es la eclosión de iniciativas culturales y artísticas. El escritor y analista

29. Entrevista personal con Ayda Seif al-Dawla, 6 de abril de 2013.

30. *al-Ahram*, 8/9/2012.

político Jaled al-Jamisi interpreta que estamos asistiendo a una verdadera ‘primavera cultural’ y una ‘revolución social’ que se caracteriza por la diversidad de iniciativas y proyectos artísticos emprendidos por jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Estas iniciativas en su mayoría no adoptan formas tradicionales o estructuras legales, sino vías de trabajo alternativas e informales: creación de centros culturales, apertura de salas de teatro, conciertos en la calle o foros de debate. Según al-Jamisi, «la revolución no es política, sino sociocultural: este movimiento acaba de empezar y va a desencadenar algo en un periodo de diez, veinte o treinta años que no será necesariamente una democracia representativa, tal y como se entiende en Occidente».³¹

Una buena muestra de este nuevo activismo se registró a comienzos de junio de 2013, cuando un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban los escritores Bahaa Taher y Sonaalah Ibrahim, el director de cine Jaled Yusef y los actores Galal Al-Sharkawi, Fardos Abdel-Hamid y Sameh Al-Serieti, decidieron encabezar una sentada y una cadena humana en torno al Ministerio de Cultura en el barrio caiota de Zamalek para impedir el acceso al ministro Alaa Abdel-Aziz, quien previamente había destituido al director general de la Organización del Libro Egipcio, al director de la Biblioteca Nacional Egipcia y a la directora de la Opera de El Cairo. En el curso de la sentada se organizaron conciertos, exposiciones y conferencias a las puertas del ministerio. La artista Maha Efat resumió el sentir colectivo: «Los HHMM odian el arte y la cultura y sus policías se dirigen directamente a socavar toda creatividad» (El Aref, 2013).

En enero de 2012 un grupo de intelectuales, actores, artistas y novelistas estableció el Frente de la Creatividad destinado a proteger la creación artística. Su manifiesto de nacimiento señalaba:

Tenemos la certeza de que esta revolución debe continuar hasta que logremos nuestra plena libertad, que no solo significa el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes sin opresión o fraude, sino que también significa la liberación de la voluntad de Egipto mediante la eliminación de todo tipo de restricciones a la

31. Entrevista personal con Jaled al-Jamisi, 11 de abril de 2013.

libertad de pensamiento, de opinión y de creatividad... Permaneceremos unidos frente a quienes quieren apagar la Ilustración en Egipto... Vamos a emplear todos los medios de presión y oposición para expresar nuestro rechazo a las restricciones contra de la libertad de pensamiento, de opinión y de creatividad, incluso si tenemos que pagar con nuestra vida. Preferimos morir por nuestro país que ser acusados por las futuras generaciones de no haber luchado por su libertad.

La sociedad civil en Alejandría

Alejandría es la segunda ciudad de Egipto con cuatro millones y medio de habitantes. La vida asociativa en Alejandría es limitada, especialmente en lo que se refiere a asociaciones con una agenda de reforma política e incidencia, ya que las principales tienen sus sedes en El Cairo. Por el contrario, el movimiento sindical es extraordinariamente activo. Tras la Revolución del 25 de enero se han registrado numerosas movilizaciones en los sectores público y privado para reclamar mejores condiciones laborales.

Las movilizaciones sindicales

Alejandría y sus alrededores concentran aproximadamente el 40% de la producción industrial de Egipto. Entre las actividades más relevantes destacan las relacionadas con las manufacturas, el transporte, el almacenamiento, los alimentos, el tabaco y la producción de productos petroquímicos y cemento sin olvidar la importante actividad de su puerto en lo que atañe a actividades de importación y exportación. La industria es, por lo tanto, el principal sector de la ciudad con más de 4.500 fábricas que dan empleo a 200.000 trabajadores. Durante los 18 días que duró la revolución contra Mubarak, buena parte de ellos secundaron la huelga convocada por EFITU para acelerar la caída del régimen.

El agravamiento de la crisis económica que padece el país, con una inflación que sobrepasa el 11% de media en los dos últimos años y una generalizada pérdida de poder adquisitivo, ha disparado las movilizaciones que exigen una mejora de las condiciones laborales (contratos indefinidos en lugar de los temporales, establecimiento de un salario mínimo, pago de complementos productivos, etc.), pero

también políticas (libre sindicación y persecución de la corrupción del EFITU). En la mayor parte de las ocasiones, las huelgas han sido de carácter sectorial y no se han planteado movilizaciones colectivas con reivindicaciones conjuntas.

Desde la caída de Mubarak han surgido numerosos sindicatos independientes en Alejandría tratando de contestar el monopolio detentado previamente por el EFITU y tanto EFITU como EDLC cuentan con un creciente apoyo. Las movilizaciones, sentadas y huelgas para mejorar las condiciones laborales han sido una constante en algunas de las principales empresas privadas y públicas como Cadbury Dairy Milk, Alexandria Container & Cargo Handling Company, Alexandria Spinning and Weaving, Alexandria Company for Tyres, Portland Cement Company y Egyptian National Railways Authority. Las autoridades las han respondido con campañas de difamación contra los nuevos sindicatos, despidos de los líderes sindicales y juicios de varios de ellos bajo la acusación de violar el decreto militar 34/2011 aprobado por el CSFA para criminalizar las protestas laborales. Durante la etapa de gobierno del PJJ no se detectó un cambio de actitud, ya que prosiguió la persecución del movimiento sindical independiente.

El activismo informal y cultural

Al igual que ha ocurrido en El Cairo, en Alejandría también han surgido diversas iniciativas informales por parte de la sociedad civil, entre las que merecen citarse Hijo de la ciudad, ElMedina, Esken derella for Cultures and Arts o Bridge.

La asociación Hijo de la ciudad (*Welad El Balad*) fue fundada en 2011 por Karim Mahrus para combatir el acoso sexual en Alejandría y sensibilizar a la población sobre este problema. Además de prevenir los abusos, el grupo aporta información legal sobre las implicaciones legales de dichos abusos. También ha lanzado campañas y ofrece asistencia psicológica a las afectadas. Como señala Zeinab Ayub, coordinadora de la organización, «explicamos a las mujeres que las leyes están de su lado y que no deberían tolerar el acoso sexual. También educamos a los hombres sobre las consecuencias de sus actos».³²

32. *al-Abram*, 8/9/2012.

ElMadina³³ nació en 2000 y se centra en el arte y la cultura a través de la celebración de talleres, exposiciones y espectáculos realizados por jóvenes. Además pretende «transformar espacios públicos y zonas marginales en lugares donde la población pueda dar rienda suelta a la libertad de expresión y crear un medio social cohesivo caracterizado por la diversidad y el pluralismo». El Madina pretende que «arte y cultura sean una parte principal de la vida humana y uno de los principales parámetros para el desarrollo humano y social sostenible, determinantes para la democracia, los derechos humanos y el crecimiento económico».

Eskenderella for Cultures and Arts³⁴ nació en 2005 como un espacio de cooperación cultural en el cual los artistas de Alejandría pudieran compartir sus experiencias. Su principal objetivo es revitalizar la vida cultural y artística de la ciudad mediante el estrechamiento del abismo entre los artistas y la población, apoyar los derechos y libertades artísticas y propiciar que el arte se convierta en «guía para la reforma y la ilustración». Bridge,³⁵ por su parte, pretende dar cabida a «proyectos creativos e innovadores que inspiren a la población con nuevas ideas» y que «desarrollen económica y políticamente la sociedad». Sus actividades se centran en la juventud: «Ante todo nos esforzamos en proporcionar a los jóvenes la ayuda y el asesoramiento necesarios, no solo en su vida profesional sino también en su papel para mejorar su sociedad».

Conclusiones

En las últimas décadas, la sociedad civil egipcia ha experimentado una notable expansión. Pese a ello, su labor sigue estando fuertemente condicionada por unas leyes sumamente restrictivas que limitan su margen de maniobra y reducen el impacto de sus iniciativas. Por lo tanto, la primera recomendación se refiere a la necesidad de establecer un nuevo marco legal que levante las restricciones establecidas por la ley 84/2002 y respete las libertades fundamentales, incluida la libertad de asociación.

33. <http://elmadinaarts.com/>

34. <https://www.facebook.com/groups/eskenderellaor/>

35. <https://www.facebook.com/pages/Bridge/>

A pesar del desarrollo experimentado por las OSC egipcias, del incremento de los recursos que gestionan y del crecimiento de sus plantillas, las ONG no han conseguido traducir su capacidad de interlocución con las autoridades en influencia real sobre el mecanismo de toma de decisiones. Por lo tanto, la segunda recomendación sería analizar las diferentes opciones para tener una mayor influencia en la planificación y delimitación de las políticas públicas.

Dos años y medio después de Revolución del 25 de enero de 2011, la población no ha visto satisfechas sus legítimas aspiraciones resumidas en el lema «pan, libertad y justicia social». La juventud, que representa el 65% de la población egipcia, sigue estando frustrada, ya que la situación económica se ha deteriorado de manera notable. La tercera recomendación pasaría por situar a la juventud como absoluta prioridad de las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil y emprender acciones específicas centradas en este colectivo.

La mujer egipcia se encuentra en una situación completamente vulnerable, tal y como evidencian sus altas tasas de desempleo y analfabetismo (especialmente elevadas en el medio rural). Las OSC no han otorgado hasta el momento el suficiente peso a la cuestión de género en sus respectivas agendas. Por eso consideramos que, para contribuir a su empoderamiento, sería imprescindible coordinar la acción de las ONG a este respecto e integrar la perspectiva transversal de género en todos los proyectos que desarrollan.

La transición egipcia ha estado marcada por la incertidumbre y por la creciente tensión entre los sectores seculares e islamistas. El abismo que separaba a unos y otros se ha hecho cada día mayor, tal y como demostró el golpe militar del 3 de julio de 2013 que derrocó a Mohamed Morsi de la presidencia. En los últimos meses se ha asistido a una progresiva polarización de la escena política que podría desencadenar nuevos brotes de violencia. Por lo tanto, otra recomendación debería ser fomentar los espacios de diálogo entre los sectores seculares e islamistas para tratar de restablecer la confianza perdida y fijar una agenda de cooperación en torno a un programa de acción común, un requisito indispensable para que el proceso de transición no fracase.

Para tratar de desacreditar la labor que realizan las ONG, las autoridades no han dudado en emprender habituales campañas di-

famatorias contra ellas que han acabado calando en ciertos sectores de la población. Además, existe una evidente desconexión entre las preocupaciones del grueso de la población y las prioridades de las ONG. Para combatirlas, las ONG deberían adoptar una estrategia proactiva mediante la mejora de sus capacidades comunicativas y el planteamiento de estrategias para mejorar su imagen pública.

Existen varias redes que agrupan a ONG del mismo sector y que se activan en defensa de un interés común o ante una amenaza para sus intereses. No obstante, su efectividad se encuentran lastrada por su carácter informal y porque tienden a desactivarse con el transcurso del tiempo. Por eso consideramos necesario que esas redes informales se transformen en estructuras formales, lo que permitiría tanto optimizar recursos como mejorar la capacidad de incidencia de la sociedad civil.

Al mismo tiempo se ha constatado la falta de colaboración entre ONG de diferentes sectores y, de manera especial, entre las ONG con una agenda de reforma política y democratización y las dedicadas al desarrollo. Por eso sería importante buscar vías para fomentar el diálogo y la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad civil con el objeto de difundir el enfoque de derechos humanos entre el conjunto de las ONG.

Desde la caída de Mubarak, las ONG han estado expuestas a una agotadora sucesión de cambios y transformaciones sociopolíticas de gran calado que han consumido buena parte de sus energías. Esta situación les ha obligado a centrarse en una agenda cortoplacista, lo que ha ido en detrimento de la planificación de una estrategia en el medio y largo plazo, aspecto que consideramos que no debería descuidarse de cara un futuro.

En el curso de la última década se ha registrado un crecimiento exponencial de la ayuda internacional que reciben las ONG egipcias, lo que se ha traducido en consecuencias positivas como la profesionalización de sus estructuras, pero también en negativas como una mayor competencia y rivalidad por la captación de fondos o la fijación de sus prioridades por parte de los actores internacionales. Es imprescindible que las OSC sean capaces de conciliar estos cambios con la conservación de sus señas de identidad y que los donantes internacionales sean sensibles a sus preocupaciones.

Bibliografía

- EL AREF, N. (2013), «On the 30th Day...», *Al-Abram Weekly*, 4 de junio de 2013.
- AZEEM, Z. (2013), «Egyptian Youth Movement Continues the Revolution», *The Monitor*, 29 de abril.
- ABDALLAH, N. (2008), «The Labor Movement of Mahala El Kobra in Egypt: A Catalyst for Political Change?», Arab Forum for Alternatives.
- (2012), «Egypt's Workers: From Protest Movement to Organized Labor», German Institute for International Relations and Security Affairs, *SWP Comments*, n. 32, octubre.
- ABDELRAHMAN, M. (2011), «The Transnational and the Local: Egyptian Activists and Transnational Protest Networks», *British Journal of Middle Eastern Studies*, n. 38, diciembre.
- AZAOLA, B. (2008), *Historia del Egipto Contemporáneo*, Madrid: Los Libros de la Catarata.
- BARREDA, J. (2012), «Orígenes, evolución y caída del régimen de Mubarak», *Sociología Histórica*, n. 1.
- BARREÑADA, I. (2013), «Sindicatos y movimientos de trabajadores en los países árabes» en Álvarez-Ossorio, I. (ed.), *Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África*, Barcelona: Fundación CIDOB.
- BEININ, J. (2013), «Workers, Trade Unions and Egypt's Political Future», *Middle East Research Information Project*, 18 de enero.
- BOREI, N. (2009), «Civil Society and Human Rights in Egypt. Egyptian Style Waltz», Workshop *Beyond Apology and Utopia: Critical Engagements with Good Governance in the Arab World*, University of Windsor (Canada), 23-24 de octubre de 2009: <http://www.ug-law.com/downloads/Civil%20Society%20and%20Human%20Rights%20in%20Egypt-eg.pdf>
- ELAGATI, M. (2013), «The Proposed Law for Civil Associations and Institutions, 2013. A Model for Oppressive Laws and a Recreation of the Authoritarian System», Arab Forum for Alternatives.
- EL FEGIERY, M. (2012), «A Tyranny of the Majority? Islamits' Ambivalence about Human Rights», *FRIDE Working Paper*, n. 113. October.

- HASSAN, H. A. (2011), «Civil Society in Egypt under the Mubarak Regime», *Afro-Asian Journal of Social Sciences*, vol. 2, n. 2.2.
- IBRAHIM, S. E. (2002), *Egypt: Islam and Democracy. Critical Essays*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- KAUSCH, K. (2009), «Defenders in Retreat: Freedom of Association and Civil Society in Egypt», *FRIDE Working Paper*, n. 82, abril.
- KEMOU, A. y AZAOLA, B. (2009), «El Egipto contemporáneo: entre reformas y continuidad» en Izquierdo, F., *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo*, Fundación CIDOB, Barcelona.
- LONGUENESSE, E. y MONCIAUD, D. (2011), «Syndicalismes égyptiens» en V. Battesti y F. Ireton, *L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant révolution*, Paris, Sindbad.
- OMRAN, M. (2011), «The New Media and its Role in Supporting the Popular and Political Participation», National Coalition for Media Freedom, 27 de junio: <http://ncmf.info/?p=204>
- ORTEGA, A. (coord.) (2013), *El nuevo sindicalismo independiente en Egipto*, Madrid: Comisiones Obreras.
- SHOKR, A. G. (2009), «Parallel Institutions in Egypt's Civil Society», Center for international Private Enterprise. febrero.
- SZMOLKA, I. (2012), «Factores desencadenantes y proceso de cambio político en el mundo árabe», *Documentos CIDOB Mediterráneo y Oriente Medio*, nº 19.
- TADROS, M. (2013), «Copts Under Morsi Defiance in the Face of Denial», *Middle East Report*, n. 267.
- THILL, M. (2013), «La mujer en los procesos de desarrollo y las revoluciones populares árabes» en Álvarez-Ossorio, I. (ed.), *Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y Norte de África*, Barcelona: Fundación CIDOB.

Informes

- ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT (2005), *The Arab Human Development Report. Towards the Rise of Women in the Arab World*.
- CAIRO INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS STUDIES (2011), *Towards a Democratic Legislation Supporting the Independence of Non Governmental Organizations (NGOs)*. A Legal Analysis and Field Study, Reform Issues n. 21, 2011.

- (2012), *Fractured Walls... New Horizons. Human Rights in the Arab Region. Annual Report 2011.*
 - (2013), *Delivering Democracy: Repercussions of the 'Arab Spring' on Human Rights.* Annual Report.
- CIVICUS (2005): *An Overview of Civil Society in Egypt: Civil Society Index Report for the Arab Republic of Egypt:* http://www.civicus.org/media/CSI_Egypt_Country_Report.pdf
- (2013), *State of Civil Society. Creating an Enabling Environment:* http://socs.civicus.org/wp-content/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf
- COMISIONES OBRERAS (2013): *Sindicatos y transiciones políticas en el sur del Mediterráneo:* http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub98523_Sindicatos_y_transiciones_politicas_en_el_sur_del_Mediterraneo.pdf
- EGYPTIAN INITIATIVE FOR PERSONAL RIGHTS (2010), *Two Years of Sectarian Violence: What happened? Where do we begin? An Analytical Study of Jan 2008 -Jan 2010:* <http://eipr.org/en/report/2010/04/11/776>
- (2012), *Report on Egyptian Women Conditions in 2012:* <http://ecwronline.org/blog/2013/01/22/egyptian-woman-conditions-in-2012>
- GLOBAL VIEWS POLICY PAPER (2011), «How Can the US and International Finance Institutions Best Engage Egypt's Civil Society?», *Global Economy and Development at Brookings*
- ITUC-CSI (2012), *Egypte, Jordanie, Tunisie: la place des femmes au travail:* http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/reportage_femmes.pdf
- NADEEM CENTER FOR THE REHABILITATION OF THE VICTIMS OF VIOLENCE (2011), *Torture in Egypt: A State Policy.*
- (2012), *100 days of Morsi Rule. 100 days of detentions, torture, violent crash on protests and killing outside the law.*
 - (2013), *Summary: 2012 Report - 6 months of military rule; 6 months of MB rule:* https://docs.google.com/file/d/0B1qqm_EjPpz8cVVlemt5eFVMcVU/edit
- UNDP EGYPT HUMAN DEVELOPMENT REPORT (2008), *Egypt's Social Contract: The Role of Civil Society:* http://hdr.undp.org/en/reports/national/arabstates/egypt/2008_Egypt_nhdr_en.pdf
- UN WOMEN (2013), *Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual*

Harassment in Egypt: <http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2013/02/Sexual-Harassment-Study-Egypt-Final-EN.pdf>

Entrevistas

- ADLY, Magda (2011), «Nothing Was Ever Brought to Trial» en People's Power. The Arab World in Revolt, *Perspectives. Political analysis and commentary from the Middle East*, n. 2, Heinrich Böll Stiftung: http://www.boell.de/downloads/02_perspectives_me_2011_the_arab_world_in_revolt.pdf
- EL-BORAI, Negad (2011), *Al-Ahram Weekly*, 6-12 de octubre de 2011: <http://weekly.ahram.org.eg/2011/1067/profile.htm>
- IBRAHIM, Gigi (2013), *En lucha*, 18 de abril de 2013: <http://enlucha.org/site/?q=node/18592>
- FIBLA, Carla (2012), Entrevista con Ahmad Maher: «Activismo político en Egipto: el Movimiento 6 de Abril», *Afkar / Ideas*, n. 34, junio: <http://www.afkar-ideas.com/article/?id=4930>

V. CONCLUSIONES: «SOCIEDAD CIVIL Y TRANSICIONES EN EL NORTE DE ÁFRICA»

Laurence Thieux*

Los procesos de cambio político y social iniciados a finales de 2010 han puesto en evidencia la presencia de nuevas dinámicas de acción colectiva en las sociedades del sur del Mediterráneo.

Las organizaciones de la sociedad civil, así como los nuevos movimientos sociales que han adquirido protagonismo en las protestas contra los regímenes autoritarios de la región, son actores claves en los procesos de transformación de los sistemas políticos.

En Túnez como en Egipto, donde han caído las dictaduras, la presión de los diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil no ha decaído y se han mantenido en alerta y vigilantes ante los retrocesos y retorno de las viejas prácticas autoritarias de los gobiernos que encabezan los procesos de transición. En Marruecos y Argelia, la ebullición de la sociedad civil ha propiciado una actividad institucional de distinto signo como consecuencia de las demandas de la sociedad civil de esos países.

Los diferentes estudios realizados sobre la sociedad civil en Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto han arrojado luz sobre su naturaleza, dinámicas y estrategias de movilización, reivindicaciones y articulación con otros actores de la sociedad civil así como sus relaciones con las instituciones políticas y los partidos políticos. Presentamos a continuación las principales conclusiones a las que llegaron los estudios respecto a los objetivos específicos definidos.

*Responsable de Relaciones Exteriores ECEM.

Contextos políticos y entornos legales

La naturaleza y las funciones que desarrolla la sociedad civil dependen mucho del entorno político y legal en el cual se desenvuelven. En los cuatro países donde se han realizado los diagnósticos las sociedades civiles han conocido un notable proceso de expansión, que se ve reflejado en un gran número de asociaciones registradas. Sin embargo solo una parte minoritaria de este tejido está realmente en activo y cumple un papel en la democratización. Cabe señalar que en los casos de Egipto como en el de Argelia las organizaciones de la sociedad civil (OSC) siguen estando fuertemente condicionadas por un marco legal restrictivo y represivo que limita su margen de maniobra y reduce el impacto de sus iniciativas.

En Túnez, tras la caída de Ben Ali, el nuevo marco legal ha permitido la creación de numerosas asociaciones. En el caso de Marruecos, el contexto político ha permitido la creación y la consolidación de un rico y diverso tejido asociativo que ha conseguido obtener espacios de autonomía e hitos importantes que ensanchan el espacio de libertades y derechos de los ciudadanos.

El *majzén* ha ido abriendo algunos espacios de oposición y expresión a algunas organizaciones de la sociedad civil que han ido asumiendo la realización de una importante labor social en sectores dejados vacantes por el Estado como la educación o la sanidad. La aparición en el escenario político marroquí de un movimiento como el Movimiento 20 de Febrero (M20F) sirvió de catalizador para impulsar una dinámica de movilización social en Marruecos sin precedentes. Frente a estas manifestaciones populares que trasladaban una fuerte voluntad de cambio, la monarquía reaccionó y en respuesta a la ola de protesta encabezó el proceso de reforma.

Argelia no ha iniciado un proceso de cambio. El régimen argelino ha conseguido mantener cierta estabilidad, utilizando dos estrategias: en primer lugar, la instrumentalización del miedo al retorno a un escenario de conflicto violento, un discurso que se ha visto reforzado por las turbulencias del escenario regional (el conflicto en Siria, la inestabilidad de Libia, la fuerte inestabilidad política en Egipto...) y, por otra parte, la adopción de medidas económicas paliativas para desactivar las protestas sociales.

La sociedad civil argelina, fuertemente controlada por un entorno legal y político represivo, no ha podido hasta la fecha canalizar las frustraciones sociales e impulsar unas dinámicas de movilización social, capaces de desestabilizar el sistema político establecido y empujarle a iniciar profundas reformas.

Tras la caída de Mubarak, Egipto lleva dos años inmerso en una caótica fase de transformación política. El contexto político está marcado por una gran incertidumbre y muchas tensiones. El golpe de los militares el 3 de julio de 2013 tras movilizaciones masivas en la plaza *Tahrir* contra la gestión de Mohamed Morsi, un año después de su elección a la Presidencia, abre una nueva fase de incertidumbre. La inestabilidad política junto a la inestabilidad económica que ha caracterizado esta primera etapa de la transición ha condicionado la labor de la sociedad civil que sigue trabajando en un entorno legal muy restrictivo, mermando la capacidad operativa de las organizaciones.

Aunque en la mayor parte de los contextos políticos autoritarios las condiciones de trabajo de la sociedad civil han sido muy adversas, una parte de la sociedad civil ha tratado de mantener espacios de autonomía, denunciar los abusos y violaciones a los derechos humanos y construir alianzas para difundir la cultura de democracia y derechos humanos.

Articulación entre diferentes sectores de la sociedad y dinámicas de acción colectiva

La articulación de estrategias entre diferentes sectores de la sociedad civil ha sido un elemento determinante en los levantamientos y protestas populares que a principios de 2011 lograron derribar a los dictadores tunecino y egipcio.

Ambos países conocieron experiencias previas de acción colectiva que allanaron el camino para los movimientos sociales posteriores (las protestas de la cuenca minera de Gafsa en Túnez en el 2008; las movilizaciones sociales de Mahalla al Kubra en abril de 2008 en Egipto, etc.).

Estas experiencias de movilización se distinguieron por la aparición de nuevas modalidades de acción colectiva contando con la participación de componentes muy diversos: federaciones locales

de sindicatos autónomos no ligados al sindicato oficial del régimen, organizaciones de derechos humanos, movimientos de jóvenes, colegios profesionales, etc.

En los primeros meses que siguieron a la caída de Ben Ali, las OSC en Túnez consiguieron mantener el pulso con las autoridades para hacer oír su voz e incidir sobre la agenda de la transición a través de la Alta Instancia para la realización de los objetivos de la revolución, de la reforma política y de la transición democrática.

En Egipto, dos años después de la revolución las dinámicas de movilización colectiva siguen vivas (desobediencia civil, huelgas y manifestaciones de diferentes colectivos, etc.) y la reciente campaña Tamarrod ponen de manifiesto la capacidad de diferentes colectivos de movilizarse y ocupar el espacio público para expresar su descontento.

En el caso de Argelia muchos factores han desactivado o reducido a su mínima expresión las dinámicas de movilización colectivas (el peso de la década negra, las medidas represivas y estrategias de cooptación y división del régimen, etc.). A pesar de las dificultades algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos tratan de seguir denunciando los abusos y las violaciones cometidas por el régimen. Sin embargo aún siguen siendo voces fragmentadas y no han conseguido impulsar una movilización popular de mayor calado. El grado de frustración de la población argelina, sin embargo, sigue manifestándose a través de revueltas espontáneas localizadas, expresión de un profundo malestar social y político. Estas protestas son cada vez más frecuentes en el sur del país.

En Marruecos se ha visto como el régimen ha conseguido desactivar en parte el M20F. Este movimiento sin embargo ha marcado un antes y un después en las dinámicas de la sociedad civil marroquí en la medida en que ha permitido franquear la barrera del miedo e impulsar un nuevo espíritu reivindicativo y participativo.

Brechas ideológicas y estrategias de superación de las divisiones entre OSC seculares y aquellas con referentes religiosos

Los puentes que se tendieron entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de defensa de derechos humanos (incluidas las

organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, los movimientos juveniles, las asociaciones de abogados y magistrados) han sido una de las claves del éxito de las movilizaciones sociales que a principios de 2011 impulsaron cambios políticos sin precedentes en los países del Norte de África.

En el período posterior, sin embargo, la polarización del escenario político entre las fuerzas políticas islamistas y seculares ha inhibido este proceso de articulación y está condicionando las estrategias de coordinación de las OSC.

Aunque una de las claves del éxito de los procesos de transición política sea precisamente el carácter inclusivo y la capacidad de crear consenso, no es precisamente las características que han dominado en los procesos de transición en Egipto y en Túnez. La fractura ideológica que se ha ahondado en los dos últimos años desde el inicio de las transiciones políticas ha dificultado la emergencia de iniciativas de diálogo y la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad civil. Se trata de una de las asignaturas pendientes y una de las prioridades.

En Túnez, la polarización ideológica entre islamistas y oposición secular ha ido creciendo en los últimos meses: las tensiones alcanzaron un punto álgido cuando fue asesinado el líder del movimiento de los patriotas demócratas Chukri Belaïd y el diputado tunecino y antiguo líder del partido opositor tunecino Movimiento del Pueblo, Mohamed Brahmi.

Encontramos estas mismas fracturas ideológicas en la sociedad egipcia donde las divisiones se han ahondado. La adopción de la declaración constitucional en noviembre de 2012 que situaba por encima de la ley las decisiones del Presidente Morsi, selló la ruptura con las organizaciones de la sociedad civil. El derrocamiento del presidente el 3 de julio de 2013 por los militares con el respaldo de muchas de las organizaciones de la sociedad civil tras las manifestaciones masivas convocadas por el movimiento *Tamarrod* el 30 de junio están creando un clima propicio al estallido de nuevos brotes de violencia.

En Marruecos, encontramos el mayor punto de fractura entre las organizaciones de mujeres, entre las asociaciones de mujeres progresistas y las organizaciones de mujeres islamistas. La llegada del Partido de Justicia y Desarrollo (PJD) al gobierno ha agudizado

estas divisiones. Los pequeños espacios creados de diálogo entre estas organizaciones han quedado bloqueados.

En Argelia, encontramos las principales divisiones en torno al carácter religiososecular de las organizaciones, y en relación a la percibida cercanía o lejanía de las organizaciones de la sociedad civil respecto al poder.

A pesar de las dificultades vinculadas a la polarización ideológica del escenario político se han identificado en los diagnósticos experiencias interesantes de coaliciones transversales y sectoriales.

En Egipto destacan, por ejemplo, las experiencias de la coalición de los jóvenes revolucionarios, el Foro de Organizaciones independientes de derechos humanos, las alianzas contra la nueva ley de asociaciones, el Frente Nacional para la defensa de los derechos laborales y libertades sindicales...

En Túnez y a pesar de la adversidad del contexto político, algunas iniciativas de la sociedad civil han tratado precisamente de superar estas dificultades como la propuesta de diálogo nacional de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), y el pacto tunecino por los derechos y las libertades.

Las organizaciones de mujeres

Las organizaciones de mujeres constituyen una pieza clave del mapa asociativo de las sociedades del norte de África. Los nuevos escenarios políticos presentan tanto desafíos como oportunidades para sentar nuevas bases en estas sociedades y afianzar los derechos de las mujeres y su plena participación en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.

Los procesos de consolidación de los derechos de las mujeres en los cuatro países considerados en los estudios han sido sensiblemente diferentes y nos encontramos ante diferencias sustanciales respecto al nivel de protección de estos derechos según los países.

Aún así podemos destacar algunas tendencias comunes en algunos de estos países como la vigencia de disposiciones jurídicas discriminatorias, que constituyen importantes obstáculos para la igualdad o el hecho de que las reivindicaciones feministas hayan sido instrumentalizadas y recuperadas por los Estados para reforzar su legitimidad de cara al exterior.

A pesar de su participación masiva en las protestas y de la larga trayectoria de lucha de las organizaciones feministas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sus expectativas se han visto frustradas con la llegada de gobiernos islamistas en el poder y sus derechos amenazados por la utilización sistemática de la violencia y el acoso sexual en los espacios públicos.

Tanto en Túnez como en Egipto, la práctica gubernamental desde el inicio de las etapas de transición ha excluido a las mujeres cuestionando los derechos obtenidos. Sin embargo, y en respuesta a estos desafíos, nos encontramos con nuevas dinámicas y transformación del mapa asociativo de las mujeres que se enfrentan también en esta nueva etapa a grandes desafíos.

La cuestión del rejuvenecimiento del movimiento asociativo femenino es un reto común de las asociaciones de mujeres de los cuatro países considerados. Suelen ser escasos los espacios de trabajo intergeneracionales: las jóvenes se sienten excluidas de los espacios de acción y toma de decisión, sienten que sus preocupaciones son bloqueadas por las veteranas. Sin embargo algunas asociaciones conscientes de este déficit han puesto especial énfasis en la formación e integración de jóvenes en el seno de sus organizaciones.

Las divisiones ideológicas están también presentes y merman la capacidad de las organizaciones de establecer mecanismos de coordinación, construir alianzas sólidas y fortalecer su capacidad de incidencia política.

En el caso de Marruecos, como en el caso de Argelia, la relación mantenida con el poder divide el movimiento de mujeres. En Marruecos, una parte de las organizaciones siguen considerando la monarquía como un aliado necesario en la defensa de los derechos de las mujeres y una protección frente a la amenaza que representa el proyecto político islamista.

Hay organizaciones de mujeres que, sin embargo, se desmarcan más claramente del "feminismo de Estado" promovido por la monarquía. Otras organizaciones de mujeres consideran que el proceso de reforma en curso en Marruecos tras la adopción de la nueva Constitución en 2011 está abriendo nuevas oportunidades y espacios de participación y trabajo con las instituciones públicas.

Acción colectiva y movilización social de los jóvenes

Dos años y medio después del inicio de las llamadas «primaveras árabes», las principales reivindicaciones de los que se sublevaron contra el orden establecido (dignidad, justicia social, democracia, libertad) no han sido satisfechas.

La falta de respuesta a las principales aspiraciones que se manifestaron con fuerza a principios de 2011, junto con una falta de crecimiento económico, está agudizando el nivel de frustración de muchos sectores de estas sociedades.

Los jóvenes, en particular, cuyo peso demográfico en estas sociedades es preponderante, han sido excluidos de las principales estructuras económicas, políticas y sociales: afectados por el desempleo masivo a pesar de tener un nivel educativo mucho más elevado que las generaciones precedentes y marginados por las organizaciones políticas y las OSC, se sienten traicionados por los que han «confiscado sus revoluciones».

Los gobiernos de transición tan solo han adoptado hasta la fecha medidas paliativas y siguen enfrentándose al desafío de la exclusión y marginación de los jóvenes. Aún así, los movimientos e iniciativas de jóvenes han mantenido una fuerte capacidad de movilización y en algunos casos han conseguido consolidar su base organizativa.

Encontramos las claves del éxito de estos movimientos en que se trata de estructuras flexibles, horizontales y sin liderazgo. La participación de los jóvenes en varias iniciativas a la vez permite también el acercamiento de grupos ideológicamente dispares, uniendo sus fuerzas para el logro de un objetivo común.

En Argelia, aunque los procesos revolucionarios no hayan calado en la sociedad argelina como en otros países de la región sí han tenido un impacto que se traduce por ejemplo en una mayor participación de los jóvenes a través del uso de las redes sociales.

En Marruecos, el M20F ha conseguido impulsar una dinámica de participación ciudadana y de movilización colectiva llamada a tener un efecto duradero en la sociedad para el despertar a la toma de conciencia de los jóvenes a la importancia de ocupar el espacio público.

En Egipto, los movimientos juveniles que han protagonizado las protestas contra el régimen de Mubarak, como el Movimiento 6 de

abril, se encuentran en este momento fuertemente divididos. Aún así conservan un fuerte potencial de movilización como lo ha puesto en evidencia el movimiento Tamarrod contra la presidencia del islamista Mursi, depuesto por los militares el 3 de julio de 2013.

Los movimientos de jóvenes siguen activos pero se encuentran también en un momento crucial; se enfrentan al problema de la continuidad. Se plantea para ellos el reto de adaptarse al nuevo contexto y pasar del cuestionamiento del sistema a la articulación de las alternativas: pasar de la fase de la reivindicación a la participación efectiva y a la construcción de un nuevo modelo económico, político y social. Otro de los retos es la superación de las divisiones a la hora de plantear un modelo de organización o a la forma de garantizar la perennidad de coaliciones o movimientos informales, ya que los modelos tradicionales de partidos políticos, OSC u organizaciones sindicales, suscitan cierto rechazo.

Relaciones establecidas con los partidos políticos

En contextos autoritarios, la sociedad civil ha sido, en muchas ocasiones, un espacio de sustitución para la oposición política. Muchas organizaciones de la sociedad civil han nacido a la sombra de los partidos políticos. Incapaces de articular una oposición eficaz a los sistemas autoritarios, desacreditados por haber sido cooptados por los regímenes en muchas ocasiones, la mayor parte de las fuerzas políticas han perdido peso en estos escenarios políticos.

Las asociaciones están, en su mayoría, desligadas de las estructuras partidistas y han buscado un mayor grado de autonomía. Cabe señalar también que entre el mundo asociativo y los partidos políticos se producen muchos trasvases de personalidades y en algún caso, cuando la legislación lo permiten algunos cuadros asociativos asumen a la vez cargos en el seno de los partidos.

Mecanismos de diálogo con las instituciones: ¿espacios de incidencia o de cooptación?

Los canales de interlocución, los espacios de diálogos con las instituciones e instancias gubernamentales, son fundamentales para que las OSC realicen de forma óptima su función de mediación entre la

sociedad y el Estado; son claves para garantizar que en esta etapa de transformaciones políticas las reivindicaciones de los ciudadanos sean tomadas en consideración y para que la sociedad civil consiga influir sobre el diseño de las políticas públicas. En los procesos de transición política, son espacios fundamentales en la medida en que permiten garantizar el carácter inclusivo y participativo, en el caso de que reúnan los requisitos necesarios para ser creíbles y eficaces.

Las complejas transiciones en curso, y en muchos casos la polarización islamista/no islamista, no han permitido de momento la emergencia de espacios de estas características. El establecimiento de nuevas prácticas y las nuevas pautas de relaciones entre las instituciones y las OSC en los países en transición siguen siendo un reto. En Túnez, la adopción del nuevo decreto ley (2011-41) sobre el acceso a los documentos de la Administración pública marcó un punto de inflexión, aunque las prácticas heredadas del régimen anterior constituyan obstáculos importantes. Los espacios de diálogo creados no están respondiendo a las expectativas de la sociedad civil y el clima de desconfianza generado por la polarización ideológica entre fuerzas islamistas y seculares dificulta la emergencia de mecanismos de participación.

En Egipto, la insatisfacción ha ido en aumento a medida que los HHM después de las elecciones legislativas y presidenciales con la victoria del partido que lideraba Morsi, el Partido Libertad y Justicia (PLJ), han ido intentado controlar todos los poderes (ejecutivo y legislativo). El «decretazo», la declaración constitucional del 22 de noviembre de 2012, marcó un punto de inflexión, en este sentido, en el diálogo entre los diferentes actores políticos y la sociedad civil.

En el caso de Egipto se abrieron algunos espacios de diálogo entre las instituciones y la sociedad civil pero no han garantizado que las propuestas de la sociedad civil, sean tomadas en cuenta.

Los mecanismos de interlocución establecidos en Egipto en la primera etapa tras la caída de Mubarak entre, en un primer momento, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, aparato que en la práctica es autónomo del Estado, y la sociedad civil, y luego entre el gobierno islamista dominado por el PJI, con respecto a la modificación de la ley 84/2002 que regula la actividad de las asociaciones,

muestra que la mera existencia de estos espacios no garantiza que se tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil.

En los países donde no se han producido cambios políticos sustanciales, como en Argelia, no hay espacios de diálogo y concertación formales entre la sociedad civil y las autoridades. En el caso de Marruecos, la Constitución de 2011 concede un papel importante a la sociedad civil en la gestión de las políticas públicas y prevé la creación de instancias de concertación con el fin de asociar los diferentes actores sociales a la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Las comisiones de diálogo establecidos hasta la fecha han suscitado el rechazo de parte de la sociedad civil, por su falta de representatividad. Encontramos divisiones entre, por un lado, la sociedad civil que ha acatado y participado en el proceso de reforma promovido por la monarquía con la reforma constitucional (así como el desarrollo posterior de las leyes orgánicas y la puesta en marcha de las instituciones como la Haute Autorité de la Parité..., y, por otro lado, las OSC, que rechazan el proceso de reforma desde el inicio. Hay, de esta forma, diferentes visiones sobre las oportunidades que presenta la reforma constitucional.

Principales reivindicaciones de la sociedad civil

En los países que han iniciado complejos procesos de transición, la sociedad civil se ha volcado en la construcción del nuevo marco político e institucional, tratando de incidir en el proceso. Las organizaciones de derechos humanos desempeñan un papel clave en este proceso (denunciando los abusos y violaciones que se siguen cometiendo). Las organizaciones sindicales también han mantenido su capacidad de respuesta.

Cabe reseñar en esta nueva etapa la proliferación y regionalización de las iniciativas ciudadanas, reflejo de las ansias de participación y de expresión de sus reivindicaciones de dignidad, justicia social y desarrollo regional equitativo en los espacios liberados por el proceso de transformación política en curso.

Los estudios han puesto en evidencia la correlación entre las dinámicas asociativas y las necesidades sociopolíticas. Nuevos proyectos asociativos han visto la luz para acompañar el proceso de construcción democrática (debates sobre la constitución, procesos

electorales...) con nuevas formas de organización al margen de partidos políticos y de la sociedad civil tradicional: campañas contra el acoso sexual, iniciativas culturales...

Sin embargo, las tendencias hegemónicas y el retorno a prácticas autoritarias por parte de los gobiernos que están dirigiendo los procesos de transición han creado un clima negativo en el cual las OSC se han visto obligadas a centrarse en labores de vigilancia y denuncia de los abusos y amenazas sobre las libertades y derechos recientemente adquiridos.

Dinámicas regionales de la sociedad civil

Los diagnósticos de la sociedad civil en los cuatro países han prestado especial atención a las dinámicas de la sociedad a nivel regional. Los levantamientos populares de finales de 2010 pusieron en evidencia la fractura geográfica en un país como Túnez, donde las regiones marginadas tuvieron un destacado protagonismo en la contestación política del régimen establecido.

El trabajo de campo en estas regiones ha puesto en evidencia la existencia de un nuevo dinamismo de la sociedad civil. Destaca en estas nuevas iniciativas la implicación de las mujeres y los jóvenes, sobre todo los jóvenes diplomados desempleados. A pesar de la atención que los donantes y ONG internacionales han empezado a prestar a las organizaciones locales de estas regiones, siguen siendo escasos los fondos y el apoyo necesario para consolidar este tejido asociativo emergente.

Las fracturas sociales, económicas, ideológicas y regionales, que dividen profundamente las sociedades inmersas en complejos procesos de transición, dificulta la emergencia de espacios de diálogo, marcos políticos inclusivos que constituyen precisamente elementos claves del éxito de las transiciones. Las dificultades económicas y la ausencia de respuestas a las principales demandas socioeconómicas agudizan estas fracturas y constituyen factores de inestabilidad permanentes.

Al mismo tiempo, la caída de las dictaduras ha permitido el florecimiento de movimientos sociales e iniciativas artísticas y culturales.

La emergencia de una sociedad civil plural y dinámica es clave para garantizar el éxito de los procesos de transición política, el con-

trol de los gobiernos y el impulso de nuevas iniciativas y su discusión en la sociedad, por lo que es necesario seguir recreando, en las dos orillas del Mediterráneo, espacios de encuentro y de concertación.

Para ello hay que seguir apoyando sus esfuerzos mediante apoyo financiero, técnico, formativo y de acompañamiento. Un acompañamiento hermanado por la defensa de valores universales y de solidaridad.

SOBRE LOS AUTORES

Awatef Ketiti es profesora de Comunicación en el departamento de Teoría de los lenguajes y ciencias de la comunicación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Doctora en Comunicación audiovisual con especialidad en género por la Universidad de Valencia (2005) y licenciada en Periodismo y ciencias de la información del Institut de presse et des sciences de l'information de la Universidad de Túnez (1991). Es autora de dos libros, *Genre et communication en Islam*, de 2010, y *La mujer en el Magreb, situación y perspectivas*, de 1995.

Érika Cerrolaza es doctoranda en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. Ha trabajado con numerosas organizaciones e instituciones públicas sobre derechos humanos y sociedad civil en la región euromediterránea. Su labor como investigadora a través de diversos proyectos se ha centrado en cuestiones ligadas a las migraciones, los procesos de construcción de la identidad, el islam transnacional y la realidad sociopolítica de distintos países del norte de África y Oriente Medio.

Jesús García Luengos es coordinador de RESET (Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional). Consultor e investigador, con una larga trayectoria profesional en Marruecos, donde trabajó desde 1996 a 1999 como responsable de un despacho de abogados español en Casablanca. Coautor de dos libros sobre las redes sociales y el tejido asociativo marroquí, de un diagnóstico

sobre mujer y gobernanza local en Marruecos, y de un informe sobre codesarrollo para el Ministerio Marroquí de Residentes en el Extranjero. Ha publicado diversos textos y artículos sobre derechos humanos en Marruecos, y también ha realizado diversas evaluaciones de proyectos de cooperación al desarrollo en dicho país.

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Es autor y editor de una decena de libros, entre los que destacan *¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí* (2007, junto con Ferran Izquierdo), *Siria contemporánea* (2009) e *Informe sobre las revueltas árabes* (2011, junto con Ignacio Gutiérrez de Terán). Ha publicado medio centenar de artículos en revistas académicas internacionales (*Middle East Quarterly*, *Maghreb Machrek*, *Outre-Terre*, *Afaq al-Mustaqbal*, etc.) y nacionales (*Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, *Scripta Nova*, *Política Exterior*, *Afkar/Ideas*, etc.). Además ha dirigido dos proyectos de I+D+i: «Sociedad civil y contestación política en Oriente Medio: dinámicas internas y estrategias externas» (CSO2009-11729) y «Las revueltas árabes: actores políticos emergentes y reconfiguración de la escena pública en el Norte de África y Oriente Medio» (CSO2012-37779).

MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN

Laurence Thieux, responsable de relaciones externas del Encuentro Civil Euromed (ECEM), miembro del Grupo de Estudios y Publicaciones de ECEM y responsable de la coordinación de la investigación y de la publicación: Sociedad civil y transiciones en el Norte de África.

Alejandra Ortega, licenciada en 1994 en Filología Árabe e Islam (doctorado en Tradición e Innovación en el Mundo Árabe e Islámico) en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde septiembre de 2006 ocupa la responsabilidad para Países Árabes, África y Asia en la Secretaría de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, organización miembro del Encuentro Civil Euromed (ECEM) desde sus orígenes. Desde septiembre de 2012 y hasta la fecha ejerce la Presidencia de ECEM.

Juan Carmelo García, perteneciente a «ECONOMÍA Y HUMANISMO» desde 1952; miembro de IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África) desde su fundación en 1955; con Estudios en Filosofía Pura, Sociología del Conocimiento y de las Religiones, Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales.

Mohammed Dahiri, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y licenciado en Lengua y Literatura Árabes y Lenguas Orientales por la Universidad de Marrakech. Tiene varios másteres de experto en «Intervención Comunitaria, Gestión de la Diversidad,

Migraciones Internacionales, Interculturalidad, Cultura de Paz, Resolución de Conflictos y Derechos Humanos» por las Universidades de Sevilla y Granada, la *Università di Bologna* y por el I.T.D de Amherst (Massachusetts). Es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Cádiz y docente de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba.

Carlos Lozano Palanca, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.

Coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Coordinador de la Red Euro-mediterránea de la Economía Social (ESMED) de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Santiago González, economista, desde 2003 ha asumido diferentes responsabilidades en el seno de la Unión Sindical Obrera (USO): negociación colectiva e inmigración. Actualmente es responsable del área internacional de USO y de las relaciones externas de la ONG de USO, Sotermun.